# MEMORIA

ELEVADA AL

# GOBIERNO DE S. M.

EN LA

SOLEMNE APERTURA DE LOS TRIBUNALES

EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1978

POR EL

FISCAL DEL REINO

EXCMO. SR. D. JUAN MANUEL FANJUL SEDEÑO

"INSTITUTO EDITORIAL REUS"
MADRID

# INTRODUCCION

La norma imperativa que para las Memorias anuales del Ministerio Público impone el artículo 47 del Estatuto y el 97.4 del Reglamento Orgánico, precisando su publicación en la apertura del Año Judicial, pero refiriendo su contenido al año natural inmediato anterior, puede producir acusados desconciertos entre los planteamientos de la Memoria y la actualidad político-jurídica del entorno nacional en la fecha de su presentación.

Aquel rigor nos lleva precisamente hoy a un aparente anacronismo entre el relato de los acontecimientos que para el Ministerio Fiscal fueron suceso en 1977 y aquellos otros que serán trascendente actualidad en el momento en que se presente la Memoria. Que si el pasado año ofrecía la incipiente apertura de España a una estructura democrática, cuando se ofrezca este estudio cabe esperar que aquel inicio haya cristalizado en el texto definitivo de una nueva Constitución.

A ello se une, y constituye dificultad mayor para el Fiscal que tiene el honor de someter a V. E. estas consideraciones, la circunstancia de que la actuación del Ministerio Público en el año natural de 1977 estuviera presidida por un dignísimo Fiscal, el Excmo. señor don Eleuterio González Zapatero, que transfundió su experiencia profesional, su capacidad de trabajo y su caballerosidad a los múltiples y difíciles quehaceres de aquel período.

El Fiscal que suscribe esta Memoria, designado en los primeros días de 1978, ha de reflejar, por tanto, las ocurrencias y circunstancias del año anterior por refe-

rencia de las Memorias de los señores Fiscales Territoriales y Provinciales y por la directa experiencia de los compañeros —extraordianrios compañeros— colaboradores en esta tarea, viéndose obligado a prescindir en la presente introducción de los comentarios referentes a la anualidad natural de la Memoria para dar cabida, por razones obvias de actualidad pública, a la exigente glosa de la efemérides en curso.

Hubiera deseado poder referirme ya en estas palabras a la Constitución aprobada por las Cortes Generales y refrendada por el pueblo como consecuencia del cambio institucional producido en España desde la Ley para la Reforma Política de 18 de noviembre de 1976 y del Referéndum que la aprobó el 15 de diciembre siguiente. Sin embargo, el calendario manda, la técnica se impone y la exigencia de que la Memoria esté materialmente dispuesta para su lectura, entrega y reparto a la Apertura del Año Judicial obliga a cerrar sus páginas con antelación tan previsora que no permite recoger en ella la culminación del proceso constituyente. Más aún se destaca la contrariedad teniendo en cuenta que en el texto constitucional se precisa la declaración de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano y se traza el esquema de sus instrumentos tutelares, como son fundamentalmente los órganos de la Administración de Justicia y de este Ministerio Público.

* * *

Cuando trazamos estas líneas el Proyecto de Constitución acaba de dictaminarse por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y poseemos ya el texto del artículo 118, que específicamente se refiere al Ministerio Fiscal y dice así:

"*Artículo 118.*

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las fun-

ciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La Ley regulará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial."

Parece presumible y deseable que el Título VI, aprobado por la Comisión Constitucional (arts. 110 al 121), será, con escasas variantes —algunas indispensables de estilo o concordancia— y algunos retoques perfeccionistas, el que reciba la conformidad del Pleno y sucesivamente del Senado y el refrendo de los españoles. Si es trascendente el momento, por cuanto el texto capital del Reino define el porvenir del pueblo español y configura sus Instituciones, requiere especial atención para la nuestra, por cuanto de ese artículo 118 habrá de deducirse la Ley que establezca el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, sustituyendo al ya anacrónico de 1926, dé lugar a un ordenamiento coherente con los actuales tiempos y con las nuevas orientaciones que a ellos se impriman.

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, merece la pena destacar que el detalle y prolijidad que ha presidido la actual Constitución de la Monarquía Española, frente a otros criterios doctrinales más propicios a decla-

raciones de principios generales, no se ha proyectado de manera análoga por lo que se refiere a nuestra misión. Con ello, quizá sin proponérselo, los constituyentes han seguido la línea histórica tradicional de nuestros textos políticos básicos.

* * *

Revisando las Constituciones españolas desde el Estatuto de Bayona se encuentran escasísimas referencias a la función fiscal, y la mayoría tangenciales.

Así, en la referida Constitución napoleónica, de 6 de julio de 1808, el artículo 105 dispone:

> "Habrá en el Consejo Real un Procurador General o Fiscal y el número de sustitutos necesarios para la expedición de los negocios."

Por el contrario, la Constitución de Cádiz, de 19 de marzo de 1812, que abre nuestro período liberal, no hace referencia alguna al Ministerio Fiscal, ni siquiera incidentalmente. Lo mismo ocurre en la del 18 de junio de 1837.

Vuelve a citarse a los Fiscales en la Constitución de 23 de mayo de 1845, pero no para regular su posición y funciones ante los Tribunales ni para precisar su naturaleza jurídica, sino exclusivamente en el artículo 15, dentro del Título III que se refiere al Senado, para establecer que podrán ser nombrados Senadores los Ministros y Fiscales de los Tribunales Supremos. La del 5 de junio de 1869 ni siquiera desciende a estos detalles.

Se encuentra otra referencia similar en la Constitución de 30 de junio de 1876 cuando, al determinar en su artículo 22 quiénes podrán ser Senadores por nombramiento del Rey y por elección de Corporaciones, se dice en el núm. 8.°: "Consejeros de Estado, Fiscales del mismo Cuerpo y Ministros y Fiscales del Tribunal Supremo y de Cuentas del Reino..."

La Constitución de la Segunda República Española, de 9 de diciembre de 1931, es la primera que, aun precariamente (art. 104), se ocupa del Ministerio Fiscal, que:

> "Velará por el exacto cumplimiento de las Leyes y por el interés social. Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración de Justicia."

Aunque se reconoce su existencia, su función "in genere", su Estatuto y su autonomía, falta regulación más precisa. Quizá consideraran sus autores la suficiencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto de 1926.

El artículo 97, apartado 2.º del párrafo *b)*, establece que el Fiscal General de la República estará, igual que el Presidente del Tribunal Supremo, agregado de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión Parlamentaria de Justicia, y después, en el artículo 99, se señala la competencia para exigir la responsabilidad criminal de los Jueces, Magistrados y Fiscales, según sus diferentes categorías.

Esto es, pues, todo lo que en la prolífera historia constitucional española ha merecido a nuestros constituyentes el Ministerio Público.

* * *

Pero estas alusiones tan parcas o referenciales no son un caso aislado de peculiaridad hispana, sino una circunstancia que se repite en las Constituciones occidentales.

Así, la italiana, de 27 de diciembre de 1947, se reduce, en el último párrafo del artículo 106, a manifestar que el Ministerio Público "goza de las garantías establecidas con respecto a él por las normas sobre la organización judicial" y en el párrafo segundo del artículo 108 deter-

mina que "la Ley asegura la independencia de los Jueces de las jurisdicciones especiales del Ministerio Público...".

Por lo que se refiere a la Constitución de la República Francesa, de 4 de octubre de 1958, su silencio es absoluto. El Título VIII sobre la Autoridad judicial es sumario —tres artículos—, remitiendo a una Ley Orgánica el Estatuto de los Magistrados. Por lo demás, sus alusiones son todas a los "Magistrats du Siege", es decir, la Magistratura dirimente, sin mencionar a los "Magistrats du parquet", o sea a los Fiscales, allí Procuradores.

Ello no obsta para que la Ordenanza de 2 de enero de 1959, que organiza el Alto Tribunal de Justicia (que no debe confundirse con el Tribunal de Casación), afirme la preminencia funcional del "Ministerio Público cerca del Alto Tribunal, que es ejercido por el Procurador General cerca del Tribunal de Casación asistido del primer Abogado general y de los Abogados generales designados por él", otorgándoles un especial protagonismo en el trámite de las acusaciones egregias, competencia de esta Corte.

En Bélgica, el Código Judicial, promulgado por Ley de 10 de octubre de 1967, se reduce a establecer en su artículo 142 que las funciones del Ministerio Público cerca de la Corte de Casación son ejercitadas bajo la autoridad del Ministerio de Justicia por el Procurador General.

En cuanto a la Ley Fundamental alemana, de 23 de mayo de 1949, en ninguno de los tres artículos de que consta su Título IX, referente a la Justicia, se menciona siquiera al Fiscal ni con referencia a los Estados ni a la República Federal. Las alusiones son exclusivas a Jueces y Tribunales, sin que aparezca ni orgánicamente ni en referencia funcional alusión alguna al Ministerio Público.

Para configurar su "status" debe atenderse a la "Nueva Gran Reforma del Proceso Penal", de 7 de enero

de 1975, donde se desarrolla la especial orientación del Fiscal como instructor, sustituto del tradicional Juez y dueño de la Policía Judicial, lo que viene produciendo encontradas opiones doctrinales, incluso rozamientos, entre el Cuerpo Fiscal y la Magistratura. En nuestro criterio, la idea de potenciar de forma exclusiva o preponderante la intervención del Ministerio Público en la instrucción de las causas y el control de la Policía Judicial —de favorable opinión para algunos juristas españoles— desvía al Ministerio Público de sus altas funciones de promover los derechos de la sociedad y de sus ciudadanos impulsando la labor de los Tribunales de Justicia, para reducir su misión a una tarea investigadora y pesquisitiva que, posiblemente, pudiera afectar a la extensa grandeza de su causa al servicio de la colectividad.

De las Constituciones de los países socialistas del Este destacamos la de Yugoslavia, de 7 de abril de 1963. Se adentra más de cuanto llevamos examinado en la función del Ministerio Público. Es —dice su art. 147— "un órgano independiente encargado de la persecución judicial; toma también las medidas definidas por la Ley y utiliza las vías de los recursos para asegurar la aplicación uniforme de la Ley y salvaguardar la legalidad".

La Institución está sometida al principio de independencia y jerarquía, pues (art. 144) "el Procurador Público Superior (que es nombrado y relevado por la Asamblea Federal) tiene el derecho y el deber de dar al Procurador Público subalterno las instrucciones obligatorias para su trabajo".

El más reciente de todos los textos políticos europeos de línea democrática, la Constitución de la República Portuguesa, de 2 de abril de 1976, incluye el Ministerio Público dentro del Título VI que se refiere a los Tribunales y le dedica los artículos 224, 225 y 226. En el primero establece su función de representar al Estado, ejercer la acción penal, defender la legalidad democrática

y los intereses que la Ley determine, y en el 225 denomina a los agentes del Ministerio Público como Magistrados responsables, manteniendo su condición de "jerárquicamente subordinados", pero otorgándoles toda clase de garantías de inamovilidad.

En cuanto a la dependencia (y esto es quizá lo más importante), la atribuye exclusivamente a la Procuraduría General de la República, a la que corresponde el nombramiento, destino, transferencia y promoción de los agentes del Ministerio Público, así como la acción disciplinaria sobre ellos, concediendo su Presidencia al Procurador General de la República.

Nada se dice respecto al nombramiento del Procurador General, que se refiere a una Ley que determine las reglas de organización y composición, dejando la duda de si la mecánica del nombramiento consolida la autonomía del Ministerio o interfiere alguna dependencia de carácter gubernativo.

* * *

De cuantas consideraciones podemos deducir del Derecho comparado y de la propia evolución legal de nuestro Ministerio Público llegamos a la conclusión de que esta escasa e imprecisa doctrina constitucional sobre la Institución es consecuencia de la dificultad intrínseca de la pretensión más que del intento consciente de dejarla en una posición indefinida.

Los estudiosos del Ministerio Público aluden a su figura "complejísima" que retrae a cuantos ensayan configurar su carta de naturaleza. En la apertura de Tribunales, de 16 de septiembre de 1968, el entonces Ministro del ramo, al referirse a la reforma de la Administración de Justicia en proyecto, advierte sobre el Ministerio Público: "La complejidad de sus funciones exigirá un detenido estudio que no es posible en esta ocasión afrontar."

Humano es, pues, comprender el temor de los legisladores de penetrar en esa dificultad derivada del carácter híbrido y polifacético que la planta orgánica y función del Fiscal ofrece en todos los países y solventar las dificultades que promueve pretender una institucionalización de contornos nítidos dentro del texto político fundamental, desviando la solución hacia un pragmatismo descriptivo que en nada compromete.

Y es que el Ministerio Público tiene, de una parte, la función de protagonizar la defensa de las libertades humanas, la tutela del interés público y la promoción de los derechos de la sociedad, vigilando la observancia de la legalidad por la acusación de los delitos públicos y asegurando la independencia de los Tribunales. Pero, de otro lado, ejerce con carácter universal una función de representación y de impulso o presencia del Poder Ejecutivo —de los Gobiernos— cerca de los Tribunales de Justicia, aun a través de los tamices insoslayables de la independencia y la legalidad.

De ahí que se haya mantenido durante mucho tiempo en nuestras leyes su misión de órgano de representación, de relación o de comunicación entre el Gobierno y el Poder Judicial y que se haya discutido por la doctrina de todos los países el lugar orgánico de su ubicación dentro de la estructura del Estado y aun su configuración dentro del proceso. La balanza se ha inclinado de una u otra parte; en unos casos configurándolo según la doctrina más moderna, como una Magistratura especial ("Magistratura de amparo" la ha definido un ilustre Magistrado y Fiscal) dentro de la órbita judicial, aunque representando o realizando funciones que puedan recibir su aliento del Poder Ejecutivo y aproximándolo en otros casos a características más propias de funcionario público, que, si bien ejercita una función de Magistratura postulante, resulta más dependientemente incardinado en órganos propios de la Administración.

* * *

Aunque, como ya hemos apuntado, el artículo 118 del Proyecto de Constitución no ha dedicado al Ministerio Fiscal las precisiones de que ha hecho gala en otras declaraciones, puede entenderse que ha marcado notas orientadoras de su ulterior desarrollo para un Estatuto de rango legal. Podemos así afirmar, sin aventura en la interpretación, que son más las características y funciones que se mantienen en la esperanza de la incógnita que los principios explícitamente proclamados. Los primeros pasos de la nueva norma constitucional mantienen el mismo temor definitorio que sus precedentes legales: Ley Orgánica del Poder Judicial, Estatuto específico de 1926, Reglamento Orgánico del Estatuto en sus redacciones de 1927, 1958 y 1969, Ley de Bases de la Justicia de 1974, pronto derogada, y otros preceptos concordantes, complementarios y accesorios.

En relación con el artículo 763 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1870, se le atribuyen como novedad la defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés social, pero a costa de un inciso cuya introducción puede acarrear graves conflictos de competencia, como ya los está produciendo de interpretación, al condicionar estas funciones a las encomendadas a otros órganos.

Cuando cincuenta años después de aquella Ley Orgánica el Ministerio Fiscal adquiere naturaleza propia, formando sus miembros Cuerpo independiente, conforme al Real Decreto de 21 de junio de 1926, reconocido después como Ley por la República (5 de junio de 1931), su planteamiento funcional se mantiene: se le encomienda la función de velar por la observancia de las leyes y demás disposiciones referentes a la organización de los Tribunales, promover la acción de la Justicia en cuanto concierne al interés público y representar al al Gobierno en sus relaciones con el Poder Judicial, procurando siempre imparcialmente el mantenimiento del orden jurídico y la satisfacción del interés social.

No inciden mucho los Reglamentos Orgánicos, como es natural, en la definición general de funciones del Real Decreto de planta de 1926 y, así, sólo añaden, en su artículo 1.º, la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial y el cuidado de que se administre pronto y cumplidamente la Justicia (1927), y el mismo concepto sustituyendo, conforme a la lógica política del momento, Poder Judicial por Administración de Justicia (1958). Sólo el Reglamento de 1969, haciéndose eco de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, añade principios exigibles a nivel de la evolución sociológica, los intereses públicos y el interés social, con lo que resta, como única novedad, para el reciente artículo 118 la cita expresa de los derechos de los ciudadanos.

Como vemos, la definición de tareas no difiere mucho de la que alumbrara la mente del legislador durante más de un siglo: añadir los derechos de los ciudadanos y suprimir la relación o comunicación entre el Gobierno y los Tribunales de Justicia no es gran revolución si se brinda a cambio de ese polémico inciso de competencia condicionada.

Por lo que se refiere a su encuadramiento orgánico, el artículo 118, aunque no lo resuelve de manera clara, revela importantes indicios para intuir la idea innovadora que lo preside y el criterio autonómico con que se perfila.

Recordemos que el Ministerio Fiscal ha sido siempre una "segunda" Magistratura (y somos conscientes del sentido ordinal que acarrea el término), conducida por preceptos analógicos de la principal y colocada, a través del principio de dependencia jerárquica, bajo la del Gobierno a través del Ministerio de Gracia y Justicia, primero, y de Justicia, después.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1870, al regularse la "unidad y dependencia " del Ministerio Fiscal se define su jefatura en el del Tribunal Supremo

"bajo la inmediata dependencia del Ministro de Gracia y Justicia", homologándose las circunstancias orgánicas de sus componentes con las de Jueces y Magistrados. Así, respecto a ingreso en el Cuerpo (art. 770 en relación con el Capítulo I del Título III), incapacidades, incompatibilidades o exenciones (art. 771 en relación con los 109 a 115), honores, antigüedad y traje (Capítulo VIII del Título XX), responsabiliadades (art. 835 en relación con el Título V), régimen disciplinario (art. 850), etc.

No es de extrañar aquel paralelismo, si se considera la unidad de las Carreras, que presidía la Ley Orgánica, sobre contradictorios precedentes y sin justificado fundamento doctrinal.

Decimos tal por cuanto en el "Reglamento Provisional para la Administración de Justicia, en lo respectivo a la Real Jurisdicción Ordinaria", publicado por Real Decreto de la Reina Gobernadora, de 26 de septiembre de 1835, y cuya importancia jurídico-histórica no creemos que se haya celebrado como merece, se dedica el Capítulo VI y último a los "Fiscales y promotores fiscales", otorgándoseles plenísimo trato propio y precisando sus funciones y la magnitud de la tarea que se les encomienda con profundidad y horizonte que honra al Ministro refrendante, don Manuel García Herreros.

Las Ordenanzas para las Audiencias, promulgadas por Real Decreto de 19 de diciembre de 1835, en las que priman los aspectos orgánicos y funcionales, mantienen la similitud de las funciones solamente a efectos de consideración o traje (art. 87), manteniendo la sustantividad de los preceptos sobre "los Fiscales y sus Agentes fiscales" en su Título II, Capítulo 3.º

Posteriormente se les diferencia en la inamovilidad (Real Orden de 16 de octubre de 1840), pero no en las normas de antigüedad y asiento (Decreto de 9 de noviembre de 1843) y se les otorga la expresa y doctrinal autonomía en los Reales Decretos de 9 de abril de 1858, que, bajo la rúbrica general de "Organización y Atribuciones

del Ministerio Fiscal", reúne disposiciones anteriores y dispersas, y en el importantísimo de 9 de noviembre de 1860, cuyo preámbulo no dudamos en declarar como la aparición de las primeras afirmaciones conscientes del concepto doctrinal del Ministerio Público, que, aun visto desde la perspectiva de la época, reconoce el "prestigio y autoridad que requiere la importancia de sus funciones" y la "unidad de acción necesaria para el cumplimiento de sus altísimos deberes".

Frente a la elusión de conceptos al pragmatismo descriptivo y la parquedad definitoria de otras disposiciones, el preámbulo del Real Decreto de 1860 se anticipa en más de medio siglo al Estatuto de 1926 al conferir a la Institución la defensa del Interés social:

> "Porque llamado el Ministerio Fiscal a defender en los Tribunales el interés colectivo y social, representante de la Ley, por cuyo exacto cumplimiento ha de velar en beneficio de la Administración de Justicia, agente inmediato del Poder Supremo, a quien está confiada la tutela de los sagrados derechos, debe formar un Cuerpo que, inspirándose de una sola idea y obedeciendo a un solo pensamiento, transmita rápidamente su impulso desde el primer eslabón de la cadena, que arranca del Ministerio de Gracia y Justicia, hasta los agentes subalternos en toda la extensión de su escala jerárquica."

Esta cadena jerárquica, aquel carácter de agente inmediato del Poder Supremo, la dependencia del Ministerio de Gracia y Justicia es otra de las constantes cuya pervivencia mantiene en la incógnita el artículo 118 de lo que será la nueva Constitución española.

La dependencia que precisa el Real Decreto de 9 de abril de 1858 ("todos estos funcionarios y los Fiscales de las Audiencias dependerán únicamente de *mi* Fiscal en el Tribunal Supremo y éste, a su vez, con todo el

Ministerio Fiscal del Ministro de Gracia y Justicia", artículo 2), que consagra el Real Decreto de 1860 y que patentiza con consecuencias más que centenarias la Ley Orgánica del Poder Judicial, se mantiene en el Estatuto de 1926: artículo 42: "El Fiscal del Tribunal Supremo será el Jefe del Ministerio Fiscal de toda la Monarquía bajo la inmediata dependencia del Ministro de Gracia y Justicia.

Los Reglamentos Orgánicos que desarrollan el Estatuto no acusan variación alguna.

En el de 1927 y en su artículo 74, bajo el epígrafe general del Título III, que se refiere a "Unidad y dependencia del Ministerio Fiscal", se dispone que el Ministerio de Gracia y Justicia se dirigirá de Real Orden, o verbalmente en caso de urgencia, al Fiscal del Tribunal Supremo. "Este —se añade— cumplirá dichas órdenes ejercitando las acciones procedentes con arreglo a las Leyes."

El Estatuto de 1958 difiere imperceptiblemente del citado de 1927, pues en el Título correspondiente (unidad y dependencia del Ministerio Fiscal), al que ahora corresponde el artículo 86, si bien mantiene el mismo texto del artículo 74, antes aludido, suprime el concepto de Real Orden, es decir, la exigencia de disposición escrita, manteniendo la facultad del Ministro de dirigir orden o dirigirse verbalmente, en caso de urgencia, al Fiscal del Tribunal Supremo, lo que, si bien parece similar, puede permitir la interpretación de que esa orden no necesita ser escrita ni tener las características que el procedimiento administrativo exige para las ministeriales.

En el Reglamento de 27 de febrero de 1969 hay una novedad. Reproduciendo —como dijimos— el artículo 35 de la Ley Orgánica del Estado, ya no se configura al Ministerio Fiscal como representante del Gobierno en sus relaciones con el Poder Judicial, sino como "órgano de comunicación entre el Gobierno y los Tribunales de

Justicia", con la función de "promover la acción de la Justicia en defensa de los intereses públicos tutelados por la Ley, procurar ante los Juzgados y Tribunales el mantenimiento del orden jurídico y la satisfacción del interés social".

Hay, sin embargo, por igual concordancia, una innovación en el artículo 86 de este Reglamento de 1969 y es la advertencia de que las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal "se ejercerán por medio de sus órganos", ordenados conforme a los principios, etc.

Se acentúa así el carácter "propio" de los órganos del Ministerio Fiscal, característica a la que no se le había atribuido toda su importancia en las disposiciones anteriores y que, a juicio de esta Fiscalía, tiene un indudable valor de futuro.

Confirma esta evolución la Ley de Bases Orgánica de la Justicia que aprobaron las Cortes como Ley 42, de 28 de noviembre de 1974, y que después ha sido derogada en su mayor parte. La Base XV, números 72 y 73, se refiere al Ministerio Fiscal. Mantiene el concepto de órgano de comunicación entre el Gobierno y los Tribunales de Justicia y los principios de imparcialidad, legalidad, unidad y dependencia jerárquica, pero añade un concepto trascendental al establecer de manera taxativa "se le confía su propio gobierno, ejercido por el Fiscal del Reino, el Consejo Fiscal y los Fiscales Territoriales y Provinciales".

Después se remite a su propio Estatuto Orgánico, aprobado por Ley, el régimen de atribuciones, distribución de funcionarios, deberes y responsabilidades, etc.

Por primera vez, pues, aparece en la Legislación española que *al Ministerio Fiscal se le confía su propio gobierno;* por primera vez desaparece la dependencia orgánica del Ministerio de Justicia.

* * *

Llegamos así al artículo 118 del Proyecto aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que en el momento de redactar estas líneas es el único documento válido de que disponemos. Se divide en cuatro apartados, el primero de los cuales introduce las misiones correspondientes al Ministerio Fiscal, en las que prácticamente, como ya hemos visto, hay una repetición más o menos de la concepción histórico legal que se ha ido formando del Ministerio Público, con la sola especial adición de la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Incluye, sin embargo, este apartado un delicado inciso que no puede pasarse en silencio, se refiere a aquel en que se definen las misiones del Ministerio Fiscal, "sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos". Esta advertencia puede ser interpretada de dos maneras: o bien como una restricción a las funciones del Ministerio Público, que se ve así compelido a una competencia residual, atribuyéndole las tareas que hayan quedado como flecos de las que sean titulares otros Institutos regulados por la Constitución, o bien interpretada extensivamente por cuanto el Ministerio Fiscal, dentro de las altas funciones que se le adscriben, puede abarcarlas con amplísima libertad, sin límite ni barrera y en ejercicio de legal competencia, siempre que no roce de manera expresa con funciones encomendadas a otros órganos.

Teniendo en cuenta los amplios, altísimos y sagrados deberes que corresponden a la promoción de la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, la misión de proteger los derechos de los ciudadanos, de mantener el interés público tutelado por la Ley, de velar por la independencia de los Tribunales y de procurar la satisfacción del interés social, entendemos y afirmamos que funciones tan amplias no pueden entenderse coartadas por el inciso de "sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos"; proclamamos que son realmente

una amplia puerta al campo de la función del Ministerio Público y, por tanto, que la frase precautoria debe interpretarse como una competencia fecunda y extensiva y nunca como una competencia residual.

Sólo el Defensor del Pueblo, que se estatuye en el artículo 49 y cuya función es, en doctrina general, nacional e internacional, el mundo de las facultades discrecionales de la Administración en cuanto no vengan atribuidas como las regladas a la capacidad revisora de la Jurisdicción, puede (aparte de la distribución clásica de competencias que entendemos subsistentes) constituir barrera a nuestra alta función, junto con la legitimación activa, para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Fuera de ambos límites, cualquier otro que se intentara, y no tiene esta Fiscalía reparo en afirmarlo, representaría una injustificada ofensa a la más secular ejecutoria de nuestro Ministerio.

El núm. 2 del artículo 118 merece ponerse en relación con la concepción del Ministerio Fiscal contenida en la derogada Ley de Bases de la Justicia, del año 1974, en la que se confiaba al Ministerio Fiscal "su propio gobierno". Ahora en la Constitución se establece que el Ministerio Fiscal ejercita sus funciones por medio de "órganos propios".

Cabe precisar en buena lógica e intuyendo la voluntad y el espíritu de los constituyentes, que en su concepción del Ministerio Fiscal no pudieron pretender ser más regresivos que los legisladores del Régimen fenecido. Y si aquéllos aceptaban en la derogada Ley Orgánica de la Justicia, de 1974, el autogobierno del Ministerio Público, independizándolo así de la línea secular de dependencia al Ejecutivo, resultaría extraño pensar que el ejercicio de sus funciones "por medio de órganos propios" que se consagra en el artículo 118.2 es tan sólo una declaración de carácter orgánico. En definitiva, propio es la facultad exclusiva que uno tiene de disponer

de una cosa y autónoma, la condición del que de nadie depende.

Se complementa esta interpretación con el punto 3, que establece la regulación por Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, independizándolo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta (art. 116) determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el Estatuto Jurídico de los Jueces y Magistrados y del personal al servicio de la Administración de Justicia, sin referirse para nada a los Fiscales.

De otra parte, la regulación del Consejo General del Poder Judicial como el órgano de gobierno del mismo y la redacción de los apartados 2 y 3 del mencionado artículo 116 tampoco hacen referencia alguna al Ministerio Fiscal, ausencia que coincide en el artículo 110, que se refiere al Poder Judicial y en el cual al aludir a la garantía de los Jueces y Magistrados no hace tampoco referencia especial a los Fiscales, como ha venido siendo hábito de similitud en nuestra legislación. Tal silencio no debe tomarse como olvido, pues concretamente en el artículo 120 se vuelve a hablar del Ministerio Fiscal al referirse a la Policía Judicial y en el 121 también se incluye a los Fiscales al excluir su pertenencia a partidos políticos y sindicatos.

Todo ello sólo puede llevarnos a la conclusión de que, efectivamente, es voluntad constituyente la independencia del Ministerio Fiscal dentro del ámbito del Poder Judicial, en cuyo Título se encuadra, delegando su funcionamiento a órganos propios y con arreglo a una normativa que se regulará a través de un Estatuto aprobado por Ley.

En cuanto al nombramiento del Fiscal del Tribunal Supremo, extraña su denominación, puesto que, en un Régimen que se declara monárquico, el Fiscal máximo deberá ser Fiscal del Reino, como otrora lo fue el de

la República y como en toda Europa se le define en función del Régimen en cuyo seno se desempeña.

La importancia que atribuimos a las declaraciones de la Constitución son lógicas. Hasta ahora, como consecuencia quizá de las normas similares que se han atribuido a las Carreras Judicial y Fiscal a lo largo de los años hasta llegar al Estatuto de 1926, la facilidad administrativa que constituía para los legisladores el sistema de homologación entre sus miembros, la honrosa relación fraternal que el trabajo en común ha creado entre la Magistratura y el Ministerio Público, la común dependencia orgánica de ambas del Ministerio de Justicia y concretamente de la Dirección General de Justicia, todo ello, en fin, había creado durante muchos años un paralelismo de Magistraturas, lo que si es motivo de honor para los miembros del Ministerio Fiscal, porque es una comparación que solamente con virtudes y calidades se empareja, podía presentar una desfiguración para su desarrollo dentro de las complejas funciones que se le habrán de atribuir en un sistema de corte democrático.

Durante cuarenta años las funciones preventivas, ordenadoras y sancionadoras de la vida ciudadana han estado en manos de la Administración; ahora esas funciones pasan al Poder Judicial. Consiguientemente, la acción para proteger los derechos del hombre, la solicitud de equilibrio para limitar las facultades de los ciudadanos, donde reside la verdadera democracia; esa zona secante de los derechos mutuos entre hombre y sociedad, Administración y administrado y entre ciudadanos entre sí queda bajo la dirimencia de la Magistratura y, por ende, bajo el impulso tuitivo del Ministerio Fiscal.

Caben así autonomía y relación, gubernamentalización del impulso y absoluta independencia en cuanto a su interpretación y dependencia, seguridad del Ejecutivo en la Institución y limpia autonomía de ésta, anclada en los principios de legalidad e imparcialidad; judiciali-

zación por hallarse en el seno del Poder Judicial y autonomía en la rectoría de sus propios órganos.

Así, se nos ofrece ahora al Ministerio Público la esperanza óptima de ese Estatuto que por Ley le atribuye el párrafo 3 del artículo 118 de la Constitución. En él habrá de desarrollarse la función del Ministerio Público hacia campos hasta hace poco ignotos de tutela, de amparo, de denuncia, de exigencia, pero no ya planteados, como inicialmente se dibujaron, en función de representante o "presentante" del Estado-sociedad, sino como tutor y protector de la sociedad-sociedad, del hombre-hombre frente al derecho-Ley, pero también en busca del derecho-derecho.

Sin desviarse del principio de legalidad, que es su principal norte, el Ministerio Fiscal debe ver ensanchados sus horizontes y multiplicadas sus funciones como consecuencia de la llamada de ese humanismo social, que —si revisamos el artículo 2.° del Estatuto vigente— venía en todos los casos atraído por una mecánica legal condicionante de su intervención y que hoy se le exige casi como un derecho natural que, sin rechazar o reducir aquellos cauces, toma carta propia de naturaleza y exige consiguientemente adecuaciones orgánicas y funcionales para servirlas.

Cifrando en dos palabras la base de la reforma, podíamos reclamar flexibilidad y autonomía. La primera para estimular, junto con las obligaciones regladas del Ministerio Público, aquellas otras que, sin invadir el ámbito de ningún otro órgano del Estado, sirvan teleológicamente a los intereses de la sociedad, a los derechos humanos, a la protección de los desamparados, a la exigencia de servicio que encierra el poder del Estado. La autonomía, para hacer realidad su imagen de Magistratura postulante, autogobernada, dirigida por los principios de unidad y dependencia jerárquica, en los que no se mezclen jamás ni la política ni el favor.

Todo ello implica un repaso a la planta del Ministerio Público, al sistema de ascensos, destinos, premios y disciplinas con la declaración de la inamovilidad como elemental garantía de los Fiscales, sin merma de la facultad superior para el circunstancial y libre encargo de coyunturales tareas específicas.

Se abre con la nueva Constitución una nueva etapa esperanzadamente positiva de la evolución perfeccionista y ejemplar del Ministerio Fiscal español. Pretendemos colaborar en la elaboración de un anteproyecto de Estatuto qué ofrecer al Gobierno de Su Majestad y que, reelaborado en lo necesario por el Ejecutivo y las Cortes Generales, marque un hito histórico para nuestra Institución.

La oportunidad es señera y no puede despreciarse, pero si queremos hacer del Ministerio Público una máquina ágil, eficaz y a punto debemos dotarla de toda clase de medios humanos y materiales, técnicos y auxiliares que modernicen su trabajo y faciliten su acción.

En la Memoria del Ministerio Fiscal, de 15 de septiembre de 1894, la pluma del entonces Teniente Fiscal de este Alto Tribunal, don Juan de Aldana y Carvajal, decía:

> "El Ministerio Fiscal hoy, por un concurso de causas de V. E. bien conocidas, carece en absoluto de los medios indispensables para ejercer la inspección en la forma que le está encomendada. Reducido el número de sus funcionarios a límites que no se armonizan con las exigencias del servicio; ocupada su atención con el despacho diario de causas y expedientes; agobiado por plazos perentorios y por tareas de ineludible y apremiante desempeño, no tiene el tiempo preciso para llevar su acción más allá del recinto de las Salas de Justicia en que actúa y causa ciertamente admiración, y es digno de que V. E. en ello se fije, que en esas circunstancias angustiosas los Fiscales, con una abnegación merecedora de mayor

encomio, sin auxiliares, sin recursos de material y sin elementos de ninguna clase adquieran y remitan a esta Fiscalía los complicados datos estadísticos que periódicamente se les reclaman..."

Ochenta y dos años más tarde esta Fiscalía se ha visto obligada a proclamar las mismas escaseces, las mismas penurias, los mismos abandonos, enfrentándose con la necesidad de centralizar en un servicio adecuado la ingrata tarea de inventariar angustias, que resulta igual que catalogar heroísmos.

En su Instrucción núm. 1, de 5 de junio, creando el Servicio de "Instalaciones y Medios", dáse principio al itinerario con lo humano, que, por depender las decisiones necesarias de más altas instancias, ha de limitarse esta Fiscalía a recoger, relacionar y proponer lo conveniente, en cuanto afecta a lo más personalmente directo, cuya parquedad amenaza transformarse en penuria. Así, el régimen económico del personal (que no es excepción entre cuantos integran la Administración de Justicia) merece, por razón de las rigurosas incompatibilidades y normas de inmaculada conducta que la sociedad nos exige, módulos que mejoren el total de sus percepciones, al margen de equiparaciones que, en todo caso, partirían de bases de dedicación muy diferentes".

Y se declara, en parangón con cuanto se protestaba en 1894, ya que, como entonces, "campea lo que es indispensable para hacer más eficaz la función, más productivo el esfuerzo y más decorosa la relevante misión que al Ministerio Fiscal está encomendada, con lo que, en concreto, me refiero a las características de ubicación y a los medios humanos y materiales que requieren aquellas exigencias y resultados del quehacer cotidiano".

Resultaría medroso e insincero (y para ninguna de ambas condiciones fui traído por Su Majestad a este sitio) callar lo necesario en ocasión tal alta y adecuada además, pues debo dar cuenta por mandato del Esta-

tuto "de las reformas que considero convenientes para el mejor servicio". Y, como son verdades tangibles y remediables, por eso las expongo a V. E. con tanto respeto como ilusión.

Con todo ello, con cuanto queda expuesto, proyectado y denunciado, con la reiteración de nuestro espíritu de vocación y de servicio a la Ley, al interés público y a los derechos humanos, trataremos de hacer diaria verdad aquellas palabras que el artículo 107 del "Reglamento Provisional para la Administración de Justicia" dijera en el Real Decreto de 26 de septiembre de 1835:

> "Empero todos los Fiscales y promotores Fiscales deberán siempre tener muy presente que su Ministerio, aunque severo, debe ser tan justo e imparcial como la Ley en cuyo nombre le ejercen y que, si bien les toca promover con la mayor eficacia la persecución y castigo de los delitos y los demás intereses de la causa pública, tienen igual obligación de defender o prestar su apoyo a la inocencia, de respetar y procurar que se respeten los legítimos derechos de las personas particulares procesadas, demandadas o de cualquier otro medio interesadas y de no tratar nunca a éstas sino como sea conforme a la verdad y a la Justicia."

Que así lo haremos, añadimos nosotros, porque el pueblo español nos lo demanda y nos lo exige el servicio de Su Majestad.

## Capítulo I

# MOVIMIENTO DE PERSONAL EN EL MINISTERIO FISCAL

Tradicionalmente se viene haciendo resaltar al inicio de la Memoria las variaciones que durante el año al que se contrae la misma han afectado a los miembros de la Carrera promovidos a puestos destacados en ella y a quienes la han abandonado, bien por jubilación al cumplir la edad reglamentaria o por fallecimiento.

Por Real Decreto de 28 de octubre de 1977 fue nombrado Magistrado del Tribunal Supremo el Excmo. señor don Mariano Gómez de Liaño y Cobaleda, prestigiosísimo Fiscal que durante muchos años desempeñó, con singular acierto, la Jefatura del Ministerio Fiscal en la Audiencia Territorial de Burgos. A este último cargo accedió el Fiscal de Palencia, Excmo. señor don Santiago A. Martín Andrés, y para servir la Jefatura de la Fiscalía de Palencia fue designado el Teniente Fiscal de Zamora, Iltmo. señor don David Rayo Gómez.

Como consecuencia del fallecimiento del Excmo. señor don Francisco Panchuelo Alvarez, Fiscal de Cáceres, por Real Decreto de 10 de junio de 1977 fue nombrado para dicho cargo el Excmo. señor don Maturino Rodríguez Mellado, que desempeñaba el de Fiscal de San Sebastián, para cuya vacante se designó al que era Teniente Fiscal, Iltmo. señor don Jesús Martínez Calleja.

Por Real Decreto de 11 de marzo de 1977 fue nombrado Abogado Fiscal del Tribunal Supremo el Iltmo. señor don Cándido Rodríguez-Magallanes Sánchez, que era

Fiscal de Lugo, cargo en el que fue sustituido por el Iltmo. señor don José María Iscar Sánchez, Abogado Fiscal de La Coruña.

Por Reales Decretos de 13 y 31 de marzo de 1977 fueron nombrados Abogados Fiscales del Tribunal Supremo, con carácter eventual, los Iltmos. señores don Diego Luzón Domínguez, don José González Chacón y don Mariano Fernández Martín-Granizo, los dos primeros Abogados Fiscales de Madrid y el último Abogado Fiscal de Valladolid.

Jubilado por haber cumplido la edad reglamentaria, el Fiscal de Teruel, Iltmo. señor don Saturio González y González, fue nombrado para dicha Jefatura el Teniente Fiscal Iltmo. señor don Fermín Hernández Villarroya.

En 21 de octubre de 1977 pasó también a la situación de jubilado, por haber cumplido la edad preceptivamente señalada en nuestro Reglamento, el Abogado Fiscal de Barcelona, Iltmo. señor don Luis Mazo Mendo.

Se incorporó a la Carrera el Iltmo. señor don Antonio Carbajo Madrigal, que se encontraba en situación de excedencia especial por desempeñar el cargo de Delegado Provincial del Ministerio de la Vivienda, siendo destinado como Abogado Fiscal a La Coruña.

En 15 de diciembre de 1977 se incorporaron a la Carrera diez nuevos Fiscales, procedentes de la última promoción de la Escuela Judicial, a quienes desde estas líneas damos nuestra más cordial bienvenida, deseándoles toda clase de satisfacciones y aciertos en el desempeño de su noble y alta función.

Es de justicia no terminar esta exposición sin hacer especial mención del Excmo. señor don Eleuterio González Zapatero, Abogado Fiscal del Tribunal Supremo, quien por Real Decreto de 10 de diciembre de 1976 fue designado Fiscal del Reino, cargo en el que cesó el 13 de enero de 1978. Durante el período de tiempo en que desempeñó la Jefatura Suprema del Ministerio Fiscal,

época de acontecimientos trascendentes para la vida política de España, demostró con su inteligencia cualidades humanas, espíritu de compañerismo y amplios conocimientos de la ciencia jurídica, unido a un ponderado y recto criterio, ser un Fiscal de extraordinaria categoría, dejando entre los miembros de la Carrera gratísimo recuerdo, que sin duda ha de permanecer vivo, como ejemplo y estímulo para todos.

## RELACION DE FISCALES TERRITORIALES Y PROVINCIALES QUE HAN FIRMADO LA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1977

Albacete: Excmo. Sr. D. Fernando Alamillo Canillas.

Alicante: Ilmo. Sr. D. Francisco García Romeu.

Almería: Ilmo. Sr. D. Emilio María Contreras Díaz.

Avila: Ilmo. Sr. D. Emilio Vez Pazos.

Badajoz: Ilmo. Sr. D. Manuel Ruiz Fernández.

Barcelona: Excmo. Sr. D. Alejandro Sanvicente Sama.

Bilbao: Ilmo. Sr. D. Fernando Barrilero Turel.

Burgos: Excmo. Sr. D. Santiago Adolfo Martín Andrés.

Cáceres: Excmo. Sr. D. Maturino Rodríguez Mellado.

Cádiz: Ilmo. Sr. D. Jaime Ollero Gómez.

Castellón: Ilmo. Sr. D. Manuel Lucas Escamilla.

Ciudad Real: Ilmo. Sr. D. Rafael Rojo Urrutia.

La Coruña: Excmo. Sr. D. Eduardo Monzón de Aragón.

Córdoba: Ilmo. Sr. D. Rafael Contreras de la Paz.

Cuenca: Ilmo. Sr. D. Joaquín Llobell Muedra.

Gerona: Ilmo. Sr. D. Alfonso Carro Crespo.

Granada: Excmo. Sr. D. Rafael Salgado Camacho.

Guadalajara: Ilmo. Sr. D. José Leopoldo Aranda Calleja.

Huelva: Ilmo. Sr. D. José Jiménez Villarejo.

Huesca: Ilmo. Sr. D. Francisco Goyena de la Mata.

Jaén: Ilmo. Sr. D. Mariano Monzón de Aragón.

León: Ilmo. Sr. D. Odón Colmenero González.

Lérida: Ilmo. Sr. D. Martín Rodríguez Esteban.

Logroño: Ilmo. Sr. D. Arturo Tejero Acerete.

Lugo: Ilmo. Sr. D. José María Iscar Sánchez.

Madrid: Excmo. Sr. D. Rafael Alonso Pérez-Hickman.

Málaga: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Dago y Martínez de Carvajal.

Murcia: Ilmo. Sr. D. Bernardino Ros Oliver.

Orense: Ilmo. Sr. D. Jaime Poch y Gutiérrez de Caviedes.

Oviedo: Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Martínez.

Palencia: Ilmo. Sr. D. David Rayo Gómez.

Palma de Mallorca: Excmo. Sr. D. Hipólito Hernández García.

Las Palmas: Excmo. Sr. D. Lucas García Rodríguez.

Pamplona: Excmo. Sr. D. Ricardo Querol Giner.

Pontevedra: Ilmo. Sr. D. Jacobi Varela Feijoo.

Salamanca: Ilmo. Sr. D. Bernardo Almendral Lucas.

San Sebastián: Ilmo. Sr. D. Jesús Martínez Calleja.

Santander: Ilmo. Sr. D. Juan de Escalante Huidobro.

Santa Cruz de Tenerife: Ilmo. Sr. D. Temístocles Díaz-Llanos y Oramas.

Segovia: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Casanueva.

Sevilla: Excmo. Sr. D. Guillermo Blanco Vargas.

Soria: Ilmo. Sr. D. Gaspar Molina Rodríguez.

Tarragona: Ilmo. Sr. D. Ricardo Beltrán y Fernández de los Ríos.

Teruel: Ilmo. Sr. D. Fermín Hernández Villarroya.

Toledo: Ilmo. Sr. D. Eugenio Casimiro López y López.

Valencia: Excmo. Sr. D. Eliseo García Martínez.

Valladolid: Evcmo. Sr. D. Eduardo Mendizábel Landete.

Vitoria: Ilmo. Sr. D. Alfonso Arroyo de las Heras.

Zamora: Ilmo. Sr. D. Fernando Santamarta Delgado.

Zaragoza: Excmo. Sr. D. Luis Martín-Ballestero Costea.

Las Fiscalías, como el año anterior, de Avila, Guadalajara, Huesca, Segovia, Teruel y Logroño han estado durante el pasado año 1977 servidas por un solo funcionario.

## Capítulo II

# EVOLUCION SOCIO-POLITICA Y SUS CONSECUENCIAS EN LA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO FISCAL

Cuando en la Memoria del año pasado se analizaba la actividad legislativa a lo largo de 1976, tras señalar su evidente trascendencia, determinada por la Ley de Reforma Política que se elaboró en aquel período, aunque fuera promulgada en enero de 1977, y la regulación de algunas libertades públicas —derechos de reunión y de asociación política—, con la consiguiente modificación de su cuadro de ilicitudes penales, se hacía notar que una misma y permanente línea de pensamiento había animado este movimiento legislativo: un claro propósito democratizador de la vida política en el contexto del Estado de Derecho. Y se señalaba igualmente que tal actividad legislativa, no concluida, respondía no tanto a una conformación de los esquemas en vigor determinada por razones técnicas, cuanto a una concepción política distinta orientada a fines de concordia nacional y convivencia democrática.

Naturalmente, este planteamiento que se desarrolla en la actividad legislativa de 1977 explica su contenido y sus orientaciones. Las normas promulgadas en este período han insistido en la línea del reconocimiento de los derechos individuales, en la posibilitación de su ejercicio y en su conformación según las exigencias del Estado de Derecho que, al establecer los límites que son connaturales a la facultad reconocida por la norma, ase-

gura la convivencia democrática entre los individuos. Con este mismo espíritu se ha acentuado el reconocimiento del uso responsable de la libertad de cada uno, que viene a sustentar los antiguos entornos de control o tutela del ciudadano por parte del Poder público.

En el ámbito del derecho penal material merecen especial consideración, aunque no se agote su significación en este aspecto, el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales; el Real Decreto-Ley 24/1977, de 1 de abril, sobre Libertad de expresión; y las medidas de Gracia —Real Decreto-Ley 19/1977, de 14 de marzo, de Amnistía; Real Decreto 388/1977, de 14 de marzo, sobre Indulto general, y Ley 48/1977, de 15 de de octubre, de Amnistía. Con otro alcance, sin duda, deben citarse también el Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, sobre juegos de suerte, envite o azar y apuestas; y en el aspecto penitenciario, el Real Decreto 2.273/1977, de 29 de julio, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Instituciones Penitenciarias.

En cinco puntos, pues, del sistema penal ha incidido la acción del legislador durante 1977: los delitos electorales, los relativos a la libertad de expresión, el derecho de gracia, que ha sido ejercitado de modo general en tres ocasiones, el régimen penitenciario y los llamados juegos ilícitos.

La regulación de los delitos electorales es una lógica prevención para el orden de las primeras elecciones, sustituyendo así la vieja normativa, determinada por condicionamientos históricos y opciones políticas diferentes, por otra actual y ajustada a las circunstancias socio-políticas vigentes. Como señala la propia exposición de motivos, el objetivo de la nueva regulación no es otro que rodear al proceso electoral de las garantías necesarias para asegurar el secreto del voto y la pureza del sufragio como instrumento de las libertades democráticas, a fin de que ninguna libertad pueda ser inhibida por el ejercicio abusivo de la libertad ajena. Este fin se ha

cumplido con un sistema de ilicitudes penales que flanquean todo el proceso electoral, sancionando bajo pena las irregularidades más graves, como a las normas penales corresponde. Las tipologías, actualizadas, se complementan con disposiciones de carácter general, como ya hacía la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907, que dotan al sistema de las especialidades que le son propias —concepto de funcionario público a tal objeto, concepto de documento oficial, coherencia con el Código Penal mediante el principio de alternatividad, establecimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio en todo caso, otorgamiento de arbitrio al Tribunal para agravar la pena en función de la gravedad del hecho y personalidad del culpable— para declarar aplicable, con carácter subsidiario, el Código Penal, con lo que, entre otros objetivos, se cumple el de asegurar el imperio del principio de culpabilidad.

La nueva normativa de la libertad de expresión ha determinado también modificaciones sustanciales en el orden penal. Por una parte, la sustitución del sistema de discrecionalidad de la Administración, con el consiguiente refuerzo punitivo, por la tutela estrictamente penal mediante la aplicación de sus disposiciones generales, ha impuesto la derogación del artículo 165 bis *b)* del Código, paralelamente a la suspensión del artículo 2.º de la Ley de Prensa. Pero, por otra, el objetivo de armonizar esta liberalización de la información con el más escrupuloso respeto al honor y dignidad ajenos ha obligado a establecer ciertas agravaciones y normas de efectividad en el propio sistema penal. Así, se ha dispuesto una agravación de las penas cuando los delitos se cometieran en período de campaña electoral o con motivo u ocasión de ella; se ha establecido una modalidad excepcional de autoría conjunta cuando se trate de publicaciones escritas y se ha aplicado el principio de solidaridad de la empresa informativa con el autor en lo que se refiere a la responsabilidad civil. De este modo se ha

dado congruencia a la libertad informativa con la tutela del honor en la concurrencia democrática, según expresa el propio Real Decreto-Ley.

Como ya se ha indicado, el derecho de gracia ha sido ejercido, con carácter general, en tres ocasiones durante 1977, promulgándose dos amnistías y un indulto general. La primera, otorgada por Real Decreto-Ley 19/1977, ampliación de la concedida por Real Decreto-Ley 10/1976, y el Indulto general, Real Decreto 388/1977, ambos de 14 de marzo, fueron ya considerados en la Memoria del pasado año, que, por su trascendencia, no podía silenciarlos, aunque por razones cronológicas quedaran fuera del período a que la Memoria se refería.

La amnistía de 15 de octubre de 1977 (Ley 48/1977) es obvio que se caracteriza por su gran amplitud, orientada al logro de la convivencia pacífica de todos los españoles. Se extiende a tres aspectos netamente diferenciados: penal, administrativo y laboral; dentro del primero, proyectado sobre los llamados delitos políticos, cabe distinguir las tres manifestaciones generales del artículo primero y las amnistías especiales del segundo y en todos los supuestos que contempla, las escasas limitaciones ponen de manifiesto el gran ámbito de aplicación a que aludimos.

La diversidad de situaciones que contempla la Ley, la complejidad de sus normas y las dificultades de interpretación que ofrece aconsejaron a esta Fiscalía a dictar una instrucción general que se plasmó en la Circular núm. 1 de 1977, en la que se afrontaron los problemas de interpretación mencionados, que se publica en el correspondiente lugar de esta Memoria.

La incidencia penitenciaria de estas medidas de gracia se examina en el capítulo VI de esta Memoria.

La modificación en 1977 del Reglamento de los Servicios de Instituciones Penitenciarias, que también se examinan en el capítulo VI, abre, con el precedente de 1968, una clara vía hacia una Ley General Peniten-

ciaria, que al redactar esta Memoria ya se ha concretado en anteproyecto de Ley.

En la modificación, por último, de los preceptos del Código Penal relativos a los juegos ilícitos ha influido de modo decisivo la consideración de que, aun conociendo las consecuencias negativas de orden individual, familiar y social que el juego puede determinar, el sistema de prohibición absoluta resulta contraproducente, ya porque conduce a la tolerancia, ya porque fomenta la clandestinidad, con las mismas consecuencias. Ante tal realidad ha parecido más conveniente la reglamentación, que, a la par, sirve a otros importantes fines sociales, reservando la sanción penal exclusivamente para el ejercicio de tal actividad fuera del marco reglamentado.

Algunas de las disposiciones citadas exceden por su contenido del ámbito del derecho penal sustantivo y afectan claramente a otros sectores del ordenamiento jurídico. Así, la Ley 24/1977, de 1 de abril, contiene normas de índole procesal, pues, respondiendo a la necesidad de "fortalecer los instrumentos previstos por el ordenamiento procesal para defender el honor y la fama de los particulares", modifica el régimen de persecución de los delitos de columnia o injurias hechos por escrito o con publicidad, transformándolos en delitos semipúblicos, y al propio tiempo incide en el ordenamiento jurídico-político al abrir más amplio cauce a la libertad de expresión por medio de impresos, que no tendrá ya otras limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico con carácter general.

Lo mismo puede decirse del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales. La alusión que antes se ha hecho a él en cuanto a su aspecto penal sustantivo no cubre sino una pequeña parcela de su contenido total. Consecuencia necesaria de la Ley para la reforma Política, de 4 de enero de 1977, la idea inspiradora, que representa un principio básico para su interpretación, constituye la respuesta a una exigencia

ineludible de la organización democrática del país: "hacer del sufragio el instrumento de libre opción entre alternativas políticas concurrentes en términos de igualdad". La intervención del Fiscal en esta materia se produce en los recursos electorales y de impugnación de los resultados, así como en la aprobación de las cuentas rendidas por los partidos políticos respecto a las subvenciones recibidas.

Otro conjunto normativo, éste de carácter exclusivamente jurídico-político, hace referencia al ejercicio del derecho de asociación política, respondiendo a la misma línea de pensamiento a que aludíamos al principio: el propósito democratizador de la vida política en el contexto de un Estado de Derecho.

El Real Decreto-Ley 12/1977, de 8 de febrero, viene a satisfacer, mediante la reforma y complemento de disposiciones anteriores, una insoslayable necesidad de puesta a punto del mecanismo de constitución de las Asociaciones políticas.

La única limitación efectiva a la creación de Asociaciones de índole política es que las mismas no constituyan una ilicitud penal. Pero una declaración de esta índole es esencialmente jurisdiccional. Este es el motivo por el que se remite a la decisión judicial la aplicación de los límites legales de constitución de Asociaciones con fines políticos.

Al propio tiempo esta misma disposición ha conferido a la Jurisdicción la facultad sancionadora en esta materia, dando también en este aspecto un paso importante en la satisfacción de las exigencias del Estado de Derecho.

El proceso se ha completado con el Real Decreto 125/1977, que regula los procedimientos judiciales en materia de Asociaciones Políticas como corolario de la norma anterior.

Finalmente, hay otra manifestación del fenómeno asociativo que ha sida objeto de regulación en este año

y también en ella se sigue la línea general antes apuntada. Se trata de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, que ha modificado sustancialmente el régimen del asociacionismo profesional que había establecido la Ley Sindical de 17 de febrero de 1971.

Sus principios inspiradores no son otros que el respeto a las libertades propias de una sociedad democrática, los establecidos con rango de norma internacional en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya firmado por el Gobierno español, y los derivados de convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Uno de los aspectos más relevantes de la disposición es la instrumentación procesal, que tiende a garantizar la independencia de estas asociaciones frente a la Administración Pública. Su nacimiento a la vida jurídica se produce por el mero transcurso de un plazo a partir del depósito de los Estatutos y sólo puede ser impedido por la interposición de una demanda en que se solicita de la autoridad judicial la declaración de que la Asociación intentada no es conforme a Derecho.

Es importante poner de relieve la función que, en un eventual proceso sobre la ilegalidad de la Asociación, se confiere por esta norma al Ministerio Fiscal. El examen previo que se le encomienda de la documentación de constitución, la posibilidad de ejercicio de la acción correspondiente y su insoslayable presencia en todo proceso sobre la ilegalidad de la asociación sindical responde, de una parte, a la concepción del Ministerio Fiscal, como guardián del ordenamiento jurídico, y, de otra, a su misión de defensa del interés social.

El Real Decreto 1.048/1977, de 13 de mayo, ha complementado la disposición anterior al establecer el régimen legal de los procedimientos judiciales que en ella se instituyen.

De la exposición que precede se deduce, en definitiva,

una corriente de judicialización del control de las libertades individuales que entraña consecuentemente el otorgamiento al Ministerio Fiscal de un papel destacado y preponderante en la defensa de aquellas libertades y en la vigilancia de su juridicidad, iniciándose con ello una etapa de potenciación de sus funciones como tutor de los derechos del ciudadano.

## Capítulo III

# FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1. *Tribunales de lo Penal.*—La actividad desarrollada en 1977 por los Organos de la Jurisdicción Penal se examina desde una doble vertiente: teniendo en cuenta el Organo jurisdiccional —Audiencias Provinciales, Juzgados de Instrucción, Juzgados de Distrito— y la clase o tipo de procedimiento que se siguió para la instrucción y persecución de las diversas infracciones de tipo penal.

a) *Dilencias previas.*

El cuadro que sigue divide en dos momentos procesales la situación de las Diligencias, conforme desde el año 1969 se vienen resaltando en la Memoria.

| | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|
| | Número de diligencias | Porcentaje | Número de diligencias | Porcentaje |
| Pendientes del año anterior. | 60.462 | 11,20 | 70.129 | 11,12 |
| Iniciadas en el año ... ... ... | 461.607 | 88.80 | 559.471 | 88,88 |
| Total ... ... ... ... ... ... | 522.069 | 100 | 629.600 | 100 |

Se observará que el número de Diligencias ha aumentado en 1977, con respecto al año anterior, en 107.531, lo que significa un aumento del 20,56 por 100.

| | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|
| | Número de diligencias | Porcentaje | Número de diligencias | Porcentaje |
| | 522.069 | 100 | 629.600 | 100 |
| TERMINADAS: | | | | |
| Archivadas por no ser delito ... ... ... ... ... ... | 85.313 | 16,3 | 99.203 | 18,9 |
| Autor no habido ... ... ... | 194.232 | 37,2 | 249.965 | 39,7 |
| Declaración de falta ... ... | 78.837 | 15,1 | 87.084 | 13,3 |
| Convertidas en sumario ... | 18.706 | 3,7 | 19.700 | 3,1 |
| Convertidas en preparatorias ... ... ... ... ... ... | 53.391 | 10,2 | 55.922 | 8,8 |
| Inhibidas ... ... ... ... ... | 21.361 | 4,1 | 23.005 | 3,6 |
| En trámite ... ... ... ... ... | 70.145 | 13,4 | 94.204 | 15,7 |

Resaltemos una vez más, como ha sido habitual advertencia en años anteriores, el escaso número de Diligencias Previas que se convierten en un verdadero proceso penal y también la cantidad de Diligencias que quedan pendientes de terminación de un año para otro; en el año a que se contrae esta Memoria el número de las Diligencias pendientes (70.129) aumentó en cerca de 10.000 con respecto al año 1976 (60.462) y es curioso observar que el citado año (1976) se había producido una disminución en las Diligencias pendientes con respecto a 1975 en un número aproximado a las 3.000.

Desde otro punto de vista, es de significar que, aunque las Diligencias que fueron declaradas faltas en 1977 fueron unas 12.000 más que en 1976, el número de las que se convirtieron en sumario aumentó en 10.000 y en 30.000 las que pasaron a Preparatorias. El número de Diligencias Previas que fueron archivadas por no ser habido el autor del hecho delictivo acreció considerablemente en el año 1977 (249.965) con respecto a 1976 (194.232), con un total de 55.733.

De ello se deduce, como ya quedó expuesto en Memorias anteriores, que es imprescindible un examen más minucioso por parte de los Fiscales y una dedicación más intensa al tema de las Diligencias Previas, en evita-

ción de que se produzca este llamativo exceso de archivos en supuestos que pudieran no merecerlo, a fin de aumentar la acción represiva de la Jurisdicción Penal, cuya vigilancia está encomendada al Ministerio Fiscal, en beneficio del interés público.

b) *Diligencias Preparatorias.*

El año 1976 se produjo una ligera disminución de las Diligencias Preparatorias con respecto a 1974 y 1975, pero el año 1977 ha reflejado un ligero aumento con respecto a 1976, si bien es cierto que este aumento es inferior a las cifras de 1974 y 1975; en general, y como se observará en los cuadros siguientes, las variaciones que en los mismos se reflejan no son realmente sensibles.

| | 1975 | | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de diligencias | Porcentaje | Número de diligencias | Porcentaje | Número de diligencias | Porcentaje |
| Pendientes del año anterior ... ... ... ... ... | 15.828 | 21,6 | 14.497 | 21,4 | 15.246 | 20,6 |
| Incoadas en el año ... | 56.870 | 78,4 | 54.989 | 78,6 | 58.658 | 79,4 |
| TOTAL ... ... ... ... | 72.698 | 100 | 69.486 | 100 | 73.904 | 100 |

4.418 Diligencias más que en el año anterior, que representa el 6,5 por 100 más.

| | 1975 | | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de diligencias | Porcentaje | Número de diligencias | Porcentaje | Número de diligencias | Porcentaje |
| | 72.698 | 100 | 69.486 | 100 | 73.904 | 100 |
| Sobreseídas por no ser delictivo el hecho o no probarse su realización ... ... ... ... | 7.636 | 10,5 | 7.047 | 10,1 | 7.875 | 10,6 |
| Sobreseídas por no conocerse el autor o estar exento de responsabilidad ... ... ... | 11.358 | 15,6 | 10.841 | 15,7 | 12.095 | 16,3 |

| | 1975 | | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de diligencias | Porcentaje | Número de diligencias | Porcentaje | Número de diligencias | Porcentaje |
| Abierto el juicio oral. | 36.662 | 50,4 | 32.939 | 47,4 | 33.759 | 45,6 |
| Pasaron a Sumario ... | 2.529 | 3,4 | 3.061 | 4.4 | 3.179 | 4,3 |
| En trámite ... ... ... ... | 14.463 | 19,9 | 15.019 | 21,7 | 16.922 | 22,9 |
| Paralizadas por rebeldía ... ... ... ... ... | 50 | 0,1 | 579 | 0,7 | 74 | 0,3 |

Para completar el apartado relativo a las Diligencias Preparatorias es necesario examinar el número de sentencias dictadas y el de recursos interpuestos, cuestiones a las que se refieren los siguientes cuadros estadísticos:

| | 1975 | | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de sentencias | Porcentaje | Número de sentencias | Porcentaje | Número de sentencias | Porcentaje |
| Sentencias dictadas ... | 32.753 | 100 | 13.705 | 100 | 18.020 | 100 |
| Totalmente conformes con el Fiscal ... ... | 23.449 | 71,6 | 9.683 | 70,6 | 12.807 | 72,2 |
| Parcialmente conformes ... ... ... ... ... | 6.011 | 18,4 | 2.891 | 21,1 | 1.381 | 7,7 |
| Disconformes ... ... ... | 3.293 | 10,0 | 1.131 | 8,3 | 3.832 | 20,1 |

La diferencia que se aprecia en el número de sentencias dictadas desde el año 1975 hasta 1977 se debe a la promulgación de los Reales Decretos de Indulto y de Amnistía dictados desde el mes de noviembre de 1975 hasta 1977.

Como puede apreciarse, aumentó la proporción de sentencias conformes con la tesis fiscal y aunque ha crecido también el de las disconformes, éste queda compensado con la disminución habida en las sentencias parcialmente conformes.

Los datos referentes a los recursos de apelación se reflejan en el cuadro siguiente:

| | 1975 | | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de recursos | Porcentaje | Número de recursos | Porcentaje | Número de recursos | Porcentaje |
| Interpuestos por el Fiscal ... ... ... ... ... | 1.055 | 24,4 | 405 | 21,9 | 486 | 20,7 |
| Interpuestos por las partes ... ... ... ... ... | 3.255 | 75,6 | 1.452 | 78,1 | 1.919 | 79,3 |
| TOTALES ... ... ... | 4.310 | 100 | 1.857 | 100 | 2.401 | 100 |
| *Resueltos por la Audiencia:* | | | | | | |
| Confirmados ... ... | 2.894 | 67,1 | 910 | 44,2 | 1.359 | 49,6 |
| Revocados ... ... ... | 1.294 | 30,0 | 546 | 26,5 | 681 | 28,2 |
| Pendientes de resolución ... ... ... ... | 550 | 12,9 | 605 | 29,3 | 538 | 22,2 |

c) *Sumarios de urgencia.*

A diferencia de lo que se exponía en la Memoria del pasado año, el aumento en la incoación de este tipo de procedimientos, en el año 1977 se produce una disminución, no muy sensible, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

| | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|
| | Número de sumarios | Porcentaje | Número de sumarios | Porcentaje |
| *Trámite de Instrucción:* | | | | |
| Pendientes del año anterior ... ... ... ... ... ... | 6.292 | 16,2 | 6.861 | 18,9 |
| Incoados en el año ... ... | 32.799 | 83,8 | 29.863 | 81,1 |
| TOTAL ... ... ... ... ... | 39.091 | 100 | 36.724 | 100 |

El desarrollo procesal de este tipo de sumarios es como sigue:

| | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|
| | Número de sumarios | Porcentaje | Número de sumarios | Porcentaje |
| Sobreseimiento provisional 1.º | 5.504 | 14,0 | 2.718 | 7,5 |
| Sobreseimiento provisional 2.º | 8.515 | 21,8 | 7.008 | 19,2 |
| Declarados falta ... ... ... ... | 420 | 1,1 | 405 | 1,2 |
| Inhibidos ... ... ... ... ... ... | 596 | 1,5 | 486 | 1,5 |
| Elevados a la Audiencia ... | 16.691 | 42,6 | 18.571 | 50,8 |
| En trámite ... ... ... ... ... ... | 7.375 | 19,0 | 7.345 | 19,8 |
| *Trámite en la Audiencia:* | | | | |
| Total tramitados ... ... ... | 25.439 | 100 | 26.729 | 100 |
| Sobreseimiento por no ser delito ... ... ... ... ... ... | 1.641 | 6,5 | 1.631 | 6,1 |
| Sobreseimiento por desconocerse el autor ... ... | 2.727 | 10,8 | 2.299 | 8,7 |
| Abierto Juicio Oral ... ... | 13.629 | 53,5 | 13.243 | 49,5 |
| Extinción de responsabilidad ... ... ... ... ... ... | 1.934 | 7,6 | 2.362 | 8,9 |
| Pendientes ... ... ... ... ... | 5.408 | 21,6 | 7.194 | 26,8 |

Por lo que afecta a las sentencias puede apreciarse, observando el cuadro que a continuación se inserta, una oscilante variación, ya que en 1976 el número de las dictadas fue inferior a 1975 (4.649) y en 1977 se produjo un aumento de 1.117 (9.404).

| | 1975 | | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de sentencias | Porcentaje | Número de sentencias | Porcentaje | Número de sentencias | Porcentaje |
| Sentencias dictadas ... | 12.936 | 100 | 8.287 | 100 | 9.404 | 100 |
| Totalmente conformes con la acusación ... | 7.738 | 59,8 | 5.092 | 61,4 | 5.936 | 62,7 |
| Parcialmente conformes ... ... ... ... ... | 3.203 | 24,8 | 2.039 | 24,1 | 1.131 | 12,4 |
| Disconformes ... ... ... | 1.995 | 15,4 | 1.156 | 14,5 | 2.337 | 29,9 |

Al igual que en las Diligencias Preparatorias, el aumento de las sentencias disconformes totalmente es a costa de las que sólo parcialmente son conformes, pues también aquí hay un aumento en las de acuerdo con la tesis fiscal.

Los recursos de casación que se han interpuesto contra las sentencias dictadas por las Audiencias en los procedimientos a los que nos estamos refiriendo se elevan a 1.253; interpuestos por el Ministerio Fiscal, 61, y 1.192 por las partes.

d) *Sumarios ordinarios.*

El número de los que se incoan anualmente sufre tan ligeras variaciones que no merece comentario especial. El cuadro que se inserta después viene a reflejar las escasas oscilaciones, tanto de número como de porcentaje, en los diferentes trámites procesales, aunque, con respecto a los años anteriores, la tónica general, que, como se decía, era de descenso ya en el año 1976 y al que se contrae la Memoria, se aprecia un ligero aumento:

| | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|
| | Número de sumarios | Porcentaje | Número de sumarios | Porcentaje |
| *Trámite de Instrucción:* | | | | |
| Pendientes del año anterior ... ... ... ... ... ... | 2.880 | 21,4 | 3.087 | 21.7 |
| Incoados en el año ... ... | 10.921 | 78,6 | 11.867 | 79.3 |
| TOTAL ... ... ... ... ... | 13.801 | 100 | 14.954 | 100 |
| Declarados falta ... ... ... | 161 | 1,1 | 154 | 1,2 |
| Inhibidos ... ... ... ... ... | 250 | 1,8 | 326 | 1,2 |
| Elevados a la Audiencia ... | 10.241 | 74,2 | 10.666 | 74,3 |
| Pendientes ... ... ... ... ... | 3.149 | 22,9 | 3.181 | 29,3 |
| Total tramitado ... ... ... | 11.730 | — | 12.286 | — |
| *Trámite en la Audiencia:* | | | | |
| Sobreseimiento por no ser delito ... ... ... ... ... ... | 3.859 | 32,9 | 4.500 | 36,7 |
| Sobreseimiento por desconocerse el autor ... ... | 2.718 | 23,2 | 2.465 | 20,0 |
| Abierto Juicio Oral ... ... | 2.943 | 23,1 | 3.251 | 26,4 |
| Extinción de responsabilidad ... ... ... ... ... ... | 204 | 1,7 | 251 | 2,2 |
| Pendientes ... ... ... ... ... | 2.006 | 17,1 | 1.819 | 14,7 |

A diferencia de años anteriores, y al igual que en los sumarios de urgencia, se observa en este tipo de procedimiento (sumarios ordinarios) que el número de sobreseimientos por desconocerse el autor de los hechos ha disminuido en 2.718 con respecto al año 1976 y 2.465 en 1977.

En cuanto a las sentencias dictadas podemos determinar en las cifras del cuadro que sigue algunas diferencias que, aunque no muy llamativas, son reales: 376 más en el año 1977 que en el año 1976.

| | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|
| | Número de sentencias | Porcentaje | Número de sentencias | Porcentaje |
| Sentencias dictadas ... ... ... | 2.344 | 100 | 2.720 | 100 |
| Totalmente conformes con la acusación ... ... ... ... ... | 1.192 | 50,8 | 1.404 | 51,8 |
| Parcialmente conformes ... ... | 747 | 31,8 | 424 | 15,3 |
| Disconformes ... ... ... ... | 405 | 17,4 | 892 | 32,9 |

El número de recursos de casación interpuestos contra las sentencias se eleva a un total de 538, de los cuales 32 se interpusieron por el Ministerio Fiscal y 506 por las partes.

e) *Distribución del trabajo entre Juzgados y Audiencias.*

Se estima esta cuestión de importancia por la preocupación del desequilibrio que se viene produciendo en la distribución del trabajo, procediendo a examinarle, siguiendo para ello las mismas directrices que en años anteriores.

Comenzando por un análisis porcentual de lo que significan los diferentes tipos de procesos, podemos ver las diferencias en los cuatro últimos años.

| | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|---|
| Preparatorias ... ... ... ... ... | 59,8 | 60,9 | 56,7 | 57,1 |
| Sumarios de Urgencia ... ... | 30,1 | 28,8 | 31,9 | 30,4 |
| Sumarios ordinarios ... ... ... | 11,6 | 10,3 | 11,4 | 12,5 |

Analizando ahora el número total, las cifras absolutas, como se hizo en años anteriores, computaremos dentro de la actividad de los Juzgados, las Preparatorias y las Previas terminadas, sin contar las que se convirtieron en Preparatorias o en sumario, y dentro de la actividad de las Audiencias, los sumarios de urgencia y ordinarios y las sentencias dictadas en apelación de los Juzgados de Instrucción en las Diligencias Preparatorias.

Sobre estas bases, el cuadro comparativo que comprende los diez años de vigencia de la reforma procesal de 1967 es el que sigue:

| | Audiencias | | Juzgados | |
|---|---|---|---|---|
| | Número de diligencias | Porcentaje | Número de diligencias | Porcentaje |
| 1968 ... ... ... ... ... ... ... | 55.552 | 20,0 | 222.587 | 80,0 |
| 1969 ... ... ... ... ... ... ... | 37.427 | 13,8 | 235.929 | 86,2 |
| 1970 ... ... ... ... ... ... ... | 39.152 | 13,2 | 258.345 | 86,8 |
| 1971 ... ... ... ... ... ... ... | 38.544 | 12,0 | 282.897 | 88,0 |
| 1972 ... ... ... ... ... ... ... | 36.583 | 10,6 | 309.322 | 89,4 |
| 1973 ... ... ... ... ... ... ... | 34.760 | 9,5 | 332.781 | 90,5 |
| 1974 ... ... ... ... ... ... ... | 37.640 | 13,9 | 356.224 | 98,6 |
| 1975 ... ... ... ... ... ... ... | 40.083 | 9,5 | 381.516 | 90.5 |
| 1976 ... ... ... ... ... ... ... | 45.781 | 9,4 | 444.499 | 90,6 |
| 1977 ... ... ... ... ... ... ... | 43.770 | 7,5 | 539.328 | 92,5 |

La comparación que aparece recogida en el cuadro anterior es lo suficientemente explícita para señalar el marcado desequilibrio entre los procedimientos en que interviene la Audiencia y los que corresponden a la competencia de los Juzgados, evidentemente progresivo.

Si se examina el número de sentencias dictadas por las Audiencias y por los Juzgados, se observa que, a excepción del año 1976, en que se produjo un descenso, en el

año 1977 se observa un aumento, aunque no es comparable con el experimentado en los años 1974 y 1973, debido, como luego se dirá, a la proliferación de indultos y amnistías.

En efecto, el cuadro referente a las sentencias es el que sigue:

| | Audiencias | Juzgados | Total |
|---|---|---|---|
| 1950 ... ... ... ... ... ... | 25.221 | — | 25.221 |
| 1955 ... ... ... ... ... ... | 26.138 | — | 26.138 |
| 1960 ... ... ... ... ... ... | 32.068 | — | 32.068 |
| 1965 ... ... ... ... ... ... | 34.612 | — | 34.612 |
| 1966 ... ... ... ... ... ... | 38.999 | — | 38.999 |
| 1967 ... ... ... ... ... ... | 40.528 | — | 40.528 |
| 1968 ... ... ... ... ... ... | 27.968 | 10.388 | 38.376 |
| 1969 ... ... ... ... ... ... | 18.484 | 24.866 | 43.350 |
| 1970 ... ... ... ... ... ... | 17.396 | 28.506 | 45.902 |
| 1971 ... ... ... ... ... ... | 16.640 | 25.550 | 42.190 |
| 1972 ... ... ... ... ... ... | 14.672 | 27.256 | 41.928 |
| 1973 ... ... ... ... ... ... | 15.053 | 34.151 | 49.204 |
| 1974 ... ... ... ... ... ... | 16.481 | 36.885 | 53.366 |
| 1975 ... ... ... ... ... ... | 15.581 | 32.753 | 48.334 |
| 1976 ... ... ... ... ... ... | 10.631 | 13.705 | 24.336 |
| 1977 ... ... ... ... ... ... | 10.124 | 18.020 | 30.144 |

En cuanto a la comparación de las conformidades y disconformidades de las sentencias dictadas por las Audiencias y por los Juzgados y por lo que se refiere al año 1977, nos da las siguientes cifras:

| | Audiencias | | Juzgados | |
|---|---|---|---|---|
| | Número de sentencias | Porcentaje | Número de sentencias | Porcentaje |
| Sentencias dictadas ... ... ... | 12.124 | 100 | 18.020 | 100 |
| Totalmente conformes con la acusación ... ... ... ... ... | 7.340 | 60,6 | 12.807 | 71,1 |
| Parcialmente conformes ... ... | 1.555 | 12,8 | 1.381 | 7,6 |
| Disconformes ... ... ... ... ... | 3.229 | 26,6 | 3.832 | 21,3 |

También interesa examinar la proporción existente entre el número de asuntos tramitados y el de sentencias dictadas, tanto por las Audiencias como por los Juz-

gados, distinguiendo en aquéllas el trámite de urgencia u ordinario:

| | Audiencias | | | | Juzgados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Urgencia | Ordinarios | Total | Porcentaje | Total | Porcentaje |
| Año 1975 | | | | | | |
| Número de asuntos ... | 34.361 | 12.124 | 46.485 | 100 | 72.698 | 100 |
| Número de sentencias. | 12.936 | 2.645 | 15.581 | 33,6 | 32.753 | 45,1 |
| Año 1976 | | | | | | |
| Número de asuntos ... | 39.091 | 13.801 | 52.892 | 100 | 69.486 | 100 |
| Número de sentencias. | 8.287 | 2.344 | 10.681 | 20,0 | 13.705 | 19,7 |
| Año 1977 | | | | | | |
| Número de asuntos ... | 36.724 | 14.954 | 51.678 | 100 | 73.904 | 100 |
| Número de sentencias. | 9.404 | 2.720 | 12.124 | 23,5 | 18.020 | 24,3 |

f) *Audiencia Nacional.*

El número de causas incoadas por los Juzgados adscritos a la Audiencia Nacional durante el año 1977 se eleva a 978 y el de las resoluciones dictadas a 118.

Los asuntos despachados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional durante el año 1977 se reflejan en el siguien cuadro:

| | |
|---|---|
| Recursos de queja y casación en materia de amnistía ... ... ... | 11 |
| Sumarios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 116 |
| Diligencias Previas, Juzgados 1 y 2 ... ... ... ... ... ... ... ... | 367 |
| Diligencias Previas, Juzgado 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 606 |
| Expedientes antiguos, Juzgado 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 552 |
| Diligencias Preparatorias, Juzgado 3 ... ... ... ... ... ... ... ... | 125 |
| Expedientes de Peligrosidad y Rehabilitación Social ... ... ... | 740 |
| Apelaciones del Juzgado 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 103 |
| Competencias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 262 |
| Expedientes de Indulstos y Amnistías ... ... ... ... ... ... ... ... | 50 |
| Querellas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 10 |
| Extradiciones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 75 |
| Expedientes gubernativos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 4 |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 3.010 |

g) *La Justicia de Distrito en el orden penal.*

Como se aprecia a continuación, en este orden sigue aumentando la actividad de los Juzgados de Distrito. El aumento se aprecia al comparar las cifras en los últimos años:

| | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|---|
| Pendientes del año anterior. | 56.261 | 63.109 | 52.938 | 89.562 |
| Incoadas en el año ... ... ... | 334.712 | 376.123 | 420.773 | 473.864 |
| TOTALES ... ... ... ... ... | 390.973 | 439.232 | 473.711 | 563.426 |

En cuanto se refiere al número de sentencias dictadas, el cuadro que a continuación se consigna servirá para conocer no sólo el número de las que se dictaron, sino comparar el porcentaje de condenatorias y absolutorias.

| | 1975 | | 1976 | | 1977 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de sentencias | Porcentaje | Número de sentencias | Porcentaje | Número de sentencias | Porcentaje |
| Sentencias dictadas ... | 248.004 | 100 | 235.773 | 100 | 255.661 | 100 |
| Condenatorias ... ... ... | 134.982 | 54,2 | 131.410 | 55,8 | 135.837 | 53,15 |
| Absolutorias ... ... ... | 113.022 | 45,8 | 104.363 | 44,2 | 119,824 | 46,85 |

Como en años anteriores, se llama la atención sobre el escaso número de recursos de apelación interpuestos por los Fiscales de Distrito a pesar del elevado número de sentencias absolutorias, que, como es de ver, alcanzó un porcentaje casi del 50 por 100.

2. *Tribunales de lo Civil.*—Como se viene indicando en pasadas Memorias, se aprecia un aumento del número de asuntos civiles de los que conoce la Jurisdicción ordinaria y, así, es de observar que desde el año 1975 a 1977 este auge se eleva a una cantidad superior a 26.845 asuntos, variación no muy sensible, mas, sin embargo, llamativa si se compara con los cuadros estadísticos de los

años anteriores, como se pone de manifiesto en el siguiente:

| | 1975 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|
| Cuestiones de competencia ... ... ... ... | 809 | 842 | 954 |
| Mayores cuantías ... ... ... ... ... ... ... | 3.797 | 4.856 | 6.115 |
| Menores cuantías ... ... ... ... ... ... ... | 12.464 | 15.312 | 17.410 |
| Ejecutivos ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 61.830 | 63.859 | 68.609 |
| Arrendamientos ... ... ... ... ... ... ... ... | 2.476 | 2.640 | 2.859 |
| Quiebras y suspensiones ... ... ... ... ... | 267 | 619 | 686 |
| Otros contenciosos ... ... ... ... ... ... | 20.150 | 23.538 | 28.485 |
| Jurisdicción voluntaria ... ... ... ... ... | 46.496 | 47.732 | 50.016 |
| TOTALES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 148.289 | 159.398 | 175.134 |

La diferencia, pues, respecto al año 1975 representa un 18,1 por 100. Si los procedimientos de quiebras y sus pensiones de pagos aumentaron de 619 en 1976 a 686 en 1977 es curioso resaltar que en 1975 se registró el menor índice de estos procedimientos (277), que aproximadamente se triplicaron en dos años como consecuencia evidente de la presente crisis económica.

Por Territorios, la distribución de asuntos civiles que se han tramitado en los Juzgados de Primera Instancia se comtempla en el siguiente cuadro:

| | 1975 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|
| Juzgados del Territorio de Madrid ..... | 31.046 | 33.642 | 36.736 |
| Juzgados del Territorio de Barcelona ... | 23.992 | 25.215 | 27.112 |
| Juzgados del Territorio de Valencia .... | 16.262 | 17.209 | 19.020 |
| Juzgados del Territorio de Sevilla ..... | 11.925 | 14.245 | 15.390 |
| Juzgados del Territorio de Burgos ..... | 9.814 | 10.087 | 11.276 |
| Juzgados del Territorio de Granada .... | 6.101 | 6.850 | 7.845 |
| Juzgados del Territorio de Albacete .... | 6.475 | 7.208 | 7.697 |
| Juzgados del Territorio de La Coruña . | 7.714 | 7.907 | 8.220 |
| Juzgados del Territorio de Valladolid .. | 6.639 | 7.124 | 8.080 |
| Juzgados del Territorio de Zaragoza ... | 4.036 | 6.374 | 7.192 |
| Juzgados del Territorio de Las Palmas. | 7.910 | 6.334 | 7.214 |
| Juzgados del Territorio de Navarra .... | 4.495 | 5.036 | 6.034 |
| Juzgados del Territorio de Baleares .... | 4.614 | 4.540 | 4.731 |
| Juzgados del Territorio de Oviedo ..... | 3.875 | 4.499 | 5.060 |
| Juzgados del Territorio de Cáceres ..... | 2.791 | 3.128 | 3.427 |
| TOTALES ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 148.589 | 159.398 | 175.134 |

Comparado el número de asuntos tramitados en los Juzgados de Primera Instancia en 1975 (148.589), en 1976 aumentaron más de 10.000 y en 1977 16.000 más que el año inmediato anterior. En definitiva, desde 1975 a 1977 el aumento se cifra en 27.000 asuntos.

En ninguno de los Territorios de las 15 Audiencias Territoriales ha habido ninguna regresión en 1977 respecto a años anteriores, a diferencia de 1976, como ya apuntábamos en la pasada Memoria.

Así como la evolución en 1976, aunque sensible respecto a años anteriores, no era muy llamativa (9.120), en 1977 se mantiene la misma tónica, si bien el aumento fue inferior a 1.000, concretamente 10.056.

Para mayor precisión, el cuadro que se inserta dará una perfecta idea de lo expuesto:

| | |
|---|---|
| 1971 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 6.925 |
| 1972 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 7.555 |
| 1973 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 6.849 |
| 1974 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 7.508 |
| 1975 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 7.940 |
| 1976 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 9.120 |
| 1977 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 10.056 |

En las Audiencias Provinciales, en las que en 1976 el número de asuntos decreció respecto a los años 1974 y 1975, es lo cierto que en 1977 aumentó con cierta espectacularidad, ya que de 5.088 en 1974 y 4.781 en 1976 se contabiliza en 1977 un total de 7.185.

Las cifras que a continuación se consignan señalan con claridad cuanto queda dicho:

| | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|---|
| Cuestiones de competencia ... | 41 | 15 | 14 | 38 |
| Apelaciones de asuntos procedentes de Juzgados de 1.ª Instancia ... ... ... ... | 1.161 | 1.164 | 1.062 | 1.371 |
| Apelaciones procedentes de la Justicia Municipal ... ... ... | 3.726 | 4.153 | 3.612 | 5.590 |
| Jurisdicción voluntaria ... ... | 160 | 180 | 93 | 213 |
| TOTALES ... ... ... ... ... ... | 5.088 | 5.512 | 4.781 | 7.185 |

3. *La Jurisdicción Contencioso-administrativa.*—La aplicación por las diferentes Salas de las Audiencias Territoriales y Provinciales en materia Contencioso-administrativa queda reflejada en el siguiente cuadro:

| | Recursos interpuestos | Caducados, desistidos, inadmitidos | Sentencias dictadas | Recursos estimados |
|---|---|---|---|---|
| Albacete ... ... ... | 356 | 32 | 308 | 152 |
| Oviedo ... ... ... ... | 506 | 55 | 442 | 72 |
| Baleares ... ... ... | 161 | 15 | 77 | 27 |
| Barcelona ... ... ... | 1.812 | 191 | 910 | 278 |
| Burgos ... ... ... ... | 420 | 66 | 309 | 82 |
| Cáceres ... ... ... ... | 150 | 13 | 188 | 122 |
| Coruña (La) ... ... | 1.102 | 154 | 604 | 308 |
| Granada ... ... ... | 605 | 95 | 407 | 296 |
| Las Palmas ... ... | 199 | 16 | 130 | 65 |
| Madrid ... ... ... ... | 3.899 | 1.366 | 2.008 | 1.878 |
| Navarra ... ... ... | 346 | 49 | 283 | 125 |
| Santa Cruz de Tenerife ... ... ... ... | 202 | 18 | 112 | 40 |
| Sevilla ... ... ... ... | 858 | 149 | 537 | 795 |
| Valencia ... ... ... | 1.024 | 148 | 739 | 496 |
| Valladolid ... ... ... | 512 | 48 | 443 | 120 |
| Vizcaya ... ... ... | 347 | 77 | 250 | 77 |
| Zaragoza ... ... ... | 444 | 95 | 280 | 126 |
| TOTAL ... ... ... | 12.943 | 2.587 | 8.027 | 5.059 |

4. *Actividad de las Salas del Tribunal Supremo durante el año 1977.*

| Asuntos | Sala 1.ª | Sala 2.ª | Sala 3.ª | Sala 4.ª | Sala 5.ª | Sala 6.ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresados en 1977 ... ... | 1.165 | 2.106 | — | — | — | 2.725 |
| *a)* Unica instancia ... ... | — | — | 230 | 473 | 1.039 | — |
| *b)* Apelaciones ... ... ... | — | — | 825 | 946 | 385 | — |
| *c)* Revisiones ... ... ... | — | — | 37 | 12 | 10 | — |
| TOTAL ... ... ... | 1.165 | 2.106 | 1.092 | 1.431 | 1.424 | 2.725 |
| Terminados por Sentencia ... ... ... ... ... ... | — | — | 820 | 1.032 | 994 | — |
| Terminadas por otra resolución definitiva ... | 989 | 2.048 | 431 | 371 | 714 | 2.940 |
| TOTAL ... ... ... | 989 | 2.048 | 1.251 | 1.403 | 1.932 | 2.940 |

## Capítulo IV

# EVOLUCION DE LA DELINCUENCIA Y ASUNTOS MAS DESTACABLES

A) *La delincuencia en España.*

El cuadro general de la actividad delictiva no ha experimentado cambios notables durante el año 1977 con respecto al año anterior, acentuándose únicamente los aspectos negativos que se deducían de su evolución y se concretan en el mantenimiento de una creciente progresión y la generalización de conductas violentas, que determinan una agravación de la delincuencia.

Si bien comparativamente —como luego se observará en los diversos cuadros— el incremento, en términos generales (25, 20 por 100), no ha sido tan elevado como el pasado año (31,1 por 100), sin embargo, la incidencia media nacional ha pasado del 10,4 al 12,64 delitos por cada 1.000 habitantes, siendo de señalar que el aumento se aprecia en las provincias de Barcelona, Madrid, Granada y Canarias.

En el mismo orden cuantitativo, los delitos contra la propiedad representan un llamativo porcentaje respecto del total de los cometidos (87,32 por 100), si bien globalmente su incremento (28,94 por 100), como el de los robos (30,26 por 100), guarda una proporción similar a la del total respecto a los aumentos del pasado año. En cambio, los atracos han alcanzado niveles alarmantes, tanto en el total de cometidos (119,21 por 100) como, más aún, en los perpetrados contra Bancos y otras entidades similares (145,37 por 100).

El resto de los delitos se ha mantenido en los límites en que normalmente se vienen produciendo, con ligeras variaciones, incluidas las sustracciones de vehículos, que ha mantenido el alto porcentaje habitual de incremento, siendo considerable el alcanzado por lo que se refiere exclusivamente a los turismos (52,35 por 100).

A esta incidencia cuantitativa se aprecian otros aspectos que pueden resumirse, como más característicos, en los siguientes:

Preferente uso de la violencia o agresión en la comisión de delitos, tanto en los que la violencia va implícita en el tipo, como en otros que no la hacen necesaria para obtener los fines de lucro y, sin embargo, habitualmente se emplean.

Desproporción entre los grados de violencia o agresión empleados y los motivos u ocasiones con se ha producido.

Aumento del empleo de armas, principalmente de fuego, y extensión en la utilización de otros medios peligrosos.

En cuanto a la participación en la comisión de las conductas delictivas hay que destacar:

Fundamentalmente la de jóvenes delincuentes, cuya problemática adquiere mayor trascendencia y en términos que aconsejan una destacada llamada de atención no sólo por la peligrosidad de su comportamiento, sino por su previsible agravación en un inmediato futuro, sin perspectivas alentadoras.

En la misma línea se denuncia como cada vez más inquietante la delincuencia de menores, cuyas conductas se hacen frecuentes y peligrosas por una convicción generalizada de impunidad en base a su condición de menores, aumentándose las posibilidades de su comportamiento , sin que rindan la necesaria eficacia las Instituciones y medidas adecuadas para su prevención y corrección.

Gran parte de los delitos se cometen por individuos

de arraigada inclinación y reincidentes de distintas modalidades que han sido condenados sucesivas veces.

Ampliación de los niveles de insolencia y agresividad y ausencia del mínimo respeto a la autoridad, la Justicia y a los derechos elementales de las personas.

Para completar esta exposición en su doble proyección de progresión constante y manifestación violenta se hace preciso aludir al entorno en que se desenvuelve el fenómeno de la delincuencia y a los posibles factores derivados, a los que fundadamente cabe atribuir una influencia en el incremento o agravación, o bien por su incidencia, directa o indirectamente, en a aparición o arraigo de conductas delictivas, o bien por la carencia de efectos disuasorios o preventivos que dificulten las ocasiones o reduzca la tendencia al delito.

Las causas podrían fundamentalmente concretarse en las siguientes:

Condicionante influjo del ambiente social y formas de vida, fuertemente envueltos en una atmósfera materialista que coloca en primer plano el bienestar económico y su libre búsqueda, con olvido de los valores espirituales, de, una parte, facilitan las situaciones propicias a la inclinación delictiva y, de otra, favorecen el egoísmo, la inhibición colectiva y la falta de solidaridad ciudadana.

Pérdida de los efectos favorables derivados de la institución familiar, decisiva para la formación de los menores y jóvenes, debido a un profundo debilitamiento de lazos afectivos, dejación de autoridad, incomprensión generacional, supervaloración de libertad, falta de tiempo, etc., que determinan un mayor influjo exterior, nocivo para muchos menores que crecen ociosamente en la calle, y para los jóvenes, preferentemente condicionados en su comportamiento por las compañías.

Aspecto negativo de los medios de comunicación social y de espectáculos (prensa, revistas y publicacio-

nes,, televisión, películas, etc.), cuya influencia se deduce en:

Estímulo de hechos y conductas violentas (físicas, lucrativas o sexuales), cuyos detalles y situaciones se divulgan y exhiben con minuciosidad y excesivamente.

Fomento para la realización de hechos en cadena de una misma naturaleza, tras la noticia repetida y detallada de determinadas conductas cuya real comisión despierta la codicia y hace concebir esperanzas de igual posibilidad en otros individuos con inclinación delictiva.

Aumento de la sensación colectiva de inseguridad, que condiciona la falta de reacción de las víctimas, atemorizadas, sin que normalmente la impresión percibida guarde proporción con la realidad delictiva.

Acentuación en ciudades de gran concentración humana de las situaciones que facilitan el delito; ausencia de efectos disuasorios en la aplicación de las penas e e indiscriminación de la libertad provisional; reducidos efectos rehabilitadores del tratamiento penitenciario; negativa eficacia de las medidas tutelares y correctoras, en la mayoría de los casos de menores, con inclinación delictiva clara y comportamiento peligroso, y escasa o nula actuación, en general, de medidas preventivas para evitar o dificultar la comisión del delito o las ocasiones en que pueda producirse.

Y, como especial y extenso caldo de cultivo, principalmente para los delitos contra la propiedad, una situación de crisis económica en la que el desempleo, la espiral de precios y la inflación provocan un ambiente de necesidad que aflora —tanto para lo necesario como para lo superfluo— en esta especial delincuencia.

Un vez expuesta, de forma generalizada, las causas de las variaciones de la delincuencia en España, es momento de entrar en la precisión y estadística de la actividad delictiva, que se refleja en los siguientes cuadros estadísticos:

## RESUMEN GENERAL DE LA CRIMINALIDAD APARENTE

| DELITO | Previas | | Preparatorias | | Sumarios de urgencia | | Sumarios ordinarios | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado ... ... | 9 | | — | | — | | 3 | | 12 | |
| 2. Delitos contra la seguridad interior del Estado ... ... | 4.965 | | 1.230 | | 921 | | 288 | | 7.344 | |
| 3. Falsedades ... ... ... ... ... ... | 1.847 | | 321 | | 688 | | 185 | | 3.041 | |
| 4. Delitos contra la Administración de Justicia ... ... ... | 216 | | 170 | | 76 | | 14 | | 476 | |
| 5. Título V del Libro II ... ... | 846 | | 94 | | 748 | | 648 | | 2.336 | |
| 6. Juegos ilícitos ... ... ... ... ... | 75 | | 31 | | 12 | | — | | 118 | |
| 7. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo ... ... ... ... ... ... | 256 | | 40 | | 130 | | 51 | | 477 | |
| 8. Delitos contra las personas: | | | | | | | | | | |
| *a)* Homicidio ... ... ... ... | 89 | | 1 | | 35 | | 428 | | 563 | |
| *b)* Infanticidio ... ... ... | 1 | 15.274 | — | 3.268 | 2 | 1.092 | 10 | 720 | 13 | 20.354 |
| *c)* Aborto ... ... ... ... ... | 101 | | 4 | | 49 | | 35 | | 189 | |
| *d)* Lesiones ... ... ... ... | 15.083 | | 3.253 | | 1.006 | | 247 | | 19.589 | |
| 9. Suicidios ... ... ... ... ... ... | 1.149 | | 11 | | 28 | | 1.144 | | 2.332 | |
| 10. Delitos contra la honestidad. | 3.645 | | 138 | | 1.880 | | 1.065 | | 6.728 | |
| 11. Delitos contra el honor ... ... | 430 | | 20 | | 99 | | 236 | | 785 | |
| 12. Delitos contra el estado civil de las personas ... ... ... ... | 324 | | 4 | | 142 | | 21 | | 491 | |
| 13. Delitos contra la libertad y seguridad ... ... ... ... ... | 10.972 | | 980 | | 2.040 | | 333 | | 14.325 | |
| 14. Delitos contra la propiedad: | | | | | | | | | | |
| *a)* Robo ... ... ... ... ... | 65.421 | | 4.832 | | 11.090 | | 2.845 | | 84.188 | |
| *b)* Hurto ... ... ... ... ... | 40.307 | | 3.524 | | 2.701 | | 347 | | 46.879 | |
| *c)* Estafa ... ... ... ... ... | 4.071 | 167.171 | 1.397 | 18.073 | 1.380 | 18.097 | 633 | 4.316 | 7.481 | 207.657 |
| *d)* Robo y hurto de uso ... | 40.854 | | 3.101 | | 1.324 | | 101 | | 45.380 | |
| *e)* Cheque en descubierto. | 4.880 | | 3.649 | | 572 | | 31 | | 9.132 | |
| *f)* Otros ... ... ... ... ... | 11.638 | | 1.570 | | 1.030 | | 359 | | 14.597 | |
| 15. Imprudencia punible (no tráfico) ... ... ... ... ... ... | 3.230 | | 173 | | 402 | | 149 | | 3.954 | |
| 16. Delitos relativos al tráfico de automóviles: | | | | | | | | | | |
| I) ... ... ... ... ... ... ... | 78.308 | 82.845 | 22.894 | 29.301 | 2.026 | 2.206 | 36 | 46 | 103.264 | 114.398 |
| O) ... ... ... ... ... ... ... | 4.537 | | 6.407 | | 180 | | 10 | | 11.134 | |
| 17. Delitos definidos en Leyes especiales ... ... ... ... ... | 687 | | 502 | | 100 | | 17 | | 1.306 | |
| 18. Hechos casuales ... ... ... ... | 3.621 | | 112 | | 314 | | 2.691 | | 6.738 | |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... | 297.562 | | 54.468 | | 28.975 | | 11.867 | | 392.872 | |

Analizando el cuadro anterior, es de destacar lo siguiente:

Que el número total de procedimientos iniciados (Diligencias Previas, Preparatorias, Sumarios de Urgencia y Sumarios ordinarios) es de 392.872. Durante el año 1976 se incoaron 320.043, siendo, por consiguiente, la diferencia en más para 1977 de 72.829 procedimientos, lo que representa un aumento del 22,8 por 100.

El número de Diligencias Previas incoadas en 1975 fue de 178.286; en 1976, 225.276 y en el año a que se contrae esta Memoria, 297.562, la diferencia en más con respecto al año 1976 arroja la cifra de 72.286, que supone un porcentaje del 32,08 por 100.

DILIGENCIAS PREVIAS

| | | 1975 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Contra la seguridad exterior del Estado ... ... ... ... | — | — | 9 |
| 2. | Contra la seguridad interior del Estado ... ... ... ... | 1.777 | 3.450 | 4.965 |
| 3. | Falsedades ... ... ... ... ... | 1.000 | 1.275 | 1.847 |
| 4. | Contra la Administración de Justicia ... ... ... ... ... | 271 | 177 | 216 |
| 5. | Título V del Libro II ... ... | 753 | 345 | 846 |
| 6. | Juegos ilícitos ... ... ... ... | 52 | 49 | 75 |
| 7. | Funcionarios públicos ... ... | 286 | 246 | 256 |
| 8. | Contra las personas ... ... | 8.503 | 12.717 | 15.274 |
| 9. | Suicidios ... ... ... ... ... ... | 968 | 842 | 1.149 |
| 10. | Contra la honestidad ... ... | 1.265 | 2.407 | 3.645 |
| 11. | Contra el honor ... ... ... ... | 142 | 204 | 430 |
| 12. | Contra el estado civil ... ... | 127 | 156 | 324 |
| 13. | Contra la libertad y seguridad ... ... ... ... ... ... | 4.651 | 7.416 | 10.972 |
| 14. | Contra la propiedad ... ... | 98.754 | 126.459 | 167.171 |
| 15. | Imprudencia (no tráfico) ... | 2.142 | 2.842 | 3.230 |
| 16. | Infracción vehículos motor. | 57.076 | 66.373 | 82.845 |
| 17. | Leyes especiales ... ... ... ... | 517 | 317 | 683 |
| 18. | Hechos casuales ... ... ... ... | 1.777 | 3.450 | 3.621 |
| | TOTALES ... ... ... ... | 178.285 | 225.276 | 297.562 |

Como es de ver, la diferencia con el año anterior ha sido de 72.286 procesos más, lo que resulta irrelevante.

Algo parecido ocurre si computamos las Preparatorias y los Sumarios, en cuyo caso el cuadro que se obtiene es el siguiente:

| | 1975 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|
| 1. Contra la seguridad exterior del Estado ... ... ... ... | 19 | 6 | 3 |
| 2. Contra la seguridad interior del Estado ... ... ... ... | 5.654 | 5.947 | 2.378 |
| 3. Falsedades ... ... ... ... ... | 1.289 | 1.353 | 1.194 |
| 4. Contra la Administración de Justicia ... ... ... ... ... | 261 | 245 | 260 |
| 5. Título V del Libro II ... ... | 991 | 1.104 | 1.490 |
| 6. Juegos ilícitos ... ... ... ... | 25 | 13 | 43 |
| 7. Funcionarios públicos ... ... | 295 | 259 | 221 |
| 8. Contra las personas ... ... | 4.295 | 5.083 | 5.080 |
| 9. Suicidios ... ... ... ... ... ... | 1.312 | 1.077 | 1.183 |
| 10. Contra la honestidad ... ... | 3.160 | 3.373 | 3.083 |
| 11. Contra el honor ... ... ... ... | 311 | 305 | 355 |
| 12. Contra el estado civil ... ... | 125 | 208 | 167 |
| 13. Contra la libertad y seguridad ... ... ... ... ... ... | 3.475 | 4.070 | 3.353 |
| 14. Contra la propiedad ... ... | 31.982 | 32.057 | 31.553 |
| 15. Imprudencia (no tráfico) ... | 1.167 | 808 | 724 |
| 16. Infracción vehículos motor. | 33.615 | 32.057 | 31.553 |
| 17. Leyes especiales ... ... ... ... | 550 | 477 | 619 |
| 18. Hechos casuales ... ... ... ... | 2.844 | 2.567 | 3.117 |
| TOTALES ... ... ... ... | 91.471 | 94.767 | 95.310 |

En estos procedimientos la diferencia es menor, ya que excede en 543 asuntos más que en el año anterior. Este síntoma de estabilización aparece claramente en los verdaderos procesos penales, como comprobaremos también al analizar las cifras de los Sumarios de Urgencia y de los Sumarios ordinarios. En los primeros la suma total de los tres años últimos refleja los siguientes niveles:

| | |
|---|---|
| 1975 ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 27.786 |
| 1976 ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 24.925 |
| 1977 ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 28.975 |

| | 1975 | 1976 | 1977 | Diferencia | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Preparatorias ... | 9.344 | 10.921 | 11.867 | + 946 | + 8,6 |
| S. de Urgencia ... | 27.786 | 32.799 | 28.975 | — 3.824 | — 11,7 |
| S. ordinarios ... ... | 9.344 | 10.921 | 11.867 | + 946 | + 8,6 |

ESPECIFICACION DE LOS DELITOS

| | 1975 | 1976 | 1977 |
|---|---|---|---|
| Contra la propiedad ... ... ... ... | 130.736 | 162.060 | 162.277 |
| Robo y hurto de uso ... ... ... | 28.353 | 30.968 | 45.380 |
| Contra las personas ... ... ... ... | 12.799 | 17.810 | 20.354 |
| Contra la libertad y seguridad ... | 8.126 | 11.686 | 14.325 |
| Imprudencia vehículos de motor. | 82.062 | 90.063 | 114.398 |
| Contra la seguridad interior del Estado ... ... ... ... ... ... ... | 7.631 | 9.397 | 7.344 |

En cuanto a las formas dolosa o culposa las cifras son las siguientes:

| | |
|---|---|
| DELITOS CULPOSOS: | |
| Imprudencia punible (excluido tráfico) ... ... ... ... ... ... | 3.954 |
| Imprudencia con vehículos de motor ... ... ... ... ... ... | 103.364 |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 107.218 |
| Delitos dolosos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 276.584 |
| Hechos casuales y suicidios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 9.070 |
| SUMA TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 392.872 |

| | 1974 — Porcentaje | 1975 — Porcentaje | 1976 — Porcentaje | 1977 — Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Contra la propiedad ... ... | 47,3 | 48,5 | 50,6 | 52,8 |
| Tráfico automóviles ... ... ... | 35,2 | 33,6 | 30,8 | 29,1 |
| Contra las personas ... ... ... | 4,5 | 4,7 | 5,5 | 5,2 |
| Contra la libertad y seguridad ... ... ... ... ... ... | 3,1 | 3,0 | 3,7 | 3,5 |
| Casuales y suicidios ... ... ... | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 2,2 |
| Contra la seguridad interior del Estado ... ... ... ... ... | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 1,9 |
| Contra la honestidad ... ... | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
| Imprudencia (no tráfico) ... | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,4 |
| Otros delitos ... ... ... ... ... | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 2,3 |

DATOS NUMERICOS DE ACTIVIDADES TERRORISTAS Y OTRAS ACCIONES

AÑO 1977

| | |
|---|---|
| ACCIONES TERRORISTAS. | |
| Explosiones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 697 |
| Artefactos explosivos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 106 |
| Amenazas de explosivos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 754 |

| | |
|---|---|
| Alijos de explosivos | 11 |
| Robos de armas y explosivos | 88 |
| Atracos a entidades bancarias | 189 |
| Atentados | 349 |
| Muertos de los Cuerpos de Orden Público | 20 |
| Muertos civiles | 14 |
| Heridos de los Cuerpos de Orden Público | 358 |
| Heridos civiles | 394 |
| Amenazas | 110 |

OTRAS ACCIONES.

| | |
|---|---|
| Muertos por enfrentamiento a Fuerzas del Orden Público u otras causas políticas | 15 |
| Manifestaciones públicas | 1.028 |
| Manifestaciones con intervención de las Fuerzas de Orden Público | 788 |
| Concentraciones | 1.305 |
| Encierros | 430 |
| Asambleas | 498 |
| Detenidos | 4.394 |
| Ofensas a la bandera nacional | 79 |
| Exhibición de banderas republicanas | 258 |
| Sucesos en cárceles | 273 |
| Ocupación de locales oficiales | 44 |

## ORGANIZACIONES TERRORISTAS AUTORAS DE LOS HECHOS

Las principales acciones terroristas cometidas a lo largo del año han sido protagonizadas especialmente por las tres organizaciones que se destacan en este campo: ETA, GRAPO y MPAIAC. A ellas se deben el mayor número en la utilización de explosivos, así como de enfrentamientos con los Cuerpos de Orden Público.

La organización ETA sumó a lo largo de 1977 un total de 447 acciones, de las que cabe destacar el asesinato del Presidente de la Diputación de Vizcaya, don Augusto Unceta Barrenechea; del Concejal del Ayuntamiento de Irún, don Julio Martínez Ezquerro, así como dos Inspectores del Cuerpo General de Policía, cuatro miembros de la Guardia Civil, dos Policías Armados y una persona particular. A esta misma organización corresponde el secuestro y posterior asesinato realizado en la persona del industrial don Javier Ybarra Bergé.

Los GRAPO, por su parte, tuvieron una participación aproximada en 200 acciones, de las que destaca, por su interés nacional, el secuestro del Presidente del Consejo de Estado, don Antonio María de Oriol, y posteriormente el del Teniente General Villaescusa, liberados el 11 de febrero a la vez que se procedía a la detención del grupo que protagonizó los hechos. Asimismo destacan diversos atracos a entidades bancarias, el asesinato de un Capitán de la Policía Armada y el de dos Guardias Civiles, así como el atentado contra el Centro Cultural de los Estados Unidos en Madrid.

El MPAIAC se ha caracterizado por la utilización de artefactos explosivos, cuyo fin ha sido el de perjudicar a industrias turísticas y fabriles de empresas extranjeras o con sede central en la Península e islas Canarias; impuestos revolucionarios, pudiéndose calcular alrededor de unas 100 acciones, entre las que destacan por su importancia cinco robos de armas y explosivos.

Del resto de organizaciones que optan por la lucha armada podrían señalarse algunas de ideología marxista-leninista y anarquista, tales como el PCE (i), FRAP, así como grupos "incontrolados" de extrema derecha.

## RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS

*Secuestros.*—Durante 1977 se produjeron tres, realizados en las personas del Presidente del Consejo de Estado, don Antonio María de Oriol (este hecho se llevó a cabo el 11 de diciembre de 1976, pero abarcó hasta el 11 de febrero de 1977; el Teniente General Villaescusa Quilis, ambos efectuados por el GRAPO y liberados el día señalado anteriormente. El tercer secuestro fue el del industrial don Javier Ybarra, llevado a cabo el 20 de mayo por miembros de ETA, encontrándose su cadáver el 22 de junio en el puerto de Barazar.

ACCIONES TERRORISTAS.

| | |
|---|---|
| Explosiones | 697 |
| Artefactos desactivados | 106 |
| Amenazas de explosivos | 754 |
| Alijos de explosivos | 73 |
| Robos de explosivos | 5 |
| Atracos a Bancos | 189 |
| Atentados | 394 |

PERSONAS QUE PERDIERON LA VIDA COMO CONSECUENCIA DE ACTIVIDADES TERRORISTAS

16 de enero: don Félix Ayuso Pinel, Inspector del Cuerpo General de Policía, fallecido a causa de las heridas que sufrió en septiembre de 1974 en el atentado de la calle del Correo, de Madrid.

23 de enero: don Arturo Ruiz García, estudiante, como consecuencia de disparos realizados contra él en el transcurso de una manifestación en Madrid por otro manifestante, supuesto militante de "Triple A".

24 de enero: don Enrique Valdevira Ibáñez, don Francisco Javier Sahuquillo Pérez del Arco, don Serafín Holgado de Antonio, Abogados; don Luis Javier Benavides Ordaz, estudiante, y don Elías Rodríguez Leal, empleado, por atentado efectuado por miembros de extrema derecha en el despacho de Abogados de la calle de Atocha, de Madrid.

28 de enero: don José María Martínez Morales y don Fernando Sánchez Fernández, Policías Armados, por atentado del GRAPO cuando prestaban servicios en la Caja Postal de Ahorros de la calle del Padre Piquer, de Madrid; don José María Lozano Sanz, Guardia Civil, por atentado del GRAPO cuando prestaba servicio en la Caja Postal de Ahorros de la Colonia Oroquieta, de Madrid.

11 de febrero: don Antonio López Salcedo, Inspector del Cuerpo General de Policía, muerto en Barcelona cuando procedía a identificar a militantes del PCE (r) en el Metro de Pubilla.

13 de marzo: don Constantino Gómez Barcia y don José Castaño Vázquez, Guardias Civiles, por ametrallamiento del automóvil particular que ocupaban, en Mondragón, realizado por ETA.

29 de abril: don Antonio Galán Aceituno, Sargento de la Guardia Civil, por atentado de ETA.

9 de mayo: don José María Bultó Marqués, industrial, por colocación de un explosivo sujeto al pecho con esparadrapo, al tiempo que le exigían la entrega de 500 millones de pesetas, en su domicilio de Barcelona.

18 de mayo: don Manuel Ordera de la Cruz, Policía Armado, ametrallado cuando prestaba servicio en la estación de ferrocarril de Amara por miembros de ETA.

24 de mayo: don Rolando Fernández Alonso y don Santos García Fernández, muertos por un centinela de la Caja de Reclutas de Rubin (Oviedo) al intentar entrar en el edificio, desobedeciendo la orden de alto.

4 de junio: don Rafael Carrasco Lamas y don Antonio López Cazorla, Guardias Civiles, muertos por disparos cuando se encontraban en el cuartel existente en la carretera de Sans (Barcelona).

12 de junio: Jesús María Basanez Jaúregui, muerto en la calle de Juan de Garay, de Baracaldo, cuando hizo explosión un artefacto en un vehículo propiedad de la Policía Armada; junto a su cuerpo se encontró una granada de piña.

22 de junio: don Javier de Ybarra, industrial, asesinado por ETA después de un largo secuestro, aparecido su cadáver en el puerto de Barazar.

27 de junio: don Valentín Godoy Cerezo, Policía Armado, muerto por tres disparos en la nuca que le fueron hechos en el interior del vehículo de su propiedad, reinvindicado por el grupo "Doble G".

20 de septiembre: don Juan Peñalver Sandoval, Conserje de la revista "El Papus", por explosión de una

bomba enviada por paquete postal, reivindicado por la "Triple A".

27 de septiembre: don Florentino Helgueras Carretero, Capitán de la Policía Armada, muerto en Madrid por atentado del GRAPO.

8 de octubre: don David Salvador Bernardo, taxista, muerto en Hernanio por la organización "Triple A".

9 de octubre: don Augusto Unceta Barrenechea, Presidente de la Diputación de Vizcaya; don Angel Rivera Navarrón y don Angel Fernández Hernández Segura, Guardias Civiles, ametrallados en Guernica por miembros de ETA.

2 de noviembre: don José María Díaz Fernández, Sargento de la Policía Municipal, muerto por la organización ETA en el portal de su domicilio de Irún; don Fermín Manuel Gómez Mata, al repeler un Policía Armado, cuando estaba de servicio, la intimidación que le hacía con un revólver.

26 de noviembre: don Joaquín Imaz Martínez, Comandante de la Policía Armada, muerto por miembros de ETA.

27 de noviembre: don Antonio Verdugo Tejero, Guardia Civil, como consecuencia de las heridas producidas en atentado el día 12 del mismo mes en San Rafael (Segovia).

16 de diciembre: don Julio Martínez Ezquerdo, Concejal del Ayuntamiento de Irún, por disparos efectuados por ETA cuando procedía a abrir el garaje donde guardaba su vehículo particular.

### Personas muertas por enfrentamientos con las Fuerzas de Orden Público y otras circunstancias políticas

24 de enero: doña María Luz Nájera Julián, estudiante, fallecida como consecuencia de las heridas que le

produjo una bomba de humo lanzada por las Fuerzas de Orden Público para disolver una manifestación en la Gran Vía, de Madrid.

18 de febrero: Jesús Lista Neira, electrocutado cuando colocaba una pancarta en la Universidad Laboral de La Coruña.

8 de marzo: Nicolás Mendizábal Barandiarán y Sebastián Goicoechea Mariezcurrena, miembros de ETA, muertos por los disparos efectuados en un control de la Guardia Civil al repeler la agresión con armas de fuego que éstos hicieron.

13 de marzo: José Luis Aristizabal Lasa, muerto en San Sebastián con motivo de un enfrentamiento con las Fuerzas de Orden Público al recibir un disparo de pelota de goma; Isidro Susperregui Altaco, muerto como consecuencia de impacto de bala de goma con motivo de una manifestación en San Sebastián.

9 de mayo: Ramiro Figueroa Ruiz, falangista, asesinado de una puñalada por un miembro del PCE (Vidal Justo Bello) en la localidad de Valdemoro (Madrid).

12 de mayo: Rafael Gómez Jaúregui, como consecuencia de herida de bala en enfrentamiento con la Guardia Civil en Rentería.

13 de mayo: José Luis Cano Pérez, muerto en enfrentamiento con las Fuerzas de Orden Público al disolver éstas una manifestación en Pamplona; Manuel Fuentes Mesa, muerto en enfrentamiento con las Fuerzas de Orden Público en la localidad de Ortuella (Vizcaya).

24 de mayo: Gregorio Marichalar Ayestaran, muerto en Rentería como consecuencia de impacto de bala cuando se encontraba en el balcón de su domicilio presenciando una manifestación pro-amnistía.

11 de septiembre: Carlos Gustavo Frecher, por impacto de bala de goma cuando se encontraba en la calle de Pelayo, de Barcelona, durante la celebración de la "Diada".

16 de octubre: Miguel Grau Gómez, como consecuencia de heridas inferidas por Angel Panadero Sandoval cuando colocaba propaganda de la "Diada" en Alicante.

4 de diciembre: Manuel José García Caparrós, por herida de bala en manifestación violenta durante la celebración del "Día de Andalucía".

12 de diciembre: Javier Ricardo Fernández Quesada, por disparos de la Guardia Civil en manifestación violenta en Tenerife al ser acorralada la Fuerza Pública por varios grupos.

B) *Asuntos más destacados.*

Hemos de resaltar de las Memorias redactadas por las Fiscalías los asuntos que se señalan como más importantes por sus autores y que se estiman deben de figurar en la Memoria.

PAMPLONA.—Sumario 16/1973, instruido por el Juzgado núm. 3 de dicha capital y conocido por el llamado "crimen del puerto de Velate". Es cierto que el sumario se inició en 30 de abril de 1973, pero también lo es que en el año a que se contrae la Memoria, concretamente el 19 de septiembre, dieron comienzo las sesiones del Juicio oral, dictando la Audiencia sentencia acogiendo totalmente la tesis del Ministerio Fiscal: parricidio y asesinato, con las circunstancias agravantes que se dirán y condenando a pena de muerte.

El Fiscal de la Audiencia de Pamplona dedica en su Memoria quince páginas para informar de la "extraordinaria gravedad de los hechos, su carácter espectacular, la trascendencia que tuvieron en todo el ámbito nacional, la personalidad de algunos de los protagonistas y la complejidad en la investigación". Resumiendo, en lo posible, los hechos acreditados en la investigación sumarial resulta lo siguiente: Jaime Balet Herrero, persona de elevada posición económica de Zaragoza, casado

desde 1959 con doña Pilar Cano Peralta, entabló a últimos de 1970 relaciones con su secretaria en la dirección de una de las empresas familiares, relaciones que pronto se convirtieron en íntimas, haciendo surgir en él una fuerte pasión que, hábilmente espoleada por ésta, Ana A. C., se corvirtió en un deseo obsesivo de hacerla su esposa. Como la nulidad de su matrimonio con Pilar no ofreciera perspectivas favorables decidió llevar adelante sus designios por otros medios, que, en definitiva, no eran más que eliminar a su esposa, para lo cual entró en contacto con un antiguo compañero de estudios de Zaragoza, Juan Midón Leyva, reuniéndose en Madrid con éste en una cafetería a la que acudió Midón acompañado del súbdito alemán Hans Hellmuth Pacht, encargando Balet a Midón buscara el modo y los medios necesarios para dar muerte a Pilar y para ello, sin perjuicio de ulteriores entregas, le hizo una provisión de moneda extranjera con una cuantía de 7.000 dólares inicialmente; posteriormente recibirían 10.000 dólares más. En el mes de marzo, Pacht y Midón se trasladaron a Barcelona, donde tomaron contacto con el súbdito alemán Johan Simeth, al que le propusieron, una vez puesto en antecedentes por su compatriota, los proyectos tendentes a la muerte de Pilar; así las cosas, a finales de marzo Midón y Pacht se trasladaron a Biarritz para que este último conociera a la esposa de Balet y, al no lograrlo, Balet indicó a Midón que se encontrarían un día determinado en un restaurante de Zaragoza al objeto de que acudieran al lugar y así identificar a la que más tarde sería la víctima. Proyectaron, madurando perfectamente el plan a seguir en la eliminación de Pilar, que al regresar el matrimonio Balet-Cano en un viaje en automóvil de Biarritz el marido, pretestando un acceso de sueño o la "necesidad de estirar las piernas", aparcarían el automóvil en un lugar determinado y una vez en él serían asaltados, de modo que pareciese obra de una organización terrorista, por Simeth, quien daría

muerte a Pilar golpeándola con una barra de hierro y causaría heridas, sin que alcanzaran gravedad, en la cara y el cuello de Jaime Balet. Para la ejecución de sus designios disponían de dos tubos de hierro, de 35 cm. de largo por 35 mm. de diámetro, y de otro de plomo.

No obstante lo cual, Jaime hizo varios viajes a Biarritz con su mujer, esperando que al regreso de alguno de ellos se produjese el atentado referido, sin que éste se efectuara, teniendo Balet que seguir entregando dinero a los otros tres para que al fin se consumaran los hechos. Lo cierto es que el día 29 de abril, a las 11 de la mañana, salieron de Zaragoza, Balet y su esposa, llegando sobre las cinco de la tarde a Biarritz, jugar y volverse, como hicieron a las 9 de la noche. De vuelta, y a penas rebasada la cumbre de Velate, Jaime, con uno de los aludidos pretextos, en vez de detenerse en uno de los paradores existentes o en alguno de los puntos destinados a estacionamiento, esperó a introducirse en una carretera prácticamente imposible de detectar por quien no la conozca por hallarse a la izquierda y a mitad del camino de una recta de 150 metros, tras una curva de corto radio, sin señalización alguna de entrada; dio la vuelta en un ensanchamiento y detuvo el coche de cara a la salida, a unos veinte metros de la carretera. Por su parte, Simeth había partido de Zaragoza en el automóvil de Midón, un "Morris 1.100", matrícula de Zaragoza, 70.664, que su dueño le dejó a los fines indicados, llevando los tubos de hierro y plomo, hacia el sitio de autos; llegó sobre las 8 de la noche a la Venta Uzama, sita en lo alto del puerto de Velate. Al cabo de un rato se fue en el "Morris" por la vertiente que conduce a Pamplona, deteniendo el coche en el arcén derecho, unos 500 metros más abajo de la entrada al lugar de autos, yéndose a pie hacia la carretera abandonada y, serían pocos minutos antes de las 10,30, encontró parado un automóvil con una pareja en su interior y, dispuesto a perpetrar la acción, enfocó el cristal delantero derecho

y luego el posterior para identificar a su víctima y al ver que no se trataba de Pilar abandonó ese lugar, dirigiéndose al automóvil. Lógicamente asustados, los ocupantes del coche estacionado —F. A. E. y R. V. U.—, apenas se fue el para ellos desconocido pusieron en marcha el vehículo y huyeron. Se dio cuenta Simeth del error sufrido y pasados unos minutos volvió a acercarse al lugar de referencia, donde habiendo encontrado ya a Balet y a Pilar, que estaban fuera del coche paseando, según lo previsto, se dirigió a ellos y, ante la pasividad de Jaime, acometió de frente de manera brutal a Pilar, descargando con el tubo de hierro un golpe violentísimo que instintivamente buscó de evitar la agredida levantando el brazo izquierdo, en cuya cara externa lo recibió, y seguidamente otro golpe que la alcanzó en la parte posterior del frontal, haciéndola caer al suelo y ya en él le asestó otros dos, todos de intensidad inusitada, que le causaron la muerte por fractura de la bóveda craneal y repercusión en centros nerviosos vitales.

Seguros de que la muerte de Pilar se había producido la colocaron en el suelo de la parte delantera del coche de Balet, un "Seat 1.500", desecendiendo conducido por éste hasta el kilómetro 27,500, al que llegó en el "Morris" Simeth, se internaron unos metros en la espesura del bosque y el alemán procedió a propinar a Balet unos leves golpes para dar la impresión de un atraco en el que su mujer había sido asesinada y él herido, tras lo cual Simeth huyó a Zaragoza, llevándose el bolso de Pilar, pero dejando en el cadáver joyas de gran valor. Al cabo de un rato, sobre la una del día 30, Balet salió a la carretera, haciendo señales a los vehículos que pasaban, deteniendo a uno de ellos y manifestando a sus ocupantes que le habían atracado y que su esposa estaba en el coche, al parecer, cadáver.

La muerte de Pilar Cano estaba tan perfectamente preparada, la trama tan bien urdida, que nunca hubieran sido descubiertos los ejecutores y programadores y

el crimen hubiera quedado impune. Mas, pese a la cuidadosa preparación, siempre hay un detalle que se escapa a quienes lo han preparado o perpetrado o, como en este caso, un evento ajeno a la preparación. No fue otro que la presencia en la carretera abandonada de un "Seat 600" con una pareja, los antes citados F. A. y R. V., cuando Simeth llegaba para perpetrar el crimen, el enfoque de la linterna en la forma que se ha dicho y la huída de los novios hacia su lugar de residencia. Pero es que al bajar hacia Larainza vieron estacionado a la derecha, en dirección a Pamplona, 150 metros más abajo de la salida de la carretera, un "Morris" rojo, matrícula Z, sin que pudieran quedarse con la numeración; lo acontecido lo comentaron, tal vez sin darle importancia, entre sus amistades y estos comentarios llegaron a oídos de la Guardia Civil, que procedió a recibirles declaración; luego, con una paciente, pero a la vez rápida labor, fueron precisando uno a uno el color y la propiedad de los "Morris 1.100" y "1.300" matrícula de Zaragoza hasta que dieron con uno rojo a nombre de F. E. F., que dijo no tenerlo en su poder por haberlo transmitido el 9 de abril a Juan Midón Leyva. Se cayó entonces en la cuenta de que Juan Midón era íntimo amigo del marido de la asesinada y el repetido Midón se había alojado con unos alemanes de mal aspecto que habían huido, descubriéndose que Balet tenía desavenencias con su esposa y las relaciones de éste con Ana, su amante. Por ello la investigación, que debía resultar dificilísima, se hizo más por el tiempo tardado en ingresar en prisión Balet y Midón, el 13 y el 9 de mayo, respectivamente; las pruebas se fueron acumulando, a pesar de las negativas de Balet y de Midón, por el hallazgo del tubo con el que se dio muerte a Pilar en el coche de Midón, la declaración de Pacht en Alemania y el personal del servicio doméstico de Balet.

Como se indicó al principio, la calificación de los hechos por el Fiscal, en las Conclusiones que se eleva-

ron a definitivas, fue parricidio del artículo 405, en cuanto a Balet, y asesinato del 406, núm. 1, del Código Penal, para Midón, concurriendo en el primero las agravantes 1.ª, 2.ª, 6.ª y 13.ª y en el segundo la 2.ª, 6.ª, 13.ª, 14.ª y 16.ª del artículo 10, solicitándose para ambos la pena de muerte. El Juicio oral se celebró desde el 19 de septiembre de 1977 hasta el día 26 del mismo mes y año, el sumario se componía de más de 2.600 folios y la Sala dictó Sentencia, aceptando íntegramente la tesis del Fiscal, sn separarse para nada, incluso en la responsabildad civil; la pena fue la capital.

VALENCIA.—Sumario 77/77, del Juzgado núm. 6 de Valencia; la investigación llevada a cabo por la Autoridad Judicial pone de manifiesto que sobre las 24 horas del 12 de marzo de 1977, en plenas fiestas falleras, en la plaza del Caudillo, de Valencia, por la que discurría una caravana de carrozas surgió una discusión entre dos grupos de jóvenes que ni siquiera se conocían, agrediéndose entre sí a golpes, porras y cadenas y en el transcurso de la pelea uno de los jóvenes, de diecisiete años, con una navaja atacó a dos muchachos del grupo rival, matando a uno de ellos y causando al otro heridas muy graves; la investigación ha sido difícil por la resistencia a manifestar los componentes de las bandas que pudieran ser identificados. La causa se halla pendiente de celebración de Juicio oral.

Sumario 147/77 del Juzgado núm. 4 de Valencia. Según las manifestaciones de dos jóvenes mujeres, de veintiuno y veintinueve años de edad, el procesado, de pésima conducta y numerosos antecedentes penales, consiguió con diversos ardides llevarlas separadamente al domicilio en que vivía en Valencia y, con la intimidación de armas blancas y quitándoles las ropas para que no escaparan, consiguió retenerlas en el piso, a una en el mes de mayo y a otra en junio, durante varios días, en los que tuvo acceso carnal con cada una de ellas,

siendo auxiliado en su execrable conducta por otro individuo con el que convivía. La causa se halla calificada y pendiente de la celebración de Juicio oral.

Sumario 114/77 del Juzgado núm. 3 de Valencia. Se sigue por presunto delito de estafa y falsedad. Se inició en el mes de junio y el recelo que motivaron los hechos en la prensa local y nacional aconsejó la intervención de la Fiscalía desde los primeros momentos. Los hechos que se depuran se refieren a defraudaciones al I. N. P. llevadas a cabo por el representante de unos laboratorios farmacéuticos que, puesto de acuerdo con un estudiante de la Facultad de Medicina y con un médico colegiado, éstos entregaban a aquél recetas de la Seguridad Social referentes a un determinado específico a cambio de dinero. Una vez el representante del laboratorio tenía en su poder las recetas las rellenaba con datos de beneficiarios del Seguro de Enfermedad y a continuación otros individuos, también procesados, retiraban los fármacos de diversas farmacias, procediendo posteriormente a quitar al específico el envase correspondiente, que estaba inutilizado, y a enviarlo de nuevo al laboratorio, que pagaba determinada cantidad por unidad, volvía a envasarlo y lo devolvía al mercado, estimándose la cantidad defraudada al I. N. P. en más de 3.000.000 de pesetas.

Sumario 221/77 del Juzgado núm. 5 de Valencia. La tarde del 5 de septiembre de 1977 el Cónsul de Bélgica en Valencia, domiciliado en un chalet de la zona veraniega del término de Godella, denunció ante la Guardia Civil que minutos antes había notado la ausencia de una hija suya, de cuatro años de edad, que hasta entonces jugaba en los jardines de la residencia, organizándose inmediatamente las oportunas pesquisas para averiguar el paradero de la niña desaparecida, hasta que tres días después fue hallado su cuerpo sin vida, cubierto con piedras, a unos 80 metros de la parte posterior de la casa. La autopsia reveló que la muerte se debía a

hemorragia cerebral traumática producida por un intenso golpe sufrido por la víctima a nivel de la región parietal derecha, apreciándose también una intensa dilatación anal, lo que permitía sospechar, con bastante certeza, que la niña había sufrido una acción pederástica. Las investigaciones se centraron alrededor de dos individuos sospechosos, uno de ellos con domicilio a unos 300 metros del lugar de los hechos, tiene antecedentes por delitos de abusos deshonestos en muchachos jóvenes. El otro, jardinero de profesión, era el encargado de cuidar el jardín de la casa del Cónsul, quien también había sido condenado por delitos de violación. No obstante, hasta el momento no ha podido establecerse ninguna evidencia respecto de dichos individuos para poder acusarlos como autores del execrable crimen.

MALAGA.—Sumario 161/77 instruido por el Juzgado núm. 3 de aquella capital por motivo de la muerte del joven José García Caparrós, ocurrida el día 4 de diciembre de 1977 durante la manifestación pro-autonomía andaluza. En la actualidad las actuaciones se encuentran pendientes de la resolución de competencia negativa con la Jurisdicción Castrense, pues al ser rechazada por ésta el conocimiento de las actuaciones por entender que no aparecía claramente responsabilidad concreta en persona aforada, por el Juzgado se entiende, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que una vez instruidas las primeras diligencias debe ser la Jurisdicción Militar la que continúe con la investigación sumarial, ya que, por los datos aportados, los presuntos autores pueden ser personas aforadas. Sigue diciendo el Fiscal que con motivo de estos desgraciados incidentes posteriormente en Málaga se vivieron unas jornadas de intenso dramatismo, durante las cuales bandas incontroladas, en las que llegaron a detectarse la presencia de un gran número de extranjeros, con el pretexto de supuestas reivindica-

ciones y con ocasión del entierro de la víctima de los hechos se cometieron toda clase de desmanes, con asaltos a comercios, en los que se causaron numerosos daños, así como robos, siendo varios los sumarios incoados por estos hechos, en los que difícilmente pueden ser habidos los autores.

ALBACETE.—El sumario 38/77 instruido por el Juzgado núm. 1 por delito de robo con homicidio y el 43/77, que instruyó el mismo Juzgado por asesinato, que pudo ser doble y que presentaba un curioso e infrecuente supuesto de "error in personam". Dice el Fiscal que este hecho, que originó el sumario 43/77, casi pasó desapercibido en sus comienzos. Era el fin del verano, época de feria y fiestas, cuando el 3 de septiembre, entre las cinco y las seis de la mañana, se produjo un incendio en una miserable habitación de una casa de múltiples y modestísimos vecinos, casa número 11 de la calle que tradicionalmente se llama Iris. A consecuencia del incendio murió un joven Sandalio Gil Avellan, que dormía en la habitación, y resultó con graves quemaduras otro, Antonio Fernández Moreno, que también se hallaba allí. Pudo descubrirse, y a fijar los hechos contribuyó la confesión del propio culpable, L. R. V., que el incendio fue intencionado, con la intención de matar no a los dos accidentales ocupantes de la habitación, sino a otras dos personas, la inquilina F. C. y su amante, contra los cuales actuaba el procesado despechado por que había sido amante de F., ésta había roto sus relaciones con él y se negaba a reanudarlas. Ya entrado el año 1978 el Fiscal ha formulado calificación por solicitud de una pena de muerte, alternativa con la reclusión mayor si se usare el arbitrio de la regla 2.ª del artículo 61 del Código Penal.

CORDOBA.—El Fiscal, al dar cuenta del sumario 60/77 del Juzgado núm. 1 de Córdoba, dice que "se trata

de uno de los crímenes más impresionantes que hemos conocido en nuestra larga vida profesional, que pudiera figurar en cualquier antología de crímenes famosos". S. Y. C., mujer joven y muy agraciada, se hallaba casada con A. O. T. Fruto del matrimonio eran tres hijos: Aránzazu, de once años; Antonio, de ocho, y María Begoña, de un año escaso. Hay que significar que la hija Aránzazu, protagonista de estos hechos, tiene un coeficiente de inteligencia nada común y una particularidad curiosa: años antes había intentado suicidarse ingiriendo unas pastillas. El matrimonio vivía en el pueblo de Espejo en buena situación económica, pues, unido a que el marido tenía un floreciente taller de reparación de automóviles, una tía de S. ayudaba al matrimonio. Las relaciones matrimoniales se comenzaron a deteriorar por la afición extremada a la bebida de A., que provocaba frecuentes altercados con la esposa, los que determinaron el intento de suicidio de su hija y otra causa, no probada, pero muy probable: las relaciones de lesbianismo que casi con certeza sostenían tía y sobrina, aunque ésta también en sus frecuentes viajes a Córdoba sostuviera posibles relaciones con otros hombres. Así las cosas, entre la mujer S. y la tía M. concibieron matar a Antonio. Eligieron el momento propicio, sería una de las noches en que Antonio llegase borracho, con una contraseña telefónica convenida, S. llamaría a M. La ocasión se presentó la noche del 6 de junio de 1977, en que sobre las 12 llegó embriagado, acostándose en la cama matrimonial, momento que aprovechó S. para llamar a M. Esta se presentó en el domicilio de A. acompañada de su hijo G. F. Y., de dieciocho años, que, al parecer, ignoraba los propósitos de su madre. Ya en la casa, G. se quedó fuera, en un cobertizo; Aránzazu, que estaba levantada, recibe de su madre S. el terrible anuncio de "vamos a matar a tu padre", cual si se tratare de una tragedia griega. En esa situación coge M. una botella grande de Coca-Cola y con la ayuda de S.,

estando boca arriba A., le dan la vuelta, propinándole un fuerte botellazo en la cabeza por la parte de la nuca. Atontado se despierta y dice: "¿qué hacéis?". Como sangra y está semiinconsciente lo llevan al cuarto de baño, llenan la bañera y con el pretexto de que le van a lavar la sangre le introducen la cabeza en el agua, forcejea la víctima y entonces con un leño, primero, le da M. golpes en la cabeza y como tampoco muere de los golpes se dirige a la cocina y con un cuchillo de los llamados matanceros, grande y afilado y utilizando sus conocimientos anatómicos por ser de profesión carnicera, le da dos cuchilladas en el cuello por la parte posterior que casi le seccionó la cabeza. Ya muerto lo envuelven en una sábana, todo en presencia de la hija, y con ayuda de G. lo trasladan y lo precipitan al pozo existente en la casa. A los pocos días se descubrió el hecho. Como puede deducirse, se trata de un asunto de negra crónica del crimen. El sumario se encuentra aún en trámite, habiendo recaído auto de procesamiento contra S., M. y G.

OVIEDO.—Sumario 76/77 instruido por el Juzgado número 2. Se inicia este sumario como consecuencia del robo y destrucción de parte de las joyas de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, entre las que se encontraban algunas de un gran valor material e histórico, sobre todo como son la Cruz de los Angeles y la Cruz de la Victoria, hecho que fue objeto de amplia trascendencia a través de toda clase de medios de comunicación tanto españoles como extranjeros. Ocurren los hechos en la noche del 10 de agosto de 1977, dándose a la fuga el autor del robo y pasando clandestinamente días más tarde a Portugal. El sumario, en orden a la instrucción, no planteó problemas de ninguna clase, ya que se recuperaron en gran parte los trozos de las joyas sustraídas y fue concluido, después de haber sido entregado el procesado a las Autoridades españolas y de confesar con

minuciosidad los hechos, el 14 de diciembre de 1977. Los problemas surgen en el momento de la calificación y son planteados por la defensa del procesado al alegar en este trámite la declinatoria de competencia de jurisdicción y señalar a su vez la necesidad de que conste en autos el expediente de extradición, ya que, en caso contrario, estima que se encuentra en situación de indefensión. El Fiscal a continuación narra una serie de trámites procesales, en los que con gran acierto intervino, hasta que, por último, la Sala dicta auto y se resuelve tener por hecha la califiación de la causa en aquella parte de los escritos presentados cuyo contenido se atempere a lo dispuesto en los artículos 650 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Posteriormente se dicta un nuevo auto por la Sala, en el que, aceptando la prueba propuesta, se manifiesta que se solicite antes del señalamiento del Juicio oral para completar la investigación, la traducción de los documentos que obran en el sumario en idioma portugués, por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, reitera la petición de remisión del expediente de extradicción del procesado, que ha solicitado anteriormente, y señala definitivamente el día para dar comienzo a las sesiones del Juicio oral.

## Capítulo V

# EL MINISTERIO FISCAL

Al reflejar en este capítulo la labor desarrollada por las distintas Fiscalías, que se afanan en primera línea por la defensa del orden jurídico y la prevención y castigo de la delincuecia, hemos también de hacer la autocrítica del ejercicio de nuestra función, con toda la objetividad que en nosotros ha desarrollado la obligada actuación imparcial ante los Tribunales de Justicia. Debemos dejar constancia, sin embargo y con satisfacción, de la gran colaboración que para esa finalidad representan las opiniones expuestas en las Memorias de los Fiscales, cuyo acento cae siempre más sobre la preocupación por el recto funcionamiento y el nivel técnico de su actuación, que sobre los intereses particulares de la Institución. Este año los temas que más preocupan a los Fiscales son aquellos que plantea la etapa de transición política con que el país se encara, en cuanto, necesariamente, repercute en la propia concepción del Ministerio Fiscal y la configuración de la esencia del Instituto, de su filosofía de base y sus elementos estructurales, preocupación lógicamente compartida por esta Fiscalía del Reino, como ha quedado expuesto en otro lugar de esta Memoria.

Esa misma etapa de transición ha extendido la intervención del Ministerio Fiscal a una serie de cuestiones afectadas por el interés social cuya representación le compete y que, como nuevas y no exentas de conflicto, son tratadas por los Fiscales, que nos hacen llegar sus

muy fundadas meditaciones. La intervención del Ministerio Fiscal en el visado de las Asociaciones Sindicales ha sido abordada por las distintas Fiscalías españolas con gran sentido de responsabilidad en orden a la garantía no sólo del interés social, sino de los propios derechos de los asociados, procurando que quedaran suficientemente garantizados en las fórmulas que se utilizan en los Estatutos para consagrar y asegurar esos derechos. En general, ponen de relieve los Fiscales las dificultades que encierra este su dictaminar en materia que, inevitablemente, está teñida con un matiz político. Por ello, sugieren la necesidad de una reconsideración del tema, con un tratamiento más detallado y profundo de su regulación, que objetivice, anudándolos a la Ley, los criterios que han de presidir la constitución de las Asociaciones y el contenido de sus Estatutos. Y es que no desean, ni aún por sombra, que ningún error humano, inevitable en todos, pudiera ser torcidamente interpretado.

En otro terreno menos trascendental desde el punto de vista de los principios, pero no menos importante desde el vivir cotidiano, son también preocupación de los Fiscales las deficiencias materiales y de instalación de que adolecen las Fiscalías —algunas de características sonrojantes—, aunque con espíritu altruísta insistan especialmente en las graves carencias de las Fiscalías de Distrito que hasta el momento, en cuanto a sus necesidades de ubicación y servicio auxiliar, están a merced de lo previsto en el Reglamento Orgánico del Cuerpo, que condiciona las habilitaciones de local a aquella «en que fuera posible» y subordina la labor auxiliar al personal del Juzgado de que se trate, haciendo así ilusorias en los más de los casos aquellas habilitaciones y estos servicios de auxilio. Preocupación es ésta que comparte también el Fiscal del Reino, quien se hizo eco —que aquí reproduce y recalca— de la penuria en que se desen-

vuelve el Servicio de los Fiscales de Distrito, a los que debe alcanzar cuanto en el Estatuto del Ministerio Fiscal y e su Reglamento Orgánico se dice sobre instalaciones, personal auxiliar y medios materiales de las Fiscalías, toda vez que constituyen formalmente la quinta categoría del Ministerio Fiscal. Por ello, en lo dispuesto por la Fiscalía del Reino y Normas ejecutivas subsiguientes, dictadas para dignificar en todo lo preciso la instalación y medios de las Fiscalías en fecha coincidente con la redacción de esta Memoria, se dice expresamente que las necesidades que han de recopilarse para apoyar su ulterior satisfacción han de ser no sólo las de las Fiscalías de las Audiencias, sino también las de Distrito y sus Agrupaciones, confiando que con ello se inicie el camino para la consecución de unas dotaciones suficientes, modernas y acordes con la dignidad y exigencias funcionales de la importante labor que desarrollan en la máxima proximidad a nuestro pueblo.

1. *Intervención del Ministerio Fiscal en materia penal.*

De la actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal, la más trascendental y la que ocupa la mayor parte de sus actuaciones y, lógicamente, de sus preocupaciones, es la que se refiere al mantenimiento de la paz pública perturbada por el delito.

En este terreno los Fiscales no se han limitado al formal ejercicio de la acción penal, sino que, como siempre, haciendo de su tarea un objetivo global que abarque desde la investigación hasta la ejecución de la sentencia, han procurado dar a aquélla una directriz efectiva, planteándose lo que constituye una verdadera política criminal. Para ello, los Fiscales han mantenido con los Juzgados ese contacto que trasciende más allá de la inspección de los sumarios y que busca el conseguir, a través de un trato directo y siempre cordial con los Jue-

ces, que la actuación de unos y otros sea presidida por un principio de coordinación que permita, en lo que la independencia del Poder Judicial lo haga posible, una unificación de criterios y una actuación coordinada en la represión de los delitos: es decir, en la búsqueda conjunta de la verdad y la aplicación del derecho que duerme en el seno de la Ley.

En lo estrictamente procesal, los Fiscales mantienen un espíritu crítico frente al funcionamiento del que se ha dado en llamar «proceso por delitos menores». Es común en sus Memorias el señalar un cierto abuso de las Diligencias Previas, no sólo tramitando por este procedimiento, con menores garantías procesales, la investigación de hechos, que por su indudable gravedad, debieran desde un principio elevarse a sumario, sino también, ya en sentido contrario y por simple prurito estadístico, incoando Diligencias Previas por hechos que, desde un principio, se presentan con clara apariencia de fortuitos o intrascendentes desde el punto de vista penal, sin hacer el adecuado uso de la facultad de archivo prevenida en el art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este último aspecto cabe señalar también que la estadística de los Juzgados de Capital en materia de Diligencias Previas aparece claramente distorsionada por el hecho, muy frecuente, de que los accidentados en materia de tráfico son, generalmente, conducidos para su asistencia a Centros Médicos de la capital de la provincia, cuyos facultativos dan el oportuno parte al Juzgado, el cual incoa una Diligencia, de la que automáticamente se inhibe a favor del Juez del lugar donde ocurrió el accidente. En principio, y según la Circular de la Inspección Central de Tribunales de 24 de octubre de 1977, esos hechos debieran ser considerados como «asuntos indeterminados», ya que la investigación sustancial del hecho va a ser realizada por otro Juez. La muy común ausencia del lugar del accidente, justifica el que se instruyan

como previas las diligencias precisas para acreditar tal elemental extremo.

No son ajenos los Fiscales a la crisis que está sufriendo la situación penitenciaria, de la que también se hace un más detenido análisis en otro lugar de esta Memoria. Pero aquí haremos resaltar que, entre la exposición de sus observaciones y comentarios, fruto de sus preceptivas visitas a las Prisiones, y prescindiendo incluso de estudios más profundos sobre el moderno Derecho penitenciario, se observa una extendida corriente a favor de una mayor intervención judicial, y congruentemente, del Fiscal, en la ejecución y vigilancia de las penas y forma de cumplimiento de la pena impuesta y a la aplicación que de ella se haga en los Institutos penitenciarios, que debe quedar bajo el control jurisdiccional y no bajo el del Patronato con claro matix extra-judicial. Al fin y al cabo el problema central de la pena es el de individualización, y por individualización ha de entenderse no sólo la fijación de su «quantum» en la sentencia,, sino también el de la adaptación de las distintas fases de su cumplimiento a la evolución de la personalidad y readaptación social del penado

El tema de la ejecución de las penas de privación de libertad viene siendo, desde hace unos años, objeto de discusión entre penalistas y penitenciaristas. Y ello no sólo porque toda Institución viene obligada a adaptarse a los sentimientos y principios que rigen el momento histórico, sino porque ha de sufrir el impacto de los nuevos adelantos científicos en el orden de la psicología carcelaria y de la sociología, que han venido a plantear la crisis de los sistemas penitenciarios tradicionales. Conviene no perder de vista el hecho de que lo que se cuestiona no es la necesidad y existencia de las penas privativas de libertad, sino el método para su aplicación, el sistema de su cumplimiento e incluso los criterios rígidos sobre su fijación.

En definitiva se culmina una transformación del concepto de la pena de prisión, que viene ya arrastrándose desde el siglo pasado: El inicial y prevalente criterio retributivo, arraigado en el instinto primario del pueblo, considera a la pena como medida de la gravedad del delito y la priva de toda individualización y adaptación personal. El tiempo de privación de libertad es un tiempo fijado en proporción al hecho cometido, con lo que la actividad judicial se agota en la sentencia y el cometido de la Administración penitenciaria se reduce a lograr que aquel tiempo de privación de libertad sea efectivo.

Frente a esa concepción se alza el concepto de la pena como regeneración del delincuente. Concepto que tiene entre nosotros honda raigambre y que ha sido defendido por los más de nuestros penitenciaristas. Más que al pasado prefiérese mirar al futuro, atendiendo al hombre que ha cometido el delito, más que a su hecho, y utilizando la pena de libertad como medio para su rehabilitación y reinserción en el concierto social.

Como se ve, el problema no es exclusivo de las penas privativas de libertad, aunque es en éstas en las que se plantea con mayor fuerza por que sus pecuiaridades permiten, mejor que otras, el aprovechar el cumplimiento de la pena para la reeducación del penado.

Ahora bien, uno de los defectos del actual sistema en este terreno radica en la separación tradicional entre la decisión (el enjuiciamiento) y la ejecución (el cumplimiento de lo juzgado), que rompe la unidad de criterios individualizadores al introducir, tras el que el Tribunal utilizó para fijar la pena en la sentencia, el de la Administración penitenciaria, que va a controlar y fijar los términos de su cumplimiento. Hay una ruptura entre la individualización penal y la administrativa, que perturba la eficacia del sistema.

El Ministerio Fiscal considera como perentoria la creación del Juez y, congruentemente del Fiscal, de eje-

cución o vigilancia de penas, institución ya consagrada en otros países (el «juge de l'aplication des peines», francés, o «le giudice de surviglianza», italiano), que tiene que estar dotada de un auténtico contenido, tiene que centrarse en la aplicación de la pena de privación de libertad y debe hacerlo, no de una manera superficial, a través del trámite formal de una ejecutoria, sino de una manera auténtica y en contacto con la persona que cumple la condena.

El Juez y el Fiscal de ejecución de penas deben de estar asistidos de los asesoramientos de expertos de Criminología, Psiquiatría, Sociología o Asistencia social, que formen parte de la organización y personal del Juzgado. Estos expertos existen ya en las plantillas de la Dirección General de Instituciones penitenciarias, pero actúan cuando lo hacen, en total desconexión con los Tribunales, mientras que en el futuro deberán hacerlo en colaboración con el propio personal de los Juzgados de ejecución, cuya creación proponen la mayor parte de los Fiscales.

La existencia y funcionamiento de esos Juzgados lograrían los siguientes objetivos:

1.° Cumplir el mandato legal de la intervención judicial en la ejecución de las penas.

2.° Aumentar las garantías de los derechos de los penados, que quedan sometidos a decisiones judiciales y no administrativas.

3.° Adecuar en cada momento la sentecia al estado de rehabilitación del penado, según el criterio de quien lo juzgó.

4.° Mantener el principio de legalidad también en la ejecución de las penas, bajo el control judicial.

5.° Intervenir en todos los aspectos derivados de la pena y su desarrollo en los establecimientos penitenciarios, de modo que no sea la Administración, sino la Jurisdicción, quien controle la ejecución de las penas y determine sus modificaciones y vicisitudes.

En definitiva se entiende que, si la responsabilidad de la política criminal recae sobre los Tribunales y el Fiscal, éstos deben conservar todos los resortes para su puesta en práctica, desde la fase de la sanción hasta la de su cumplimiento.

En cuanto al funcionamiento de las Fiscalías de Distrito, son unánimes los Fiscales en la necesidad de una reorganización de las Agrupaciones y una redistribución más racional de su trabajo. Se entiende que en actuaciones de cierta importancia, cada Fiscal no debiera atender más de dos Juzgados, evitando que al obligar a intervenir a estos funcionarios en un número desorbitado de Juicios de Faltas, esa intervención no pueda revestir la eficacia que debiera serle propia. Tampoco cabe ocultar el trastorno que para los Juzgados representa el tener que coordinar los señalamientos con la necesaria presencia física de un Fiscal compartido, lo cual repercute en la acumulación de los señalamientos y el retraso en la celebración de los Juicios, problema que comienza a afectar también a aquellos Juzgados de Instrucción que, por su situación geográfica o las insuficiencias de la plantilla de las Fiscalías de la Audiencia respectiva, no pueden ser atendidos por éstas y ha de delegarse en los Fiscales de Distrito para que representen al Ministerio Fiscal en los juicios de urgencia que en ellos se tramiten.

Para terminar la exposición de la intervención de los Fiscales en materia penal, nada mejor que incluir aquí el resumen numérico de su labor, que expresa, con la evidencia de las cifras, el cómo aquélla ha ido creciendo en forma que rebasa la necesaria proporcionalidad con sus efectivos humanos y materiales. Pese a lo cual los Fiscales han sabido cumplir con su deber, no han consentido que el volumen de trabajo les inhibiera de la efectiva realización de sus funciones y han logrado despachar su labor sin producir acumulaciones ni retrasos.

Como puede verse, este año han rebasado por vez primera los Fiscales la barrera del millón de dictámenes pe-

VOLUMEN DE TRABAJO EN LAS FISCALIAS EN MATERIA PENAL

| | |
|---|---|
| Procedimientos pendientes en 31 de diciembre de 1977 ... | 3.370 |
| Procedimientos ingresados durante el año 1977 ... ... ... | 1.073.388 |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 1.076.758 |
| DICTÁMENES EMITIDOS: | |
| Por el Fiscal, Tenientes Fiscales y Abogados Fiscales de las Audiencias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 946.120 |
| Por los Fiscales de Distrito ... ... ... ... ... ... ... ... | 92.850 |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 1.038.978 |
| JUICIOS ORALES EN AUDIENCIAS Y JUZGADOS: | |
| Fiscal, Teniente Fiscal y Abogados Fiscales ... ... ... ... | 21.733 |
| Fiscales de Distrito ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 7.910 |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 29.643 |
| OTRAS VISTAS CELEBRADAS CON ASISTENCIA DE LOS FISCALES DE AUDIENCIAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 3.331 |
| INSPECCIONES DE SUMARIOS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 276 |
| JUICIOS DE FALTAS CELEBRADOS A LOS QUE ASISTIERON LOS FISCALES DE DISTRITO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 286.307 |
| APELACIONES EN JUICIOS DE FALTAS ... ... ... ... ... ... ... | 12.199 |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 298.506 |

nales. Comparada esa cifra con los 165.835 que emitieron en 1926, primer año en que los componentes del Ministerio Fiscal actuaron como Carrera independiente, bien destaca la tarea creciente que han de encarar los Fiscales españoles. El pasmoso elogio que representan estas cifras se acrecienta más aún si tenemos en cuen que *el crecimiento de esos dictámenes (que representa un índice del 527 por 100)* no ha ido acompañado, ni de lejos, de un concordante aumento de plantillas, ya que la actual, de 294 funcionarios, *sólo constituye frente a la de 1926, que era de 201, un aumento del 46,5 por 100.* Y aunque es cierto que las modernas técnicas de auxilio, en la labor mecánica y reproductora, podrían facilitar el trabajo burocrático y de oficinas, no lo es menos que, de

un lado, el trabajo de estudio y resolución, sigue encerrando las mismas dificultades y preocupaciones humanas e intransferibles que hace cincuenta años, y, del otro, que no es precisamente a las Fiscalías a donde haya llegado todavía el uso generalizado de aquellas técnicas, cuya implantación, sin duda, permitiría un mayor rendimiento de la capacidad y especialización de los Fiscales, que muchas veces han de emplear en labores mecánicas, cuyo anacronismo asombra, un tiempo que sería mucho más útil y rentable si pudieran dedicarlo a lo que debiera ser su estricta tarea jurídica e investigadora. No estima esta Fiscalía del Reino que sea éste el lugar y momento más adecuados para descender a detalles cuyo anecdotario los convertiría en pintorescos, pero no puede menos de rendir tributo a la Institución en la que tan pocos y con tan escasos medios auxiliares están prestando tan gran servicio a la Justicia y al interés social.

2. *Intervención del Ministerio Fiscal en materia civil.*

Se observa en las Memorias fiscales que la temática referente a la intervención del Ministerio Fiscal en el aspecto civil queda reducida a poner de relieve unos datos meramente estadísticos, para fundamentar en los mismos que el trabajo en el ámbito del proceso civil ha aumentado más o menos considerablemente el año 1977, sin que el desarrollo de esta misión estatutaria alcance cotas de superior interés.

Ello es de lamentar, por cuanto la faceta civil o si se prefiere ius-privatista, tiene muy interesantes temas que por afectar a los derechos de la persona, al estado civil y a la legalidad, deben ser tratados y atendidos por el Ministerio público con la misma atención que los estrictamente penales.

Buena prueba de lo que se deja indicado es que el año presente son escasísimos los Fiscales, tanto Territoriales como Provinciales que ofrecen referencias adecua-

das a este aspecto, tanto en lo relativo a reformas legislativas como a exposición de casos de interés en que hayan podido intervenir.

El Fiscal de Badajoz alude a la posibilidad de ampliar la competencia de las Audiencias Provinciales en materia civil, en lo que coincide con el Fiscal de Salamanca. Por su parte el Fiscal de Ciudad Real, propone la creación de un órgano judicial, que si bien dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, estima debería ser especializado, al que se someterían los asuntos familiares, idea que hace ya años podemos ver materializada en diversos países europeos.

El Fiscal de Guadalajara defiende la necesidad de consagrar el principio de nulidad de aquellos actos en que debiendo intervenir el Ministerio Fiscal no se le dé traslado de los autos, con lo que estima que su postura quedaría reforzada en el proceso. También propone —aun cuando ello no sea tema propiamente iusprivatístico— una urgente y definitiva —dice— construcción dogmática a la vez que un tratamiento actualizado del Ministerio público en lo que a su intervención en materia civil se refiere.

El Fiscal de Madrid hace un interesante estudio de la intervención del Ministerio público en las cuestiones civiles, tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal e igualmente referido a la temática de las posibles modificaciones legislativas sugeridas por asuntos interesantes en que se haya por el mismo intervenido.

Entre tales cuestiones cabe denotar la relativa a las separaciones matrimoniales y dentro de ella, al supuesto no regulado de hacer cumplir por vía de ejecución la autoridad judicial ciertos actos de carácter personalísimo, como pueden ser por ejemplo el referente a la no entrega por uno de los cónyuges al otro del hijo —o hijos— no obstante estar ello acordado por el Juez, aspecto que en la actualidad sólo tiene como única posible solución el requerimiento bajo apercibimiento de ser

detenido y en su caso procesado el incumplidor por desobediencia.

También hace referencia a las facultades del Ministerio Fiscal en los expedientes de aprobación de operaciones particionales en que estén interesados menores representados por un defensor judicial, cuestión que en nuestro Derecho no tiene actualmente una clara y directa solución, lo que ha dado lugar a que se dicten resoluciones contradictorias por los Tribunales.

Asimismo propone la modificación del artículo 293 del Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil, al objeto de que puedan efectuarse sin necesidad de expediente gubernativo las inscripciones de reconocimiento de hijos naturales declarado en Sentencia penal cuando el Tribunal haya ordenado en la misma dicha inscripción.

Por su parte, el Fiscal de Pontevedra hace un comentario sobre el Convenio Internacional de 20 de julio de 1956 relativo a la obtención de alimentos, en relación con un asunto que se le envió por esta Fiscalía del Reino, habiéndose presentado demanda que denegada en primera instancia, ha sido objeto de recurso de apelación el cual se encuentra pendiente de resolución.

Entendemos que el mundo de la intervención del Ministerio Fiscal en asuntos civiles, se está abriendo hacia un gran abanico de necesidades; la defensa del interés colectivo, del derecho del más desamparado, de la tutela del ciudadano en sus caminos de acceso a la Justicia, son tareas que ningún Instituto como el Ministerio Público está capacitado para ejercer.

Unánse a ello próximas y sustantivas reformas de instituciones civiles, que socialmente se demandan y que ya se barruntan próximas —tema, por ejemplo, de la separación o divorcio— y descubriremos el amplio panorama que la imperceptible pero progresiva socialización de la vida va a poner en nuestras manos con las —como

siempre— naturales exigencias de la legalidad y la imparcialidad.

3. *Intervención del Ministerio Fiscal en lo social.*

El tema más sugerente y complejo que se presentó al Ministerio Público en el año 1977, dentro del ámbito del Derecho social, deriva de la aplicación de la amnistía laboral.

En efecto, la Ley 46/1977, de 15 de octubre, a la que ya hemos aludido en otro capítulo de esta Memoria, concedió, además de la penal y administrativa, una amplia amnistía laboral, que por su directa incidencia en el complejo campo de las relaciones del trabajo planteó numerosas dudas en su interpretación, justificadas en parte, por la omisión de un preámbulo, que hubiera sido de gran utilidad para conocer a través de su espíritu y de la clara intencionalidad del legislador, la suerte más adecuada para dar certera respuesta jurídica a las situaciones derivadas de su aplicación.

No faltaron graves censuras para esta amnistía, llegando a calificarse por algunos, de inadmisible intromisión en las relaciones de derecho privado que derivan del contrato de trabajo, y de medida que atentaba contra el principio de la seguridad jurídica.

Sin embargo, parece oportuno recordar, que si bien la relación laboral fue considerada tradicionalmente como jurídico-privada, para la doctrina actual resulta cada día más difícil establecer una línea divisoria clara y precisa, entre el derecho público y el derecho privado y en este trance de tránsito doctrinal el derecho de trabajo es, posiblemente, el de más compleja clasificación. Es cierto que el contrato constitutivo de la relación laboral, por su carácter consesual, sinalagmático y oneroso, encaja en el marco de los contratos de derecho privado, pero no es menos cierto, que aquella relación, una vez nacida, queda sometida a la creciente intervención estatal, mani-

festada en el amplísimo abanico de normas de derecho necesario que la configura, sociológicamente tutelares de la parte más débil del contrato, que por otra parte, constituyen fundamentalmente, una salvaguardia para los intereses generales de la comunidad.

Dentro de esta complejidad, la amnistía no puede analizarse desligada del entorno de circunstancias sociales y políticas que impone su concesión. Sin negar su naturaleza de acto de clemencia, y en su consecuencia atributo de la soberanía en lo fundamental se presentó como una medida de equidad y de oportunidad política, de excepcional utilización en cuanto supone la rectificación del derecho vigente y apoyada en circunstancias extraordinarias que así lo aconsejaban. Y difícilmente podrá discutirse la necesidad y oportunidad política de la Ley de amnistía que comentamos y que vino a culminar un proceso de medidas de gracia, encaminadas a promover la pacificación de los espíritus, la reconciliación y la concordia nacional, como ya se recordaba en la Circular de esta Fiscalía de 20 de octubre de 1977.

Se llegó incluso a plantear, por la Magistratura de Trabajo número 11 de Madrid, la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía, por entender, según se decía, que en el aspecto jurídico laboral, atacaba principios de rango fundamental, de obligada observancia tanto para los Tribunales como para el propio Poder Legislativo, si bien tal cuestión quedó resuelta por la Sala Sexta del Tribunal Supremo, en las primeras sentencias que dictó sobre amnistía, declarando no existir contradicción alguna con preceptos de rango superior no derogados de las Leyes Fundamentales del Reino. Los preceptos que podrían invocarse, son, decía el Alto Tribunal, los que proclaman el principio de la seguridad jurídica y el de la irretroactividad de las leyes; el primero, contenido fundamentalmente en el artículo 17 del Fuero de los Españoles, no es una norma concreta de inmediata aplicación, sino un principio o postulado general, que debe ser ponderado

y analizado con otros de análogo carácter, como es el de que la Ley está sujeta a mutación, por cuanto se da para regular las relaciones humanas y ha de contemplar los cambios y modificaciones de estas; y la regla de la irretroactividad de la Ley es una norma del denominado derecho transitorio en el que tratan de armonizarse aquellos dos pricipios, y no es absoluta ni está formulada en leyes constitucionales, sino en el Código Civil, que faculta al legislador para darles carácter retroactivo.

Ha constituido no pequeña dificultad en la determinación de la aturaleza y extensión de la amnistía laboral, la falta casi absoluta de precedentes legislativos, y por supuesto de resoluciones judiciales, ya que ha sido la primera vez que se ha encomendado su aplicación a los Tribunales. Los Decretos de 4 y 21 de julio de 1931, concedieron verdaderas amnistías laborales, sin utilizar este nombre, pero reducidas a los agentes ferroviarios y a los trabajadores de artes gráficas de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, por sus participaciones en huelgas. En ambos casos se disponía la readmisión de los despedidos con reconocimiento de los derechos que pudieran corresponderles, pero sin estar previsto un procedimiento judicial para llevar a efecto la incorporación a los puestos de trabajo. Más amplio fue el Decreto de 29 de febrero de 1936, en el que se impuso a las entidades patronales privadas y a las encargadas de la explotación de servicios públicos, la obligación de readmitir a los obreros, empleados y agentes que hubiesen despedido por sus ideas o con motivo de las huelgas políticas que se produjeron en octubre de 1934, pero tampoco se estableció aquí un procedimiento judicial para la readmisión, aunque sí, uno administrativo, encomendado a comisiones u órganos profesionales, de las que formaba parte un representante del Ministerio de Trabajo, las que al mismo tiempo estaban encargadas de fijar las indemnizaciones que deberían abonarse a los obreros readmitidos. Limitadas en su alcance y en el tiem-

po estas disposiciones no son antecedentes estimables al tratar de analizar la actual amnistía laboral, aunque es interesante poner de relieve que aquellas medidas se impusieron por Decretos, mientras que la actual, lo ha sido por Ley y su aplicación encomendada, para mayor garantía, al Poder Judicial.

La extensión de esta amnistía laboral, alcanza con carácter general, no solamente a las infracciones de naturaleza laboral y sindical, consistentes en actos que supongan el ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores en normas y convenios internacionales actualmente en vigor (artículo 5.º) sino también a los actos de intencionalidad política, tipificados como delitos o faltas en los tres apartados del artículo 1.º de la Ley, siempre naturalmente, que sus efectos hubieran trascendido al contrato de trabajo, produciendo despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena.

A los efectos del artículo 5.º deben tenerse en cuenta fundamentalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977 y en vigor desde el 27 de julio del mismo año, y el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales de la misma fecha de 16 de diciembre de 1966, con idéntica ratificación y entrada en vigor. España ratificó simultáneamente los Convenios de 9 de julio de 1948 y de 1 de julio de 1949, de la Orgaización Internacional del Trabajo, sobre libertad sindical y aplicación de los derechos de sindicación y de negociación colectiva, pero ambos no entraron en vigor en nuestro país hasta el 20 de abril de 1978, es decir, después de la promulgación de la Ley de amnistía, si bien carece de interés analizar el problema de su vigencia, toda vez, que el derecho de libertad sindical está expresamente reconocido en los apartados *a)*, *b)* y *c)* del artículo octavo del

Pacto citado en segundo lugar, cuya vigencia es indiscutible.

En principio, por tanto, la amnistía laboral, además de alcanzar a los actos de intencionalidad política, deja sin efecto sanciones de cualquier clase, desde la simple amonestación pasando por la suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación para ascender de categoría, traslado forzoso de puesto de trabajo o de localidad, hasta la más grave, de despido; bien entendido que la medida se aplica únicamente a infracciones que consistan precisamente en actos que supongan el ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores por las normas antes citadas, quedando fuera todas aquellas de otra naturaleza que fueron sancionadas por la empresa en uso de la facultad disciplinaria.

El artículo 5.° de la Ley, no hace remisión alguna al derecho interno español, lo que planteó el problema de la aplicación de la amnistía a sanciones impuestas por participación en huelga ilegal, producidas bajo la vigencia del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, puesto que la mayor parte de los casos de amnistía, por no decir casi la totalidad afectan a sanciones de despido por dicho motivo.

Un criterio riguroso de interpretación, además de reducir notablemente el campo de aplicación de la Ley, hubiera representado desconocer totalmente la naturaleza de la amnistía, que no persigue la finalidad de otorgar excepcionalmente efectos retroactivos a la nueva norma, sino que se concede, como antes se ha dicho, por razones de equidad y oportunidad política, produciendo el efecto de borrar unos hechos que eran ilícitos al ser cometidos y que pueden merecer la misma calificación aplicando la actual normativa. Es decir, la amnistía laboral no supone revisión de sanciones de dicha naturaleza por aplicación de una ley posterior más favorable, sino que se trata de una medida de generoso perdón,

que pretende por el camino de la concordia social, normalizar las relaciones del mundo laboral, una vez reconocida la libertad sindical y regulado, de forma más abierta, el derecho de huelga. Parece natural que la amnistía laboral no puede tener distinta naturaleza que el derecho penal, donde el efecto retroactivo de la ley más favorable, haría innecesaria la medida de seguirse aquel criterio restrictivo.

Por ello se considera por esta Fiscalía, que la amnistía era de aplicación a los trabajadores que de un modo u otro, hubiesen participado en huelgas ilegales, es decir, a los meros participantes y a los que intervinieron activamente en los conflictos, puesto que no podía exigirse una conducta ajustada a determinadas normas, cuando se negaba el derecho a la huelga y la posibilidad de planear las reivindicaciones profesionales por la vía de la libre sindicación.

Aunque en los límites de esta Memoria no es posible analizar los numerosos problemas que se plantearon al Ministerio Fiscal al dictaminar sobre aplicación de la amnistía laboral habida cuenta de la gran variedad de decisiones y fórmulas que abocaron la multitud de situaciones conflictivas que afectaron por aquellos tiempos al mundo laboral, es interesante una breve referencia a algunos de los más destacados.

Fueron frecuentes los casos de trabajadores despedidos por huelga ilegal que lograron después, mediante la oportuna reclamación judicial, la declaración de despido improcedente o nulo, no obstante lo cual se produjo la extinción de la relación laboral, al hacer uso el empresario del derecho de opción que le concedía el artículo 103 de la Ley de Procedimiento Laboral, con abono de la correspondiente indemnización. En tales casos el dictamen de la Fiscalía fue favorable a la aplicación de la amnistía, por considerar que el contrato de trabajo quedó rescindido por voluntad del empresario, en contra

de los deseos del trabajador, con el consiguiente perjuicio económico, nunca compensado totalmente por la indemnización, la solución contraria conduciría a situaciones injustas, haciendo a estos trabajadores, cuya sanció se declaró improcedente, y a pesar de ello perdieron su puesto de trabajo, de peor condición que los despedidos en forma procedente, según la sentencia de la Magistratura de Trabajo, para los que ahora está abierta la puerta de la readmisión mediante la aplicación de la amnistía.

Casos más complejos fueron los de despidos disciplinario, cuando posteriormente se llegó a una avenencia, en trámite de conciliación sindical o judicial, y se declaró extinguida la relación mediante compensación económica. También en estos supuestos el criterio de la Fiscalía fue favorable a la amnistía, pues no obstante la aparente existencia de una transacción entre las partes, no puede desconocer que la esencia de este contrato consiste en que el acuerdo se produce mediante concesiones recíprocas de los respectivos derechos, lo que no ocurría en los casos contemplados, puesto que la empresa desde la posición que supone la imposición de la sanción, rescinde el contrato de trabajo, que es precisamente la diferencia que dividía a las partes.

Por lo que afecta al precepto del artículo 8.º de la Ley, según el cual, la amnistía deja sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores, la Fiscalía, teniendo en cuenta que la facultad disciplinaria corresponde a los órganos directivos de las empresas y que la intervención judicial únicamente se produce cuando el trabajador reclama mediante la correspondiente demanda, con excepción de los despidos especiales, trabajadores que ostentan cargo sidical y otros en los que aquélla intervención es preceptiva, siguió una

interpretación abierta y progresiva de dicho precepto, comprendiendo en la amnistía las infracciones sancionadas no recurridas en vía jurisdiccional.

Y finalmente en cuanto a la forma de aplicación, a pesar de la generalidad del último párrafo del artículo 9 de la Ley, la amnistía laboral, por sus esenciales características, no puede aplicarse de oficio, durante la tramitación de los procedimientos. Es obligado esperar la petición del interesado, con el fin de evitar posibles perjuicios, pues que de prosperar la reclamación de despido improcedente o nulo, es preceptiva la condena al pago de los salarios de tramitación, que el trabajador perdería de aplicarse el beneficio antes de la sentencia. La Sala Sexta del Tribunal Supremo, en los recursos de casación pendientes, siguió el acertado criterio de aplicar la amnistía únicamente a petición del trabajador, por el trámite de los incidentes de previo pronunciamiento del artículo 744 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con suspensión del procedimiento, que continuaba en caso de denegación del beneficio. Las Magistraturas de Trabajo, también a instancia de parte, resolvieron las peticiones de amnistía, utilizando el procedimiento ordinario del Texto Procesal Laboral, con sentencia recurrible en aplicación o casación. Por otra parte, la intervención de la Jurisdicción de Trabajo no siempre es necesaria en la aplicación de la amnistía laboral, ésta se puede producir y de hecho así ha tenido lugar en muchos casos, acudiendo el trabajador sancionado directamente a la empresa y sólo cuando su petición no es atendida, se recurre a la reclamación judicial.

Pendientes aún ante el Tribunal Supremo y Tribunal Central de Trabajo, recursos sobre amnistía laboral, no cabe sentar conclusiones en definitiva del criterio seguido en su aplicación.

En general la Sala Sexta del Tribunal Supremo viene manteniendo una interpretación abierta, aunque no del

todo uniforme, pues si bien en algunas sentencias ha denegado el beneficio de amnistía por entender que los hechos deben ser valorados de acuerdo con la normativa vigente en el momento de publicarse la Ley, que estaba constituida por el Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo, en otras sentencias prescinde de toda remisión al derecho interno, teniendo en cuenta únicamente el Pacto Internacional que reconoce el derecho de huelga.

## Capítulo VI

## ASPECTOS PENITENCIARIOS

a) *Incidentes en las prisiones*

No podemos ni debemos ocultar en esta Memoria, la grave preocupación del Ministerio Fiscal ante la situación de desorden e indisciplina que están atravesando nuestras instituciones penitenciarias.

El proceso de deterioro se inició años atrás y ha llegado a tal grado que los medios normales de corrección no parece que puedan ser suficientes para atajar el mal. La experiencia de cada día lo viene demostrando, provocando una angustiosa sensación que envuelve a todo el sistema de seguridad del Estado, trasciende a los órganos de la Administración de Justicia, ha salido a la calle e impresiona vivamente la opinión pública.

Durante el período de tiempo a que se contrae esta Memoria, es decir, el año 1977, pareció que se había alcanzado el nivel más alto imaginable en este proceso de agitación; desgraciadamente no ha sido así. A lo largo de ese año y en el conjunto de las prisiones, se produjeron más de cincuenta motines, nueve con grandes destrozos e incendios en los siguientes establecimientos:

— Alicante, en el mes de agosto, en el que los amotinados destrozaron los dormitorios.

— Sevilla, en el mes de septiembre, con destrozos en tejados e instalaciones de la prisión.

— Málaga, en el mes de octubre, con participación

de casi toda la población reclusa, destruyendo muebles, enseres e instalaciones.

— Barcelona, también en el mes de octubre, con destrozo e incendio del establecimiento.

— Ocaña, en el mes de noviembre, en el que ciento cincuenta amotinados forzaron puertas, destruyeron muebles y pegaron fuego al Departamento celular.

— Castellón, también en noviembre, con destrucción de muebles y enseres, materiales del taller, existencia del botiquín e instalaciones de la cocina.

— Alicante, otra vez, en el mes de diciembre, produciendo destrozos en los dormitorios, galerías y tejados.

— Valencia, en el mismo mes de diciembre, con incendio del salón de cine, talleres y otros departamentos.

— Murcia, en el mismo mes de diciembre, con rotura de puertas y cristales, fuego a colchonetas y mantas amontonadas y la habitual subida a los tejados con destrozo de las cubiertas.

Además se registraron once plantes, hubo un centenar de huelgas de hambre individuales, así como medio centenar de tipo colectivo. Más de cien internos se causaron lesiones a sí mismos, unos por su propia voluntad y otros coaccionados, produciéndose cortes o ingiriendo los más diversos objetos.

En lo que va transcurrido del año 1978, hasta el momento en que redactamos este informe, ha seguido progresando el desorden. El plante, el motín, los destrozos, rebeldías y autolesiones se han hecho crónicos. Muchos guardianes están desmoralizados y desconcertados. En algunas prisiones parece que no hay más autoridad que la de los presos y en ellas se impone la ley del mas fuerte. En muchos casos solo se domina la situación mediante la entrada de las brigadas antidisturbios y mientras permanecen en el interior del recinto.

La valoración de los daños causados hasta el mes de septiembre de 1977 ascendió a 233.678.390,83 pesetas, los causados desde septiembre de 1977 hasta mayo de 1978

en que cerramos este informe han sido tasados en pesetas 375.318.755,95. En total, más de seiscientos millones de pesetas.

Las evasiones son frecuentes y en circunstancias inverosímiles. A cada paso se descubre la existencia de obras de perforación de túneles hacia el exterior que solo la debilidad de la vigilancia puede explicar. En los registros y cacheos, hechos generalmente bajo la protección de la fuerza pública, se encuentran en poder de los reclusos armas, herramientos, instrumentos y efectos que no se comprende cómo hayan podido entrar en la prisión.

En algunos establecimientos existen bandas que imponen su tiranía a los demás presos y les someten a abusos, vejaciones y malos tratos que no denuncian por temor a la represalia.

Recientemente esta Fiscalía con el propósito de colaborar en alguna medida con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en las generosas y valientes iniciativas reformadoras de ésta para la protección y defensa de los derechos humanos del preso, ha dictado una circular en la que se ordena a los Fiscales la frecuente visita a las prisiones a fin de comprobar el estado de los establecimientos, examinar la situación de los reclusos, oir sus reclamaciones e interesarse por las circunstancias particulares de cada caso.

b) *Reformas en desarrollo*

A todo esto, desde 1977, por iniciativa del entonces Director General de Instituciones Penitenciarias don Jesús Haddad García, se viene elaborando una ambiciosa reforma penitenciaria orientada en el más amplio sentido protector del penado. Las ideas rectoras del proyecto, las anticipó la exposición de motivos del Real Decreto 2273/1977, de 29 de julio, que modificó el Reglamento de los Servicios de Instituciones Penitenciarias y las novedades que introduce en ese Reglamento vienen a

ser un anuncio del sentido general de la reforma en proyecto.

Para ella se considera que la reinserción social del delincuente sólo puede conseguirse verdaderamente si se respeta la personalidad humana de los reclusos y sus derechos o intereses jurídicos no afectados por la condena. En el mundo penitenciario, viene a decir, ha de dominar la constante preocupación de que cada decisión sea profundamente justa por lo mismo que el sujeto a quien ha de afectar, delinquió precisamente porque se separó de la justicia. Se insiste en que el recluso no está de ninguna manera excluido o marginado de la sociedad, por lo que se hace imprescindible que no se rompan sus lazos familiares, profesionales y sociales, si no que, en la medida de lo posible, se facilite su reforzamiento.

Para responder a estas ideas de respeto a los derechos humanos del penado, se facilita la apertura gradual de confianza liberalizando los medios de comunicación con el exterior, favoreciendo los medios de asistencia jurídica, cultural y moral, ampliando la posibilidad de salidas y permisos y extendiendo el sistema del régimen abierto. En definitiva, preconizando la restricción de la privación de libertad a sólo lo necesario para la defensa social y rehabilitación del penado.

Con estas ideas operaba Don Jesús Haddad García cuando por monstruosa aberración de unos desalmados, el pasado 22 de marzo fue alevosamente asesinado.

Imbuído de los mismos propósitos de generosidad y sentido humanitario, le ha sustituido en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Don Carlos García Valdés, que lleva adelante los propósitos de reforma de su predecesor, con el mismo o mayor entusiasmo y que, al parecer, tiene prácticamente terminados los laboriosos estudios que requiere una empresa de esa envergadura.

Dos razones convergentes impulsan la reforma: De

una parte, la necesidad forma de ajustar nuestras normas a las «Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos» elaboradas por las Naciones Unidas en 1955 y al «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» de Nueva York, de 1966 y, de otra, como ya hemos dicho antes, la precisión de plantear la labor de reinserción social del penado desde una perspectiva de absoluto respeto a su dignidad humana. Ambos objetivos, coincidentes, han de conseguirse mediante una reestructuración del sistema, basada en el humanitarismo, que sepa hallar el punto de equilibrio entre dos tendencias contrapuestas: el respeto riguroso a los derechos del interno y la privación o restricción de derechos del penado, derivadas de su condena, así como las que impone la necesidad de convivencia pacífica y ordenada, mínimo indispensable para que cualquier sistema penitenciario consiga su fin. Esperamos que la reforma aporte al sistema novedades científicas en materia de régimen y tratamiento ya experimentadas en otros países con resultados positivos; que se flexibilice lo relativo al sistema progresivo, redención de penas por el trabajo, tratamiento general de los internos, régimen disciplinario y se establezca la vigencia efectiva del principio de legalidad mediante un sistema de impugnaciones en garantía de los reclusos.

El Ministerio Fiscal no puede menos de participar en el deseo de éxito para la reforma penitenciaria y espera mucho de los trabajos en curso.

Tales trabajos son perfectamente compatibles y, hasta diríamos, que necesitan previamente el restablecimiento de la disciplina y el buen orden de las prisiones.

c) *Medidas de gracia*

Durante el año 1977 se han concedido tres medidas generales de gracia, unas por el Real Decreto Ley número 19/1977, de 14 de marzo, otras por el Real Decreto

número 388/1977, del mismo día 14 de marzo y otras, por último, por la Ley número 46/1977, de 15 de octubre.

El Real Decreto-Ley 19/1977, de 14 de marzo, se dictó para ampliar la amnistía que había sido concedida por el Real Decreto Ley 10/1976, de 30 de julio, para los delitos de intencionalidad política, de modo que comprendiera también aquéllos que hubieran puesto en peligro la vida o la integridad de las personas y que por esta circunstancia estaban expresamente excluidos por el artículo 1.° del Real Decreto-Ley 10/1976, que se modifica en ese sentido. También aclara la interpretación sobre cuáles habrán de entenderse delito de intencionalidad política estableciendo como presunción «iuris et de iure» que los son, desde luego, los comprendidos en el Título II del Libro II del Código Penal —delitos contra la seguridad interior del Estado—, en el Título IX del Tratado II del Código de Justicia Militar —delitos contra la seguridad del Estado y de los Ejércitos— y en el anexo del Código Penal —terrorismo—. También dicta reglas sobre competencia y establece determinadas facilidades para el otorgamiento de indultos particulares y para conmutación de penas, incluso respecto de los inculpados aún no condenados.

El Real Decreto 388/1977, concedió diversas modalidades de indulto total o parcial para los delitos de intencionalidad política no comprendidos en la amnistía de 30de julio; Indulto parcial de la cuarta parte de las penas, con un mínimo de un año de condenación, para toda clase de delitos; condiciona los indultos a que los beneficiarios no delincan de nuevo en un período de cinco años y, por último, contiene reglas especiales acerca de los delitos monetarios y sobre aplicación anticipada de los indultos en los procesos en trámite y todavía no sentenciados.

De mucha mayor trascendencia fue la amnistía concedida por Ley 46/1977, de 15 de octubre, en cuyo examen no nos detenemos porque aparece realizada con

todo detalle en la Circular de esta Fiscalía número 1/1977, de 20 de octubre, que se inserta más adelante.

La incidencia penitenciaria de las expresadas medidas de gracia revela, como ya se apuntaba en la Memoria Fiscal del pasado año, que, a renglón seguido de la aplicación de indultos o amnistías, se produce un incremento de la población penal debido, en considerable proporción, al reingreso de muchos de los liberados quienes, lejos de reinsertarse en una vida social y familiar, han reincidido en el delito.

En 1.° de enero de 1977, la población penal era de 9.937 individuos, de los cuales 8.909 (4.109 penados y 4.799 presos preventivos) lo eran por delitos comunes; 59 individuos (9 penados y 51 preventivos) lo eran por delitos políticos; 763 que estaban sujetos a expedientes de peligrosidad y 207 por infracciones de carácter administrativo.

La cifra señalada de 9.937 individuos resulta anormalmente baja en la estadística de la población penitenciaria a través de los tiempos y, más aún, si viene a coincidir, como es el caso, con un notable aumento de los índices de criminalidad.

El indulto concedido por Real Decreto 388/1977, de 14 de marzo, al que antes hemos hecho referencia, benefició a 4.049 individuos de los cuales 1.940 fueron inmediatamente excarcelados por su consecuencia y los restantes 2.109 solamente se beneficiaron de la correspondiente reducción en el tiempo de su condena quedando retenidos para su cumplimiento.

La ampliación de la amnistía de 30 de julio de 1976 otorgada por el Real Decreto-Ley 19/1977, también de 14 de marzo, benefició a 220 individuos responsables de delitos políticos, de los cuales 125 fueron inmediatamente excarcelados por su consecuencia y los 95 restantes, retenidos por su responsabilidad en hechos no amnistiados ni indultados.

A pesar de eso, en primero de junio de 1977 la población penal era de 9.779 individuos de los cuales 8.731 (3.197 penados y 5.534 presos preventivos) lo eran por delitos comunes; 38 presos preventivos por delitos políticos; 841 sujetos a medidas adoptadas en expedientes de peligrosidad y 169 por infracciones de carácter administrativo.

La amnistía otorgada por Ley 46/1977, de 15 de octubre, para delitos de intencionalidad política benefició a 153 individuos de los cuales 140 fueron inmediatamente excarcelados y 13 retenidos por otras responsabilidades.

En 31 de diciembre de 1977 la población penal estaba reducida a 9.392 individuos de los cuales 8.603 (3.740 penados y 4.863 presos preventivos) lo eran por delitos comunes; un sólo preso por delito político: 459 por expedientes de peligrosidad y 429 por infracciones de carácter administrativo.

## Capítulo VII

## REFORMAS LEGISLATIVAS

Los señores Fiscales, en sendos capítulos de sus Memorias, hacen referencia a las reformas legislativas que estiman adecuadas en nuestro actual Ordenamiento. De sus propuestas, todas valiosas e interesantes, destacamos un conjunto de ellas, algunas ya indicadas en años anteriores, que dan idea de la preocupación constante del Ministerio Público, que en su deseo de que la Ley impere, no recelan en buscar los obstáculos o dificultades que a ello puedan oponerse, a veces procedentes de los defectos o faltas de perfección de las Leyes mismas.

### *Código Penal*

Es de esperar que una vez aprobada la Constitución, una de las primeras tareas de las nuevas Cortes sea el estudio y aprobación de un nuevo Código Penal, en el que se cumpla la necesidad de dotar a la Sociedad de normas jurídicas penales que respondan adecuadamente a las agresiones de que actualmente es objeto, restableciendo el imperio de la Ley, a todas luces debilitado en todas las esferas, reforzando la defensa de las instituciones democráticas y asegurando en los jurídico-penal el mínimo ético imprescindible para la pacífica convivencia ciudadana (Barcelona).

Otra razón para la reforma del vigente ordenamiento punitivo, es el de corregir el abuso que en los últimos años se ha hecho del recurso al derecho penal, porque el

Estado, incapaz de resolver los problemas sociales que se le planteaban y que por sí mismo generaban delicuencia, recurría para evitarlos a la amenaza de una pena. Con ello se ha sobrecargado el Ordenamiento penal y se ha introducido en el ámbito del Derecho punitivo, conductas que no suponían más que ilícitos morales o simplemente administrativos (Granada).

Los mayores reparos que pueden oponerse al Código Penal, se refieren a la insuficiente protección que dispensa a la persona humana en su dimensión moral. Así debe darse más eficiencia a las garantías de la persona aumentando el rigor de la pena, en los delitos de acusación y denuncia falsa y en el de falso testimonio; suprimirse las atenuantes honoris causa de los delitos de infanticidio y aborto, penalizarse los delitos de lesiones atendiendo además del resultado al tiempo de la sanidad, etc. (Soria).

Art. 10. A las circunstancias de agravación de la responsabilidad criminal establecidas en este artículo, debe añadirse una nueva, con la siguiente redacción: «utilizar cualquier tipo de vehículo de motor, ya sea para realizar el delito, ya sea para facilitar la huida» (Pamplona).

Debiera concederse arbitrio judicial y por lo tanto apreciación facultativa, en algunas circunstancias agravantes, como las de publicidad, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público, nocturnidad, reiteración, desprecio de autoridad, dignidad, edad o sexo, y la de lugar sagrado (Salamanca).

Debe ser suprimida la agravante de nocturnidad ya que lógicamente por la noche se cometen mejor toda clase de delitos y es natural, dentro de lo que cabe, que se utilice la noche para delinquir, en especial contra la propiedad (Zaragoza).

La reforma introducida por la Ley 39/1964 de 28 de noviembre en la agravante de reincidencia debe desaparecer, ya que se considera más acertada la interpretación

dada a la antigua redacción por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (Gerona y Salamanca).

Art. 15. El aumento de la delincuencia de personas físicas que actúan en nombre de sociedades, empresas, etcétera, aconseja la reforma del artículo 15, del Código Penal, añadiendo un párrafo en que se diga, que en tales casos, se impondrá la pena a los administradores o encargados del servicio que hubieran cometido el delito, o que conociéndolo y pudiendo hacerlo, no hubiera adoptado medidas para remediarlo. En su caso procederá la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa (Burgos).

Art. 20. Plenamente de acuerdo con lo que se preceptúa en el artículo 20 del Código Penal, si bien resulta ilógico que terminada una causa por sobreseimiento libre del número 3.° del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se proceda por el Tribunal penal a aplicar el «quantum» indemnizatorio en favor de la víctima, de sus herederos o del perjudicado, a los que se le obliga, si quieren obtener un resarcimiento, a ejercitar la correspondiente acción civil ante el Tribunal de dicho carácter (Zaragoza).

Art. 22. Debe darse una mayor extensión a la responsabilidad civil subsidiaria que se establece en dicho artículo, comprendiendo a los padres por los daños dolosos causados por los hijos que vivan bajo su inmediata dependencia, pues aunque dicha resposabilidad está reconocida para el supuesto de enajenación mental, menores de 16 años y sordomudos en el artículo 20, ello es insuficiente (Alicante).

Debería añadirse al artículo 22, del Código Penal, un párrafo en el que se dijera: «También son responsables subsidiariamente, los dueños y simples poseedores de vehículos de motor, de cualquier clase y tipo, que autoricen su conducción a otra persona, de las consecuencias civiles derivadas de los delitos y faltas de imprudencia que esa persona cometa con el vehículo (Burgos).

Debe completarse los preceptos sobre responsabilidad

civil subsidiaria, de forma que no quepa duda, de que en ellos se comprende al Estado como Poder soberano y al Estado como empresa (La Coruña).

Art. 27. La distinción entre las penas de presidio y prisión, debe desaparecer por tratarse de una reminiscencia de tiempo ya superados (Burgos).

La escala de penas privativas de libertad, debería quedar reducida a tres: Reclusión, de doce años y un día a treinta años. Prisión, de un año y un día a doce años. Arresto, de un mes y un día a un año. La pena para las faltas, con nombre distinto de arresto, sería de un día a treinta días (Salamanca).

Por no responder al sentido de la moderna penología y a la exigencia de los derechos humanos, se propone la desaparición de las siguientes penas: *a)* las de inhabilitación y suspensión de profesión u oficio, dejando a salvo las cautelares y específicas de determinadas profesiones; *b)* las inhabilitaciones y suspensiones del derecho de sufragio activo; *c)* las privaciones definitivas del derecho de conducir; *d)* el extrañamiento de súbditos españoles y la pérdida de la nacionalidad española, ni aún para extranjeros de origen nacionalizados españoles (Oviedo).

Art. 44. Debe modificarse en el sentido de que, pueda ser el propio condenado, el que preste la fianza oportuna (Zaragoza).

Art. 61. La regla 4.ª del artículo 61 debe ser modificada en el sentido de que cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes, se impondrá la pena en el grado medio. Es decir, debe volverse en estos casos al tradicional y prudente grado medio de la pena; pues la normativa actual de imponer la pena en el grado que se estime conveniente, no se ha aplicado de forma razonable y sólo ha servido para aminorar la pena a todo delincuente (La Coruña).

En el supuesto de la regla 6.ª sería más conveniente

y así lo propone dejar al arbitrio del Tribunal la elevación de la pena en uno o dos grados (Lugo).

Art. 66. Debería contener un párrafo segundo, en el que, a semejanza de lo establecido en el artículo 65, para los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, se permitiera al Tribunal, atendida las circunstancias del sujeto afectado por una enajenación mental incompleta, sustituir la pena impuesta por internamiento en un establecimiento adecuado (Lérida).

Art. 93. Hay dos casos en que la concesión de la condena condicional debe quedar al arbitrio de los Tribunales, aunque no concurra el requisito de que el reo haya delinquido por primera vez. Uno, cuando un sujeto haya cometido un delito doloso y con anterioridad haya sido condenado por delito culposo, y otro, cuando la primera infracción fuera dolosa y la segunda culposa (La Coruña, Lérida, Lugo y Salamanca).

Los beneficios de la condena condicional debería extenderse a los reos condenados a penas hasta dos años de duración, cuando sean menores de veintiún años (Salamanca).

Art. 100. Debería excluirse de los beneficios de redención por el trabajo los delincuentes en quienes concurriere manifiesta peligrosidad social, expresamente consignada por el Tribunal en la sentencia (Badajoz).

Art. 112. Debe erradicarse expresamente el indulto general, aunque puedan concederse los indultos particulares que en cada caso aconseje. Como es de prever que se siga concediendo indultos generales, debe establecerse que en los casos en que el Tribunal aplique uno de estos indultos en delitos en que exista responsabilidad civil, se haga expresa condena sobre las indemnizaciones (Zaragoza).

Art. 118. El último párrafo del artículo 118 del Código, declara que queda sin efecto la cancelación de antecedentes penales, pero debiera añadirse «a menos, que

haya transcurrido el plazo de prescripción de la pena» (La Coruña).

Art. 226 en relación art. 166 y sigts. La proliferación de las manifestaciones públicas ilegales que en muchos casos tiene que ser disueltas mediante el empleo de la fuerza, plantea la conveniencia de hacer extensiva la excusa absolutoria contemplada en el artículo 226 del Código Penal, para los delitos de rebelión y sedición, a los delitos de manifestación no pacífica, que desde el punto de vista de la justicia material representan un injusto de indudable menor entidad que el alzamiento rebelde o sedicioso, aplicación aconsejable tanto de un punto de vista de mera congruencia, como de oportunismo político criminal (Barcelona).

Art. 249. Sería conveniente la reforma del artículo 249 del Código penal, párrafo primero, en el sentido de matizar más la interpretación del concepto de «comunicaciones», pues se están dando con frecuencia casos de quienes se encadenan en una vía pública, de una parte a otra de la misma, con interceptación de la circulación rodada, que han sido considerados como constitutivos de la falta del artículo 570, número 4.°, como turbación leve del orden público usando medios que racionalmente deban producir alarma o perturbación, lo que equivale a dar carta de naturaleza por una simbólica multa a estas actuaciones que de día en día van proliferando en mayor medida (Oviedo).

Art. 334. El artículo 334 del Código penal debiera abarcar no sólo a los condenados y presos, sino también a los detenidos (La Coruña).

340 bis. Debería sancionar la conducción de todo tipo de vehículo, sin conocimiento ni preparación para ello, con lo que quedaría englobado en el tipo de los ciclomotores. La nueva redacción podría ser: «Será castigado el que sin poseer las condiciones psico-físicas adecuadas, condujere un vehículo de forma que pueda poner en peligro a las personas o a las cosas», precepto que

tendría perfecto encaje dentro de los delitos de riesgos, como riesgo abstracto, cerrando o complementando el de peligro de la conducción temeraria del artículo 340 bis a) (Huesca).

Art. 343, 344 bis y 348. En los dos primeros artículos se castiga a quienes despacharan medicamentos deteriorados o los sustituyese por otros o los expendieren sin cumplir las formalidades prescriptas en las leyes y reglamentos, con arresto mayor y multa y en el artículo 348 se establece una agravación de la pena, que tanto desde el punto de vista de técnica penal, como desde el de justicia, es difícilmente comprensiva. Efectivamente se dispone que cuando resultase muerto por consecuencia de dichos hechos, el culpable incurrirá en la Pena de reclusión. menor.

No se comprende que un delito de resultado —en este caso la muerte de una persona— tenga sanción igual al homicidio doloso, y por ello, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia de 15 diciembre 1977, hace una interpretación correctora de dicho artículo, estableciendo que el culpable —un farmacéutico— cometió un delito de expedición de medicamento sin cumplir la formalidades reglamentarias y otro de imprudencia con infracción de reglamento, del que resultó muertes.

Se considera que debería desaparecer el precepto agravatorio del artículo 348, y de tal modo los Tribunales, apreciando las pruebas, podrán estimar en tales supuestos, la existencia de un homicidio o asesinato, de haber mediado dolo y de un delito de imprudencia temeraria o simple antirreglamentaria (Pamplona).

Art. 348 bis. Se considera procedente la supresión del precepto contenido en el artículo 348 bis del Código penal, en el que se sanciona al que maliciosamente propagare una enfermedad transmisible a las personas. Fundamenta tal propuesta en que al incluir el legislador el término «maliciosamente», imposibilita la aplicación de dicho precepto a las formas culposas y dificulta su apre-

ciación en caso de dolo eventual. Cuando en el supuesto que se contempla el sujeto actúa dolosamente, la conducta debería sancionarse como delito de lesiones y no existe razón alguna que avale la pervivencia y especialidad del artículo citado (Pamplona).

Art. 360. En la prevaricación del Abogado o Procurador que perjudicase a su cliente, debería imponer mayor pena cuando hubiere «abuso malicioso», y pena menor, cuando hubiere «negligencia o ignorancia inexcusable» (Jaén).

Art. 418. La referencia al que «esterilizare», introducida en dicho precepto, por la revisión parcial del Código penal, llevada a cabo por Ley de 23 de diciembre de 1961, debería suprimirse, ya que puede dar lugar a situación de injusticia manifiesta, cual sería la sanción penal de reclusión menor al médico que esterilizase a una persona, mientras que la conducta del que solicita la operación y paga por ella, queda impune, dada la irrelevancia del consentimiento en las lesiones (Vitoria).

Art. 411. En el último párrafo del artículo 411 se establece una agravación de la pena en el delito de aborto, cuando a consecuencia de éste, de prácticas abortivas realizadas en mujer no encinta, creyéndola embarazada o por emplear medios inadecuados para producir el aborto, resultase la muerte de la mujer o se le causase lesiones del número 1.° del artículo 420, en cuyo caso se le impondrá la pena de reclusión menor y si se le causase cualquier otra lesión grave, la de prisión mayor, sin hacer distinción alguna de haber obrado sin o con el consentimiento de la mujer, lo cual es una interpretación legal en contra del reo (Tarragona).

Art. 429. Los estados incompletos de deficiencia mental comprendidos entre la lucidez mental y la pérdida de la razón, aconsejan en la regulación de los delitos contra la honestidad, la creación de figuras delictivas intermedias (Salamanca).

Art. 434. La penalidad del delito de estupro debiera

tener mayor elasticidad, para que pudieran penarse debidamente las situaciones de atentados a la honestidad de la mujer fronterizas entre el estupro y la violación, pues hay casos en que, sin poder decir que la mujer se halla privada de razón o de sentido, está muy próxima a este estado patológico (La Coruña).

Art. 452 bis b). Revistiendo mayor gravedad los supuestos contemplados en el artículo 452 bis b), por hacer referencia a menores de veintitrés años, son sin embargo sancionados con pena privativa de libertad más benigna que la del artículo 452 bis a), impone en los casos de prostitución de personas mayores de dicha edad, por lo que se propone que los supuestos tipificados en el primero de los artículos mencionados sean sancionados con la pena de prisión mayor además de la multa e inhabilitación absoluta o especial, según los casos (Barcelona).

Art. 480. Uno de los delitos, relativamente frecuentes por desgracia en los últimos tiempos, que no aparece debidamente penado por la Ley tipo, es el secuestro con resultado de muerte del sujeto pasivo de quien previamente se exigió rescate. Si examinamos los artículos aplicables con más aproximación —porque en realidad no está previsto completamente—, son los artículos 481 y 483 que se refieren a la detención ilegal y el último inciso del apartado 2.° del artículo 501, que hace referencia al robo con violencia e intimidación. Por lo que, o se acude a calificarlo, caso de muerte del secuestrado con petición de rescate, como robo con homicidio del número 1.° del artículo 501 o se añade al artículo 483 otro apartado en que se haga constar que si resultase muerte de la persona detenida, la pena será igual que la establecida para el delito de robo con homicidio (Tarragona).

Art. 501 n.° 5.° El robo con violencia «residual», en todos los demás casos no comprendidos en los números 1.° a 4.° del artículo 501 del Código penal, asume supuestos tales como son aquellos en que con motivo u ocasión del robo se causaren lesiones de las comprendidas en los

artículos 422, 423 y 583 o bien se utilizase violencia o intimidación. En todos estos casos la pena aplicable es la de presidio menor, susceptible de apreciación en grado máximo en los supuestos contemplados en el último párrafo del artículo 501 o por concurrencia de las agravantes específicas del artículo 506.

Conforme con ello, resulta que conductas delictivas de manifiesta peligrosidad y alarma social, cuales son los atracos a mano armada a establecimientos bancarios singraves resultados lesivos o los hechos tan frecuentes de robos por el procedimiento del «tirón», pueden quedar castigados con penas sensiblemente inferior a la que correspondería al mismo hecho si se realizara con fuerza en las cosas y el valor de lo sustraído fuese el previsto en el núm. 3.° del artículo 505 del Código penal.

Ello podría evitarse añadiendo al número 5.° del mencionado artículo 501 del Código penal lo siguiente: «salvo que la pena imponible fuere mayor atendiendo al valor de lo sustraído conforme al artículo 505, en cuyo caso se impondrá la pena señalada en este último» (Málaga, Salamanca y Teruel).

Arts. 515, 4.°; 528, 4.°, y 587, 1.° Al igual que lo acaecido en los delitos de receptación y cheque en descubierto, que al ser reconocidos como tipos sustantivos e independientes se les concedió virtualidad cualificadora para convertir en delito hechos que en otro caso merecerían la calificación de faltas, si el culpable hubiese sido condenado anteriormente por delito o dos veces en juicio de faltas de aquella naturaleza, se considera conveniente la modificación de los artículos reseñados, con las siguientes redacciones:

Art. 515 1.° Con arresto mayor si no excediese de 15.000 pesetas y el culpable hubiere sido condenado anteriormente por delito de robo, hurto, utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, estafa, apropiación indebida, cheque en descubierto o receptación, o dos veces en juicio de faltas de estafa, hurto o apropiación indebida.

Art. 528 4.º Con arresto mayor si no excediere de 15.000 pesetas y el culpable hubiere sido condenado anteriormente por delito de robo, hurto, utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, estafa, apropiación indebida, cheque en descubierto o receptación, o dos veces en juicio de faltas por estafa, hurto o apropiación indebida.

Art. 587 1.º Los que por cualquiera de los modos expresados en el artículo 514 cometieren hurto por valor que no exceda de 15.000 pesetas, si el culpable no hubiere sido condenado anteriormente por delito de robo, hurto, utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, estafa, apropiación indebida, cheque en descubierto o receptación, o dos veces en juicio de faltas por estafa, hurto o apropiación indebida (Almería).

Art. 535. El delito de apropiación indebida que tipifica el artículo 535, se sanciona con las penas establecidas en el artículo 528 del Código penal, para cuya determiación debe atenderse a la cuantía de lo apropiado, lo que supone una previa concreción de la misma que no siempre resulta fácil aún contando con el correspondiente dictamen pericial contable; por lo que, para obviar dicho inconveniente y habida cuenta de la similitud de este delito con el de malversación de caudales públicos, debería añadirse al artículo que comentamos un precepto análogo al contenido en el penúltimo párrafo del artículo 394 del Código penal, que podía redactarse en la siguiente forma: «El Tribunal impondrá la pena que estime procedente entre las señaladas en el artículo 528 si a su juicio hubo apropiación o distracción sin estar concretada la cuantía de la misma» (Barcelona).

Art. 456 bis a). La reforma del Código penal llevada a cabo por la Ley de 9 de mayo de 1950, creando el delito de «encubrimiento autónomo», no ha sido lo radical que demandaba la doctrina jurídica, al establecerse límite a la pena del encubrimiento en relación con la señalada al delito encubierto, toda vez que, en la mayoría de los casos, la pena tipo establecida en el párrafo primero de

dicho precepto, resultará inaplicable dada la literalidad del párrafo segundo, con lo que la severidad inicial del delito de receptación queda inmediatamente rectificada. Sugiere la supresión del párrafo segundo, pues si bien la pena establecida en el párrafo primero pudiera resultar severa en algunos casos, no puede dejarse de considerar en los delincuentes de estos delitos, que son piezas tan necesarias de los que se cometen contra la propiedad facilitando a los infractores sus propios beneficios y la seguridad de obtenerlo sin riesgo que si el encubridor desapareciera disminuirían notablemente los mismos (Tarragona).

No obstante el mantenimiento del delito de cheque en descubierto dentro de la rúbrica de los delitos contra la propiedad, su naturaleza es mixta y compleja, como lo prueba su carácter rigurosamente formal, tan sólo desvirtuado en parte con la excusa absolutoria de su pago dentro de los cinco días siguientes al de su presentación al cobro y por otra parte, al privarse por la jurisprudencia la eficacia indemnizatoria dentro del proceso penal, es claro que no está protegiendo el derecho de propiedad perjudicado por la actividad delictiva del librador, sino la fe pública que entraña el cheque, concibiéndolo prácticamente como papel moneda.

Entendida la sistemática del delito del cheque en descubierto como delito contra la fe pública, debería ser encajado dentro de los artículos que protegen tal principio, en el Título 3.º del libro II del Código Penal. Es claro que el cheque en descubierto es un documento mercantil, la carencia de fondos implica una falsedad ideológica y la fe pública aparece resentida ante el ataque que entraña un documento papel moneda que resulta incobrable.

Todo ello sin perjuicio de que en el supuesto de que el cheque sea un elemento engañoso para producir un perjuicio patrimonial se daría el concurso de delitos de falsedad y estafa (Almería).

Art. 564. Para evitar las dudas que pudieran plantearse sobre si está o no compredido en la excusa absolutoria del artículo 564, el delito de «utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno», habida cuenta de que en el artículo 516 bis de nuestro ordenamiento punitivo, en la redacción dada al mismo por la Ley de 28 de noviembre de 1974, no se emplean los términos robo y hurto de uso de vehículo, pese a que en el párrafo 3.º, in fine, se establece que en los casos de mayor gravedad se aplicarán las penas de los artículos 515 ó 505, respectivamente, sería conveniente que al igual que se hizo con el delito de apropiación indebida, se redactase el párrafo 1.º del precepto que comentamos en la forma siguiente:

Art. 564. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los robos sin violencia o intimidación en las personas, hurtos, utilización ilegítima de vehículos de motor ajeno, defraudaciones, apropiación indebida o daños que recíprocamente se causaren (Almería, Lérida).

*Ley de Enjuiciamiento Criminal.*

Arts. 14 y 779. La competencia de los Juzgados de Instrucción para la instrucción, conocimiento y fallo de las causas por delitos perseguibles de oficio, se hace exclusivamente atendiendo a que sean castigados con penas no superior a arresto mayor, privación del permiso de conducir, multa que no exceda de doscientas mil pesetas o cualquiera de éstas conjuntamente con las demás o con una de ellas, lo que lleva como consecuencia que dicha competencia cesa en aquellos casos en que el delito sea sancionado con penas restrictivas de libertad o privación de derechos, sea como sanción única o conjunta, privando a los Juzgados del conocimiento de causas que por su entidad o principio inspirador debían corresponderles a los mismos, lo que podría evitarse fijando su competencia en atención sólo a la pena privativa de liber-

tad, agregando al precepto indicado lo siguiente: «con independencia de cualquier otra pena que conjunta o alternativamente pueda imponerse» (Lérida).

Art. 634, 5.º Al regularse en el artículo indicado el destino de las piezas de convicción, se dispone en un párrafo 5.º, que cuando por su naturaleza entrañen algún peligro grave para los intereses sociales o individuales, así respecto a las personas como a sus bienes, los Tribunales en prevención de aquél, acordarán darle el destino que dispongan los Reglamentos o, en su caso, las inutilizarán previa la correspondiente indemnización, si procediere.

Esta última parte del precepto resulta no sólo poco explícita, sino confusa y vaga, al quedar sin concretar en qué supuestos procede la indemnización y a cargo de quién correrá el abono de la misma, determinando de «facto», la inaplicación de dicho precepto, que debía modificarse en el sentido de que se especificare dichos extremos (Barcelona).

Art. 637 3.º La comisión de un hecho delictivo por un menor o un inimputable da lugar al sobreseimiento libre del artículo 637, núm. 3.º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con los preceptos correspondientes del Código penal y en tales casos, para la exigencia de las responsabilidades civiles, debe irse al proceso civil correspondiente, lo que produce a los perjudicados graves inconvenientes y demoras en la percepción de las indemnizaciones. Ello podría evitarse, de forma justa y equitativa, adicionando al mencionado artículo 637 un párrafo en que se dijese lo siguiente: «En los casos del número tercero, el Juez o Tribunal, al dictar auto de sobreseimiento, se pronunciará sobre la persona o personas que deban recaer las responsabilidades civiles y la cuantía de las mismas» (Pamplona).

Art. 789. La resolución de «archivo de actuaciones», que el Juez deberá adoptar conforme a la regla 1.ª del artículo 789, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando

estime que el hecho no es constitutivo de delito, debería sustituirse por la de sobreseimiento libre del número 2.º del artículo 637 de dicha Ley. Asimismo deberá adoptar la de sobreseimiento provisional, tanto en el caso de que no hubiere autor conocido como en el que no resultase debidamente justificada la perpetración del delito, supuesto este último, que no se contempla en la redacción actual del precepto que comentamos (Lérida).

Art. 851 5.º La posibilidad del recurso de casación por quebrantamiento de forma, basado en el número 5.º del artículo 851, no resulta fácil para el recurrente a quien no le consta realmente cuando se le notifica la sentencia, si ésta ha sido o no dictada con la concurrencia de votos conformes que la Ley exige, pues la apertura del pliego que contiene los votos reservados, a que se hace referencia en el último párrafo del artículo 876, tiene lugar cuando ya pasó el momento oportuno para preparar el recurso.

Para dar efectividad al recurso que autoriza el número 5.º del artículo 851 que comentamos, debe procurarse que la parte tenga conocimiento de los votos conforme o disconformes que concurrieron en el momento de dictar sentencia, y ello puede conseguirse comunicando simplemente a las partes el número de votos reservados sin especificar su contenido, con lo que el secreto de los mismos quedaría a salvo y, sin embargo, la parte tendría suficientes elementos de juicio para preparar el recurso (Barcelona).

Art. 862. El procedimiento del juicio de faltas regulado en los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se considera deficiente, por lo que sería útil y conveniente su modificación, estableciendo antes de la celebración del juicio verbal, un trámite de instrucción por el Fiscal de Distrito, a fin de que éste pudiera solicitar la convocatoria del juicio o el archivo de las actuaciones (Logroño).

*Ministerio Fiscal.*

El Fiscal de Madrid se ocupa en su Memoria de la misión informativa que podría incumbir al Ministerio Fiscal en relación con los asuntos judiciales de naturaleza criminal, diciendo con relación a dicha cuestión de relevante importancia, lo siguiente:

El artículo 301 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sienta el principio de que las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral, lo que constituye una clara supervivencia del viejo procedimiento criminal y resulta incompatible con el interés que la sociedad manifiesta por el conocimiento de los asuntos criminales.

En realidad, desde la perspectiva del buen resultado de las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la perpretración de los delitos y la culpabilidad de los delincuentes, el secreto sólo puede ser necesario en determinados momentos de la instrucción, precisamente aquellos en que el conocimiento de las diligencias sumariales podría dificultar una y otra.

El Fiscal es el que se encuentra en mejores condiciones para suministrar la información posible sobre los asuntos judiciales en razón a que, desde un principio tiene conocimientos de las causas, ejerce la inspección directa de los sumarios y le está atribuida funciones generales sobre la marcha de la Administración de la Justicia. Información que no debiera circunscribirse a aquellos asuntos concretos en que la opinión pública manifiesta un especial interés, sino que debería comprender todo lo relativo a la misma e incluso podría periódicamente tener reuniones con los informadores y darles cuenta, en base a las estadísticas de los Juzgados, del volumen real de la criminalidad y de las disposiciones adoptadas para reducir aquellas formas de la misma que producen más alarma.

Con tal fin propone que por la Fiscalía del Reino se

dicte una Instrucción general o Circular que circunscribiera a sus naturales límites el alcance del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretando las formas posibles de información en la doble vertiente indicada, de causas que despiertan mayor interés e información general sobre la política criminal y marcha de la Administración de la Justicia.

*De «Lege Ferenda»*

El Fiscal de Barcelona llama la atención sobre la tipificación de posibles conductas delictivas relacionadas con la existencia de los regímenes pre-autonómicos regionales.

El establecimiento de regímenes pre-autonómicos regionales en espera de que aprobada la futura Constitución se conviertan en definitivos Estatutos de autonomía por una parte, y por otra, la necesidad de promulgación de un nuevo Código penal que contemple la nueva situación política y las profundas transformaciones sociales operadas en estos últimos tiempos, que no podrá satisfacerse hasta después de la entrada en vigor de la nueva Constitución, crea un vacío legal que no queda suficientemente resuelto con los artículos 214 y siguientes del actual Código Penal, vacío que es preciso llenar con carácter urgente introduciendo en el mismo las adiciones precisas para la etapa pre-autonómica, cuya duración no es previsible, tenga su correspondiente regulación penal que señale los límites de su licitud dentro del marco de los delitos contra la seguridad interior del Estado.

Para la tipificación de dichas conductas podría tenerse en cuenta el precedente que supone el Código penal de 1932, pero acomodado a las sigularidades de los regímenes preautonómicos actuales.

*Junta de Fiscales Generales.*

Por su parte, la Junta de Fiscales Generales propuso

a esta Fiscalía un cuadro de medidas legislativas, esquemáticamente expuestas, para su posible consideración por el Gobierno, medidas que comprenden las siguientes iniciativas de reformas:

1.ª *Prohibición legal de nuevos indultos generales.*

Es opinión común y sin discrepancia que los indultos generales dan siempre lugar a un inmediato y sensible aumento de la criminalidad; destruyen el valor intimidativo de las penas; ponen en tela de juicio todo el fundamento del Derecho Penal; desmoralizan a los Jueces y Tribunales, así como a las autoridades y funcionarios que tienen a su cargo la prevención e investigación de los delitos y, en definitiva, carecen de justificación razonable. Como dijo rotundamente el profesor Jiménez Asúa: «El indulto general es indefendible».

Las leyes más progresivas han tendido siempre a la abolición de este género de medidas. El Real Decreto de 7 de diciembre de 1866 prohibió la concesión de indultos generales por «opuesta a la conveniencia y a la justicia» (art. 4.°). La Constitución de 1869 los admite, pero con muchas restricciones, pues ordena que sólo pueden ser concedidos por el Rey cuando lo autorice una Ley especial votada en Cortes (art. 74.5). La Ley de 9 de agosto de 1873 los abolió y la Constitución de 1931 también los prohíbe diciendo tajantemente: «No se concederán indultos generales» (art. 102).

Es de tener en cuenta, además, que con arreglo a las normas hoy vigentes en esta materia, contenidas en la Ley de 18 de junio de 1870 y Decreto de 22 de abril de 1938, es muy dudosa la legalidad de los indultos generales y todavía más que dudosa en la de los que se han dictado con aplicación anticipada al juicio, es decir, sin condena ni pena que indultar.

Con estos antecedentes doctrinales y legales creemos que existe causa bastante para la preparación de un pro-

yecto de ley que prohiba los indultos generales e incluso, si todavía hubiere lugar para ello, insertando dicha prohibición en el texto constitucional.

2.ª *Anticipación de la responsabilidad penal por razón de la edad.*

La inimputabilidad de los menores de dieciséis años, a nuestro parecer, puede y debe ser objeto de reconsideración.

La precocidad física e intelectual de las nuevas generaciones es un hecho incontestable que manifiesta el examen de la realidad social, dentro y fuera de nuestro país.

Del mismo modo que esa precocidad se manifiesta en las actividades culturales, profesionales y políticas, también cobra, desgraciadamente, un triste relieve en las conductas antisociales y delincuentes.

El tratamiento de la juventud delincuente, incluidos períodos de edad que tradicionalmente correspondían a la infancia, constituye un problema gravísimo. El actual sistema tutelar se ha demostrado absolutamente tan ineficaz para la defensa social y para la protección del menor delincuente como anacrónico e ineficaz en la prevención delictiva.

Creemos que la fórmula que corresponde a los tiempos consistiría en la reforma de la eximente 2.ª del artículo 8.º del Código Penal señalando, por ejemplo, los catorce años como umbral de la responsabilidad penal y también el artículo 65 del mismo Código sustituyendo la reducción de las penas por la indeterminación de la condena.

El enjuiciamiento en todos sus aspectos correspondería a la jurisdicción ordinaria. La condena tendría el carácter de medida tutelar al arbitrio de la Sala sentenciadora, defiriendo, entre los catorce y los dieciocho años, el tratamiento penitenciario a un tratamiento fundamen-

talmente reeducativo que, además de sustraer a los menores de cualquier forma de convivencia carcelaria, incluso durante la prisión preventiva, permitiendo aquella indeterminación de la pena a que antes se ha hecho referencia.

### 3.ª *Tipificación penal de la autolesión con fines antisociales*

Entre las nuevas formas de agresión al orden público y a la disciplina social, se vienen manifestando, con intensidad creciente, diversas acciones de autolesión o de enfermedad provocada, incluida la inanición, que se causa el propio paciente, bien por su propia voluntad, bien cediendo a coacción ajena o causados por otra persona, con consentimiento del sujeto, en todo caso con el fin de perturbar el orden, alterar la disciplina de los establecimientos públicos o perturbar la celebración de actos públicos con propósito de obstruirlos o impedirlos, exigir de Gobierno o soliviantar a la población y provocar escándalo incluso con resonancia internacional. También se producen, a veces, para causar perjuicio económico o de otro orden a personas o entidades públicas o privadas.

La penalización de estas conductas habría de comprender desde el conato de suicidio espectacular con ánimo de protesta pública hasta esas simples cortaduras llamativamente sangrantes con las que de modo reiterado se ha venido provocando el desorden incluso en la celebración de los juicios ante los Tribunales. Desde luego habría de comprender las llamadas huelgas de hambre y la ingestión voluntaria o impuesta de objetos dañosos con las que se acompañan frecuentemente los alborotos carcelarios.

Además, el estudio de estas cuestiones enlaza con el debatido tema de la relevancia o irrelevancia del consentimiento en las lesiones, lo que le presta mayor interés

por cuando podría contribuir a dar una solución al tema más racional y coherente de la que resulta hoy de la interpretación de los artículos 425 y 426 del Código Penal.

Por lo pronto, proponemos ahora, solamente, que se declare la ilicitud penal de esas conductas al objeto de que sea legalmente permitido combatirlas e impedirlas, incluso con auxilio de la coerción.

4.ª *Mejor definición penal de la apología de los delitos y de la difusión de doctrinas contrarias a la moral pública*

No deja de ser frecuente y demoledor que algún sector de prensa, sensacionalista o sectario, traspase los límites éticos encomiando conductas claramente delictivas, ensalzando a delincuentes, en cuanto tales, propugnando doctrinas claramente atentatorias a la moral y buenas costumbres o magnificando cualquier noticia aún de signo contrario, con ánimo de provocar la alarma, la reacción violenta o el escándalo.

a) *La apología*

La peligrosidad de la apología del delito es evidente en cualquier circunstancia y especialmente en las actuales. Su actual definición legal en el artículo 268 del Código Penal es insuficiente en tal grado que realmente ha convertido ese precepto en letra muerta, aparte de que se refiere solamente a la de los delitos comprendidos en el Título II del Libro II del Código Penal, es decir, a la infracciones contra la seguridad interior del Estado.

Además, y esto es más grave, como el texto legal se refiere a la apología «de los delitos», una interpretación que ha tomado cuerpo, entiende que ello exige la previa declaración de los Tribunales sobre tal delito, es decir, que lo hayan definido y condenado en concreto, por lo que cualquier defensa pública de hechos típicamente anti-

jurídicos es impune en tanto no estén sentenciados y cuando lo estén.

En consecuencia, la tipificación que se propone habría de sustituir la expresión «delito» por la de «hechos legalmente constitutivos de delito».

b) *Doctrinas contrarias a la moral pública*

El artículo 432 en su colocación sistemática actual, dentro del Título IX (delitos contra la honestidad) conduce a la interpretación restringida de que el bien jurídico protegido sólo se refiere a la moral sexual, la honestidad, el pudor y el recato público, siendo así que la difusión de doctrinas inmorales debe ser punnible, también, cuando se refiere a cualquier otro aspecto del comportamiento ciudadano y social quizá con mayor importancia en aspectos que son ajenos a la moral sexual.

En consecuencia sería procedente trasladar el texto del 432 al lugar adecuado a esa generalidad, mejorando su redacción a fin de que comprenda cualquier doctrina o incitación hacia comportamientos en pugna con las leyes, la moral pública y las buenas costumbres.

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión que comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole sea oralmente, por escrito, en forma impresa, o por cualquier otro procedimiento; pero los principios nacionales e internacionales que protegen el ejercicio de los derechos civiles y políticos consignan también deberes y responsabilidades especiales que para que sean exigibles deben estar expresamente fijadas por la ley. Entre esos deberes y responsabilidads figuran universalmente los que se derivan del respeto a los derechos, a la libertad y a la reputación de los demás; así mismo los que son consecuencia de la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud o la moral pública, todo ello como viene esta blecido en los pactos internacionales para el desarrollo

de los principios incluidos en la declaración universal de los derechos del hombre.

En estos momentos, un mal entendido ejercicio de la libertad de expresión viene rebasando las fronteras que le san propias y la pornografía, la violencia, las ofensas a la reputación de las personas o de las instituciones y en general los ataques a la intimidad y al respeto personal son abusos que merecen ser sancionados mediante la correspondiente sanción penal especialmente cuando se producen en libros, publicaciones periódicas, periódicos, radio, televisión y otros medios de comunicación social o que llevan consigo la publicidad.

A todas luces sería deseable una clara y ejemplar tipificación penal de estas conductas.

5.ª *Reforma del artículo 501, 5.º del Código Penal*

Se propone la adición a dicho número de un inciso que pudiera decir: «Salvo que corresponda mayor pena con arreglo a la escala del artículo 505, en cuyo caso será ésta la aplicable».

La razón es evidente, pues, en la redacción actual, se llega a la conclusión paradójica y de hecho muy frecuente que robos sólo con fuerza en las cosas resulten castigados con pena mucho más grave que realizados con fuerza o intimidación en las personas. Un atraco con botín superior al millón de pesetas resulta ahora más levemente penado que un robo con fractura, escalo o llave falsa e incluso que un simple hurto por esa cuantía.

También en este artículo convendría incluir, en el párrafo final o en el artículo 506, entre las circunstancias de agravación, la de «haberse asegurado los culpables ya disposición de un vehículo de motor sea para facilitar sus propósitos o favorecer la huída», independientemente de que ese vehículo hubiere sido utilizado lícita o ilícitamente pues si el vehículo hubiere sido sustraído a

nu tercero esa sustracción constituiría infracción independiente.

6.ª *Reforma del artículo 512 del Código Penal*

La que se propone tiende a que el robo se considere consumado no sólo cuando se produzca el resulta lesivo para la vida o la integridad física de las personas, sino también cuando se haya manifestado la conminación intimidatoria y podría tener el siguiente texto: «Los delitos comprendidos en este Capítulo quedan consumados cuando se produzca la violencia o intimidación en las personas aunque no se hayan perfeccionado los actos contra la propiedad propuestos por el culpable».

La razón también es patente. En la interpretación del texto actual se ha consagrado que para que el robo haya de considerarse consumado es necesario que se hayan llegado a producir lesiones físicas por lo que, entre otras hipótesis, los atracos a mano armada en que el atracador no consiga hacerse con el botín han de estimarse como frustrados y por consiguiente con la desproporcionada pena por excesivamente leves de arresto mayor que corresponde al robo frustrado del artículo 501, 5.º

7.ª *Reforma del artículo 429 del Código Penal*

Desdichadamente se viene registrando un aumento inusitado en las violencias sexuales cuya naturaleza ultrajante, en grado sumo, contra la dignidad de la mujer se agrava con la agresión física cuyos resultados lesivos para la salud física y moral de la ofendida son muy graves y, en algunos casos con daño irreparable para su salud.

La violación, in genere, tiene sañalado un severo castigo aunque su valor itimidatorio, por diversas circunstancias, no haya sido suficiente para frenar tales atentados.

Sin embargo, sin elevar las penas, sería conveniente que las violencias sexuales contra impúberes, comprendidas en el número 3.º del 429, se castigaran como violación consumada cuando por la corta edad y desarrollo físico de la víctima no hubiere llegado a realizarse la consumación material del yacimiento para lo cual bastaría añadir a dicho número 3.º un inciso que pudiera decir: «En este caso se castigará como consumada la violación aunque por la corta edad de la víctima no hubiere llegado a realizarse el propósito criminal y, en todo caso siendo la ofendida menor de seis años».

8.ª *Reforma del artículo 464 del Código Penal.*

Entre los abusos de la libertad de expresión de que ya se hizo mención en el número 4.º de este escrito se vienen registrando formas insidiosas y solapadas de acusación que tienden a poner en entredicho el honor y buena fama de personas e instituciones constituyendo un atentado contra la reputación de los afectados y, muchas veces, un ataque a la esfera de la intimidad personal. Tales agresiones encajan difícilmente en los tipos de injuria o calumnia pero cabría comprenderlas en las formas de ataque encubierto a que se refiere este artículo 464 y, sobre todo, si se le añadiera un nuevo inciso o párrafo que pudiera decir: «A estos efectos se entenderá que constituyen calumnia o injuria encubierta cualquier acusación o afirmación insidiosa que directa o indirectamente pueda afectar a la honra, crédito o estimación social de otra persona».

9.ª *Reforma del artículo 516 bis del Código Penal.*

Entre los delitos contra la propiedad viene destacando, por su frecuencia, el hurto de vehículos de motor hasta el extremo de que hoy ocupan un primer lugar en el orden cuantitativo de las infracciones y cada día au-

mentan en número, así como en la gravedad de las circunstancias que rodean la perpetración de estos hurtos o robos por la osadía, la violencia y peligrosidad con que se cometen muchos de ellos y por la finalidad ulteriormente delictiva que persiguen sus autores proponiéndose la utilización del vehículo sustraído para mejor realizar o procurar la impunidad de otros hechos delictivos.

Técnicamente, la sustración de vehículos no es más que una forma de apropiación de cosa ajena incrimiable, según sus circunstancias, en las figuras de robo, hurto, apropiación indebida o estafa.

Sin embargo, el apoderamiento de vehículos presenta dificultades para su apropiación definitiva —registro de automóviles, riesgo de la matrícula falsa, complejidad de los desguaces...— que conduce a que los culpables se deshagan más pronto o más tarde del automóvil después de haber hecho uso de él y, las más de las veces, agotada la gasolina, golpeado o averiado, desvalijado y dejándolo en abandono por cualquier lugar sin que la verdadera intención sea la de restituirlo a su dueño, sino simplemente la de renunciar a su inútil y comprometedora tenencia.

El legislador de 1950 construyó como figura especial la mera utilización de vehículos de motor ajeno agravándola para el conductor habitual y bastante más cuando la utilización ilícita tuviera por objeto la comisión de un delito o procurar su impunidad (arts. 9 y 10 de la Ley de 9 de mayo de 1950).

El artículo 10 de la Ley de 24 de diciembre de 1962 condujo estas hipótesis a la clásica y olvidada figura del hurto de uso.

En las reformas penales de 1967 y 1974 se inserta en el Código Penal (hoy en el art. 516 bis) esta figura del hurto de uso de automóviles, sin emplear tal denominación, agravando la sanción hasta hacerla semejante a la del hurto o robo común si el culpable dejare transcurrir veinticuatro horas sin restituir «directa o indirectamente el vehículo» y una interpretación extensiva ha venido

a considerar restitución indirecta el mero abandono del automóvil. Es de notar que inexplicablemente se ha suprimido la forma agravada consistente en el empleo del vehículo para cometer un delito o para procurar su impunidad.

En la aplicación actual de estos preceptos y habida cuenta de que los autores son, generalmente, menores de edad, la levedad resultante de las penas conduce a que, de hecho, esta clase de infracciones resulten en general impunes, ya que la detención o prisión de los autores no pueda legalmente mantenerse a pesar de la alarma que tales hechos provocan.

En su consecuencia sería deseable una reconsideración de estos tipos penales bien derogando simplemente el artículo 516 bis, bien manteniendo, pero con carácter general la figura del hurto de uso para cualquier especie de cosa u objeto, pero en todo caso exigiendo una restitución efectiva e inmediata después del uso momentáneo o bien agravando las sanciones del dicho artículo 516 bis.

10.ª *Reforma de los artículos 519 y siguientes del Código Penal.*

En los momentos actuales se registran fenómenos perturbadores e inquietantes en el régimen de las empresas y de los negocios que se manifiestan en la provocación de insolvencias culpables, a veces simuladas, alzamiento de bienes y otros medios de fraude colectivo cuya responsabilidad aparece consignada en las leyes penales con levedad que contrasta, dada la cuantía de algunos de estos fraudes con la que las leyes penales señalan para las defraudaciones en general. La pena de arresto para el alzamiento de bienes de los no comerciantes, la conminación de igual pena para el concursado culpable o la de presidio menor para el concursado o quebrado que establece los artículos 521 y siguientes

creemos que deben ser elevadas. Pero sobre todo existe un vacío legal que conduce a la impunidad absoluta de las suspensiones de pago culpables o fraudulentas que no debe mantenerse por más tiempo. Urge, pues, la tipificación penal de estas conductas que hoy son, desdichadamente, de alarmante frecuencia.

11.ª *Tipificación del delito de «chantage».*

La figura del chantage requiere urgentemente su definición penal con la sanción adecuada. Para ello podría introducirse en el artículo 529, dentro del grupo de las infracciones agravadas que hoy está constituido por los párrafos segundo, tercero y cuarto de dicho artículo una nueva figura que podría expresarse en éstos o parecidos términos:

«Los que mediante la amenaza de proceder a revelaciones o imputaciones difamatorias o para no formular acusación o denuncia exigieren la entrega de cantidad o cualquier otra forma de lucro.»

12.ª *Reforma de los artículos 284 y 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.*

Conforme a la redacción actual de estos artículos, la policía está obligada a dar conocimiento de sus actuaciones y del atestado que forme a «la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal», generalmente se cumplen estos preceptos dando cuenta, como es natural, sólo a la Autoridad Judicial, salvo casos excepcionales. Dada la facilidad que hoy existe para la reproducción de documentos no representa ninguna dificultad que también se comunique, por copia, los atestados y actuaciones al Ministerio Fiscal, lo que facilitaría extraordinariamente su intervención y el ejercicio de sus funciones. Para ello bastaría con sustituir la conjunción disyuntiva por la copu-

lativa de manera que dijera: «a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal».

La actuación del Ministerio Fiscal para que sea eficaz exige que sus funcionarios tengan conocimiento de inmediato de los hechos que requieran su intervención. En las poblaciones donde existe Juzgado de Guardia la adscripción de un funcionario también en función de guardia, viene facilitando ese conocimiento inmediato; pero no así en las localidades donde no funciona con rigor ese servicio y especialmente en aquellas en las que no existe más que un sólo Juzgado.

13.ª *Reforma del Real Decreto-Ley 1/1977, de 4 de enero, en lo referente a la competencia de la Audiencia Nacional.*

En lo referente a la competencia de la Audiencia Nacional ha suscitado dudas y dificultades de aplicación la fórmula del apartado c) del artículo 4.1:

c. «Los de tráfico ilícito de drogas tóxicas o estupefacientes, fraudes alimenticios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, los relativos a la corrupción y prostitución, así como los de escándalo público, cuando se realicen por medio de publicaciones, películas u objetos pornográficos, siempre que todos ellos sean cometidos por *bandas o grupos organizados* y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias Provinciales».

El principal obstáculo para la interpretación lógica de este precepto estriba en el entendimiento de lo que ha de comprenderse en la expresión «bandas o grupos organizados», pues parece —y así se ha interpretado— que tiene un sentido peyorativo a grupos o cuadrillas de facinerosos y nunca a colectivos sociales en forma regular de empresa.

Sin embargo, es notorio que bajo formas respetables de sociedades, consejos de administración y otras titu-

laridades empresariales, se llevan a cabo «negocios», muy lucrativos, de comercialización de la pornografía, adulteraciones alimenticias, farmacéuticas y de otros órdenes que precisamente por el poder y capacidad de acción de esos grupos, revisten mayor peligrosidad, más grave culpabilidad y suponen más dificultad en su investigación.

Convendría, pues, suprimir la expresión «... todos ellos sean cometidos por bandas o grupos organizados y...».

También el artículo 5. 1.ª debiera ser objeto de reforma porque viene dando lugar a grave entorpecimiento en el trámite.

Para la aceptación del conocimiento de los hechos que son de la competencia de la Audiencia Nacional, dicho precepto se remite al 782. 2.ª, regla pensada para otras muy distintas situaciones y no para las relaciones entre los Jueces de Instrucción y los Jueces Centrales que son exactamente de su mismo nivel.

Con la aplicación de esa norma, tal como viene siendo entendida, se da lugar a que la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales no empiecen a actuar hasta transcurridas semanas y aun meses después de haber ocurrido los hechos y cuando la instrucción ha perdido toda o casi toda su eficacia investigadora.

Siendo los hechos de que conoce la Audiencia Nacional, las más de las veces, de extraordinaria gravedad o complejidad, para lograr la necesaria inmediación que ahora no existe, bastaría con sujetar el trámite de las competencias entre los Juzgados Centrales y los Ordinarios de Instrucción a la normativa general y común, o bien cabría reforzar esa inmediación estableciendo de modo más enérgico la efectividad de la competencia de los Juzgados Centrales en términos que fuera posible su constitución en el lugar de los hechos tan pronto como fueran conocidos.

# CIRCULARES

## CIRCULAR NUM. 1/1977

## LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE CONCEDE AMNISTIA PARA DETERMINADOS DELITOS

La Ley 46/1977, de 15 de los corrientes, publicada en el *Boletín Oficial del Estado* del día 17, concede amnistía para delitos y faltas de intencionalidad política y para diversas figuras específicas de infracción penal, laboral y administrativa, culminando el proceso de medidas de gracia y olvido encaminadas a promover la pacificación de los espíritus, la reconciliación y la concordia nacional.

Lo extraordinario de la materia, la complejidad de las normas que contiene esta Ley y las dificultades de interpretación que plantea en algunos puntos hace necesaria esta instrucción general, que se redacta en ejercicio de las facultades que establece el artículo 3.º del Estatuto del Ministerio Fiscal y el artículo 87 de su Reglamento, para procurar la uniforme interpretación de la Ley por todos los Fiscales, en servicio del principio de unidad que gobierna nuestra Institución y sin perjuicio de las instrucciones especiales que los señores Fiscales puedan recabar, por vía de consulta, cuando la dificultad del caso o cualquiera otra circunstancia lo requiera.

### I

### AMBITO DE APLICACION DE LA AMNISTIA

La Ley contiene una gran variedad de supuestos, con distinto contenido objetivo e incluso con diferente ám-

bito temporal, que conviene reducir a sistema para facilitar su examen. A estos efectos cabe entender que no es una, sino varias, las amnistías concedidas, unas generales y otras especiales, sujetas cada una a condiciones y tratamiento distinto, por lo que resulta lógico considerarlas por separado.

De un lado, en el artículo 1.º, vienen a concederse tres amnistías generales —generales en el sentido de que no se especifican las infracciones, sino que incluyen, genéricamente, "todos los actos de intencionalidad política... tipificados como delitos y faltas". De otro, en los artículos 2.º y 3.º, en sus diversas hipótesis, se contienen amnistías especiales por cuanto hacen referencia a determinados y concretos tipos de infracción. Son también de carácter general las establecidas en los artículos 4.º —faltas disciplinarias y gubernativas— y 5.º infracciones laborales y sindicales.

Siguiendo este orden sistemático, examinaremos:

1.º *Amnistía general para todos los delitos y faltas de intencionalidad política realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976 —artículo 1.º, apartado I, a) y los delitos y faltas conexos con aquéllos —apartado II, segundo párrafo.*

a) *Ambito temporal.*—No ofrece duda que comprende las infracciones cometidas hasta el 14 de diciembre de 1976 inclusive, cualquiera que sea la antigüedad del hecho y el estado procesal de las actuaciones o de la ejecutoria.

Sin embargo, la temporalidad del hecho no ha de referirse al momento consumativo, pues establece el apartado II, párrafo primero, que "se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal", lo que retrotrae y, por consiguiente, incluye en período más favorable de la amnistía o en la amnistía misma hechos cometidos —en sentido técnico— después de sus fechas límites.

Resulta así de singular trascendencia la determinación de lo que ha de entenderse por acto inicial de la actividad criminal, para lo que hemos de guiarnos por criterios amplios, en consonancia con el espíritu y la letra de la Ley.

En este sentido, por acto inicial de la actividad criminal habrá de entenderse no sólo el hecho directo y exterior por el que comienza la ejecución del delito, como determina el párrafo tercero del artículo 3 del Código Penal, sino también cualquiera de los actos preparatorios típicos definidos en el artículo 4 del mismo Código (conspiración, proposición o provocación-inducción) que le hubieran podido preceder.

Las dificultades que entraña esta interpretación extensiva sólo pueden ser salvadas mediante la exigencia rigurosa de prueba sobre la real existencia del acto inicial al que se pretenda retrotraer la aplicación de la amnistía y su enlace lógico, directo y concreto con el hecho criminal que habría de resultar amnistiado.

Otra cuestión que se ha de plantear, en lo que se refiere a la temporalidad, habrá de ser relativa a las infracciones conexas —de las que luego nos ocuparemos especialmente—, tanto si la infracción accesoria ha precedido a la principal —delito cometido como medio para cometer el principal o faciliar su ejecución— o la ha seguido —delito cometido para procurar la impunidad del principal—, cuestión que habrá de resolverse por la fecha de la más antigua de las infracciones conexas.

Con análogo criterio habrán de ser considerados los delitos permanentes, los de tracto continuo o cortado y, en general, todos los tipos simples, complejos o compuestos que conecten diversos actos en un desarrollo temporal más o menos prolongado.

No es posible, ni siéndolo resultaría recomendable, entrar en mayores especificaciones o casuismos, pero

baste, para terminar estas consideraciones sobre la temporalidad, mencionar el caso del encubrimiento, que, cualquiera que sea su discutida naturaleza —grado de participación o delito autónomo contra la Administración de Justicia—, a los efectos que examinamos aparece tan estrechamente ligado con la infracción encubierta que su fecha, a efectos de amnistía, habrá de retrotraerse a la de aquélla.

b) *Ambito objetivo.*—Alcanza, como es visto, a todas las infracciones de intencionalidad política, sin consideración a su resultado ni a ninguna otra circunstancia.

Lo que se haya de entender por infracciones de intencionalidad política se examinó con bastante detenimiento en la Circular de esta Fiscalía de 13 de agosto de 1976, a la que nos remitimos y de la que conviene recordar especialmente los siguientes párrafos:

"Los Fiscales al dictaminar las causas y sostener u oponerse a la aplicación de la amnistía habrán de fundarse, si se hubiese dictado sentencia, en los pronunciamientos de éstas sobre móviles o finalidades de la infracción y en los datos que resulten o se deduzcan de sus resultandos, considerandos y fallo."

"En las causas en tramitación se atenderá a los pronunciamientos del auto de procesamiento y además a lo que resulte o se desprenda de todas las actuaciones del proceso, reclamándose, en caso necesario, la práctica de las diligencias de prueba que estimen necesarias para la caracterización del delito."

"En el espíritu de amplitud que inspira la decisión de la Corona habrá de entenderse que la "intencionalidad política" no sólo habrá de ser considerada en las infracciones contra la organización del Estado, sus instituciones y magistraturas, sino también en las de carácter político-social."

"A título de orientación, habrá de presumirse la intencionalidad política, salvo que la excluya la naturaleza específica de la infracción, en los delitos comprendidos en el Título I del Libro II del Código Penal —Contra la seguridad exterior del Estado— y en el Título II del mismo Libro —Contra la seguridad interior del Estado— y las correlativas faltas definidas en el Capítulo II del Título I del Libro III, así como los delitos enumerados en el artículo 3.º de la Ley de 2 de diciembre de 1963 en lo que amplíen aquellas enumeraciones. Las demás infracciones penales, aunque normalmente no son motivadas por intenciones políticas, ello no excluye que los Fiscales indaguen sobre la existencia de tales motivaciones con la minuciosidad necesaria."

Es de señalar que los criterios expuestos en los párrafos anteriores resultaron legalmente ratificados por el artículo 2 del Real Decreto-Ley 19/1977, de 14 de marzo, en cuanto declaró incluidos de iure, como infracciones de intencionalidad política, los delitos comprendidos en el Título II del Libro II del Código Penal y en el anexo incorporado a este Código por el Real Decreto-Ley 3/1977, de 4 de enero.

c) *Ambito de conexión.*—Como ya se hizo mención, la amnistía comprende los delitos y faltas conexos con los de intencionalidad política —artículo 1.º, apartado II, párrafo segundo.

Normalmente, los delitos conexos con otro de intencionalidad política aparecen también comprendidos por esa intención. Otra cosa sería el planteamiento de la conexión entre delitos políticos, estricto senso y delitos comunes. Tratándose de delitos conexos en que todos estén teñidos de intencionalidad política es claro que todos quedan comprendidos en el ámbito objetivo de la amnistía, pero la conexión determina efectos de carácter temporal, como antes hemos examinado, con indudable trascendencia.

Para la rara hipótesis de conexión entre delitos de intencionalidad política y otros puramente comunes y ajenos a esa intencionalidad los criterios fiscales no pueden ser amplios ni extensivos.

Por lo pronto, la fácil interpretación de que son delitos conexos los que bajo tal rúbrica enumera el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha de aceptarse con mucha cautela. La conexión a la que se refiere la Ley de Amnistía es la conexión material y no la conexión procesal, que abarca cualquier concurso de infracciones por motivos formales o de fuero (art. 17, 1.º), para facilitación de la prueba (núms. 2.º y 3.º), incluso para favorecer al reo con la limitación de pena en la acumulación del concurso real de infracciones (núm. 5).

Solamente tienen carácter material las conexiones en los supuestos del número 3 —"los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución"— y del número 4 —"los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos"— y a este criterio estricto habremos de atenernos.

2.º *Amnistía general para los actos realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, ambas fechas inclusive, siempre que en la intencionalidad política se aprecie un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicaciones de autonomías de los pueblos de España —artículo 1.º, apartado b).*

Todas las consideraciones anteriores sobre ámbito temporal, objetivo y variaciones determinadas por la conexión, son aplicables a esta amnistía y a la que es objeto del apartado siguiente. Solamente resulta necesario examinar lo concerniente al móvil específico, dentro de la intencionalidad política, que requiere, para este período de tiempo, la aplicación de la amnistía.

Ya no basta la indagación de una intencionalidad política en abstracto, sino que será menester el análisis más a fondo de la infracción, de sus antecedentes e

incluso de la personalidad del sujeto para obtener una base razonable del dictamen fiscal.

A fin de salvar en alguna medida las dificultades que supone tal indagación, no resulta posible otro método que el de auxiliarnos, en los casos dudosos, por un orden de presunciones "ad hominem" que se correspondan con el sentido general de estas medidas de gracia.

En su consecuencia, se habrá de presumir que los actos delictivos se dirigieron al restablecimiento de las libertades públicas:

— Cuando aparecieren perpetrados con intención o tendencia a acelerar el proceso de democratización de las instituciones o de remover los obstáculos, reales o supuestos, contrarios a ese desarrollo democrático.

— Cuando consistieren en excesos individuales o colectivos en apoyo, exigencia o pretendido amparo de derechos humanos, políticos, sociales o cívicos.

— Los cometidos por personas pertenecientes o adheridas a asociaciones políticas hoy legalmente reconocidas y en defensa de los postulados político-sociales de tales asociaciones o partidos.

Igualmente que son en reivindicación de autonomías cuando las mismas actitudes y circunstancias se refieran a las regiones o a los pueblos de España en afirmación, fuera de las vías legales, de sus instituciones y libertades propias.

3.º *Amnistía general para los actos realizados entre el 16 de junio y el 6 de octubre de 1977, ambas fechas inclusive, en los mismos términos que la anterior, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas —artículo 1.º, apartado c).*

Concurriendo los mismos datos que en las anteriores, sólo hemos de referirnos a la cláusula de exclusión: "violencia grave contra la vida o la integridad de las personas".

Desde luego, suponen violencia grave, en ese sentido, todos los delitos contra las personas del Título VIII, Libro II del Código Penal, salvo las lesiones menos graves, en cualquier grado de ejecución y en cualquier forma de participación. Asimismo, cualquiera otra infracción en la que la muerte o lesiones graves constituyan elemento del tipo penal.

## II

## AMNISTIAS ESPECIALES

Aparecen concedidas en los artículos 2.º al 4.º y, habida cuenta de que no están sujetas a los condicionamientos de intencionalidad política ni a ninguna de las demás exigencias que el artículo 1.º señala para los distintos períodos de tiempo que comprende, sino a los requisitos y condiciones particulares que para cada amnistía especial se consignan, lo único que, en términos generales, puede suscitar duda es la del ámbito temporal para estas infracciones, duda que se resuelve fácilmente considerando que el único límite absoluto que se señala en la Ley es el del 6 de octubre actual y a él habremos de atenernos.

Las amnistías especiales que afectan a nuestra jurisdicción son:

1.ª *Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política conocidos en el ejercicio profesional (artículo 2.º c).*

Estas infracciones, que lo serían de desobediencia por la negativa a prestar testimonio, basada en un supuesto deber de sigilo profesional, son de hecho inexistentes en la vida de nuestros Tribunales, por lo que carece de interés práctico intentar extendernos en el análisis e interpretación del texto, que, por otra parte,

es suficientemente claro y no parece que plantee ninguna duda.

2.ª *Los actos de expresión de opinión realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación (artículo 2.º d).*

Resulta valedero lo que en la Circular de 13 de agosto de 1976 se consignaba respecto a estas infracciones de opinión y que transcribimos a continuación:

"Por "opinión", según su significado usual, habrá de entenderse la mera expresión de juicios, doctrinas, ideas o pareceres y, en tal sentido, son infracciones de opinión las que vulneran las restricciones impuestas a las libertades de manifestación del pensamiento y de expresión de las ideas, que, en sentido amplio, abarcarán no sólo las transgresiones materiales, sino también las de carácter formal (por ejemplo, los impresos clandestinos, del art. 165 del Código Penal), las exteriorizaciones directas y también las indirectas (uso de lemas, banderas, símbolos o emblemas, etc.), las expresiones fríamente críticas y las de carácter peyorativo o violento (tales como gritos, denuestos, ultrajes, injurias y calumnias), las que se reducen a la esfera del pensamiento y las del propio contenido delictual trascendente (como la provocación o apología del delito)."

"El espíritu amplio del Real Decreto-Ley justifica la interpretación extensiva, de modo que la amnistía comprenda entre estas infracciones de opinión no sólo los delitos y faltas de prensa e imprenta, reuniones y manifestaciones ilícitas y propagandas ilegales, etc., sino también todos aquellos de exteriorización de un proceso intelectual o de un estado anímico, con excepción hecha de los delitos de injuria o calumnia perseguidos a instancia del ofendido, los cuales también están comprendidos en la amnistía si mediare perdón del mismo."

Solamente es de observar que ahora para la aplica-

ción de la amnistía, a diferencia de la anterior, no es necesario el perdón del ofendido.

Tradicionalmente las medidas de gracia excluyeron los delitos privados, exclusión puesta en tela de juicio por cuanto parecía significar una prevalencia de la voluntad persecutoria del particular sobre la persecución pública; porque se olvidaba que los delitos públicos también agravian a los particulares perjudicados y, en general, mucho más gravemente; porque el "ius puniendi" corresponde exclusivamente al Estado y cuando dispone de él lo hace solamente en consideración al bien común y a los intereses generales del Estado.

Esta tendencia alcanzó reconocimiento y sanción en nuestro Derecho positivo por el Real Decreto 2.940/1975, de 25 de noviembre, que ya no excluyó del indulto general a los delitos privados, como puso de relieve la Circular de esta Fiscalía núm. 4/1975, de 1.º de diciembre de 1975, lo confirmó el Real Decreto de Indulto 388/1977, de 14 de marzo, y ha venido a ratificarlo esta Ley de Amnistía, cuyo texto aprobado por las Cortes se separa significativamente en este punto de los anteproyectos parlamentarios que se hicieron públicos y que seguían la antigua tradición excluyente de los delitos privados.

3.ª *Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley (artículo 2.º e).*

El ámbito de esta amnistía aparece expresado con gran amplitud objetiva, pues abarca toda clase de delitos y faltas, tanto los que por razón de la cualidad del sujeto aparecen incluidos en el Título VII del Libro II del Código Penal —"Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos"— como cualquier otra forma de infracción penal definida en el Código Penal o en las leyes penales especiales y sin consideración al resultado producido. Comprende las extralimitaciones

del sujeto que hayan sido tendentes al éxito de la investigación y persecución o entorpecimiento y contrarias; haya sido por exceso de celo o contrariando sus deberes, haya sido por móviles altruistas o por motivaciones personales y egoístas y, en fin, no importa que los delitos o faltas hayan sido dolosos o culposos.

Pero toda esa amplia objetividad se reduce a la ocasión o motivo que señala taxativamente la Ley, lo cual requiere para la aplicación de la amnistía:

— Que conste puntualmente la existencia de un hecho constitutivo de infracción penal que haya sido amnistiado o que corresponda ser amnistiado conforme a los preceptos de esta Ley —aunque lo haya sido por aplicación de anterior amnistía, siempre que también lo hubiera sido por ésta.

— Que conste la participación oficial del sujeto en las tareas de investigación o persecución del caso, sea en la esfera policial o en la judicial, sea solamente por hechos constitutivos de infracción amparada en esta amnistía o ligada con otro u otros hechos excluidos, siempre que se imputen o estén en relación con el mismo sujeto y con la misma ocasión.

4.ª *Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas (artículo 2.º f).*

Casi con esta misma rúbrica comprende el Código Penal en su Libro II, Título II, Capítulo II, Sección 2.ª —"Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes"— un conjunto de figuras penales que indudablemente quedan comprendidas en esta amnistía.

5.ª *Los quebrantamientos de condenas impuestas por delitos amnistiados, los de extrañamientos acordados por conmutación de otras penas y el incumpli-*

*miento de condiciones establecidas en indultos particulares (artículo 3.º).*

Ninguna duda resulta del examen de este texto.

6.ª *Las infracciones de naturaleza laboral y sindical consistentes en actos que supongan el ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores en normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad (artículo 5.º).*

Las infracciones de naturaleza laboral pueden resultar del quebrantamiento de normas correspondientes a distintos ordenamientos legales, pero, a los efectos de la amnistía y de esta Circular, sólo han de ser tenidas en cuenta las que hubieren dado lugar a sanción disciplinaria para el trabajador.

Conforme al texto de la Ley, la aplicación de la amnistía para esas infracciones de normas disciplinarias requiere:

— Que resulte la existencia de una sanción disciplinaria cualquiera.

— Que conste la infracción que la motivó.

— Que dicha infracción consista o se derive del ejercicio por el trabajador de derechos reconocidos en normas de carácter internacional vigentes en la actualidad.

— Que la infracción aparezca cometida con cualquier antigüedad, incluso antes de que la norma de carácter internacional se hubiera incorporado a nuestro Derecho interno; pero siempre antes del 6 de octubre actual, fecha límite para los efectos de la amnistía.

## III

## PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE LA AMNISTIA

A) *Organos competentes.*

Establecido en el artículo 9.º de la Ley que "la aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con

exclusividad a los Jueces, Tribunales y Autoridades Judiciales correspondientes", resulta, con arreglo a lo prevenido en el artículo 9.º y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que corresponde esa facultad al Juez o Tribunal que esté conociendo o haya conocido de la causa.

Por consecuencia, en términos generales, a los Jueces de Distrito en materia de faltas y, en materia de delito, según el estado que mantenga el proceso, los Jueces de Instrucción, las Audiencias Provinciales o los Tribunales superiores en razón de competencias especiales.

En materia laboral, la tramitación y decisión corresponde a la Magistratura de Trabajo, competente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2, así como en los demás concordantes del Texto Refundido de Procedimiento Laboral.

B) *Tramitación.*

Con arreglo al artículo 9.º de la Ley, "La amnistía se aplicará de oficio o instancia de parte con audiencia, en todo caso, del Ministerio Fiscal. La acción para solicitarla será pública y los Jueces o Tribunales adoptarán sus decisiones de acuerdo con las Leyes procesales en vigor y con carácter de urgencia".

Respecto al momento en que haya de ser aplicada la amnistía, el mismo artículo 9.º establece que "cualquiera que sea el estado de tramitación del proceso".

En su consecuencia, si el proceso está en período de iniciación en virtud de denuncia, incluidos los atestados de la Policía Judicial, si la infracción denunciada estuviere comprendida en la amnistía procederá la aplicación de lo dispuesto en el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que el hecho amnistiado ya no reviste carácter de delito. Si se estuviere en trámite de admisión de querella habrá de ser desestimada con

arreglo a lo preceptuado en el artículo 313 del mismo Texto legal, por la misma razón.

Si se hubiese iniciado el procedimiento, la competencia y la forma de decisión para la aplicación de la amnistía dependerá de la naturaleza de tal procedimiento y de la fase procesal en que se encuentre.

En las diligencias previas lo procedente será su archivo, conforme a lo dispuesto en la regla primera del artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En las diligencias preparatorias lo procedente será el sobreseimiento libre del núm. 2.º del artículo 637, conforme a lo dispuesto en la regla segunda del artículo 791 del mismo texto.

En los sumarios, tanto de urgencia como ordinarios, así que conste la naturaleza de la infracción y resulte incluida en la amnistía lo procedente será que se declare concluso el sumario, sin más, y se eleve a la Audiencia o Tribunal competente.

En las causas obrantes en la Audiencia, estén o no calificadas y estén o no sentenciadas, procederá la aplicación de la amnistía mediante resolución que declare extinguida la responsabilidad penal, con arreglo al núm. 3 del artículo 112 del Código Penal.

La preceptiva intervención del Fiscal en todos estos casos podrá revestir dos formas: pidiendo la aplicación de la amnistía cuando lo estimare procedente o dictaminando sobre esa procedencia cuando haya mediado petición de cualquier persona, puesto que la acción para solicitar la amnistía es pública, o bien el órgano judicial se proponga aplicarla de oficio.

Especialmente cuidarán los Fiscales de que se dé cumplimiento a lo que dispone el artículo 10 de la Ley, relativo a la puesta inmediata en libertad de los beneficiados por la amnistía que se hallaren en prisión y que se dejen sin efecto las órdenes de busca y captura y no sólo de quienes estuvieren declarados en rebeldía, sino

de cualquier persona que con motivo de la causa por el delito amnistiado estuvieren reclamados y se hubiese ordenado su presentación, detención, prisión o se hubiese formulado petición de extradición, en cuyo caso se comunicará al Ministerio de Justicia por el conducto procedente el desistimiento de la pretensión.

Respecto a la aplicación de la amnistía a infracciones laborales que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de derecho activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena, los Fiscales observarán, en principio, las siguientes reglas en su intervención:

1.° Velarán, por los medios a su alcance, para que las peticiones de aplicación de la amnistía se sustancien con las necesarias garantías, para lo cual interesarán que se sujeten al trámite establecido en los artículos 71 y siguientes del Texto Refundido de Procedimiento Laboral y aprobado por Decreto 2.381/1973, de 17 de agosto.

2.° Dictaminarán una vez concluido el juicio, a la vista de los autos y de los del juicio, sobre la imposición de la sanción, si se hubieren seguido.

3.° En el caso de que su dictamen sea favorable a la aplicación de la amnistía solicitarán o apoyarán la solicitud de las medidas de restitución que procedan, conforme al artículo 8.° de la Ley.

4.° Corresponderá intervenir al Fiscal de la Audiencia a cuyo territorio corresponda el de la Magistratura de Trabajo.

En todos los casos los medios de impugnación de las resoluciones judiciales adoptadas habrán de ser los normales utilizables contra la respectiva resolución.

## IV

## EFECTOS DE APLICACION DE LA AMNISTIA

Con arreglo a lo prevenido en los artículos 6.°, párrafo

primero, y en el 7.º, apartado *c)*, los efectos de la amnistía son los propios de estas excepcionales medidas: "extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio" y "eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales aun cuando el sancionado hubiese fallecido".

Asimismo, en las amnistías laborales, conforme dispone el artículo 8.º de la Ley, la restitución a los afectados de todos los derechos que tendrían al momento de serles aplicada la amnistía de no haberse producido la medida amnistiada.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.

Madrid, 20 de octubre de 1977.

# CONSULTAS

## CONSULTA NUM. 1/1977

## CHEQUE EN DESCUBIERTO

EXCMO. SR.:

En su escrito de 16 de los corrientes consulta V. E. la calificación penal procedente para una emisión de cheque en descubierto por valor inferior a 5.000 pesetas y con propósito consumado de defraudar en su cuantía al tomador del efecto.

Como expresa V. E. en su Consulta, "así como la coordinación entre el libramiento de cheque en descubierto y la estafa aparece clara en la Ley cuando la cuantía de la defraudación y el importe del cheque exceden de 5.000 pesetas y el hecho, en consecuencia, es, en todo caso, delito, no ocurre lo mismo si el importe del cheque no rebasa la cantidad señalada".

Efectivamente, el párrafo final del artículo 563 bis *b)* del Código Penal dice: "lo ordenado en este artículo deberá entenderse salvo el caso previsto en el artículo 529, núm. 1, de este Código", haciendo referencia exclusivamente al concurso del delito de cheque en descubierto con el delito de estafa, pero sin incluir ni comprender el caso contemplado de concurso con la falta de estafa.

En este caso la concurrencia de la emisión de cheque sin provisión, penada en el 563 bis *b)*, 1.º, y constituyendo medio o instrumento para cometer la falta de estafa del 587, 3.º, al no existir regla especial que lo resuelva habrán de aplicarse las fórmulas generales de concurrencia de infracción y no siendo tampoco aplica-

ble el artículo 71 del Código Penal, como tiene declarado la Sentencia de 20 de junio de 1970, se impone lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, debiendo calificarse como más grave el delito de emisión de cheque en descubierto y en lo tocante a la reclamación de responsabilidad civil, existiendo un perjuicio patrimonial concreto y directo por la cifra de lo efectivamente defraudado, habrá de reclamarse tal cifra de responsabilidad en favor del perjudicado como excepción a la regla general mantenida por constante jurisprudencia de que no es procedente la exigencia de responsabilidad civil meramente por el valor o cuantia del cheque impagado por falta de provisión de fondos.

Procede en consecuencia, como V. E. propone acertadamente en el párrafo final de su Consulta, que el hecho se califique como constitutivo de delito de cheque en descubierto y con la petición de indemnización civil para el perjudicado por la defraudación consumada.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 24 de marzo de 1977.

## CONSULTA NUM. 2/1977

## APLICACION DEL INDULTO AL CONTENIDO DEL ARTICULO 67 DEL CODIGO PENAL

ILTMO SR.:

Consulta V. I., en su escrito de fecha 22 de los corrientes, sobre la aplicación del indulto concedido por Real Decreto 388/1977, de 14 de marzo, a la prohibición de residencia en el lugar de comisión del delito o en el que resida la víctima o su familia, impuesta por esa Audiencia en causa seguida por abusos deshonestos, en ejercicio de la facultad que a tal efecto concede a los Tribunales el artículo 67 del Código Penal.

El artículo 4.º del referido Real Decreto concede indulto por la cuarta parte de las penas impuestas o que puedan imponerse "por todos los delitos y faltas no incluidos en el Capítulo anterior y comprendidos en el Código Penal", estableciendo que ese indulto "nunca será inferior a un año", tiempo que es precisamente el señalado por el Tribunal en el caso de autos.

Los mencionados preceptos, como se ve, no excluyen del indulto ninguna clase de penas de duración o medida temporal y la cuestión que V. I. plantea es la de si la prohibición de residencia a que nos venimos refiriendo es una pena o una medida de seguridad, caso este último que excluiría la aplicación del indulto.

La naturaleza de dicha sanción ha sido examinada por la Sentencia que V. I. cita de fecha 8 de octubre de 1968, así como las posteriores de 22 de marzo de 1969 y la más reciente y explícita de 14 de octubre de 1975.

En el conjunto de estas resoluciones y especialmente en la de 14 de octubre de 1975 se establece como doctrina que la prohibición de residencia del artículo 67 del Código Penal es de naturaleza mixta y ambivalente, pues tanto participa del carácter de pena análoga a la de destierro como a medida de seguridad preventiva y tutelar de la víctima y sus familiares contra posibles actuaciones futuras del delincuente.

Siendo así, es innegable que en todo o en parte la medida del artículo 67 tiene carácter de pena y, por consiguiente, dada la amplitud y generosidad que inspira las medidas de gracia del referido Real Decreto, resulta procedente que se beneficie del indulto.

En consecuencia, ajustará V. I. sus actuaciones al expresado criterio.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 28 de marzo de 1977.

## CONSULTA NUM. 3/1977

## APLICACION DEL INDULTO DE 14 DE MARZO DE 1977 A PENADOS QUE DISFRUTEN DE REMISION CONDICIONAL

EXCMO. SR.:

Consulta V. I., en su escrito de 13 de los corrientes, sobre la aplicación del indulto concedido por Real Decreto 388/1977, de 14 de marzo, a aquellos penados a quienes con anterioridad a la publicación de dicho Decreto se les hubiere concedido el beneficio de remisión condicional al amparo de lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes del Código Penal.

Después de exponer V. I., en cuadro comparativo, los beneficios y restricciones del indulto de 14 de marzo y los de la suspensión de condena concluye que en unos casos —señaladamente cuando otorgada la remisión condicional pende el cumplimiento de penas accesorias— parece que resulta más favorable al reo la aplicación del indulto; en otros —por ejemplo, cuando en el mismo caso estuvieran extinguidas las accesorias— parece que le será más beneficiosa la inaplicación del indulto y en otros, en fin, los términos aparecen dudosos.

Aunque en términos generales, y como se manifiesta en la Circular de esta Fiscalía de 24 de enero de 1907, el beneficio de indulto es irrenunciable, la inexcusabilidad del acto de clemencia no puede alcanzar a aquellas situaciones en las que su aplicación cause efectos contrarios a su propio espíritu e intención de beneficiar al reo, es decir, ocasione mayor gravamen o perjuicio objetivo con su aplicación que con su inaplicación.

En su consecuencia, conforme con el parecer de V. I., cuando el penado esté disfrutando del beneficio de suspensión de condena, para la aplicación del indulto del

Real Decreto de 14 de marzo, se estará a lo más beneficioso para el reo cuando esto aparezca con claridad y, en caso de duda, a la voluntad manifestada por el reo, a quien, en su caso, habrá de invitarse a que opte por uno u otro beneficio a fin de que, según prefiera, continúe en la situación de suspensión de condena hasta la remisión definitiva de ésta una vez cumplidas sus condiciones legales, o bien le sea aplicada la gracia de indulto concedida por el Real Decreto de 14 de marzo con la condición resolutoria del beneficio que se establece en el artículo 7.º del mismo Real Decreto.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.

Madrid, 29 de abril de 1977.

# ESTADISTICA

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Diligencias previas del Artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.*

| AUDIENCIAS | Pendientes en 1.º enero 1977 | Iniciadas del 1.º enero a 31 diciembre 1977 | Total de las dos casillas anteriores | TERMINADAS DURANTE 1977, POR | | | | | | Pendientes en 1.º enero 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Archivo por no ser delito el hecho (art. 789/1.º) | Sobreseídas por no ser conocido el autor (art. 789/1.º) | Declaradas falta (art. 789/2.º) | Inhibidas conforme al art. 789/3.º | Convertidas en sumario (art. 789/4.º) | Elevadas a preparatorias (art. 789/5.º) | |
| Alava | 545 | 3.861 | 4.406 | 447 | 1.205 | 952 | 244 | 162 | 610 | 786 |
| Albacete | 362 | 2.624 | 2.986 | 364 | 917 | 582 | 94 | 63 | 544 | 407 |
| Alicante | 1.035 | 15.629 | 16.664 | 2.837 | 7.611 | 2.565 | 455 | 437 | 1.922 | 837 |
| Almería | 386 | 5.728 | 6.101 | 1.225 | 1.969 | 1.043 | 302 | 190 | 822 | 566 |
| Asturias | 1.577 | 14.553 | 16.124 | 3.747 | 5.084 | 2.531 | 373 | 516 | 1.771 | 2.102 |
| Avila | 238 | 1.118 | 1.356 | 279 | 380 | 232 | 30 | 27 | 143 | 265 |
| Badajoz | 710 | 6.090 | 6.800 | 1.233 | 1.595 | 1.106 | 755 | 248 | 945 | 918 |
| Baleares | 1.248 | 9.533 | 10.781 | 1.432 | 3.452 | 1.234 | 140 | 303 | 2.083 | 2.137 |
| Barcelona | 15.044 | 94.563 | 109.607 | 12.264 | 47.611 | 15.465 | 2.696 | 2.969 | 7.026 | 21.576 |
| Burgos | 425 | 5.993 | 6.418 | 1.052 | 1.777 | 1.754 | 259 | 201 | 486 | 889 |
| Cáceres | 399 | 2.935 | 3.334 | 697 | 614 | 1.086 | 207 | 108 | 226 | 396 |
| Cádiz | 2.512 | 12.325 | 14.837 | 2.047 | 4.807 | 1.230 | 426 | 988 | 1.829 | 3.510 |
| Castellón | 472 | 3.820 | 4.292 | 764 | 1.279 | 601 | 146 | 185 | 840 | 477 |
| Ciudad Real | 518 | 3.584 | 4.102 | 945 | 794 | 838 | 202 | 148 | 580 | 595 |
| Córdoba | 1.491 | 13.164 | 14.655 | 2.620 | 4.829 | 3.116 | 1.135 | 542 | 598 | 1.815 |
| Coruña (La) | 2.059 | 13.660 | 15.719 | 3.640 | 3.816 | 3.057 | 732 | 623 | 1.541 | 2.390 |
| Cuenca | 285 | 1.381 | 1.666 | 336 | 290 | 337 | 48 | 88 | 197 | 370 |
| Gerona | 2.264 | 10.231 | 12.495 | 652 | 5.960 | 1.119 | 261 | 392 | 896 | 3.215 |
| Granada | 1.123 | 13.465 | 14.588 | 5.729 | 3.718 | 1.915 | 832 | 329 | 889 | 1.166 |
| Guadalajara | 287 | 1.622 | 1.909 | 334 | 483 | 397 | 33 | 69 | 220 | 373 |
| Guipúzcoa | 1.110 | 8.368 | 9.478 | 989 | 3.399 | 1.896 | 586 | 303 | 1.659 | 1.156 |
| Huelva | 477 | 5.628 | 6.105 | 927 | 1.989 | 891 | 186 | 255 | 810 | 1.046 |
| Huesca | 320 | 2.086 | 2.406 | 563 | 345 | 465 | 65 | 44 | 491 | 433 |
| Jaén | 903 | 5.445 | 6.348 | 1.714 | 1.582 | 799 | 252 | 130 | 425 | 1.446 |
| Las Palmas | 2.392 | 14.929 | 17.321 | 2.579 | 7.532 | 645 | 1.303 | 733 | 1.394 | 3.135 |
| León | 418 | 5.994 | 6.412 | 1.410 | 1.823 | 1.567 | 99 | 237 | 519 | 757 |
| Lérida | 677 | 3.451 | 4.128 | 600 | 1.151 | 534 | 86 | 262 | 707 | 788 |
| Logroño | 305 | 2.706 | 3.011 | 525 | 1.293 | 382 | 121 | 83 | 319 | 288 |
| Lugo | 558 | 3.712 | 4.210 | 599 | 985 | 1.370 | 151 | 106 | 532 | 527 |
| Madrid | 6.663 | 82.824 | 89.487 | 13.178 | 54.009 | 4.835 | 2.004 | 2.286 | 4.859 | 8.316 |
| Málaga | 5.438 | 23.222 | 28.660 | 3.157 | 13.225 | 2.522 | 852 | 1.019 | 2.353 | 5.532 |
| Murcia | 1.593 | 9.153 | 10.746 | 1.686 | 3.643 | 1.676 | 347 | 347 | 1.498 | 1.549 |
| Navarra | 656 | 5.481 | 6.137 | 847 | 2.154 | 1.149 | 140 | 340 | 662 | 845 |
| Orense | 317 | 4.596 | 4.913 | 902 | 1.157 | 1.564 | 522 | 172 | 276 | 320 |
| Palencia | 203 | 1.926 | 2.129 | 300 | 623 | 392 | 64 | 66 | 465 | 279 |
| Pontevedra | 917 | 10.271 | 11.188 | 2.134 | 2.791 | 2.878 | 242 | 249 | 1.278 | 1.616 |
| Salamanca | 234 | 3.372 | 3.606 | 752 | 1.462 | 332 | 87 | 130 | 635 | 208 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.202 | 10.823 | 12.025 | 2.254 | 4.036 | 1.634 | 319 | 456 | 1.296 | 1.730 |
| Santander | 595 | 6.918 | 7.513 | 729 | 2.748 | 1.974 | 104 | 328 | 679 | 881 |
| Segovia | 255 | 1.263 | 1.518 | 306 | 392 | 285 | 21 | 82 | 106 | 326 |
| Sevilla | 3.592 | 36.127 | 39.719 | 7.089 | 13.121 | 6.497 | 2.509 | 1.010 | 1.990 | 7.503 |
| Soria | 314 | 1.131 | 1.445 | 321 | 319 | 216 | 35 | 23 | 200 | 317 |
| Tarragona | 1.095 | 10.509 | 11.604 | 1.428 | 4.941 | 1.759 | 293 | 343 | 1.099 | 1.741 |
| Teruel | 282 | 1.362 | 1.644 | 387 | 252 | 318 | 63 | " | 287 | 337 |
| Toledo | 500 | 3.057 | 3.557 | 501 | 1.052 | 754 | 131 | 122 | 444 | 553 |
| Valencia | 1.793 | 24.718 | 26.511 | 4.042 | 10.771 | 3.341 | 1.656 | 680 | 3.595 | 2.426 |
| Valladolid | 1.137 | 6.685 | 7.822 | 871 | 3.931 | 438 | 111 | 262 | 1.056 | 1.033 |
| Vizcaya | 2.067 | 13.321 | 15.388 | 3.015 | 5.641 | 1.887 | 787 | 564 | 1.353 | 2.141 |
| Zamora | 230 | 2.459 | 2.689 | 839 | 406 | 704 | 69 | 103 | 306 | 262 |
| Zaragoza | 912 | 11.082 | 11.994 | 1.739 | 4.750 | 2.220 | 408 | 244 | 1.002 | 1.631 |
| Audiencia Nacional | " | 973 | 973 | 166 | 351 | " | 22 | 43 | 119 | 272 |
| TOTAL | 70.129 | 559.471 | 629.600 | 99.203 | 249.965 | 87.084 | 23.005 | 19.700 | 55.922 | 94.204 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Diligencias preparatorias.*

A. Trámite. B. Sentencias y recursos.

| PROVINCIAS | Pendientes en 1.º enero 1977 | Instruidas entre 1.º enero y 31 diciembre 1977 | Total de las dos casillas anteriores | Sobreseimiento por no considerar delictivo el hecho o no probarse su realización (arts. 637/1.º y 2.º y 641/1.º) | Sobreseimiento por estar exentos de responsabilidad penal los autores o no haberse descubierto éstos (arts. 637/3.º y 641/2.º) | Abierto el juicio oral | Convertidas en sumario (art. 791/4.º) | En trámite en 1.º enero 1978 | CONDENATORIAS | | Absolutorias | TOTAL sentencias | Recurridos por el Fiscal | Recurridos por las partes | SENTENCIAS 2.ª INSTANCIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Conformes Fiscal | Disconformes | | | | | Confirmando | Revocando | Pendientes de sentencia |
| Alava | 45 | 647 | 692 | 171 | 90 | 323 | 37 | 71 | 153 | 44 | 10 | 207 | 12 | 31 | 24 | 14 | 5 |
| Albacete | 79 | 547 | 626 | 164 | 140 | 223 | 33 | 205 | 139 | 33 | 5 | 177 | 6 | 18 | 10 | 12 | 10 |
| Alicante | 698 | 1.922 | 2.620 | 200 | 167 | 1.629 | 74 | 550 | 417 | 44 | 22 | 483 | 11 | 35 | 30 | 14 | 13 |
| Almería | 180 | 878 | 1.058 | 246 | 28 | 550 | 67 | 167 | 257 | 53 | 20 | 330 | 3 | 23 | 22 | 4 | " |
| Asturias | 256 | 1.763 | 2.019 | 65 | 508 | 1.080 | 92 | 274 | 320 | 344 | 73 | 737 | 9 | 61 | 9 | 36 | 25 |
| Avila | 51 | 165 | 216 | 25 | 34 | 100 | 7 | 50 | 25 | 1 | 3 | 29 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Badajoz | 90 | 957 | 1.047 | 244 | 33 | 629 | 63 | 70 | 264 | 60 | 19 | 343 | 2 | 21 | 18 | 2 | 3 |
| Baleares | 752 | 1.801 | 2.553 | 436 | 81 | 1.292 | 56 | 688 | 406 | 52 | 58 | 516 | 9 | 28 | 38 | 11 | 5 |
| Barcelona | 2.039 | 7.329 | 9.368 | 934 | 1.205 | 5.313 | 24 | 1.836 | 872 | 476 | 129 | 1.477 | 26 | 94 | 68 | 108 | 29 |
| Burgos | 92 | 486 | 578 | 6 | 164 | 293 | 12 | 103 | 208 | 41 | 24 | 273 | 8 | 45 | 29 | 17 | 7 |
| Cáceres | 56 | 226 | 282 | 61 | 80 | 91 | 10 | 40 | 48 | 10 | 2 | 60 | 2 | 3 | 4 | 1 | " |
| Cádiz | 293 | 1.891 | 2.184 | 245 | 10 | 1.187 | 106 | 636 | 382 | 21 | 25 | 428 | 45 | 24 | 8 | 5 | 18 |
| Castellón | 106 | 840 | 946 | 179 | 211 | 563 | 80 | 84 | 190 | 149 | 14 | 353 | 2 | 19 | 18 | 9 | 4 |
| Ciudad Real | 188 | 580 | 768 | 61 | 91 | 416 | 14 | 186 | 254 | 24 | 3 | 286 | 8 | 20 | 15 | 4 | 10 |
| Córdoba | 81 | 602 | 683 | 79 | " | 563 | 4 | 37 | 155 | 157 | 45 | 357 | 30 | 16 | 38 | 8 | 4 |
| Coruña (La) | 292 | 1.541 | 1.833 | 398 | 279 | 646 | 15 | 495 | 365 | 63 | 24 | 452 | 6 | 136 | 92 | 20 | 30 |
| Cuenca | 116 | 197 | 313 | 78 | 60 | 65 | 5 | 105 | 39 | 13 | 3 | 55 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 |
| Gerona | 476 | 1.322 | 1.798 | 104 | 313 | 921 | 36 | 424 | 142 | 216 | 49 | 407 | 49 | 53 | 44 | 25 | 33 |
| Granada | 129 | 1.081 | 1.210 | 44 | 36 | 634 | 57 | 132 | 425 | 38 | 10 | 473 | 2 | 49 | 16 | 11 | 24 |
| Guadalajara | 52 | 223 | 272 | 7 | 100 | 79 | 12 | 74 | 51 | 11 | 20 | 82 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| Guipúzcoa | 83 | 1.059 | 1.142 | 30 | 11 | 652 | 393 | 56 | 199 | 33 | 18 | 250 | " | 35 | 21 | 6 | 8 |
| Huelva | 258 | 810 | 1.068 | 152 | 155 | 361 | 22 | 378 | 194 | 51 | 19 | 264 | 5 | 40 | 35 | 10 | 9 |
| Huesca | 131 | 505 | 636 | 122 | 60 | 273 | 10 | 171 | 119 | 66 | 17 | 202 | 7 | 36 | 17 | 10 | 16 |
| Jaén | 39 | 425 | 464 | 45 | 59 | 265 | 20 | 75 | 148 | 54 | 13 | 215 | 4 | 25 | 22 | 7 | " |
| Las Palmas | 243 | 1.400 | 1.643 | 132 | 443 | 396 | 99 | 573 | 280 | 36 | 30 | 346 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 |
| León | 61 | 519 | 580 | 82 | 57 | 345 | 24 | 72 | 193 | 36 | 7 | 236 | 5 | 52 | 29 | 19 | 9 |
| Lérida | 235 | 721 | 951 | 199 | 210 | 225 | 36 | 281 | 116 | 28 | 3 | 147 | 10 | 16 | 14 | 15 | 7 |
| Logroño | 26 | 327 | 353 | 49 | 50 | 206 | 16 | 32 | 120 | 30 | 15 | 165 | 7 | 20 | 17 | 4 | 6 |
| Lugo | 33 | 544 | 577 | 188 | 6 | 228 | 11 | 43 | 130 | 39 | 6 | 175 | 8 | 27 | 26 | 8 | 6 |
| Madrid | 729 | 5.358 | 6.087 | 1.083 | 1.663 | 1.936 | 486 | 919 | 861 | 113 | 159 | 1.133 | 12 | 83 | 63 | 11 | 21 |
| Málaga | 2.314 | 2.543 | 4.857 | 71 | 113 | 2.045 | 108 | 2.520 | 636 | 65 | 40 | 741 | 5 | 41 | 30 | 16 | " |
| Murcia | 807 | 1.498 | 2.305 | 15 | 673 | 718 | 73 | 826 | 322 | 105 | 52 | 479 | 6 | 66 | 37 | 32 | " |
| Navarra | 362 | 672 | 1.034 | 9 | 186 | 523 | 29 | 287 | 234 | 198 | 24 | 456 | 5 | 45 | 27 | 5 | 18 |
| Orense | 40 | 286 | 326 | 46 | 45 | 174 | 11 | 50 | 56 | 14 | 3 | 73 | 2 | 14 | 12 | 4 | 13 |
| Palencia | 55 | 405 | 460 | 53 | 84 | 253 | 21 | 49 | 95 | 29 | 4 | 128 | 1 | 2 | 32 | 13 | " |
| Pontevedra | 319 | 1.313 | 1.632 | 69 | 438 | 750 | 134 | 441 | 338 | 24 | 37 | 399 | 4 | 41 | 1 | 2 | " |
| Salamanca | 161 | 635 | 796 | 172 | 101 | 322 | 25 | 176 | 178 | 68 | 21 | 267 | 13 | 41 | 36 | 18 | 12 |
| Santa Cruz de Tenerife | 236 | 1.296 | 1.532 | 120 | 312 | 530 | 92 | 478 | 357 | 44 | 36 | 437 | 5 | 15 | 10 | 17 | 7 |
| Santander | 222 | 737 | 959 | 48 | 123 | 577 | 30 | 181 | 222 | 91 | 29 | 342 | 25 | 41 | 40 | 26 | 10 |
| Segovia | 15 | 106 | 121 | 16 | 17 | 79 | 3 | 6 | 29 | 6 | " | 35 | " | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Sevilla | 502 | 2.763 | 3.265 | 472 | 1.093 | 1.124 | 105 | 471 | 433 | 89 | 53 | 575 | 26 | 58 | 38 | 8 | 38 |
| Soria | 42 | 199 | 241 | 19 | 79 | 102 | 10 | 31 | 64 | 14 | 1 | 79 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Tarragona | 156 | 1.099 | 1.255 | 111 | 322 | 619 | 36 | 148 | 350 | 88 | 30 | 468 | 4 | 60 | 45 | 14 | 13 |
| Teruel | 177 | 306 | 483 | 4 | 40 | 202 | " | 237 | 47 | 10 | 9 | 66 | " | 7 | 4 | 3 | " |
| Toledo | 125 | 444 | 569 | 108 | 145 | 169 | 31 | 116 | 82 | 22 | 7 | 111 | 2 | 14 | 13 | 3 | 6 |
| Valencia | 1.413 | 3.595 | 5.008 | 468 | 1.258 | 1.337 | 397 | 1.548 | 690 | 260 | 77 | 1.027 | 55 | 134 | 99 | 34 | 51 |
| Valladolid | 137 | 1.059 | 1.196 | 152 | 194 | 575 | 21 | 171 | 280 | 95 | 24 | 399 | 21 | 85 | 43 | 26 | 27 |
| Vizcaya | 127 | 1.353 | 1.480 | 40 | 459 | 818 | 8 | 155 | 273 | 83 | 21 | 377 | 6 | 48 | 30 | 10 | 14 |
| Zamora | 51 | 306 | 357 | 18 | " | 245 | 10 | 84 | 138 | 17 | 6 | 161 | 2 | 23 | 17 | 8 | 9 |
| Zaragoza | 81 | 1.255 | 1.336 | 28 | 58 | 1.083 | 114 | 53 | 528 | 134 | 63 | 725 | 2 | 133 | 89 | 30 | 10 |
| Audiencia Nacional | " | 125 | 125 | 7 | 11 | 30 | " | 77 | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| TOTAL | 15.246 | 58.658 | 73.904 | 7.875 | 12.095 | 33.759 | 3.179 | 16.922 | 12.807 | 3.832 | 1.381 | 18.020 | 486 | 1.919 | 1.359 | 681 | 538 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Sumarios de Urgencia.*

A. Trámite en el Juzgado. B. Trámite en la Audiencia.

| AUDIENCIAS | Pendientes en 1.º enero 1977 | Incoados entre 1.º enero y 31 diciembre 1977 | Total de las dos casillas anteriores | Sobreseimiento del n.º 1 del art. 641 (Art. 795) | Sobreseimiento del n.º 2 del art. 641 (Art. 795) | Declarados falta | Inhibidos | Conclusos elevados a la Audiencia | En trámite en el Juzgado en 31 de diciembre 1977 | | Sobreseimiento por no considerar delictivo el hecho o no probarse su realización (arts. 637/1.º y 2.º y 641/1.º) | Sobreseimiento por estar exentos de responsabilidad penal los autores o no haberse descubierto éstos (arts. 637/3.º y 641/2.º) | Aperturas de juicio oral | Extinción de responsabilidad | SENTENCIAS DICTADAS | | | | RECURSOS DE CASACION | | Pendientes en la Audiencia en 31 diciembre 1977 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Con procesado | Sin procesado | | | | | CONDENATORIAS | | Absolutorias | TOTAL | Preparados por el Fiscal | Preparados por las partes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Conformes Fiscal | Disconformes | | | | | |
| Alava | 75 | 147 | 829 | 9 | 2 | 5 | 3 | 172 | 20 | 11 | 6 | 71 | 99 | 6 | 48 | 17 | 5 | 70 | 1 | 14 | 11 |
| Albacete | 16 | 115 | 131 | 14 | 13 | " | 2 | 66 | 21 | 15 | 6 | 1 | 65 | 24 | 40 | 17 | 2 | 59 | 3 | 6 | 25 |
| Alicante | 170 | 657 | 827 | 22 | 7 | 2 | 3 | 636 | 100 | 57 | 161 | 103 | 284 | 18 | 188 | 33 | 16 | 237 | 1 | 17 | 206 |
| Almería | 56 | 306 | 362 | 27 | 5 | " | 4 | 254 | 37 | 35 | 52 | 8 | 166 | 47 | 108 | 25 | 10 | 143 | " | 26 | 4 |
| Asturias | 262 | 804 | 1.066 | 182 | 208 | 19 | 25 | 447 | 8 | 177 | 137 | 63 | 148 | 1 | 112 | 95 | 24 | 231 | " | 23 | 98 |
| Avila | 13 | 53 | 66 | 9 | 10 | " | " | 24 | 5 | 18 | 4 | 3 | 20 | 13 | 11 | " | 1 | 12 | " | " | 8 |
| Badajoz | 41 | 238 | 279 | 10 | 4 | 11 | 18 | 168 | 40 | 28 | 44 | 22 | 235 | 9 | 97 | 10 | 19 | 126 | " | 14 | 1 |
| Baleares | 196 | 2.674 | 2.870 | 75 | 1.568 | 7 | 56 | 744 | 143 | 277 | 63 | 116 | 591 | 8 | 109 | 46 | 27 | 182 | 4 | 4 | 161 |
| Barcelona | 1.283 | 3.012 | 4.295 | 520 | 752 | 82 | 105 | 1.428 | 724 | 326 | 27 | 75 | 2.050 | 1.368 | 499 | 189 | 133 | 821 | 8 | 155 | 1.045 |
| Burgos | 51 | 192 | 243 | " | " | 1 | " | 180 | 10 | 52 | 17 | 36 | 150 | 3 | 78 | 25 | 15 | 118 | " | 18 | 29 |
| Cáceres | 59 | 215 | 274 | 43 | 60 | 4 | 11 | 90 | 21 | 45 | 4 | 16 | 71 | 3 | 37 | 13 | 2 | 52 | " | 5 | 2 |
| Cádiz | 277 | 1.302 | 1.579 | 57 | 90 | 2 | 13 | 1.069 | 263 | 85 | 54 | 45 | 627 | 7 | 320 | 17 | 31 | 368 | 1 | 34 | 139 |
| Castellón | 52 | 301 | 353 | 69 | 12 | " | 4 | 203 | 39 | 26 | 33 | 5 | 148 | 17 | 47 | 46 | 16 | 109 | " | 25 | 112 |
| Ciudad Real | 57 | 183 | 240 | 26 | 5 | " | 1 | 148 | 43 | 17 | 11 | 39 | 104 | 17 | 71 | 14 | 1 | 86 | " | 9 | 17 |
| Córdoba | 68 | 448 | 516 | 20 | 2 | " | " | 407 | 65 | 22 | 1 | 9 | 328 | " | 58 | 154 | 31 | 243 | 5 | 27 | 19 |
| Coruña (La) | 117 | 510 | 627 | 38 | 3 | " | 3 | 260 | 192 | 131 | 30 | 2 | 253 | " | 135 | 73 | 39 | 247 | 4 | 19 | 6 |
| Cuenca | 17 | 63 | 80 | 10 | 2 | 2 | " | 54 | 8 | 4 | 7 | 3 | 37 | " | 25 | 4 | 3 | 32 | " | 6 | 11 |
| Gerona | 123 | 443 | 566 | 20 | 92 | 21 | 9 | 382 | 51 | 133 | 13 | 56 | 240 | 9 | 25 | 91 | 24 | 140 | " | 4 | 68 |
| Granada | 80 | 506 | 586 | 28 | 7 | 9 | 4 | 487 | 28 | 23 | 109 | 46 | 239 | 34 | 172 | 28 | 14 | 214 | " | 39 | 59 |
| Guadalajara | 22 | 71 | 93 | 16 | 6 | " | 2 | 42 | 17 | 10 | 1 | " | 36 | 3 | 36 | 5 | 7 | 48 | " | 8 | 10 |
| Guipúzcoa | 288 | 407 | 695 | 96 | 82 | 39 | 13 | 265 | 239 | 126 | 72 | 47 | 254 | 7 | 94 | 15 | 14 | 123 | " | 6 | 121 |
| Huelva | 27 | 259 | 286 | 26 | 31 | 2 | 7 | 120 | 68 | 32 | 21 | 11 | 96 | " | 57 | 28 | 13 | 98 | " | 21 | 80 |
| Huesca | 35 | 261 | 296 | 2 | 147 | " | 2 | 81 | 23 | 41 | " | 7 | 58 | 4 | 25 | 15 | 3 | 43 | " | 7 | 6 |
| Jaén | 52 | 198 | 250 | 44 | 1 | 1 | 8 | 127 | 10 | 59 | 6 | " | 98 | 12 | 54 | 22 | 17 | 93 | " | 16 | 44 |
| Las Palmas | 321 | 603 | 924 | 20 | 8 | 3 | 10 | 763 | 83 | 37 | 47 | 10 | 452 | 21 | 96 | 61 | 24 | 181 | " | 33 | 192 |
| León | 38 | 259 | 297 | 5 | 3 | " | 3 | 235 | 15 | 36 | 3 | 1 | 179 | 53 | 117 | 26 | 10 | 153 | " | 12 | 42 |
| Lérida | 27 | 195 | 222 | 12 | 60 | 3 | 4 | 69 | 27 | 47 | 6 | 28 | 34 | 4 | 15 | 6 | 2 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| Logroño | 21 | 90 | 111 | 9 | 1 | 3 | 1 | 78 | 15 | 4 | " | 15 | 56 | 2 | 59 | 6 | 1 | 66 | " | 5 | 5 |
| Lugo | 10 | 127 | 137 | 6 | 6 | " | 2 | 107 | 13 | 3 | 7 | 6 | 76 | 4 | 56 | 19 | 6 | 81 | " | 9 | 11 |
| Madrid | 849 | 2.832 | 3.681 | 317 | 51 | 27 | 22 | 2.243 | 702 | 319 | 320 | 294 | 1.118 | 21 | 864 | 335 | 229 | 1.428 | 5 | 182 | 490 |
| Málaga | 81 | 1.044 | 1.125 | 38 | 3 | " | 8 | 1.020 | 20 | 36 | " | 35 | 851 | 285 | 231 | 157 | 46 | 434 | 1 | 28 | " |
| Murcia | 114 | 486 | 600 | 61 | 20 | 2 | 4 | 394 | 83 | 36 | 52 | 88 | 217 | 28 | 130 | 57 | 30 | 217 | 2 | 14 | " |
| Navarra | 64 | 506 | 570 | 49 | 75 | 1 | 7 | 374 | 22 | 42 | 30 | 44 | 271 | 70 | 102 | 59 | 19 | 180 | " | 29 | 140 |
| Orense | 53 | 172 | 225 | 65 | 73 | 30 | 22 | 13 | 8 | 14 | 11 | 3 | 75 | 12 | 45 | 24 | 6 | 75 | " | 7 | 9 |
| Palencia | 22 | 97 | 119 | 16 | 4 | 4 | " | 69 | 10 | 16 | 3 | 1 | 62 | 1 | 26 | 10 | 10 | 46 | " | 5 | " |
| Pontevedra | 120 | 845 | 965 | 61 | 284 | 9 | 6 | 451 | 58 | 80 | 15 | 10 | 313 | 27 | 252 | 6 | 14 | 272 | 1 | 28 | 86 |
| Salamanca | 38 | 176 | 214 | 34 | 7 | 1 | 5 | 142 | 17 | 8 | 22 | 6 | 114 | 30 | 78 | 17 | 6 | 101 | 2 | 16 | 42 |
| Santa Cruz de Tenerife | 166 | 588 | 754 | 68 | 39 | 6 | 10 | 509 | 74 | 45 | 29 | 16 | 262 | 63 | 167 | 25 | 16 | 208 | 2 | 40 | 72 |
| Santander | 89 | 366 | 455 | 70 | 17 | 3 | 1 | 293 | 50 | 21 | 12 | 80 | 285 | 2 | 111 | 36 | 16 | 163 | " | 16 | 12 |
| Segovia | 18 | 72 | 90 | 19 | 4 | " | " | 55 | 9 | 3 | 32 | 5 | 39 | 2 | 15 | 5 | 2 | 22 | " | 4 | 12 |
| Sevilla | 337 | 3.262 | 3.599 | 120 | 2.341 | 5 | 10 | 201 | 116 | 134 | 57 | 114 | 417 | 14 | 139 | 71 | 32 | 242 | 2 | 33 | 85 |
| Soria | 25 | 58 | 83 | 11 | 16 | " | " | 34 | 7 | 15 | 4 | 8 | 21 | 1 | 11 | 6 | 5 | 22 | 3 | 4 | 3 |
| Tarragona | 84 | 380 | 464 | 38 | 3 | " | 7 | 308 | 84 | 23 | 2 | 54 | 196 | 10 | 214 | 36 | 17 | 267 | " | 14 | 60 |
| Teruel | 25 | 45 | 70 | " | 1 | 1 | " | 42 | 21 | 5 | 2 | " | 24 | 3 | 13 | 5 | 4 | 22 | 1 | 3 | 13 |
| Toledo | 20 | 176 | 196 | 23 | 20 | 11 | 1 | 94 | 20 | 27 | 14 | 19 | 64 | 1 | 35 | 14 | 6 | 55 | 1 | 14 | 17 |
| Valencia | 370 | 1.892 | 2.262 | 75 | 375 | 42 | 29 | 1.303 | 296 | 142 | 11 | 263 | 640 | 77 | 317 | 170 | 70 | 557 | 5 | 98 | 318 |
| Valladolid | 97 | 253 | 350 | 8 | 3 | " | " | 219 | 104 | 16 | 11 | 41 | 145 | 5 | 61 | 43 | 18 | 122 | 2 | 16 | 88 |
| Vizcaya | 292 | 840 | 1.132 | 56 | 163 | 24 | 26 | 599 | 138 | 156 | 8 | 210 | 463 | 12 | 217 | 60 | 17 | 294 | " | 16 | 284 |
| Zamora | 5 | 91 | 96 | 2 | 5 | " | " | 62 | 15 | 12 | 5 | 4 | 49 | 2 | 30 | 16 | 6 | 52 | " | 2 | 12 |
| Zaragoza | 138 | 1.037 | 1.175 | 172 | 317 | 23 | 25 | 1.035 | 33 | 112 | 46 | 154 | 421 | 2 | 189 | 85 | 52 | 326 | 1 | 58 | 113 |
| Audiencia Nacional | " | 6 | 6 | " | " | " | " | 5 | 1 | " | 3 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| TOTAL | 6.861 | 29.863 | 36.724 | 2.718 | 7.008 | 405 | 486 | 18.571 | 4.216 | 3.129 | 1.631 | 2.299 | 13.243 | 2.362 | 5.936 | 2.337 | 1.131 | 9.404 | 61 | 1.192 | 7.194 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Sumarios ordinarios y los especiales del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (excepto Título III).*

A. En el Juzgado. B. En la Audiencia.

| AUDIENCIAS | Pendientes en 1.º enero 1977 | Incoados entre 1.º enero y 31 diciembre 1977 | Total de las dos casillas anteriores | Declarados falta (624) | Inhibidos | Elevados a la Audiencia con auto de conclusión | Pendientes en 31 diciembre 1977 | Sobreseimiento por no considerar delictivo el hecho o no probarse su realización (arts. 637/1.º y 2.º y 641/1.º) | Sobreseimiento por estar exentos de responsabilidad penal los autores o no haberse descubierto éstos (arts. 637/3.º y 641/2.º) | Aperturas de juicio oral | Extinción de responsabilidad | SENTENCIAS DICTADAS | | | | RECURSOS DE CASACION | | Pendientes en 31 diciembre 1977 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | CONDENATORIAS | | Absolutorias | TOTAL | Preparados por Fiscal | Preparados por las partes | |
| | | | | | | | | | | | | Conformes Fiscal | Disconformes | | | | | |
| Alava | 29 | 46 | 75 | " | 3 | 39 | 33 | 20 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | " | 11 | 1 | 3 | 4 |
| Albacete | 9 | 58 | 67 | " | " | 52 | 15 | 34 | 4 | 15 | " | 8 | 9 | 5 | 22 | 3 | 4 | 8 |
| Alicante | 87 | 279 | 366 | 6 | 5 | 277 | 78 | 57 | 46 | 90 | 8 | 53 | 32 | 12 | 97 | 1 | 16 | 44 |
| Almería | 19 | 162 | 181 | " | 1 | 135 | 45 | 79 | 5 | 49 | 1 | 32 | 8 | 8 | 48 | " | 11 | 9 |
| Asturias | 234 | 571 | 805 | 57 | 9 | 567 | 172 | 341 | 54 | 68 | 3 | 106 | 72 | 17 | 195 | 1 | 18 | 101 |
| Avila | 8 | 64 | 72 | " | 3 | 53 | 16 | 49 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | " | " | 3 |
| Badajoz | 16 | 91 | 107 | 3 | 22 | 104 | 36 | 48 | 6 | 45 | 2 | 24 | 12 | 5 | 41 | 1 | 11 | " |
| Baleares | 140 | 1.041 | 1.181 | 1 | 14 | 938 | 228 | 493 | 195 | 238 | 6 | 43 | 39 | 29 | 111 | 2 | 22 | 145 |
| Barcelona | 374 | 703 | 1.077 | 12 | 82 | 651 | 275 | 56 | 192 | 410 | 28 | 206 | 132 | 92 | 430 | 5 | 32 | 279 |
| Burgos | 14 | 74 | 88 | " | " | 72 | 16 | 48 | 1 | 24 | " | 15 | 7 | " | 22 | " | 3 | 19 |
| Cáceres | 18 | 105 | 123 | " | 1 | 104 | 18 | 71 | 19 | 15 | " | 4 | 7 | " | 11 | " | 1 | " |
| Cádiz | 119 | 388 | 507 | " | 2 | 312 | 133 | 103 | 88 | 161 | 6 | 69 | 3 | 14 | 86 | " | 22 | 176 |
| Castellón | 33 | 208 | 241 | " | 6 | 200 | 35 | 119 | 42 | 33 | 6 | 10 | 20 | 4 | 34 | " | 11 | 40 |
| Ciudad Real | 24 | 183 | 207 | 1 | 8 | 170 | 28 | 128 | 13 | 31 | 2 | 15 | 10 | 8 | 33 | 2 | 9 | 14 |
| Córdoba | 93 | 327 | 420 | " | " | 375 | 45 | 238 | 13 | 100 | 4 | 6 | 43 | 12 | 61 | 1 | 10 | 16 |
| Coruña (La) | 24 | 127 | 151 | 1 | 2 | 113 | 35 | 25 | 2 | 33 | " | 14 | 5 | 3 | 22 | " | 5 | 3 |
| Cuenca | 8 | 25 | 33 | " | " | 27 | 6 | 18 | 7 | 4 | " | 2 | 1 | " | 3 | " | " | 3 |
| Gerona | 81 | 422 | 503 | 27 | 40 | 345 | 91 | 91 | 118 | 25 | 36 | 3 | 31 | 5 | 39 | " | " | 57 |
| Granada | 29 | 232 | 261 | 3 | 1 | 230 | 27 | 106 | 31 | 49 | 10 | 9 | 14 | 1 | 24 | " | 13 | 34 |
| Guadalajara | 19 | 71 | 90 | " | 1 | 75 | 14 | 40 | 25 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | " | 6 | 7 |
| Guipúzcoa | 27 | 113 | 140 | " | " | 97 | 43 | 10 | 5 | 50 | 6 | 112 | 6 | 10 | 58 | " | 10 | 18 |
| Huelva | 19 | 125 | 144 | " | 1 | 104 | 39 | 62 | 22 | 14 | " | 15 | 8 | 2 | 25 | " | 6 | 18 |
| Huesca | 13 | 54 | 67 | " | 1 | 61 | 5 | 18 | 18 | 24 | 4 | 9 | 4 | 4 | 17 | " | 8 | 7 |
| Jaén | 44 | 94 | 138 | " | " | 90 | 48 | 61 | 2 | 13 | 1 | 14 | 11 | 5 | 30 | " | 3 | 35 |
| Las Palmas | 65 | 173 | 238 | " | 8 | 162 | 68 | 31 | 14 | 177 | 38 | 45 | 41 | 11 | 97 | 1 | 30 | 104 |
| León | 3 | 46 | 49 | " | " | 45 | 4 | 17 | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | " | 8 | " | 4 | 8 |
| Lérida | 23 | 224 | 247 | 2 | 3 | 176 | 66 | 66 | 54 | 22 | 5 | 12 | 7 | 3 | 22 | 2 | 2 | 3 |
| Logroño | 8 | 31 | 39 | " | " | 27 | 12 | 5 | 3 | 13 | 2 | 6 | " | 2 | 8 | " | 1 | 4 |
| Lugo | 8 | 34 | 42 | " | " | 36 | 6 | 12 | 1 | 18 | 4 | 7 | 11 | 2 | 20 | " | 9 | 3 |
| Madrid | 412 | 545 | 957 | 18 | 19 | 566 | 354 | 152 | 79 | 244 | 5 | 17 | 14 | 10 | 41 | 2 | 12 | 86 |
| Málaga | 59 | 322 | 381 | " | 5 | 302 | 74 | 33 | " | 160 | " | 20 | 35 | 9 | 64 | " | 19 | " |
| Murcia | 43 | 191 | 234 | 2 | 2 | 175 | 55 | 90 | 4 | 45 | 4 | 26 | 18 | 11 | 55 | 1 | 11 | " |
| Navarra | 8 | 163 | 171 | 4 | " | 159 | 8 | 82 | 50 | 38 | 8 | 10 | 12 | 4 | 26 | " | 6 | 46 |
| Orense | 13 | 36 | 49 | 2 | 1 | 40 | 6 | 7 | 5 | 32 | 2 | 10 | 10 | 3 | 23 | " | 4 | 7 |
| Palencia | 9 | 39 | 48 | 1 | 1 | 37 | 9 | 16 | 11 | 10 | " | 5 | 3 | 3 | 11 | " | 3 | " |
| Pontevedra | 26 | 213 | 239 | 7 | 2 | 160 | 70 | 94 | 6 | 33 | 2 | 28 | 3 | 5 | 36 | " | 7 | 25 |
| Salamanca | 19 | 107 | 126 | " | " | 106 | 20 | 54 | 15 | 24 | 3 | 15 | 5 | 6 | 26 | 1 | 6 | 16 |
| Santa Cruz de Tenerife | 62 | 290 | 352 | 2 | 5 | 286 | 59 | 89 | 37 | 87 | 10 | 70 | 12 | 14 | 96 | " | 16 | 47 |
| Santander | 29 | 99 | 128 | " | 7 | 87 | 34 | 45 | 17 | 25 | " | 12 | 13 | 6 | 31 | 1 | 4 | 2 |
| Segovia | 6 | 45 | 51 | " | " | 47 | 4 | 42 | " | 5 | " | 4 | 1 | " | 5 | " | 2 | 4 |
| Sevilla | 404 | 1.395 | 1.799 | 1 | 4 | 973 | 251 | 225 | 769 | 101 | 10 | 75 | 62 | 22 | 159 | 2 | 31 | 29 |
| Soria | 17 | 36 | 53 | " | " | 42 | 11 | 32 | 5 | 4 | 1 | 3 | " | " | 3 | " | 1 | 1 |
| Tarragona | 46 | 186 | 232 | " | 8 | 129 | 91 | 70 | 15 | 49 | 2 | 28 | 27 | 7 | 62 | 1 | 12 | 29 |
| Teruel | 3 | 8 | 11 | " | " | 6 | 5 | 2 | " | 4 | " | 1 | 1 | " | 2 | " | 1 | 3 |
| Toledo | 65 | 162 | 227 | 4 | 8 | 163 | 52 | 108 | 30 | 18 | " | 2 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 22 |
| Valencia | 186 | 1.262 | 1.448 | " | 36 | 1.120 | 292 | 168 | 314 | 380 | 24 | 168 | 65 | 40 | 273 | 2 | 66 | 212 |
| Valladolid | 25 | 87 | 112 | " | " | 78 | 34 | 17 | 14 | 47 | " | 14 | 12 | 8 | 34 | " | 8 | 43 |
| Vizcaya | 11 | 88 | 99 | " | " | 87 | 12 | 9 | 6 | 82 | " | 58 | 8 | 3 | 69 | " | 6 | 28 |
| Zamora | 5 | 28 | 33 | " | " | 23 | 10 | 5 | 2 | 16 | " | 7 | 1 | 1 | 9 | " | 1 | 6 |
| Zaragoza | 51 | 384 | 435 | " | 14 | 363 | 58 | 214 | 92 | 92 | 7 | 40 | 39 | 7 | 86 | " | 19 | 41 |
| Audiencia Nacional | " | 110 | 110 | " | 1 | 77 | 32 | 37 | 14 | 5 | " | " | " | 1 | " | " | " | 20 |
| TOTAL | 3.087 | 11.867 | 14.954 | 154 | 326 | 10.666 | 3.181 | 4.500 | 2.465 | 3.251 | 251 | 1.404 | 892 | 424 | 2.720 | 32 | 506 | 1.819 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Diligencias previas instruidas en las distintas provincias desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| NATURALEZA DEL SUPUESTO DELITO | Alava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Avila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Coruña (La) | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Jaén | Las Palmas | León | Lérida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Santander | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza | Audiencia Nacional | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado. | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 9 |
| 2. Delitos contra la seguridad interior del Estado. | 139 | 18 | 117 | 85 | 74 | 26 | 86 | 11 | 848 | 70 | 40 | 71 | 9 | 48 | 147 | 30 | 52 | 59 | 70 | 11 | 169 | 86 | 261 | 107 | 160 | 45 | 15 | 45 | 68 | 644 | 137 | 26 | 167 | 20 | 10 | 101 | 41 | 136 | 75 | 3 | 509 | 5 | 61 | 24 | 50 | 216 | 51 | 268 | 20 | 35 | 176 | 5.507 |
| 3. Falsedades: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* De moneda | 2 | 1 | 2 | " | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2 | " | 12 | 1 | 2 | 13 | 25 | " | 3 | 6 | " | 1 | 1 | " | " | 3 | 2 | " | " | 2 | 44 | 5 | " | " | 5 | " | 4 | 2 | 3 | " | " | " | " | 2 | " | " | 1 | 7 | " | " | " | 110 | 293 |
| *b)* De documentos | 6 | 6 | 14 | " | 48 | 5 | 19 | 7 | 137 | 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | " | 8 | 11 | 2 | 26 | 11 | 1 | 8 | " | 14 | 11 | 4 | 8 | 255 | 62 | 6 | 4 | 16 | 3 | 11 | 6 | 19 | 32 | 3 | 71 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 927 |
| *c)* Ocultación fraudulenta de bienes | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | 1 | " | " | " | " | 4 | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | 9 | 2 | " | 2 | " | 29 |
| *d)* Usurpación de funciones, uso indebido de nombre, etc. | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | " | 7 | 3 | 83 | " | " | 17 | " | " | 2 | " | " | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | " | 4 | 8 | " | 2 | 2 | " | 72 | 10 | 8 | 1 | 7 | " | 5 | 2 | 13 | 4 | " | " | 1 | 9 | " | 2 | 15 | " | " | " | 3 | " | 323 |
| *e)* Otras (Cap. I y III del Tít. III del C. P.). | " | 1 | 23 | " | 3 | " | " | 9 | 171 | 7 | " | " | " | 2 | 16 | 42 | 1 | 10 | " | " | " | 1 | " | " | 6 | " | 3 | " | " | 68 | " | 4 | " | 36 | " | " | 4 | 2 | 10 | " | 21 | " | 15 | " | " | 18 | " | " | " | 2 | " | 475 |
| 4. Delitos contra la Administración de Justicia | 3 | " | 35 | " | 10 | 3 | 5 | 12 | 92 | " | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | " | 2 | 1 | " | 6 | 2 | 10 | 2 | " | " | " | 1 | 2 | 84 | 22 | 1 | 4 | 14 | 2 | 6 | " | 11 | 20 | " | 7 | " | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | " | 1 | 3 | " | 400 |
| 5. Título V del Libro II: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Inhumación ilegal | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 1 | " | " | 1 | " | " | 14 |
| *b)* Violación de sepulturas o profanación de cadáveres | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 3 | 3 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 2 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | 2 | " | 1 | " | " | " | 5 | " | " | " | " | 22 |
| *c)* Contra la salud pública: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Tráfico y comercio de drogas | 7 | " | 22 | 7 | 3 | 1 | 9 | 11 | 87 | " | " | 37 | 2 | " | " | 87 | 1 | 5 | " | 1 | 2 | 3 | " | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | " | 261 | 109 | 4 | 4 | 2 | " | 2 | 4 | 22 | " | " | 60 | " | 9 | " | 2 | 2 | 17 | 1 | 6 | 7 | 8 | 820 |
| II. Otros | " | " | 29 | " | 4 | 2 | 1 | " | 101 | 38 | " | " | " | 3 | 3 | " | 3 | " | 2 | 3 | 16 | 9 | " | 3 | 65 | 38 | 1 | 1 | 2 | 93 | 3 | 7 | 1 | 20 | " | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | " | " | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | " | 6 | " | 502 |
| 6. Juegos ilícitos | " | " | 7 | " | " | " | 2 | 13 | 16 | " | " | 2 | " | " | 2 | 2 | " | 4 | 3 | 1 | 1 | " | 1 | " | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | " | " | 1 | 1 | 1 | 1 | " | 4 | " | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | " | 124 |
| 7. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Prevaricación | " | " | 2 | " | " | " | 1 | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | 1 | " | 9 | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 21 |
| *b)* Malversación | 1 | " | 20 | " | 1 | 1 | 2 | " | 32 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | " | " | 1 | 1 | " | 1 | 1 | " | 1 | 1 | 4 | " | " | 2 | 46 | 7 | 6 | 2 | 5 | " | " | " | 5 | " | " | 24 | " | 3 | " | " | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | " | 197 |
| *c)* Otros (Cap. II al IX y XII del Tít. VII del C. P.) | 1 | 1 | 16 | " | 5 | 1 | 2 | " | 26 | 2 | 2 | 7 | " | 1 | 13 | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | 2 | 12 | 5 | " | " | 1 | 2 | 1 | " | 3 | 1 | " | 2 | " | " | 17 | " | " | " | " | " | 4 | 2 | 5 | " | 2 | " | " | *138* |
| 8. Delitos contra las personas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Homicidio | 4 | " | 12 | " | 4 | " | 1 | 1 | 24 | " | 1 | 3 | " | " | 5 | " | " | 2 | " | " | 6 | " | " | 2 | " | " | " | " | 1 | 11 | 4 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | 3 | " | " | " | 89 |
| *b)* Infanticidio | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *c)* Aborto | " | " | 1 | " | 2 | 1 | 2 | " | 35 | 1 | " | 2 | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | 2 | 2 | " | " | 9 | 2 | 1 | " | " | 12 | " | " | " | 10 | " | " | 1 | 3 | 6 | " | 2 | " | " | " | 1 | 3 | 1 | " | " | " | " | 101 |
| *d)* Lesiones | 82 | 99 | 373 | 526 | 1.315 | 87 | 393 | 789 | 2.548 | 206 | 233 | 405 | 113 | 129 | 770 | 761 | 53 | 130 | 620 | 118 | 419 | 390 | 156 | 317 | 949 | 303 | 99 | 62 | 129 | 2.650 | 1.071 | 106 | 131 | 433 | 67 | 690 | 80 | 560 | 330 | 81 | 601 | 55 | 392 | 57 | 127 | 343 | 189 | 602 | 153 | 122 | 3 | 21.482 |
| 9. Suicidios | 12 | 17 | 60 | " | 26 | 3 | 118 | 7 | 682 | 12 | 5 | 69 | 1 | 46 | 116 | 11 | 1 | " | " | 5 | 17 | 24 | 21 | 54 | 58 | 3 | 5 | 17 | 41 | 166 | 91 | 10 | " | 22 | 11 | 26 | 25 | 59 | 10 | " | 86 | 1 | 29 | 10 | 7 | 34 | 24 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2.070 |
| 10. Delitos contra la honestidad | 25 | 13 | 144 | 35 | 34 | 10 | 44 | 61 | 889 | 34 | 15 | 50 | 5 | 27 | 59 | 88 | 4 | 57 | 33 | 8 | 43 | 49 | 3 | 52 | 261 | 59 | 17 | 19 | 11 | 676 | 115 | 85 | 26 | 9 | 4 | 22 | 20 | 97 | 60 | 12 | 120 | 8 | 42 | 6 | 17 | 70 | 45 | 78 | 18 | 10 | 1 | 3.690 |
| 11. Delitos contra el honor | " | 1 | 25 | " | 3 | " | 9 | 5 | 131 | " | 14 | 26 | 1 | " | 15 | " | " | 3 | 1 | " | 6 | 19 | " | 1 | 20 | " | 2 | " | 2 | 21 | 12 | " | 6 | " | " | 7 | " | " | 50 | 11 | 25 | 3 | " | " | 1 | 4 | 5 | " | " | 1 | " | 430 |
| 12. Delitos contra el estado civil de las personas | " | " | 3 | " | 20 | 2 | 3 | " | " | 46 | " | 1 | " | " | 44 | " | " | " | " | 57 | " | " | 6 | 17 | " | " | " | " | " | 96 | 2 | 10 | " | " | " | " | " | " | 8 | 8 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 324 |
| 13. Delitos contra la libertad y seguridad | 149 | 69 | 633 | 152 | 374 | 29 | 203 | 220 | 2.983 | 109 | 78 | 328 | 36 | 139 | 300 | 788 | 45 | 182 | 248 | " | 326 | 216 | 47 | 234 | 645 | 341 | 79 | 109 | 105 | 2.104 | 476 | 167 | 167 | 147 | 46 | 223 | 105 | 528 | 200 | 14 | 1.170 | 51 | 191 | 34 | 73 | 445 | 230 | 295 | 166 | 236 | 39 | 15.674 |
| 14. Delitos contra la propiedad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Robo | 544 | 506 | 4.870 | 457 | 2.633 | 184 | 719 | 994 | 15.728 | 1.217 | 246 | 2.702 | 803 | 406 | 2.182 | 1.671 | 120 | 3.633 | 1.525 | 257 | 1.794 | 945 | 88 | 660 | 3.135 | 650 | 537 | 649 | 351 | 20.553 | 6.226 | 1.576 | 596 | 497 | 349 | 1.104 | 780 | 1.779 | 1.060 | 230 | 6.242 | 142 | 3.117 | 110 | 596 | 3.422 | 1.683 | 2.694 | 440 | 2.328 | 7 | 105.737 |
| *b)* Hurto | 238 | 142 | 1.766 | 342 | 1.098 | 64 | 448 | 1.114 | 9.445 | 216 | 102 | 2.037 | 241 | 293 | 538 | 891 | 134 | 1.223 | 1.339 | 94 | 831 | 563 | 130 | 542 | 2.363 | 734 | 177 | 262 | 265 | 18.113 | 4.420 | 1.602 | 784 | 512 | 156 | 1.031 | 222 | 1.203 | 1.203 | 101 | 4.744 | 80 | 937 | 67 | 237 | 1.118 | 450 | 1.874 | 185 | 592 | 2 | 67.305 |
| *c)* Estafa | 48 | 28 | 276 | 96 | 223 | 8 | 49 | 99 | 1.304 | 42 | 34 | 88 | 27 | 50 | 108 | 54 | 10 | 67 | 48 | 14 | 90 | 52 | 16 | 71 | 175 | 55 | 24 | 26 | 36 | 1.622 | 278 | 135 | 56 | 37 | 13 | 64 | 37 | 146 | 63 | 15 | 458 | 16 | 100 | 5 | 27 | 256 | 60 | 84 | 21 | 78 | 9 | 6.798 |
| *d)* Robo y hurto de uso | 302 | 200 | 105 | 460 | 1.001 | 62 | 277 | 730 | 11.426 | 843 | 204 | 293 | 128 | 55 | 2.097 | 840 | 86 | 262 | 1.199 | 120 | 651 | 441 | 46 | 533 | 1.875 | 166 | 417 | 273 | 274 | 15.504 | 2.395 | 769 | 715 | 146 | 122 | 991 | 283 | 788 | 299 | 76 | 5.622 | 62 | 908 | 63 | 96 | 4.739 | 1.012 | 1.473 | 71 | 1.646 | " | 63.206 |
| *e)* Cheque en descubierto | 13 | 7 | 201 | 47 | 129 | 3 | 25 | 213 | 2.588 | 9 | 11 | 93 | 15 | 28 | 69 | 20 | 4 | 50 | 43 | 20 | 28 | 25 | 14 | 38 | 12 | 30 | 31 | 14 | 1 | 1.913 | 192 | 109 | 26 | 31 | 2 | 41 | " | 122 | 54 | 7 | 401 | 7 | 88 | 2 | 27 | 831 | 16 | 128 | 194 | 181 | " | 8.158 |
| *f)* Otros | 161 | 122 | 630 | 50 | 479 | 91 | 448 | 287 | 2.827 | 288 | 264 | 340 | 7 | 271 | 622 | 956 | 163 | 561 | 242 | 101 | 485 | 449 | 98 | 366 | 762 | 262 | 168 | 85 | 217 | 1.218 | 976 | 199 | 323 | 242 | 56 | 477 | 227 | 575 | 300 | 39 | 997 | 81 | 383 | 59 | 148 | 500 | 201 | 305 | 10 | 371 | 3 | 19.432 |
| 15. Imprudencia punible (no tráfico) | 22 | 12 | 1 | " | 56 | " | 51 | 8 | 2.765 | 86 | " | 100 | 74 | 55 | 99 | 198 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 13 | 100 | 55 | " | 121 | 27 | 41 | 36 | 183 | 40 | 32 | 26 | 36 | 2 | 4 | " | 12 | 52 | 48 | 50 | " | 6 | 8 | 75 | 349 | 113 | " | " | 419 | " | 5.394 |
| 16. Delitos relativos al tráfico de automóviles: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Falsificación de matrícula (art. 279 bis) | " | " | 1 | " | 5 | " | 2 | 6 | 56 | " | 1 | 1 | " | " | 2 | " | 2 | " | 1 | " | 3 | " | 2 | 2 | " | 1 | 1 | " | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | " | " | 1 | " | 1 | 24 | " | 21 | " | 1 | " | " | 1 | 1 | " | " | 10 | " | 172 |
| *b)* Quebrantamiento de condena (art. 334) | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 | 15 | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 15 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 42 |
| *c)* Conducción bajo influencia del alcohol o tóxicos (art. 340 bis, *a*, 1.º) | 4 | 2 | 12 | 19 | 50 | 1 | 10 | 20 | 118 | " | 3 | 9 | " | 2 | 15 | 18 | 1 | 17 | " | " | " | 6 | 1 | 12 | 17 | " | 6 | " | 3 | 107 | 46 | 2 | 8 | " | " | 4 | " | 31 | 15 | 1 | 42 | " | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | 22 | " | 4 | " | 671 |
| *d)* Conducción temeraria (art. 340 bis, *a*, 2.º) | " | " | " | " | 42 | " | 1 | 20 | 22 | " | 1 | 3 | " | " | 4 | 27 | " | " | " | " | " | 9 | " | 6 | " | " | " | " | " | 48 | " | " | " | " | 6 | " | " | 4 | 23 | " | " | " | 1 | " | 1 | 3 | " | 9 | 3 | " | " | 233 |
| *e)* Riesgos para la circulación (art. 340 bis, *b*) | " | " | 6 | " | 1 | " | 1 | " | 87 | " | 4 | 13 | " | 5 | 1 | 15 | 1 | " | 27 | " | " | " | 1 | 3 | 4 | 2 | " | " | 1 | 68 | " | " | 1 | " | " | 3 | " | " | 12 | " | " | " | " | " | " | 1 | 2 | " | " | 18 | " | 277 |
| *f)* Conducción sin permiso (art. 340 bis, *c*). | 25 | 6 | 43 | 61 | 87 | 26 | 10 | 464 | 2.569 | 17 | 20 | 51 | 8 | 38 | 83 | 67 | 31 | 76 | 25 | 6 | 12 | 15 | 12 | 36 | 48 | 7 | 35 | 10 | 24 | 295 | 151 | 143 | 52 | 2 | " | 35 | 10 | 48 | 55 | 22 | 411 | 4 | 40 | 9 | 18 | 209 | 95 | 38 | 9 | 33 | " | 5.591 |
| *g)* Omisión de socorro (art. 489 bis) | 1 | 1 | 1 | " | 7 | 1 | 2 | " | 99 | " | " | 6 | " | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | " | " | " | 2 | " | " | " | 35 | 9 | 1 | 1 | " | " | " | " | 5 | 4 | " | 19 | 1 | 5 | " | 2 | " | " | 2 | " | 3 | " | 226 |
| *h)* Imprudencia (art. 565) | 1.183 | 866 | 3.621 | 1.228 | 3.023 | 323 | 1.545 | 1.846 | 24.844 | 1.837 | 984 | 1.767 | 465 | 1.141 | 2.992 | 4.731 | 521 | 2.560 | 2.271 | 587 | 2.140 | 1.168 | 666 | 1.691 | 1.726 | 2.011 | 740 | 561 | 1.511 | 7.053 | 2.729 | 1.996 | 1.565 | 1.930 | 405 | 3.754 | 470 | 2.644 | 1.690 | 475 | 10.729 | 417 | 3.018 | 480 | 920 | 5.485 | 1.278 | 2.948 | 678 | 2.853 | " | 123.935 |
| 17. Delitos definidos en Leyes especiales | 2 | 8 | 10 | " | 12 | 6 | 25 | 44 | 51 | 37 | 11 | 23 | 2 | 25 | 40 | " | 14 | 6 | 7 | 10 | 13 | 33 | 24 | 48 | 6 | 6 | " | 8 | 7 | 32 | 33 | 13 | 16 | " | 9 | 19 | 11 | 5 | 40 | 21 | 49 | 6 | 11 | 4 | 30 | 6 | 16 | " | 5 | 6 | 487 | 1.297 |
| 18. Hechos casuales | 108 | 23 | 178 | 1.148 | 1.727 | 7 | 795 | 30 | 1.706 | 272 | 124 | 1.555 | 764 | 290 | 1.542 | 169 | 14 | 10 | 4.521 | 5 | 175 | 23 | 115 | 127 | 453 | 341 | 168 | 110 | 126 | 1.581 | 219 | 285 | 21 | 414 | 192 | 107 | 272 | 549 | 184 | 91 | 1.236 | 39 | 58 | 181 | 159 | 2.293 | 114 | 538 | 53 | 851 | " | 26.099 |
| TOTAL | 3.089 | 2.151 | 13.270 | 4.716 | 12.505 | 948 | 5.317 | 7.067 | 84.568 | 5.404 | 2.452 | 10.128 | 2.706 | 3.067 | 11.907 | 11.497 | 1.211 | 8.890 | 12.247 | 1.425 | 7.278 | 4.562 | 1.584 | 4.996 | 12.788 | 5.215 | 2.572 | 2.304 | 3.229 | 75.679 | 19.850 | 7.308 | 4.712 | 4.596 | 1.455 | 8.741 | 2.607 | 9.381 | 5.911 | 1.263 | 33.127 | 981 | 9.447 | 1.128 | 2.641 | 20.443 | 5.724 | 11.404 | 2.050 | 9.836 | 853 | 488.230 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Diligencias preparatorias incoadas en los Juzgados de las provincias, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| NATURALEZA DEL SUPUESTO DELITO | Alava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Avila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Coruña (La) | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Jaén | Las Palmas | León | Lérida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Santander | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza | Audiencia Nacional | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado. | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 2. Delitos contra la seguridad interior del Estado. | 29 | 11 | 15 | 20 | 16 | 8 | 45 | 51 | 27 | 16 | 7 | 145 | 18 | 9 | 16 | 10 | " | 18 | 21 | 1 | 22 | 32 | 9 | 10 | 13 | 7 | 11 | 14 | 8 | 88 | 223 | 14 | 23 | " | 12 | 29 | 25 | 40 | " | " | 67 | 1 | 21 | 3 | 1 | 4 | 19 | 23 | 7 | 21 | " | 1.230 |
| 3. Falsedades: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* De moneda | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 14 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 15 |
| *b)* De documentos | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | " | " | 2 | 6 | " | " | 12 | 1 | " | " | 1 | 5 | " | 4 | 1 | " | 5 | 1 | 2 | " | 2 | 3 | 4 | " | 2 | 35 | 11 | " | " | 6 | " | 3 | 5 | 5 | " | " | 7 | 1 | " | " | 3 | 2 | 4 | " | 1 | " | " | 136 |
| *c)* Ocultación fraudulenta de bienes | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | 4 |
| *d)* Usurpación de funciones, uso indebido de nombre, etc. | " | 2 | 4 | " | " | " | 2 | 3 | 12 | " | " | 1 | 1 | 2 | 2 | " | " | 1 | 1 | " | 6 | " | " | 1 | 1 | 1 | " | 3 | " | 4 | 2 | 11 | " | 1 | " | 1 | " | 2 | " | " | 4 | " | 1 | " | " | 7 | " | 4 | " | 3 | " | 83 |
| *e)* Otras (Cap. I y III del Tít. III del C. P.). | " | " | 3 | " | 1 | " | " | 1 | 15 | " | " | " | " | 2 | " | 18 | " | 16 | " | " | " | " | " | 1 | 8 | " | " | " | " | 5 | " | " | " | 3 | " | 2 | " | " | " | " | 6 | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 83 |
| 4. Delitos contra la Administración de Justicia | " | 1 | 4 | " | 6 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | " | " | 3 | 4 | 7 | " | " | 1 | 2 | 3 | 7 | " | 4 | 1 | 23 | " | " | " | 1 | 30 | 6 | " | 2 | " | " | 5 | 2 | 8 | " | " | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | " | " | 4 | " | 170 |
| 5. Título V del Libro II: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Inhumación ilegal | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *b)* Violación de sepulturas o profanación de cadáveres | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 |
| *c)* Contra la salud pública: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Tráfico y comercio de drogas | " | " | " | " | " | " | " | 50 | " | " | " | 2 | " | " | " | 14 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 68 |
| II. Otros | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 1 | " | 1 | " | " | 6 | " | " | " | " | 3 | " | 2 | " | 4 | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 22 |
| 6. Juegos ilícitos | " | " | 2 | " | " | " | " | 3 | 4 | 6 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 1 | 1 | " | " | " | " | " | 2 | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 3 | 1 | " | " | " | 31 |
| 7. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Prevaricación | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 |
| *b)* Malversación | " | " | 2 | " | 1 | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | 9 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 22 |
| *c)* Otros (Cap. II al IX y XII del Tít. VII del C. P.) | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 4 | " | " | " | 1 | 2 | " | " | " | " | 1 | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 16 |
| 8. Delitos contra las personas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Homicidio | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 11 |
| *b)* Infanticidio | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *c)* Aborto | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 |
| *d)* Lesiones | 20 | 33 | 62 | 46 | 149 | 16 | 46 | 102 | 680 | 29 | 27 | 80 | 53 | 20 | 31 | 120 | 11 | 65 | 58 | 3 | 96 | 38 | 10 | 45 | 66 | 72 | 18 | 22 | 33 | 249 | 86 | 44 | 17 | 30 | 20 | 95 | 37 | 80 | 79 | 7 | 101 | 8 | 51 | 10 | 43 | 25 | 58 | 91 | 25 | 46 | " | 3.253 |
| 9. Suicidios | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 7 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 11 |
| 10. Delitos contra la honestidad | " | 2 | " | " | 1 | " | " | 12 | 4 | " | " | 4 | 2 | 1 | " | 72 | " | 1 | 2 | " | 3 | " | " | " | 3 | " | 3 | " | 2 | 5 | 2 | " | 2 | 3 | " | 1 | 2 | 6 | " | 1 | 2 | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 138 |
| 11. Delitos contra el honor | " | " | 2 | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 7 | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | 20 |
| 12. Delitos contra el estado civil de las personas | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 |
| 13. Delitos contra la libertad y seguridad | 8 | 13 | 31 | 12 | 26 | 2 | 17 | 45 | 29 | 5 | 7 | 51 | 15 | 11 | 11 | 32 | 3 | 17 | 45 | 3 | 24 | 17 | 6 | 4 | 28 | 20 | 20 | 8 | 5 | 109 | 44 | 36 | 6 | " | 6 | 28 | 10 | 31 | " | " | 44 | 4 | 13 | 2 | 6 | 40 | 20 | 28 | 4 | 34 | " | 980 |
| 14. Delitos contra la propiedad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Robo | 23 | 24 | 188 | 42 | 127 | 9 | 50 | 233 | 518 | 33 | 23 | 108 | 26 | 23 | 146 | 213 | " | 61 | 58 | 10 | 92 | 40 | 9 | 25 | 182 | 42 | 31 | 20 | 8 | 568 | 219 | 55 | 27 | 8 | 25 | 68 | 34 | 115 | 88 | 5 | 143 | 9 | 56 | 2 | 31 | 590 | 52 | 299 | 13 | 61 | " | 4.832 |
| *b)* Hurto | 22 | 29 | 295 | 43 | 95 | 5 | 53 | 181 | 309 | 10 | 13 | 110 | 31 | 25 | 37 | 171 | 3 | 47 | 80 | 4 | 47 | 40 | 17 | 32 | 214 | 49 | 21 | 10 | 16 | 386 | 163 | 88 | 13 | 20 | 10 | 72 | 30 | 82 | 82 | 5 | 145 | 7 | 51 | 5 | 23 | 178 | 35 | 90 | 11 | 19 | " | 3.524 |
| *c)* Estafa | 13 | 11 | 153 | 19 | 32 | 3 | 24 | 23 | 85 | 11 | 15 | 40 | 12 | 7 | 11 | 22 | " | 16 | 27 | 1 | 33 | 10 | 5 | 11 | 61 | 18 | 7 | 9 | 12 | 209 | 92 | 29 | 1 | 12 | 9 | 20 | 12 | 39 | 16 | 1 | 49 | 3 | 24 | 4 | 5 | 88 | 21 | 37 | 6 | 29 | " | 1.397 |
| *d)* Robo y hurto de uso | 11 | 8 | 102 | 38 | 69 | 12 | 23 | 112 | 300 | 19 | 30 | 34 | 22 | 4 | 50 | 50 | 10 | 22 | 28 | 11 | 65 | 33 | 10 | 28 | 107 | 28 | 17 | 20 | 15 | 329 | 76 | 31 | 15 | 31 | 10 | 44 | 38 | 64 | 10 | 5 | 167 | 25 | 63 | 2 | 13 | 701 | 35 | 100 | 5 | 59 | " | 3.101 |
| *e)* Cheque en descubierto | 16 | 13 | 152 | 30 | 74 | 5 | 20 | 44 | 504 | 8 | 10 | 75 | 45 | 18 | 34 | 40 | 2 | 84 | 78 | 7 | 43 | 19 | 14 | 18 | 171 | 21 | 35 | 8 | 13 | 781 | 199 | 107 | 7 | 7 | 8 | 82 | 20 | 135 | 22 | 1 | 206 | 1 | 82 | 3 | 21 | 127 | 12 | 91 | 6 | 126 | " | 3.649 |
| *f)* Otros | 11 | 6 | 134 | 5 | 29 | 4 | 37 | 48 | 65 | 7 | 10 | 44 | 2 | 8 | 15 | 91 | 2 | 102 | 47 | 2 | 38 | 19 | 9 | 9 | " | 23 | 28 | 9 | 7 | 179 | 79 | 33 | 15 | 3 | 14 | 43 | 17 | 53 | 44 | 2 | 37 | 6 | 19 | 6 | 5 | 113 | 24 | 32 | 4 | 31 | " | 1.570 |
| 15. Imprudencia punible (no tráfico) | 2 | 2 | " | 8 | 5 | " | 5 | 2 | " | 6 | " | 10 | 11 | 1 | " | " | 2 | 10 | " | " | " | 2 | 4 | " | 1 | " | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | " | 3 | 1 | 1 | " | 3 | 10 | " | 22 | " | 1 | 3 | " | 15 | 3 | 4 | " | 6 | " | 173 |
| 16. Delitos relativos al tráfico de automóviles: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Falsificación de matrícula (art. 279 bis) | 2 | 3 | " | 2 | 5 | " | 1 | 3 | 2 | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | 2 | 5 | 2 | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " | 2 | " | " | " | 3 | 2 | " | " | 4 | " | " | 1 | 1 | 3 | " | " | 3 | " | " | " | 4 | " | 54 |
| *b)* Quebrantamiento de condena (art. 334) | " | " | " | 3 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 9 | 1 | " | " | " | 1 | " | 2 | 1 | " | " | " | 32 | " | " | " | " | 1 | " | " | 2 | 20 | " | 4 | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 79 |
| *c)* Conducción bajo influencia del alcohol o tóxicos (art. 340 bis, *a*, 1.º) | 5 | 7 | 52 | 16 | 122 | " | 51 | 7 | 85 | " | 5 | 43 | 26 | 8 | 16 | 3 | " | 23 | 3 | 7 | 10 | 20 | 3 | 14 | 66 | 3 | 18 | 10 | 4 | 80 | 52 | 5 | 23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 109 | 10 | 2 | 36 | 9 | 16 | 2 | 6 | 10 | 6 | 25 | 6 | 6 | " | 1.042 |
| *d)* Conducción temeraria (art. 340 bis, *a*, 2.ª) | 3 | 1 | " | " | 57 | " | 1 | 8 | 162 | " | " | 5 | " | " | " | 1 | " | 9 | 21 | " | 2 | 57 | 3 | 2 | 6 | " | " | " | " | 123 | " | 1 | " | 4 | 2 | " | 1 | 18 | 30 | " | 3 | " | 1 | " | " | 2 | " | " | 2 | " | " | 525 |
| *e)* Riesgos para la circulación (art. 340 bis, *b*) | " | " | 5 | " | " | " | " | " | 35 | " | " | 3 | " | 8 | " | 19 | 3 | " | 56 | " | " | " | " | 1 | 19 | 4 | 1 | " | " | 63 | " | 4 | " | 1 | " | 6 | 2 | " | 22 | " | " | " | 1 | " | " | " | 15 | " | " | 10 | " | 278 |
| *f)* Conducción sin permiso (art. 340 bis, *c*). | 49 | 32 | 122 | 68 | 140 | 54 | 81 | 128 | 604 | 41 | 36 | 127 | 34 | 154 | 150 | 53 | 31 | 100 | 39 | 25 | 77 | " | 38 | 33 | 201 | 49 | 81 | 36 | 45 | 140 | 238 | 94 | 87 | 32 | 23 | 78 | 27 | 221 | 37 | 13 | 246 | 21 | 86 | 35 | 70 | 47 | 68 | 77 | 28 | 70 | " | 4.386 |
| *g)* Omisión de socorro (art. 489 bis) | " | 1 | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | 1 | 14 | " | " | " | " | 1 | 3 | 2 | 1 | " | " | 1 | 2 | " | " | " | " | 1 | 1 | 3 | " | " | 3 | 1 | 1 | " | 1 | " | 1 | " | " | 1 | " | 43 |
| *h)* Imprudencia (art. 565) | 394 | 311 | 513 | 450 | 659 | 37 | 440 | 371 | 3.837 | 184 | 56 | 350 | 455 | 99 | 57 | 558 | 40 | 650 | 426 | 118 | 484 | 267 | 297 | 149 | 207 | 172 | 385 | 133 | 220 | 1.383 | 945 | 861 | 229 | 101 | 229 | 551 | 342 | 216 | 237 | 56 | 1.286 | 86 | 560 | 219 | 162 | 1.235 | 648 | 451 | 187 | 597 | " | 22.894 |
| 17. Delitos definidos en Leyes especiales | " | 11 | 3 | 4 | 5 | " | 21 | 10 | 9 | 5 | 4 | 27 | 1 | 10 | 13 | " | 2 | 7 | 10 | 6 | " | 6 | 39 | 17 | 4 | 3 | 15 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | " | 4 | 3 | " | 8 | " | 8 | 55 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 | 2 | " | 6 | 9 | 125 | 502 |
| 18. Hechos casuales | " | 1 | " | " | 2 | " | " | 2 | " | " | " | 31 | " | 1 | " | 29 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 6 | 1 | 2 | 22 | " | 3 | " | " | 1 | 3 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | " | 4 | " | 112 |
| TOTAL | 610 | 523 | 1.848 | 811 | 1.626 | 158 | 921 | 1.447 | 7.325 | 381 | 244 | 1.304 | 760 | 415 | 598 | 1.526 | 109 | 1.270 | 1.023 | 208 | 1.059 | 602 | 480 | 405 | 1.400 | 519 | 707 | 311 | 400 | 4.872 | 2.455 | 1.435 | 462 | 276 | 384 | 1.141 | 610 | 1.247 | 707 | 106 | 2.658 | 189 | 1.057 | 303 | 415 | 3.198 | 1.038 | 1.353 | 306 | 1.141 | 125 | 54.468 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Sumarios de Urgencia incoados en los Juzgados de las provincias, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| NATURALEZA DEL SUPUESTO DELITO | Alava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Avila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Coruña (La) | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Jaén | Las Palmas | León | Lérida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Santander | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza | Audiencia Nacional | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado. | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 2. Delitos contra la seguridad interior del Estado. | 9 | 4 | 5 | 8 | 30 | 3 | 14 | 10 | 80 | 6 | 6 | 30 | 16 | 8 | 16 | 2 | 1 | 4 | 47 | 4 | 37 | 10 | 4 | 14 | 10 | 10 | " | 6 | " | 125 | 124 | 21 | 20 | " | 1 | 36 | 6 | 23 | 10 | " | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 71 | 13 | 8 | 8 | 35 | 1 | 921 |
| 3. Falsedades: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* De moneda ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 4 | " | 7 | 3 | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 10 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | 34 |
| *b)* De documentos ... ... ... ... ... ... ... ... | 1 | 5 | 2 | 8 | 24 | 2 | 3 | 22 | 50 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | " | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 66 | 19 | 11 | 8 | 3 | " | 24 | 6 | 12 | " | " | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 4 | " | 3 | 19 | " | 432 |
| *c)* Ocultación fraudulenta de bienes ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 |
| *d)* Usurpación de funciones, uso indebido de nombre, etc. ... ... ... ... ... ... ... ... | 3 | " | " | " | " | " | 1 | 4 | 33 | " | 1 | 5 | " | 2 | 1 | " | " | 1 | 1 | " | 1 | " | " | 1 | " | " | 4 | " | " | 10 | 3 | 2 | " | 1 | " | 2 | " | 2 | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | 5 | " | 87 |
| *e)* Otras (Cap. I y III del Tít. III del C. P.). | " | " | 1 | " | 3 | " | " | 13 | 70 | 6 | 1 | " | 1 | " | " | " | " | 9 | " | " | " | " | " | " | " | 5 | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | 5 | " | " | 4 | " | " | 10 | " | " | " | " | " | 131 |
| 4. Delitos contra la Administración de Justicia ... | " | " | 2 | " | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 3 | " | 2 | " | 1 | " | 3 | 1 | " | " | 3 | 13 | 4 | 1 | " | " | " | 9 | " | 3 | " | 1 | " | " | " | " | 2 | 2 | 4 | " | 2 | 2 | " | 76 |
| 5. Título V del Libro II: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Inhumación ilegal ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *b)* Violación de sepulturas o profanación de cadáveres ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 |
| *c)* Contra la salud pública: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Tráfico y comercio de drogas ... ... | 1 | " | " | 12 | 3 | " | " | " | " | " | 3 | 413 | 1 | " | " | 6 | 1 | 2 | 3 | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | 25 | 174 | 1 | 3 | 2 | " | " | " | 2 | " | " | 9 | " | " | 2 | " | " | 5 | " | 2 | 4 | 1 | 679 |
| II. Otros ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 3 | " | 1 | " | 18 | " | " | " | " | 16 | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 22 | " | " | " | " | " | 68 |
| 6. Juegos ilícitos ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 2 | 1 | " | " | 12 |
| 7. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Prevaricación ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 |
| *b)* Malversación ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 1 | 3 | " | 3 | 2 | " | 10 | 8 | " | " | " | 1 | 1 | 1 | " | 1 | 3 | 5 | 1 | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | 4 | 26 | " | 1 | " | " | 1 | 1 | 4 | " | 1 | " | " | 1 | " | " | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | " | 103 |
| *c)* Otros (Cap. II al IX y XII del Tít. VII del C. P.) ... ... ... ... ... ... ... ... | " | 1 | 2 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | 1 | " | " | 2 | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 2 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 4 | " | " | " | 1 | " | 23 |
| 8. Delitos contra las personas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Homicidio ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 1 | " | 1 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 22 | " | " | " | " | 2 | 1 | " | " | " | 2 | 1 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 35 |
| *b)* Infanticidio ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 |
| *c)* Aborto ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 3 | " | 1 | 2 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | 2 | 27 | 1 | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 4 | " | 3 | " | 49 |
| *d)* Lesiones ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 10 | 4 | 8 | 15 | 57 | 3 | 1 | 93 | " | 19 | 2 | 22 | 9 | 4 | 21 | 26 | 2 | 3 | 63 | 2 | 23 | 12 | 2 | 18 | 25 | 20 | 9 | 3 | 9 | 84 | 20 | 18 | 15 | 28 | 3 | 35 | 9 | 25 | 26 | 2 | 47 | 3 | 9 | 4 | 6 | 38 | 18 | 101 | 5 | 25 | " | 1.006 |
| 9. Suicidios ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | 1 | " | 11 | " | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | 1 | " | 2 | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 3 | 2 | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 28 |
| 10. Delitos contra la honestidad ... ... ... ... ... | 19 | 13 | 17 | 40 | 80 | 8 | 54 | 65 | " | 17 | 26 | 87 | 30 | 22 | 18 | 18 | 1 | 40 | 65 | 8 | 31 | 35 | 5 | 21 | 41 | 19 | 19 | 5 | 6 | 253 | 83 | 57 | 32 | 14 | 8 | 54 | 11 | 86 | 56 | 3 | 44 | 6 | 30 | 4 | 6 | 95 | 18 | 135 | 11 | 63 | 1 | 1.880 |
| 11. Delitos contra el honor ... ... ... ... ... ... | " | " | 1 | " | 3 | 1 | 2 | 3 | " | " | " | 27 | 1 | " | " | " | " | 3 | " | " | 3 | " | " | " | 2 | " | 1 | " | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | " | " | " | " | 2 | 4 | " | 13 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 8 | 1 | 99 |
| 12. Delitos contra el estado civil de las personas ... | " | " | " | " | 29 | " | " | 1 | " | 3 | " | " | " | " | 7 | 12 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | 10 | 2 | 1 | " | " | " | " | " | " | 40 | 2 | 30 | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | 142 |
| 13. Delitos contra la libertad y seguridad ... ... ... | 6 | 15 | 34 | 77 | 90 | 2 | 19 | 179 | 21 | 5 | 24 | 61 | 42 | 23 | 25 | " | 3 | 40 | 97 | 4 | 47 | 33 | 7 | 23 | 39 | 32 | 24 | 7 | 9 | 222 | 87 | 58 | 38 | " | 18 | 135 | 30 | 131 | " | 1 | 14 | 3 | 49 | 2 | 13 | 114 | 17 | 28 | 6 | 86 | " | 2.040 |
| 14. Delitos contra la propiedad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Robo ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 44 | 36 | 126 | 94 | 260 | 9 | 80 | 1.907 | 1.037 | 47 | 87 | 212 | 49 | 22 | 187 | 166 | 5 | 134 | 61 | " | 109 | 58 | 169 | 46 | 219 | 76 | 56 | 36 | 24 | 815 | 245 | 135 | 153 | 42 | 23 | 265 | 33 | 121 | 116 | 6 | 2.326 | 19 | 114 | 12 | 23 | 578 | 59 | 219 | 21 | 409 | " | 11.090 |
| *b)* Hurto ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 13 | 1 | 205 | 19 | 44 | 3 | 24 | 193 | 705 | 12 | 22 | 66 | 26 | 4 | 23 | 64 | 2 | 54 | 27 | 17 | 29 | 8 | 4 | 9 | 64 | 33 | 16 | 3 | 11 | 236 | 30 | 47 | 40 | 15 | 2 | 48 | 13 | 33 | 56 | 6 | 98 | 4 | 21 | 2 | 8 | 150 | 22 | 112 | 9 | 48 | " | 2.701 |
| *c)* Estafa ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 7 | 4 | 91 | 7 | 32 | 2 | 6 | 56 | 221 | 10 | 3 | 21 | 15 | 6 | 26 | 16 | 3 | 40 | 19 | 2 | 17 | 5 | 2 | 9 | 56 | 15 | 15 | 5 | 5 | 233 | 57 | 20 | 14 | 2 | 5 | 37 | 13 | 35 | 13 | 3 | 43 | 1 | 23 | 3 | 5 | 53 | 12 | 35 | 5 | 52 | " | 1.380 |
| *d)* Robo y hurto de uso ... ... ... ... ... | 8 | 7 | 82 | 8 | 45 | 7 | 14 | 153 | 209 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 23 | 72 | 2 | 9 | 17 | " | 18 | 5 | 1 | 6 | 26 | 9 | 4 | 8 | 6 | 149 | 22 | 11 | 19 | 21 | 2 | 38 | 5 | 8 | " | 2 | 31 | 1 | 23 | 1 | 3 | 144 | 23 | " | 2 | 49 | " | 1.324 |
| *e)* Cheque en descubierto ... ... ... ... ... | 1 | 1 | 52 | 5 | 12 | 1 | " | 3 | 102 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | " | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 5 | 5 | " | " | 105 | 16 | 15 | 1 | 4 | " | 5 | 1 | 23 | 2 | 1 | 8 | " | 20 | " | 3 | 62 | 6 | 22 | 4 | 13 | " | 572 |
| *f)* Otros ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 6 | 4 | 17 | " | 22 | " | 3 | 62 | 124 | 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 32 | 1 | 12 | 30 | 1 | 20 | 8 | 7 | 7 | 23 | 11 | 10 | 2 | 2 | 157 | 43 | 23 | 17 | 30 | 4 | 29 | 8 | 14 | " | " | 38 | 1 | 16 | " | 4 | 72 | 7 | 44 | " | 50 | 1 | 1.030 |
| 15. Imprudencia punible (no tráfico) ... ... ... ... | 1 | " | " | 4 | 5 | " | 2 | 3 | 98 | 2 | " | 7 | " | 5 | 3 | " | 2 | 45 | " | 1 | 3 | " | 4 | 3 | " | " | " | " | 1 | 47 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | " | 3 | " | " | " | 10 | 1 | 4 | 58 | 4 | 18 | " | 28 | " | 402 |
| 16. Delitos relativos al tráfico de automóviles: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Falsificación de matrícula (art. 279 bis) ... | " | " | " | " | 8 | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | 2 | " | " | " | 2 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 17 |
| *b)* Quebrantamiento de condena (art. 334) ... | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 7 |
| *c)* Conducción bajo influencia del alcohol o tóxicos (art. 340 bis, *a*, 1.º) ... ... ... ... | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 4 | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 6 | " | " | " | 7 | " | 1 | " | " | " | 1 | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 30 |
| *d)* Conducción temeraria (art. 340 bis, *a*, 2.º). | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 12 |
| *e)* Riesgos para la circulación (art. 340 bis, *b*) ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | 2 | " | 3 | " | 1 | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 11 |
| *f)* Conducción sin permiso (art. 340 bis, *c*). | " | " | " | " | 1 | " | 9 | " | 7 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 2 | 1 | " | " | " | " | " | " | 3 | 1 | " | " | 12 | " | " | " | " | " | 4 | " | 2 | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | 16 | " | 2 | " | 65 |
| *g)* Omisión de socorro (art. 489 bis) ... ... | " | 1 | " | 2 | 1 | " | 1 | 3 | 1 | " | " | " | 2 | " | " | 2 | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | 2 | 10 | " | 2 | " | " | " | 1 | " | 1 | " | " | 3 | " | " | " | 1 | 2 | " | " | " | " | " | 38 |
| *h)* Imprudencia (art. 565) ... ... ... ... ... | 16 | 10 | 6 | 7 | 86 | 8 | 20 | 6 | 229 | 32 | 14 | 16 | 79 | 29 | 53 | 80 | 34 | 145 | 15 | 25 | 40 | 33 | 43 | 31 | 19 | 13 | 5 | 8 | 3 | 144 | 35 | 42 | 57 | 6 | 19 | 91 | 20 | 24 | 28 | 38 | 18 | 17 | " | 10 | 80 | 70 | 36 | 56 | 9 | 119 | " | 2.026 |
| 17. Delitos definidos en Leyes especiales ... ... ... | " | 1 | " | " | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | " | 1 | 2 | " | " | 2 | " | " | " | " | 1 | 2 | " | 2 | 4 | " | 2 | " | " | " | 7 | 1 | 2 | 2 | " | " | 3 | 2 | 5 | " | " | 3 | 1 | 41 | " | 1 | " | 1 | " | " | 1 | 1 | 100 |
| 18. Hechos casuales .. ... ... ... ... ... ... ... | " | 3 | " | " | 19 | " | " | 6 | " | " | 1 | 66 | " | 6 | 1 | 2 | " | 10 | 19 | " | " | " | " | 1 | 1 | " | 5 | 1 | " | " | " | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | " | 20 | 7 | 3 | 20 | " | 4 | " | 4 | 26 | 3 | 58 | " | 4 | " | 314 |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 147 | 112 | 657 | 306 | 891 | 53 | 267 | 2.803 | 3.012 | 192 | 219 | 1.067 | 301 | 141 | 448 | 508 | 63 | 571 | 506 | 71 | 407 | 212 | 258 | 198 | 603 | 259 | 185 | 90 | 88 | 2.832 | 1.004 | 486 | 440 | 172 | 97 | 829 | 176 | 588 | 366 | 72 | 2.773 | 58 | 380 | 45 | 176 | 1.604 | 253 | 860 | 91 | 1.032 | 6 | 28.975 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Sumarios Ordinarios y otros del Título IV, Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoados en los Juzgados de las provincias, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| NATURALEZA DEL SUPUESTO DELITO | Alava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Avila | Badajoz | Baleares | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Coruña (La) | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Jaén | Las Palmas | León | Lérida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Santander | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza | Audiencia Nacional | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Delitos contra la seguridad exterior del Estado. | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 |
| 2. Delitos contra la seguridad interior del Estado. | " | " | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 4 | " | 2 | " | 3 | 2 | " | " | 2 | 32 | 1 | 3 | " | " | 1 | 3 | " | " | " | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | " | 4 | 1 | 3 | " | " | 3 | " | " | " | 10 | 3 | 1 | " | " | 9 | 79 | 228 |
| 3. Falsedades: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* De moneda | " | " | " | " | " | " | 9 | 4 | 9 | " | 1 | " | " | 6 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | 2 | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 16 | 52 |
| *b)* De documentos | " | " | " | 4 | 7 | 1 | " | " | " | " | 2 | 1 | " | 1 | 1 | " | " | " | 2 | 1 | 3 | 1 | " | " | " | 1 | 3 | " | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | " | " | 2 | 2 | 2 | " | 1 | 3 | " | 1 | " | 4 | 4 | 4 | " | 1 | 7 | " | 91 |
| *c)* Ocultación fraudulenta de bienes | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 7 |
| *d)* Usurpación de funciones, uso indebido de nombre, etc. | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | 5 |
| *e)* Otras (Cap. I y III del Tít. III del C. P.). | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 20 | " | " | " | " | " | " | " | " | 6 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 30 |
| 4. Delitos contra la Administración de Justicia | " | " | " | " | " | " | " | " | 6 | " | " | 1 | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | 2 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 14 |
| 5. Título V del Libro II: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Inhumación ilegal | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *b)* Violación de sepulturas o profanación de cadáveres | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *c)* Contra la salud pública: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Tráfico y comercio de drogas | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | " | 5 | 47 | 6 | 1 | 2 | 169 | 3 | " | 2 | " | " | " | 7 | " | 3 | 12 | 2 | " | 34 | 3 | 1 | " | 1 | 34 | 41 | 1 | 1 | " | " | 6 | " | 26 | " | 1 | 83 | " | 13 | " | " | 12 | 3 | " | 2 | 9 | 5 | 552 |
| II. Otros | " | " | 2 | " | " | " | " | " | 50 | " | " | " | " | " | 2 | " | " | 1 | " | 1 | 4 | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 2 | " | 4 | 2 | 1 | " | " | 4 | 1 | " | " | 6 | " | 10 | " | " | 4 | " | " | " | 1 | " | 96 |
| 6. Juegos ilícitos | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| 7. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Prevaricación | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 |
| *b)* Malversación | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 3 | " | 1 | 1 | " | 1 | 1 | " | 1 | " | 2 | 1 | " | 1 | " | 2 | " | 2 | " | " | 1 | " | 1 | 4 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | 2 | " | " | 2 | " | 31 |
| *c)* Otros (Cap. II al IX y XII del Tít. VII del C. P.) | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 1 | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " | " | 1 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | 15 |
| 8. Delitos contra las personas: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Homicidio | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 10 | 16 | 60 | 3 | 1 | 8 | " | 8 | 17 | " | 1 | 2 | 20 | 2 | 7 | 1 | " | 8 | 9 | 1 | " | 4 | 1 | 34 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 21 | 3 | 15 | 3 | 2 | 6 | " | 44 | " | 2 | 15 | 8 | 6 | 3 | 9 | " | 428 |
| *b)* Infanticidio | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 1 | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | 10 |
| *c)* Aborto | " | " | " | 3 | 2 | " | " | " | 6 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 | " | 1 | " | 1 | " | 3 | 1 | " | " | 2 | " | 5 | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | 2 | " | 1 | " | 35 |
| *d)* Lesiones | 1 | " | " | 4 | 8 | 1 | " | 31 | 100 | 3 | " | 2 | 1 | 3 | " | 5 | " | 2 | " | 1 | 3 | " | 1 | 3 | " | " | 8 | " | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | " | 1 | 2 | " | 2 | 10 | " | " | " | " | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | " | 247 |
| 9. Suicidios | 1 | 18 | 4 | 45 | 64 | 10 | 7 | 37 | 95 | 5 | 36 | 37 | 20 | 58 | 104 | " | 7 | 41 | 104 | 4 | 9 | 2 | 4 | 20 | " | 7 | 25 | 1 | 6 | 14 | 28 | 41 | 11 | 4 | 1 | 6 | " | 33 | 7 | 8 | 39 | 8 | 9 | " | 30 | 61 | 8 | 3 | " | 22 | " | 1.144 |
| 10. Delitos contra la honestidad | 5 | 3 | 17 | 27 | 29 | " | 15 | 51 | 140 | 5 | 6 | 20 | 9 | 20 | 23 | 44 | 5 | 13 | 15 | 1 | 10 | 6 | 16 | 13 | 12 | 6 | 16 | 9 | 6 | 43 | 16 | 21 | 4 | 5 | 4 | 38 | 15 | 27 | 20 | " | 93 | 1 | 40 | 5 | 14 | 93 | 16 | 33 | 7 | 28 | " | 1.065 |
| 11. Delitos contra el honor | " | 1 | 2 | " | 5 | 5 | 1 | 10 | 15 | " | 4 | 12 | 1 | 5 | 4 | " | " | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 29 | 4 | 4 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | 8 | " | " | 5 | 4 | 5 | 4 | " | 4 | " | " | " | " | 2 | 15 | 7 | " | 3 | 8 | 1 | 236 |
| 12. Delitos contra el estado civil de las personas | " | " | " | " | 10 | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 4 | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 21 |
| 13. Delitos contra la libertad y seguridad | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | " | " | 7 | 105 | " | " | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | " | 27 | 4 | " | 2 | " | 6 | " | 4 | " | 2 | 1 | " | 6 | 2 | 5 | " | " | 1 | 4 | " | 1 | 1 | " | 1 | " | " | " | 3 | 116 | " | " | " | " | " | 333 |
| 14. Delitos contra la propiedad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Robo | 14 | 18 | 105 | 39 | 103 | 8 | 24 | 308 | 26 | 23 | 16 | 31 | 55 | 16 | 41 | 29 | " | 90 | 22 | 20 | 20 | 15 | 8 | 8 | 42 | 5 | 76 | 6 | 2 | 122 | 53 | 13 | 45 | 3 | 13 | 60 | 10 | 57 | 30 | 2 | 847 | 4 | 40 | 1 | 21 | 206 | 20 | 12 | 9 | 74 | 3 | 2.845 |
| *b)* Hurto | 1 | 1 | 21 | 10 | 16 | 1 | 2 | 15 | 14 | " | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 | " | 2 | 2 | " | 6 | 5 | 3 | " | 4 | " | 13 | " | " | 19 | 1 | " | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 11 | " | 27 | " | 8 | " | 2 | 64 | " | 4 | 2 | 9 | 1 | 347 |
| *c)* Estafa | 2 | 2 | 102 | 6 | 17 | 5 | 5 | 47 | 25 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 14 | 3 | " | 5 | 10 | 4 | 15 | 6 | 5 | 7 | 19 | 1 | 14 | 2 | 1 | 82 | 29 | 13 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 | 6 | " | 40 | 2 | 7 | 1 | 7 | 31 | 6 | 2 | " | 21 | 6 | 633 |
| *d)* Robo y hurto de uso | 1 | " | " | " | 5 | " | 2 | 34 | " | " | " | " | " | " | " | 14 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 16 | 1 | 1 | 2 | " | " | " | 1 | " | " | " | 3 | " | " | " | " | 3 | " | " | 16 | " | 101 |
| *e)* Cheque en descubierto | 1 | " | 1 | " | 6 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 8 | " | " | " | " | " | 1 | " | 1 | " | 1 | 6 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | 2 | " | 31 |
| *f)* Otros | 5 | 6 | 11 | " | 9 | 3 | 5 | 30 | " | " | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | " | " | 9 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 10 | " | 17 | 2 | 2 | 34 | 13 | 12 | 1 | " | 2 | 10 | 5 | 25 | " | " | 29 | " | 4 | 1 | 15 | 22 | 5 | 6 | " | 16 | 1 | 359 |
| 15. Imprudencia punible (no tráfico) | " | " | " | 3 | 16 | " | " | 16 | " | " | " | " | " | 1 | 4 | 8 | " | 5 | " | " | 9 | " | " | 3 | " | " | " | " | " | 6 | 2 | 3 | 4 | " | " | 1 | 5 | " | " | 1 | " | " | " | " | 37 | " | " | " | " | 25 | " | 149 |
| 16. Delitos relativos al tráfico de automóviles: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* Falsificación de matrícula (art. 279 bis) | " | " | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 |
| *b)* Quebrantamiento de condena (art. 334) | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *c)* Conducción bajo influencia del alcohol o tóxicos (art. 340 bis, *a*, 1.º) | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *d)* Conducción temeraria (art. 340 bis, *a*, 2.º) | " | " | " | " | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *e)* Riesgos para la circulación (art. 340 bis, *b*) | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *f)* Conducción sin permiso (art. 340 bis, *c*) | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| *g)* Omisión de socorro (art. 489 bis) | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 5 |
| *h)* Imprudencia (art. 565) | 2 | " | " | 6 | 3 | " | " | " | " | " | 1 | 1 | 2 | 1 | " | " | " | " | " | 2 | " | " | 3 | " | " | " | " | " | 2 | " | " | 5 | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | " | " | " | 6 | " | " | " | " | " | " | 36 |
| 17. Delitos definidos en Leyes especiales | " | " | " | " | " | " | " | 3 | " | " | " | 1 | " | " | " | 2 | " | " | " | " | " | " | " | 2 | " | 4 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 2 | 2 | " | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 17 |
| 18. Hechos casuales | 5 | 9 | " | " | 107 | 25 | 4 | 358 | " | 26 | 25 | 43 | 101 | 43 | 97 | " | 11 | 73 | 4 | 32 | " | 42 | " | 22 | " | 14 | 40 | 1 | 1 | 62 | 73 | 42 | 62 | " | 7 | 38 | 39 | 62 | 15 | 27 | 185 | 20 | 8 | " | 6 | 883 | 3 | 12 | " | 118 | " | 2.691 |
| TOTAL | 46 | 63 | 279 | 162 | 440 | 64 | 94 | 1.026 | 703 | 74 | 105 | 353 | 208 | 185 | 327 | 127 | 25 | 281 | 232 | 71 | 113 | 105 | 54 | 94 | 173 | 46 | 224 | 31 | 30 | 545 | 322 | 196 | 164 | 36 | 39 | 213 | 107 | 290 | 99 | 45 | 1.395 | 36 | 186 | 8 | 162 | 1.550 | 87 | 88 | 28 | 384 | 112 | 11.867 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Datos generales sobre el volumen de trabajo en la Fiscalía durante el año 1977.*

| AUDIENCIAS | Procedimientos pendientes en Fiscalía en 1.º de enero de 1977 | Procedimientos ingresados desde 1.º de enero de 1977 a 31 de diciembre | TOTAL | Pendientes en Fiscalía en 1.º de enero de 1978 | Dictámenes emitidos por: | | | | | Visitas efectuadas con asistencia de: | | | | Juicios orales a que han asistido en Audiencia y Juzgados | | | | | Asuntos gubernativos despachados por: | | | | Inspecciones directas de Sumarios | | | | Audiencias a Juntas de Protección a la mujer, de Beneficencia y otras Juntas de Autoridades | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | Fiscales Municipales y Comarcales | TOTAL | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | TOTAL | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | Fiscales Municipales y Comarcales | TOTAL | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | TOTAL | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | TOTAL | El Fiscal | Teniente Fiscal | Abogados Fiscales | TOTAL |
| Alava | " | 6.949 | 6.949 | 30 | 3.609 | 3.310 | " | " | 6.919 | 21 | 15 | " | 36 | 49 | 169 | " | 31 | 249 | 45 | 28 | " | 73 | 4 | 8 | 12 | 24 | 1 | " | " | 1 |
| Albacete | 1 | 5.723 | 5.724 | 1 | 1.245 | 2.183 | 2.017 | " | 5.445 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 121 | 116 | 24 | 267 | 88 | 36 | 28 | 152 | 2 | " | " | 2 | " | " | 3 | 3 |
| Alicante | 72 | 25.668 | 25.740 | 54 | 3.375 | 3.217 | 16.997 | 2.365 | 24.954 | " | 11 | 43 | 54 | " | 79 | 338 | 261 | 678 | 195 | 38 | 127 | 360 | " | " | 2 | 2 | " | " | 12 | 12 |
| Almería | " | 15.654 | 15.654 | " | 4.134 | 4.420 | 5.176 | 1.430 | 15.160 | 13 | 6 | 7 | 26 | 78 | 136 | 160 | 94 | 468 | 92 | " | " | 92 | 2 | " | " | 2 | 11 | " | " | 11 |
| Asturias | 111 | 35.215 | 35.970 | 133 | 4.082 | 4.995 | 23.034 | 2.421 | 34.532 | " | 27 | 67 | 94 | 2 | 117 | 355 | 737 | 1.211 | 259 | 5 | 1 | 265 | " | " | 1 | 1 | " | " | 10 | 10 |
| Avila | " | 2.983 | 2.983 | " | 2.721 | 62 | " | 39 | 2.822 | 31 | " | " | 31 | 21 | " | " | 29 | 50 | 52 | " | " | 52 | 2 | " | " | 2 | 5 | " | " | 5 |
| Badajoz | " | 11.458 | 11.458 | " | 5.722 | 5.236 | " | " | 10.958 | 33 | 24 | " | 57 | 114 | 131 | " | 198 | 443 | 222 | 94 | " | 316 | " | " | " | " | 12 | 1 | " | 13 |
| Baleares | 43 | 19.823 | 19.866 | " | 428 | 4.701 | 12.614 | 1.170 | 18.913 | 3 | 23 | 29 | 55 | 26 | 256 | 464 | 152 | 898 | 140 | 37 | 6 | 183 | 1 | 2 | " | 3 | 12 | " | " | 12 |
| Barcelona | 774 | 124.987 | 125.761 | 852 | 1.176 | 431 | 121.305 | 1.997 | 124.909 | " | " | 428 | 428 | " | " | 1.734 | 794 | 2.528 | 17 | 174 | " | 191 | " | " | " | " | " | 12 | " | 12 |
| Burgos | " | 10.367 | 10.367 | " | 1.495 | 4.355 | 4.106 | " | 9.956 | 6 | 26 | 19 | 51 | 4 | 155 | 118 | 83 | 360 | 156 | 22 | 14 | 192 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Cáceres | " | 5.041 | 5.041 | " | 444 | 2.211 | 2.264 | " | 4.919 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 28 | 33 | 46 | 114 | 61 | 191 | 39 | 291 | " | " | 1 | 1 | " | " | " | " |
| Cádiz | 105 | 18.615 | 18.720 | 363 | 2.587 | 5.393 | 9.910 | 513 | 17.890 | 2 | 13 | 39 | 54 | 18 | 114 | 281 | 349 | 413 | 238 | " | " | 238 | " | " | " | " | 12 | " | " | 12 |
| Castellón | 70 | 7.948 | 8.018 | 45 | 1.688 | 2.104 | 1.650 | 53 | 7.495 | 10 | 12 | 7 | 29 | 57 | 167 | 138 | 87 | 449 | 1 | " | " | 1 | " | " | " | " | " | " | 4 | 4 |
| Ciudad Real | " | 6.479 | 6.479 | " | 2.994 | 3.016 | " | 167 | 6.177 | 1 | 20 | " | 21 | 36 | 131 | " | 114 | 281 | 61 | 66 | " | 127 | 7 | " | " | 7 | " | 5 | " | 5 |
| Córdoba | 105 | 18.682 | 18.787 | 130 | 2.680 | 4.279 | 10.669 | 100 | 17.728 | " | 37 | 92 | 129 | 1 | 120 | 304 | 375 | 800 | 7 | 3 | " | 10 | " | 3 | 4 | 7 | " | 3 | " | 3 |
| Coruña (La) | " | 20.639 | 20.639 | " | 4.888 | 3.818 | 11.156 | " | 19.862 | 51 | 21 | 40 | 112 | 109 | 47 | 195 | " | 351 | 233 | 77 | 2 | 312 | " | " | 2 | 2 | " | 10 | " | 10 |
| Cuenca | " | 3.243 | 3.243 | " | 3.137 | " | " | " | 3.137 | 7 | " | " | 7 | 45 | " | " | 54 | 99 | 128 | " | " | 128 | 4 | " | " | 4 | 5 | " | " | 5 |
| Gerona | " | 21.100 | 21.100 | " | 8.804 | 5.600 | 6.300 | " | 20.272 | 4 | 26 | 65 | 95 | 159 | 127 | 196 | 187 | 669 | 5 | " | " | 5 | 2 | 20 | 32 | 54 | " | " | " | " |
| Granada | " | 21.601 | 21.601 | " | 1.344 | 5.323 | 14.308 | " | 26.975 | 35 | 10 | 17 | 62 | " | 130 | 351 | 83 | 564 | 441 | 22 | " | 463 | " | " | " | " | " | " | " | " |
| Guadalajara | 10 | 4.120 | 4.130 | 8 | 3.941 | " | " | 51 | 3.992 | 20 | " | " | 20 | 61 | " | " | 49 | 110 | 347 | " | " | 347 | 20 | " | " | 20 | 12 | " | " | 12 |
| Guipúzcoa | " | 13.602 | 13.602 | " | 3.446 | 2.400 | 7.756 | " | 13.602 | 4 | 5 | 20 | 29 | 47 | 101 | 229 | " | 377 | 216 | 4 | 53 | 273 | 7 | " | " | 7 | 5 | " | " | 5 |
| Huelva | 20 | 10.918 | 10.938 | 45 | 4.285 | 4.564 | " | " | 8.849 | 38 | 19 | " | 57 | 98 | 130 | " | 159 | 387 | 76 | 68 | " | 144 | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 |
| Huesca | " | 8.590 | 8.590 | " | 8.300 | " | " | " | 8.300 | 32 | " | " | 32 | 58 | " | " | 200 | 258 | 44 | " | " | 44 | " | " | " | " | " | " | " | " |
| Jaén | 14 | 9.802 | 9.816 | 29 | 2.480 | 3.018 | 3.027 | 914 | 9.439 | 7 | 15 | 9 | 31 | 40 | 53 | 96 | 128 | 317 | 174 | 64 | 71 | 309 | " | " | " | " | 15 | " | " | 15 |
| Las Palmas | " | 22.404 | 22.404 | " | 7.325 | 419 | 14.383 | " | 22.131 | 8 | 1 | 65 | 74 | 45 | 10 | 321 | 77 | 453 | 250 | 23 | " | 273 | " | " | " | " | 12 | " | " | 12 |
| León | 12 | 8.281 | 8.293 | 25 | 1.709 | 2.962 | 2.870 | 247 | 7.788 | 10 | 13 | 16 | 39 | 30 | 95 | 112 | 85 | 322 | 24 | 49 | 46 | 119 | " | " | " | " | " | " | " | " |
| Lérida | " | 6.973 | 6.973 | " | 2.953 | 3.865 | " | " | 6.818 | 16 | 13 | " | 29 | 23 | 60 | " | 43 | 126 | 113 | 24 | " | 137 | 3 | 2 | " | 5 | " | 2 | " | 2 |
| Logroño | 2 | 4.765 | 4.767 | 1 | 4.530 | " | " | 56 | 4.586 | 25 | " | " | 25 | 49 | " | " | 106 | 155 | 89 | " | " | 89 | 2 | " | " | 2 | " | " | " | " |
| Lugo | " | 5.687 | 5.687 | " | 1.838 | 3.491 | " | 70 | 5.399 | 10 | 30 | " | 40 | 65 | 77 | " | 106 | 248 | 30 | 43 | " | 73 | " | " | " | " | 4 | " | " | 4 |
| Madrid | 587 | 216.204 | 216.791 | 809 | 1.961 | 2.790 | 138.942 | 64.891 | 208.942 | " | " | 39 | 39 | " | " | 3.508 | 132 | 3.540 | 49 | 72 | 4 | 125 | " | " | 13 | 13 | " | 14 | 12 | 36 |
| Málaga | 110 | 59.580 | 59.690 | 300 | 4.020 | 6.514 | 47.210 | " | 57.744 | 5 | 12 | 34 | 51 | 87 | 160 | 978 | 370 | 1.595 | 274 | " | " | 274 | 1 | " | 2 | 3 | 7 | " | " | 7 |
| Murcia | " | 18.639 | 18.639 | " | 1.978 | 3.581 | 11.137 | 1.042 | 11.738 | 21 | 44 | 95 | 160 | 9 | 112 | 385 | 235 | 741 | 48 | 63 | 145 | 256 | 6 | " | " | 6 | 12 | " | " | 12 |
| Navarra | " | 14.108 | 14.108 | 8 | 3.803 | 4.417 | 4.493 | 714 | 13.427 | 9 | 46 | 15 | 70 | 28 | 210 | 153 | 212 | 603 | 282 | " | 67 | 349 | 5 | 2 | " | 7 | " | 9 | " | 9 |
| Orense | " | 5.284 | 5.284 | " | 2.057 | 1.836 | 1.223 | " | 5.116 | 1 | 1 | 5 | 7 | 62 | 26 | 73 | " | 161 | 49 | 1 | 6 | 56 | " | " | " | " | " | 11 | " | 11 |
| Palencia | " | 4.005 | 4.005 | 2 | 3.154 | 683 | " | " | 3.837 | 5 | " | " | 5 | 108 | 34 | " | 19 | 161 | 132 | " | " | 132 | " | " | " | " | 14 | " | " | 14 |
| Pontevedra | " | 21.664 | 21.664 | " | 2.977 | 3.248 | 9.754 | 4.986 | 20.965 | 10 | 13 | 26 | 49 | 26 | 18 | 448 | 98 | 650 | 31 | 20 | 94 | 145 | 1 | " | 1 | 2 | 9 | " | " | 9 |
| Salamanca | " | 6.317 | 6.317 | " | 2.204 | 3.679 | " | " | 5.883 | 53 | 12 | " | 65 | 120 | 166 | " | 78 | 364 | 140 | 36 | " | 176 | 12 | 5 | " | 17 | 80 | " | " | 80 |
| Santa Cruz de Tenerife | 123 | 18.916 | 19.039 | 87 | 3.113 | 3.811 | 11.346 | 983 | 18.253 | 8 | 13 | 42 | 63 | 20 | 96 | 343 | 177 | 636 | 127 | 11 | 5 | 143 | 1 | " | 6 | 7 | 11 | 1 | " | 12 |
| Santander | 27 | 11.238 | 11.265 | 9 | 2.057 | 2.682 | 5.858 | 195 | 10.732 | 22 | 15 | 39 | 76 | 89 | 82 | 152 | 125 | 448 | 183 | 13 | 9 | 205 | 3 | " | 1 | 4 | " | " | " | " |
| Segovia | " | 1.939 | 1.939 | " | 1.814 | 25 | " | " | 1.839 | 7 | " | " | 7 | 38 | 5 | " | " | 43 | 25 | " | " | 25 | " | " | " | " | 1 | " | " | 1 |
| Sevilla | 726 | 53.142 | 55.208 | 903 | 71 | 6.907 | 44.541 | 1.446 | 52.965 | 2 | 8 | 2 | 12 | " | 134 | 892 | 302 | 927 | 23 | 510 | 737 | 1.270 | " | " | 2 | 2 | " | 11 | " | 11 |
| Soria | 18 | 2.161 | 2.179 | 13 | 983 | 1.092 | " | " | 2.075 | 3 | " | " | 3 | 15 | 63 | " | 5 | 88 | 36 | 2 | " | 38 | 1 | 3 | " | 4 | " | 1 | " | 1 |
| Tarragona | 81 | 17.749 | 17.890 | 103 | 2.188 | 4.719 | 9.518 | 619 | 17.044 | 14 | 17 | 46 | 77 | 43 | 127 | 250 | 186 | 606 | 110 | 3 | " | 113 | 2 | " | 3 | 5 | 2 | 6 | " | 8 |
| Teruel | 17 | 2.514 | 2.531 | 73 | 2.368 | " | " | " | 2.368 | 7 | " | " | 7 | 81 | " | " | 2 | 83 | 32 | " | " | 32 | 1 | " | " | 1 | 4 | " | " | 4 |
| Toledo | " | 5.422 | 5.422 | " | 2.349 | 2.399 | " | 496 | 5.244 | 7 | 15 | " | 22 | 35 | 63 | " | 58 | 156 | 57 | 58 | " | 115 | 3 | " | " | 3 | " | 1 | " | 1 |
| Valencia | 280 | 66.203 | 66.483 | 397 | 934 | 6.401 | 54.716 | 2.026 | 64.077 | " | 18 | 134 | 152 | " | 151 | 1.208 | 498 | 1.857 | 422 | 107 | 359 | 888 | " | " | 7 | 7 | 44 | 12 | 20 | 76 |
| Valladolid | " | 24.499 | 24.499 | " | 7.960 | 7.760 | 8.191 | " | 23.911 | 6 | 12 | 11 | 29 | 85 | 162 | 228 | 84 | 559 | 70 | 1 | " | 71 | 5 | 1 | " | 6 | 10 | 2 | 2 | 14 |
| Vizcaya | 62 | 26.104 | 26.166 | 370 | 3.015 | 3.107 | 18.400 | 580 | 25.102 | 13 | 22 | 46 | 81 | 18 | 95 | 480 | 20 | 613 | 702 | 62 | 21 | 785 | 3 | 1 | 12 | 16 | 12 | " | " | 12 |
| Zamora | " | 3.695 | 3.695 | " | 1.795 | 1.900 | " | " | 3.695 | 27 | " | " | 27 | 57 | 56 | " | 86 | 196 | 45 | 7 | " | 52 | " | " | " | " | " | 4 | " | 4 |
| Zaragoza | " | 23.757 | 23.757 | " | 1.059 | 1.933 | 16.386 | 3.287 | 22.665 | 10 | 49 | 82 | 141 | 4 | 142 | 453 | 352 | 951 | 683 | 18 | 155 | 856 | " | " | " | " | 54 | 1 | " | 55 |
| Audiencia Nacional | " | 2.931 | 2.931 | 16 | 44 | 866 | 1.292 | " | 2.202 | " | 215 | 417 | 632 | " | " | 2 | " | 2 | 18 | 60 | 1 | 79 | " | 10 | 2 | 12 | " | " | " | " |
| TOTAL | 3.370 | 1.073.388 | 1.076.758 | 4.806 | 153.964 | 155.723 | 636.433 | 92.858 | 1.038.978 | 615 | 714 | 2.002 | 3.331 | 2.118 | 4.521 | 15.094 | 7.910 | 29.643 | 7.742 | 2.048 | 1.989 | 11.779 | 101 | 60 | 105 | 266 | 385 | 106 | 63 | 554 |

**Estado D**

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Asuntos civiles incoados en los Juzgados de 1.ª Instancia de cada una de las Provincias del Territorio en 1977.*

| AUDIENCIA TERRITORIAL DE | JUZGADOS DE LA PROVINCIA DE | Cuestiones de competencia | Mayores cuantía | Menores cuantía | Ejecutivos | Arrendamientos | Suspensiones de pago | Quiebras | Otros asuntos Contenciosos | Asuntos de Jurisdicción voluntaria | Número de asuntos en que intervino el M. F. | Número total de asuntos civiles incoados en los Juzgados | Número de sentencias dictadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBACETE | Albacete | 9 | 57 | 183 | 465 | 25 | 3 | 1 | 118 | 468 | 447 | 1.329 | 335 |
| | Ciudad Real | 4 | 46 | 92 | 407 | 42 | 1 | 1 | 125 | 796 | 801 | 1.514 | 421 |
| | Cuenca | 2 | 25 | 40 | 144 | 33 | " | " | 68 | 271 | 270 | 583 | 116 |
| | Murcia | 47 | 118 | 403 | 1.468 | 64 | 7 | 3 | 602 | 1.559 | 1.538 | 4.271 | 1.678 |
| ASTURIAS | Oviedo | 24 | 252 | 570 | 1.316 | 119 | 9 | 4 | 905 | 1.861 | 2.063 | 5.060 | 1.621 |
| BALEARES | Palma de Mallorca | 22 | 142 | 360 | 2.481 | 44 | 8 | 16 | 381 | 1.277 | 818 | 4.731 | 2.770 |
| BARCELONA | Barcelona | 119 | 898 | 2.956 | 8.854 | 295 | 221 | 37 | 3.382 | 4.435 | 4.361 | 21.197 | 10.757 |
| | Gerona | 12 | 101 | 275 | 463 | 38 | 6 | 4 | 346 | 617 | 649 | 1.862 | 680 |
| | Lérida | 9 | 69 | 162 | 516 | 40 | 5 | 1 | 154 | 668 | 666 | 1.624 | 597 |
| | Tarragona | 20 | 124 | 368 | 691 | 22 | 4 | " | 214 | 986 | 952 | 2.429 | 962 |
| BURGOS | Bilbao | 29 | 210 | 530 | 1.478 | 55 | 5 | 6 | 490 | 1.620 | 1.596 | 4.423 | 1.782 |
| | Burgos | 11 | 88 | 374 | 343 | 143 | 2 | " | 200 | 582 | 690 | 1.743 | 860 |
| | Logroño | 3 | 60 | 171 | 288 | 39 | " | " | 107 | 458 | 461 | 1.126 | 406 |
| | Santander | 13 | 179 | 363 | 496 | 78 | " | " | 326 | 1.033 | 1.051 | 2.488 | 983 |
| | Soria | 3 | 11 | 43 | 60 | 40 | " | 1 | 34 | 255 | 249 | 447 | 123 |
| | Vitoria | 2 | 33 | 134 | 348 | 21 | 2 | " | 201 | 408 | 425 | 1.149 | 399 |
| CACERES | Cáceres | 5 | 31 | 114 | 280 | 52 | " | " | 161 | 619 | 593 | 1.262 | 376 |
| | Badajoz | 11 | 32 | 119 | 825 | 71 | 2 | " | 186 | 919 | 1.019 | 2.165 | 532 |
| CORUÑA (LA) | La Coruña | 13 | 159 | 462 | 662 | 69 | 4 | 1 | 611 | 1.006 | 870 | 2.987 | 964 |
| | Lugo | 12 | 96 | 180 | 353 | 35 | 2 | 1 | 136 | 382 | 462 | 1.197 | 475 |
| | Orense | 22 | 176 | 171 | 132 | 10 | " | " | 117 | 263 | 242 | 791 | 375 |
| | Pontevedra | 18 | 104 | 344 | 1.227 | 44 | 8 | " | 742 | 758 | 760 | 3.245 | 1.784 |
| GRANADA | Almería | 2 | 24 | 38 | 158 | 5 | " | " | 326 | 264 | 255 | 817 | 133 |
| | Granada | 29 | 109 | 219 | 1.467 | 62 | 4 | " | 504 | 976 | 907 | 3.370 | 1.379 |
| | Jaén | 16 | 39 | 114 | 292 | 25 | 5 | " | 251 | 605 | 670 | 1.347 | 456 |
| | Málaga | 33 | 84 | 171 | 905 | 23 | 2 | 2 | 544 | 547 | 608 | 2.311 | 833 |
| LAS PALMAS | Las Palmas | 16 | 148 | 225 | 1.733 | 47 | 7 | " | 964 | 1.135 | 941 | 4.235 | 1.202 |
| | Santa Cruz de Tenerife | 12 | 92 | 165 | 11.156 | 41 | 6 | 3 | 414 | 1.090 | 855 | 2.979 | 1.357 |
| MADRID | Avila | 6 | 25 | 46 | 251 | 10 | " | " | 46 | 254 | 257 | 633 | 151 |
| | Guadalajara | " | 11 | 33 | 80 | 13 | " | " | 42 | 390 | 374 | 569 | 126 |
| | Madrid | 121 | 916 | 2.066 | 15.331 | 264 | 85 | 24 | 7.759 | 6.536 | 6.781 | 33.102 | 17.719 |
| | Segovia | 2 | 18 | 99 | 122 | 22 | " | " | 237 | 220 | 374 | 720 | 180 |
| | Toledo | 11 | 43 | 130 | 543 | 33 | 3 | 1 | 253 | 690 | 611 | 1.707 | 573 |
| NAVARRA | Pamplona | 15 | 126 | 307 | 954 | 58 | 5 | " | 380 | 801 | 673 | 2.646 | 1.013 |
| | San Sebastián | 18 | 173 | 381 | 1.128 | 29 | 24 | " | 564 | 1.071 | 1.169 | 3.388 | 1.775 |
| SEVILLA | Cádiz | 35 | 79 | 173 | 1.566 | 67 | 2 | " | 668 | 1.147 | 1.057 | 3.737 | 1.150 |
| | Córdoba | 20 | 68 | 188 | 1.282 | 66 | 8 | 1 | 637 | 845 | 1.057 | 3.115 | 1.353 |
| | Huelva | 4 | 34 | 99 | 685 | 44 | 2 | " | 191 | 487 | 348 | 1.546 | 552 |
| | Sevilla | 24 | 172 | 544 | 3.827 | 113 | 15 | 2 | 811 | 1.484 | 1.117 | 6.992 | 3.465 |
| VALENCIA | Alicante | 67 | 235 | 921 | 3.298 | 84 | 31 | 2 | 832 | 1.254 | 1.286 | 6.724 | 3.347 |
| | Castellón | 6 | 69 | 192 | 473 | 25 | 5 | 1 | 222 | 752 | 697 | 1.748 | 517 |
| | Valencia | 39 | 228 | 926 | 4.690 | 100 | 37 | 13 | 1.682 | 2.866 | 2.113 | 10.581 | 4.784 |
| VALLADOLID | León | 7 | 103 | 281 | 530 | 50 | " | 1 | 254 | 916 | 928 | 2.142 | 708 |
| | Palencia | 2 | 26 | 103 | 196 | 57 | " | " | 77 | 448 | 427 | 909 | 310 |
| | Salamanca | 4 | 54 | 149 | 543 | 42 | " | " | 161 | 539 | 539 | 1.422 | 554 |
| | Valladolid | 9 | 82 | 266 | 1.020 | 76 | 7 | 1 | 352 | 793 | 802 | 2.606 | 1.221 |
| | Zamora | 4 | 33 | 94 | 310 | 45 | 1 | " | 62 | 382 | 393 | 931 | 406 |
| ZARAGOZA | Huesca | 2 | 41 | 73 | 114 | 14 | " | 2 | 75 | 434 | 368 | 755 | 192 |
| | Teruel | 1 | 15 | 48 | 63 | 13 | 1 | 2 | 49 | 243 | 243 | 435 | 120 |
| | Zaragoza | 39 | 197 | 945 | 2.595 | 82 | 13 | 3 | 522 | 1.606 | 1.694 | 6.002 | 2.942 |
| | TOTAL | 954 | 6.115 | 17.410 | 68.509 | 2.859 | 552 | 134 | 28.485 | 50.016 | 48.787 | 175.164 | 75.513 |

**Estado E**

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Asuntos civiles iniciados en la Audiencia Territorial desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| AUDIENCIA TERRITORIAL DE | Competencias | JURISDICCION CONTENCIOSA | | JURISDICCION VOLUNTARIA | | TOTAL de asuntos iniciados | TOTAL de sentencias dictadas | ASUNTOS EN QUE INTERVINO EL MINISTERIO FISCAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Con relación a las personas | Con relación a las cosas | Con relación a las personas | Con relación a las cosas | | | Número de asuntos | TOTAL de dictámenes |
| Albacete .. ... ... ... ... | 8 | 7 | 396 | 6 | 3 | 420 | 246 | 17 | 34 |
| Baleares ... ... ... ... ... | 5 | 2 | 248 | " | " | 255 | 154 | 10 | 9 |
| Barcelona ... ... ... ... ... | 26 | 265 | 1.232 | " | " | 1.523 | 843 | 20 | 14 |
| Burgos ... ... ... ... ... ... | 3 | 4 | 950 | " | 3 | 960 | 467 | 956 | 6 |
| Cáceres ... ... ... ... ... ... | 2 | 2 | 179 | 1 | 3 | 187 | 169 | 4 | 8 |
| Coruña (La) ... ... ... ... | " | 80 | 728 | " | " | 808 | 550 | 43 | 12 |
| Granada ... ... ... ... ... | 13 | 23 | 546 | 19 | 23 | 624 | 246 | 33 | 33 |
| Madrid ... ... ... ... ... ... | 36 | 73 | 1.535 | 1 | " | 1.645 | 1.066 | 37 | 25 |
| Oviedo ... ... ... ... ... ... | 124 | " | 200 | " | " | 324 | 293 | 7 | 7 |
| Las Palmas ... ... ... ... | " | 13 | 248 | " | 1 | 262 | 255 | 5 | 5 |
| Pamplona ... ... ... ... ... | 1 | " | 374 | " | " | 375 | 234 | 1 | 1 |
| Sevilla ... ... ... ... ... ... | " | 420 | 298 | " | " | 718 | 520 | 5 | " |
| Valencia ... ... ... ... ... | 9 | 30 | 889 | 6 | 10 | 944 | 519 | 59 | 59 |
| Valladolid ... ... ... ... ... | 1 | 3 | 596 | " | " | 600 | 422 | 18 | 18 |
| Zaragoza ... ... ... ... ... | " | " | 411 | " | " | 411 | 303 | 6 | 16 |
| TOTAL ... ... ... ... | 228 | 922 | 8.830 | 33 | 43 | 10.056 | 6.287 | 1.221 | 247 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Asuntos civiles tramitados en la Audiencia Provincial desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| AUDIENCIAS | Competencias | JURISDICCION CONTENCIOSA | | Jurisdicción voluntaria | TOTAL de Asuntos tramitados en la Audiencia | Asuntos en que intervino el Ministerio Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Apelaciones de asuntos procedentes de | | | | |
| | | Juzgados de 1.ª Instancia | Juzgados Municipales y Comarcales | | | |
| Alava | " | 3 | 47 | " | 50 | " |
| Albacete | " | 11 | 31 | 1 | 43 | " |
| Alicante | " | 38 | 123 | " | 161 | " |
| Almería | " | 23 | 24 | 4 | 51 | " |
| Asturias | " | 35 | 182 | " | 217 | 2 |
| Avila | " | 1 | 14 | " | 15 | " |
| Badajoz | " | 9 | 46 | 3 | 58 | 2 |
| Baleares | 1 | 21 | 64 | 3 | 89 | 2 |
| Barcelona | 1 | 125 | 801 | 26 | 953 | 33 |
| Burgos | " | 19 | 110 | 1 | 130 | 1 |
| Cáceres | " | 6 | 45 | " | 51 | " |
| Cádiz | 1 | 17 | 60 | 2 | 80 | 2 |
| Castellón | " | 8 | 23 | 1 | 32 | " |
| Ciudad Real | 2 | 14 | 29 | 2 | 47 | 3 |
| Córdoba | " | 19 | 66 | " | 85 | " |
| Coruña (La) | " | 70 | 228 | 9 | 307 | " |
| Cuenca | " | 5 | 6 | " | 11 | " |
| Gerona | " | 27 | 62 | " | 89 | 1 |
| Granada | 1 | 23 | 96 | " | 120 | 2 |
| Guadalajara | " | 12 | 12 | " | 24 | " |
| Guipúzcoa | " | 24 | 89 | 9 | 122 | 1 |
| Huelva | " | 17 | 50 | " | 67 | " |
| Huesca | " | 10 | 23 | 1 | 34 | 2 |
| Jaén | " | 18 | 32 | " | 50 | " |
| Las Palmas | " | 49 | 136 | 22 | 207 | 15 |
| León | " | 14 | 96 | " | 110 | " |
| Lérida | " | 7 | 48 | 2 | 57 | 2 |
| Logroño | " | 7 | 28 | 4 | 39 | 4 |
| Lugo | " | 14 | 64 | " | 78 | " |
| Madrid | 4 | 178 | 871 | 76 | 1.129 | 76 |
| Málaga | " | 49 | 92 | 7 | 148 | 7 |
| Murcia | " | 51 | 101 | 4 | 156 | 4 |
| Navarra | " | 9 | 48 | 1 | 58 | " |
| Orense | " | 12 | 58 | " | 70 | " |
| Palencia | " | 15 | 27 | " | 42 | " |
| Pontevedra | " | 50 | 179 | 4 | 233 | 5 |
| Salamanca | " | 13 | 58 | 3 | 74 | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife | " | 37 | 84 | " | 121 | " |
| Santander | " | 30 | 188 | 4 | 222 | " |
| Segovia | " | 1 | 20 | " | 21 | " |
| Sevilla | " | 48 | 204 | 2 | 254 | 1 |
| Soria | " | 5 | 16 | " | 21 | " |
| Tarragona | " | 20 | 90 | 1 | 111 | 1 |
| Teruel | " | 11 | 19 | " | 30 | " |
| Toledo | " | 15 | 29 | 2 | 46 | 2 |
| Valencia | " | 39 | 354 | 1 | 394 | 2 |
| Valladolid | " | 17 | 133 | " | 150 | 5 |
| Vizcaya | 1 | 56 | 230 | 7 | 294 | 3 |
| Zamora | " | 5 | 42 | 2 | 49 | " |
| Zaragoza | " | 34 | 202 | 9 | 245 | 3 |
| TOTAL | 38 | 1.371 | 5.590 | 213 | 7.185 | 185 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Juicios de faltas en los Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz de toda la provincia.*

| PROVINCIAS | JUICIOS DE FALTAS | | | | | SENTENCIAS | | APELACIONES | | | SENTENCIAS JUEZ DE INSTRUCCION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pendientes del año anterior | Ingresados durante el año 1977 | TOTAL | Juicios celebrados | Pendientes en 31 diciembre 1977 | Condenatorias | Absolutorias | Por el Fiscal | Por el perjudicado | Por el acusado | Confirmando | Revocando |
| Alava | 248 | 2.054 | 2.302 | 1.997 | 305 | 1.089 | 479 | " | 16 | 121 | 53 | 15 |
| Albacete | 750 | 2.626 | 3.376 | 2.301 | 1.075 | 1.016 | 900 | 26 | 28 | 127 | 100 | 24 |
| Alicante | 3.827 | 12.203 | 16.030 | 9.372 | 3.953 | 3.481 | 3.089 | 12 | 89 | 222 | 220 | 55 |
| Almería | 791 | 3.852 | 4.643 | 3.913 | 730 | 1.288 | 2.625 | 3 | 33 | 68 | 99 | 24 |
| Asturias | 1.795 | 13.238 | 15.033 | 1.148 | 2.338 | 5.031 | 2.770 | 15 | 431 | 446 | 632 | 333 |
| Avila | 170 | 1.191 | 1.361 | 876 | 263 | 607 | 269 | 5 | 18 | 49 | 48 | 15 |
| Badajoz | 473 | 5.088 | 5.561 | 3.146 | 1.638 | 2.098 | 1.048 | 12 | 31 | 94 | 96 | 29 |
| Baleares | 780 | 8.827 | 9.607 | 8.311 | 1.296 | 1.940 | 4.750 | 25 | " | 56 | 51 | 26 |
| Barcelona | 16.762 | 85.205 | 101.967 | 45.421 | 17.028 | 13.974 | 32.993 | 79 | 255 | 657 | 702 | 143 |
| Burgos | 657 | 4.847 | 5.504 | 3.231 | 1.059 | 1.632 | 1.599 | 8 | 100 | 186 | 201 | 78 |
| Cáceres | 672 | 3.891 | 4.563 | 3.712 | 851 | 1.799 | 703 | " | 29 | 106 | 96 | 29 |
| Cádiz | 4.828 | 13.078 | 17.906 | 11.999 | 5.907 | 5.515 | 3.093 | 21 | 122 | 295 | 298 | 77 |
| Castellón | 381 | 2.138 | 2.519 | 1.994 | 412 | 1.339 | 438 | 7 | 15 | 78 | 81 | 13 |
| Ciudad Real | 840 | 4.628 | 5.468 | 2.448 | 828 | 1.887 | 561 | 64 | 31 | 103 | 130 | 45 |
| Córdoba | 1.352 | 9.387 | 10.739 | 4.211 | 1.578 | 2.328 | 1.883 | 15 | 58 | 161 | 112 | 57 |
| Coruña (La) | 3.172 | 12.461 | 15.633 | 8.938 | 6.669 | 2.371 | 2.219 | 9 | 143 | 377 | 380 | 109 |
| Cuenca | 176 | 785 | 961 | 768 | 193 | 485 | 205 | 12 | 19 | 28 | 44 | 12 |
| Gerona | 968 | 4.031 | 4.999 | 2.331 | 1.216 | 1.425 | 1.265 | 8 | 29 | 100 | 95 | 35 |
| Granada | 1.758 | 18.149 | 19.907 | 6.199 | 1.716 | 4.533 | 1.666 | 4 | 116 | 337 | 318 | 108 |
| Guadalajara | 154 | 1.061 | 1.215 | 508 | 234 | 318 | 195 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| Guipúzcoa | 2.177 | 5.936 | 8.113 | 4.424 | 979 | 2.643 | 1.781 | 26 | 185 | 180 | 176 | 41 |
| Huelva | 248 | 2.504 | 2.752 | 1.838 | 914 | 1.345 | 553 | 2 | 17 | 38 | 54 | 13 |
| Huesca | 199 | 1.248 | 1.447 | 808 | 252 | 487 | 289 | 13 | 14 | 57 | 55 | 9 |
| Jaén | 919 | 5.992 | 6.911 | 4.406 | 1.057 | 2.543 | 1.282 | 16 | 28 | 191 | 160 | 45 |
| Las Palmas | 2.040 | 8.453 | 10.493 | 3.351 | 2.474 | 1.662 | 1.689 | 59 | 38 | 154 | 156 | 30 |
| León | 909 | 5.534 | 6.443 | 5.301 | 1.142 | 2.363 | 1.445 | 27 | 111 | 331 | 378 | 82 |
| Lérida | 933 | 5.813 | 6.746 | 2.667 | 1.214 | 1.063 | 912 | 4 | 106 | 78 | 119 | 41 |
| Logroño | 904 | 3.286 | 4.190 | 1.765 | 832 | 1.137 | 628 | 11 | 21 | 57 | 57 | 23 |
| Lugo | 386 | 1.980 | 2.366 | 1.824 | 542 | 1.069 | 733 | 24 | 68 | 227 | 203 | 66 |
| Madrid | 12.523 | 60.486 | 73.009 | 32.533 | 13.538 | 15.841 | 16.692 | 44 | 283 | 877 | 731 | 193 |
| Málaga | 2.441 | 17.572 | 20.013 | 9.120 | 2.670 | 5.553 | 3.567 | 36 | 51 | 214 | 190 | 65 |
| Murcia | 1.230 | 8.890 | 10.120 | 4.402 | 1.606 | 2.799 | 1.603 | 12 | 48 | 297 | 267 | 90 |
| Navarra | 348 | 1.944 | 2.292 | 1.825 | 533 | 845 | 625 | 4 | 14 | 50 | 56 | 22 |
| Orense | 198 | 2.055 | 2.253 | 1.973 | 280 | 1.027 | 946 | " | 84 | 111 | 148 | 47 |
| Palencia | 94 | 1.939 | 2.033 | 1.869 | 164 | 1.214 | 655 | " | 3 | 38 | 29 | 11 |
| Pontevedra | 3.754 | 8.871 | 12.625 | 5.320 | 1.136 | 3.041 | 1.841 | 24 | 193 | 400 | 374 | 138 |
| Salamanca | 369 | 3.845 | 4.214 | 1.887 | 615 | 889 | 998 | 3 | 42 | 85 | 72 | 32 |
| Santa Cruz de Tenerife | 983 | 4.881 | 5.864 | 4.819 | 1.045 | 2.404 | 2.415 | 16 | 63 | 173 | 166 | 47 |
| Santander | 1.147 | 2.685 | 3.832 | 2.772 | 1.060 | 1.815 | 957 | 4 | 87 | 234 | 220 | 44 |
| Segovia | 148 | 1.171 | 1.319 | 968 | 176 | 612 | 322 | 3 | 12 | 19 | 22 | 11 |
| Sevilla | 3.108 | 29.928 | 33.036 | 27.649 | 5.387 | 6.539 | 4.194 | 109 | 87 | 220 | 293 | 85 |
| Soria | 101 | 879 | 980 | 830 | 150 | 259 | 352 | " | 6 | 19 | 10 | 2 |
| Tarragona | 920 | 4.331 | 5.251 | 2.204 | 1.246 | 1.638 | 566 | 24 | 54 | 118 | 135 | 27 |
| Teruel | 98 | 878 | 976 | 561 | 94 | 379 | 167 | " | 1 | 35 | 31 | 4 |
| Toledo | 888 | 3.174 | 4.062 | 2.119 | 832 | 1.409 | 710 | 17 | 26 | 75 | 74 | 27 |
| Valencia | 5.648 | 35.496 | 41.144 | 12.991 | 6.012 | 8.790 | 4.211 | 17 | 72 | 647 | 628 | 100 |
| Valladolid | 619 | 7.416 | 8.035 | 6.615 | 1.420 | 2.819 | 831 | 5 | 48 | 87 | 54 | 28 |
| Vizcaya | 3.841 | 14.605 | 18.446 | 9.722 | 3.845 | 5.293 | 4.429 | 26 | 332 | 383 | 518 | 223 |
| Zamora | 35 | 1.971 | 2.006 | 1.989 | 15 | 881 | 447 | 13 | 19 | 79 | 73 | 25 |
| Zaragoza | 1.800 | 11.361 | 13.161 | 5.025 | 1.136 | 3.322 | 1.304 | 73 | 90 | 272 | 308 | 77 |
| TOTAL | 89.562 | 473.864 | 563.426 | 286.307 | 101.655 | 135.837 | 119.824 | 939 | 3.794 | 9.073 | 9.326 | 2.873 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Asuntos civiles tramitados en los Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz de todas las provincias durante 1977*

| PROVINCIAS | ASUNTOS CIVILES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pendientes del año anterior | Incoados durante el año | TOTAL | Resueltos | Pendientes en 31 de diciembre 1977 | Casos en que intervino el Ministerio Fiscal |
| Alava | 136 | 899 | 1.035 | 887 | 148 | " |
| Albacete | 873 | 1.173 | 2.046 | 1.305 | 741 | 3 |
| Alicante | 3.565 | 4.153 | 7.718 | 3.452 | 4.266 | 18 |
| Almería | 248 | 519 | 767 | 615 | 152 | 3 |
| Asturias | 576 | 3.121 | 3.697 | 3.071 | 626 | 66 |
| Avila | 68 | 250 | 318 | 225 | 93 | 10 |
| Badajoz | 278 | 1.368 | 1.646 | 1.301 | 345 | 8 |
| Baleares | 563 | 3.828 | 4.391 | 3.752 | 639 | " |
| Barcelona | 9.478 | 25.758 | 35.236 | 25.008 | 10.228 | 142 |
| Burgos | 213 | 1.308 | 1.521 | 1.358 | 163 | 9 |
| Cáceres | 263 | 765 | 1.028 | 741 | 287 | 17 |
| Cádiz | 616 | 2.361 | 2.977 | 2.303 | 674 | 25 |
| Castellón | 170 | 1.256 | 1.426 | 1.045 | 381 | 3 |
| Ciudad Real | 119 | 1.102 | 1.221 | 1.085 | 136 | 19 |
| Córdoba | 884 | 1.634 | 2.518 | 1.478 | 1.040 | 18 |
| Coruña (La) | 681 | 1.883 | 2.564 | 1.768 | 796 | 28 |
| Cuenca | 57 | 346 | 403 | 341 | 62 | " |
| Gerona | 540 | 1.081 | 1.621 | 1.147 | 474 | 8 |
| Granada | 354 | 2.667 | 3.021 | 2.384 | 637 | 13 |
| Guadalajara | 103 | 332 | 435 | 289 | 146 | " |
| Guipúzcoa | 566 | 2.258 | 2.824 | 2.312 | 512 | 30 |
| Huelva | 241 | 519 | 760 | 498 | 262 | 20 |
| Huesca | 99 | 298 | 397 | 282 | 115 | 2 |
| Jaén | 292 | 1.332 | 1.624 | 1.289 | 335 | 2 |
| Las Palmas | 1.768 | 3.662 | 5.430 | 3.554 | 1.876 | 151 |
| León | 212 | 2.061 | 2.673 | 2.060 | 613 | 14 |
| Lérida | 540 | 1.612 | 2.152 | 1.569 | 583 | 3 |
| Logroño | 116 | 825 | 941 | 757 | 184 | 6 |
| Lugo | 212 | 689 | 901 | 702 | 199 | 59 |
| Madrid | 13.670 | 24.545 | 38.215 | 24.452 | 13.763 | 324 |
| Málaga | 941 | 3.691 | 4.662 | 3.637 | 995 | 77 |
| Murcia | 1.153 | 2.283 | 3.436 | 2.629 | 807 | 22 |
| Navarra | 532 | 1.342 | 1.874 | 1.288 | 586 | 60 |
| Orense | 248 | 980 | 1.228 | 1.007 | 221 | 56 |
| Palencia | 35 | 598 | 633 | 590 | 43 | 6 |
| Pontevedra | 804 | 3.453 | 4.257 | 3.252 | 1.005 | 17 |
| Salamanca | 472 | 2.294 | 2.766 | 2.130 | 636 | 6 |
| Santa Cruz de Tenerife | 450 | 1.770 | 2.220 | 1.732 | 488 | " |
| Santander | 323 | 2.404 | 2.727 | 2.354 | 373 | 13 |
| Segovia | 92 | 430 | 522 | 432 | 90 | 2 |
| Sevilla | 3.576 | 12.819 | 16.395 | 13.074 | 3.321 | 30 |
| Soria | 40 | 332 | 372 | 338 | 34 | " |
| Tarragona | 978 | 1.931 | 2.909 | 1.825 | 1.084 | 3 |
| Teruel | 42 | 274 | 316 | 276 | 40 | 1 |
| Toledo | 189 | 743 | 932 | 769 | 163 | 4 |
| Valencia | 3.419 | 9.284 | 12.703 | 9.180 | 3.523 | 127 |
| Valladolid | 188 | 1.797 | 1.985 | 1.775 | 210 | 10 |
| Vizcaya | 2.322 | 4.982 | 7.304 | 5.630 | 1.674 | 21 |
| Zamora | 45 | 2.886 | 2.931 | 2.881 | 50 | 42 |
| Zaragoza | 832 | 4.014 | 4.846 | 4.012 | 834 | 2 |
| TOTAL | 54.582 | 151.912 | 206.494 | 149.841 | 56.651 | 1.200 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*Procedimientos incoados en virtud de la Ley de Peligrosidad Social desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| JUZGADO DE | Pendientes en 1.º de enero de 1977 | Incoados desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977 | TOTAL | TERMINADOS DESDE 1.º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 1977 | | | | | TOTAL | Pendientes en 31 de diciembre de 1977 | Revisiones | Cancelaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Por sentencia | | Por inhibición | Por rebeldía | Archivados | | | | |
| | | | | Absolutorias | Condenatorias | | | | | | | |
| Baleares ... ... ... ... ... ... ... | 256 | 485 | 741 | 124 | 152 | 24 | 106 | 122 | 528 | 213 | 80 | " |
| Barcelona ... ... ... ... ... ... ... | 407 | 1.193 | 1.600 | 113 | 545 | 105 | 37 | 542 | 1.342 | 258 | 1.928 | 557 |
| Burgos (sede en Bilbao) ... ... ... | 304 | 779 | 1.083 | 49 | 99 | 15 | 18 | 518 | 699 | 384 | " | " |
| Coruña (La) ... ... ... ... ... ... | 52 | 297 | 349 | 17 | 21 | 5 | 7 | 247 | 297 | 52 | 9 | 44 |
| Las Palmas ... ... ... ... ... ... | 162 | 572 | 734 | 31 | 260 | 13 | 72 | 151 | 527 | 207 | 88 | 12 |
| Madrid ... ... ... ... ... ... ... ... | 470 | 1.724 | 2.194 | 115 | 581 | 42 | 29 | 792 | 1.559 | 635 | 210 | 537 |
| Málaga ... ... ... ... ... ... ... ... | 354 | 636 | 990 | 71 | 199 | 22 | 45 | 241 | 578 | 412 | 104 | 212 |
| Sevilla ... ... ... ... ... ... ... ... | 443 | 1.004 | 1.447 | 5 | 301 | 32 | 70 | 346 | 754 | 658 | 547 | 66 |
| Valencia ... ... ... ... ... ... ... | 234 | 587 | 821 | 58 | 149 | 51 | 39 | 348 | 645 | 176 | 35 | 221 |
| Valladolid ... ... ... ... ... ... ... | 27 | 251 | 278 | 43 | 72 | 3 | " | 112 | 230 | 48 | 37 | 48 |
| Zaragoza ... ... ... ... ... ... ... | 56 | 439 | 495 | 41 | 125 | 54 | 15 | 178 | 413 | 82 | 67 | 48 |
| Audiencia Nacional ... ... ... ... | " | 740 | 740 | " | " | " | " | " | 740 | " | " | " |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... | 2.765 | 8.707 | 11.472 | 667 | 2.504 | 366 | 438 | 3.597 | 8.312 | 3.160 | 2.205 | 1.745 |

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*RESUMEN de los asuntos despachados por esta Fiscalía en materia civil (Sala 1.ª del Tribunal Supremo), desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| NATURALEZA DE LOS ASUNTOS | | Número de asuntos |
|---|---|---|
| Recursos de casación preparados por el Fiscal. | Desistidos | " |
| | Interpuestos | " |
| Recursos de casación interpuestos por las partes | Despachados con la nota de "Vistos" | 373 |
| | Despachados con la nota de "Visto" | 9 |
| | Combatidos en la admisión | 142 |
| | Con dictamen de improcedencia | " |
| | Con dictamen de procedentes | " |
| | Con dictamen de nulidad de actuación | " |
| | Con dictamen de absteniéndose | " |
| | Con dictamen de adhiriéndose | " |
| | Incompetencia Sala | " |
| Recursos de revisión | | 55 |
| Recursos de queja | | " |
| Cuestiones de competencia | | 21 |
| Expedientes de ejecución de sentencias extranjeras | | 8 |
| Demandas de responsabilidad civil | | " |
| Dictámenes de tasación de costas | | " |
| Intervenciones varias | Injusticia notoria | " |
| | Conflicto jurisdiccional | " |
| | TOTAL | 308 |

**Estado K**

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*RESUMEN de los asuntos despachados por esta Fiscalía en materia social, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| NATURALEZA DE LOS ASUNTOS | | Número de asuntos |
|---|---|---|
| Recursos preparados por el Fiscal ... ... ... ... | Desistidos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 2 |
| | Interpuestos ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 10 |
| Recursos interpuestos por las partes ... ... ... | Varios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " |
| | "Visto" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 127 |
| | Combatidos en la admisión ... ... ... ... ... | " |
| | Con dictamen de improcedentes ... ... ... | 1.069 |
| | Con dictamen de procedentes ... ... ... ... | 416 |
| | Con dictamen de absteniéndose ... ... ... | 18 |
| | Nulidad de actuaciones ... ... ... ... ... ... | " |
| Dictamen Sentencias T. C. a efectos Recursos en Interés Ley ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 6.315 |
| Competencias del Tribunal Central ... ... ... | Competente J. Laboral ... ... ... ... ... ... | 301 |
| | Incompetente J. Laboral ... ... ... ... ... | 126 |
| | TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 8.384 |

**Estado L**

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*RESUMEN de los asuntos criminales (Sala 2.ª del Tribunal Supremo) despachados por esta Fiscalía, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| NATURALEZA DE LOS ASUNTOS | | Número de asuntos |
|---|---|---|
| Procedimientos atribuidos al Tribunal Supremo en Pleno, constituido en Sala de Justicia ... | | " |
| Recursos de casación por infracción de Ley y quebrantamiento de forma preparados por los Fiscales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | Interpuestos ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 80 |
| | Desistidos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 33 |
| Recursos de revisión interpuestos por el Fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 2 |
| Recursos de súplica ... ... ... ... ... ... ... ... | Interpuestos por las partes ... ... ... ... ... | " |
| | Interpuestos por el Fiscal ... ... ... ... ... | " |
| Recursos de casación interpuestos por las partes, acordado en Junta de Fiscalía, respecto de ellos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | Apoyados total o parcialmente ... ... ... ... | 24 |
| | Impugnados total o parcialmente ... ... ... | 563 |
| | Formular adhesión ... ... ... ... ... ... ... | " |
| | Oponerse a la admisión total o parcialmente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 371 |
| Recursos de casación interpuestos en beneficio del reo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 2 |
| Recursos de casación desestimados por dos Letrados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | Interpuestos en beneficio de los reos ... ... | " |
| | Despachados con la nota de "Visto" ... ... | 489 |
| Recursos de queja ... ... ... ... ... ... ... ... ... | Con dictamen de procedentes ... ... ... ... | 6 |
| | Con dictamen de improcedentes ... ... ... | 13 |
| Competencias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 29 |
| Causas cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo ... | | 13 |
| Dictámenes de tasación de costas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 890 |
| Dictámenes de varios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 24 |
| TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 2.539 |

**Estado LL**

# FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

*RESUMEN de los asuntos gubernativos en los que ha intervenido la Fiscalía, desde 1.º de enero a 31 de diciembre de 1977.*

| NATURALEZA DE LOS ASUNTOS | FUNCIONARIOS QUE LO HAN DESPACHADO | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | El Fiscal | Teniente Fiscal | Inspector Fiscal | Fiscales Generales y Abogados Fiscales | |
| Informes emitidos en expedientes de la Sala de Gobierno, Presidencia de este Tribunal Supremo y Consejo Fiscal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 28 | 98 | 3 | 521 | 650 |
| Consultas a los efectos del artículo 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. | " | " | " | " | " |
| Causas en que se han dado instrucciones a los Fiscales de las Audiencias ... | 13 | " | " | " | 13 |
| Causas reclamadas a los efectos del artículo 838, núm. 15 de la Ley Orgánica del Poder judicial ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | " |
| Comunicaciones registradas ... ... ... ... ... — Entrada ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 9.993 |
| Comunicaciones registradas ... ... ... ... ... — Salida ... ... ... ... ... ... ... | " | " | " | " | 8.227 |
| Denuncias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 7 | " | " | 2 | 9 |
| Consultas a los Fiscales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 3 | " | " | " | 3 |
| Juntas celebradas con los señores Teniente y Abogados Fiscales del Tribunal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 44 | 2 | 3 | 124 | 173 |

# INDICE


*Págs.*

INTRODUCCION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

CAPÍTULO I.

MOVIMIENTO DE PERSONAL Y SEÑORES FISCALES QUE HAN REDACTADO LA MEMORIA ... ... ... ... ... 33

CAPÍTULO II.

EVOLUCION SOCIO-POLITICA Y SUS CONSECUENCIAS EN LA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO FISCAL. 38

CAPÍTULO III.

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46

1. PENAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
2. CIVIL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
3. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ... ... ... ... ... ... ... ... 60
3. ACTIVIDADES DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ... 60

CAPÍTULO IV.

EVOLUCION DE LA DELINCUENCIA Y ASUNTOS MAS DESTACABLES ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61

CAPÍTULO V.

EL MINISTERIO FISCAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87

1. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN MATERIA PENAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89
2. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN MATERIA CIVIL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96
3. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN MATERIA SOCIAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 99

*Págs.*

CAPÍTULO VI.

ASPECTOS PENITENCIARIOS ... ... ... ... ... ... ... ... 108
*a)* Prisiones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108
*b)* Reformas en desarrollo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110
*c)* Indultos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 112

CAPÍTULO VII.

REFORMAS LEGISLATIVAS ... ... ... ... ... ... ... ... 116

CIRCULARES

Núm. 1. Concesión de amnistía para determinados delitos. 149

CONSULTAS

Núm. 1. Cheque en descubierto ... ... ... ... ... ... ... ... 167
Núm. 2. Aplicación del indulto al contenido del artículo 67 del Código Penal ... ... ... ... ..... ... ... ... ... 168
Núm. 3. Aplicación del indulto de 14 de marzo de 1977 a penados que disfruten de remisión condicional. 170

ESTADISTICA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 173